



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXXIII - Nº 1707

Bogotá, D. C., lunes, 14 de octubre de 2024

EDICIÓN DE 80 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

www.secretariasenado.gov.co

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA

ACTAS DE COMISIÓN

COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE

HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

ACTA NÚMERO 39 DE 2024

(abril 16)

Cuatrenio 2022-2026

Legislatura 2023-2024

Segundo Periodo

Sesión Ordinaria

En la ciudad de Bogotá, D. C., el día martes dieciséis (16) de abril de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en el Salón Guillermo Valencia del Capitolio Nacional, previa citación, los miembros de la Comisión Primera del honorable Senado, con el fin de sesionar.

I

Llamado a lista y verificación del quórum

La Presidencia ejercida por el titular honorable Senador Germán Alcides Blanco Álvarez, indica a la Secretaria llamar a lista y contestaron los honorables Senadores:

Barreto Quiroga Óscar

Blanco Álvarez Germán Alcides

Chagüi Flórez Julio Elías

De la Calle Lombana Humberto

Luna Sánchez David y

Pizarro Rodríguez María José.

En el transcurso se hicieron presentes los honorables Senadores:

Amín Saleme Fabio Raúl

Ávila Martínez Ariel Fernando

Benavides Mora Carlos Alberto

Benedetti Martelo Jorge Enrique

Cabal Molina María Fernanda

Chacón Camargo Alejandro Carlos

Deluque Zuleta Alfredo Rafael

Gallo Cubillos Julián

López Obregón Clara Eugenia

Motoa Solarte Carlos Fernando

Pulido Hernández Jonathan Ferney

Quilcué Vivas Aída Marina

Valencia Laserna Paloma y

Vega Pérez Alejandro Alberto.

Dejó de asistir el honorable Senador:

García Gómez Juan Carlos.

La Secretaría informa que se ha registrado quórum deliberatorio

Siendo las 10:34 a. m. la Presidencia “abre la sesión” de conformidad con el artículo 91 de la Ley 5ª de 1992 y solicita a Secretaria dar lectura al orden del día.

ORDEN DEL DÍA

COMISIÓN PRIMERA HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA

CUATRIENIO 2022-2026 LEGISLATURA
2023-2024 SEGUNDO PERIODO

“SESIÓN ORDINARIA PRESENCIAL”

Día: martes 16 de abril de 2024

Lugar: Salón Guillermo Valencia Capitolio
Nacional- Primer Piso.

Hora: 10:00 a. m.

I

Llamado a lista y verificación del quórum

II

Consideración y aprobación de actas**Sesiones Ordinarias**

Acta número 30 del 27 de febrero de 2024; *Gaceta del Congreso* número 237 de 2024.

Acta número 31 del 28 de febrero de 2024; Acta número 32 del 5 de marzo de 2024; Acta número 33 del 12 de marzo de 2024; Acta número 34 del 19 de marzo de 2024; Acta número 35 del 20 de marzo de 2024; Acta número 36 del 2 de abril de 2024; Acta número 37 del 3 de abril de 2024; Acta número 38 del 10 de abril de 2024.

III

Anuncio de proyectos para la próxima sesión

IV

Consideración y votación de proyectos en primer debate**1. Proyecto de Ley número 51 de 2023 Senado. “Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.**

Autores: Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor *Fernando Castillo Cadena*, Presidente de la Sala Laboral, doctor *Gerardo Botero Zuluaga*.

Ponentes: Primer Debate: Honorables Senadores: *Paloma Valencia Laserna, Alejandro Carlos Chacón Camargo, Germán Blanco Álvarez* (Coordinadores), *Julio Elías Chagüi Flórez, Humberto de la Calle Lombana, David Luna Sánchez, Julián Gallo Cubillos, Clara López Obregón*.

Publicación: Proyecto Original: *Gaceta del Congreso* número 1123 de 2023.

Ponencia Primer Debate: *Gaceta del Congreso* número 292 de 2024.

Audiencia Pública: *Gaceta del Congreso* número 96 de 2024.

2. Proyecto de Ley número 61 de 2023 Senado, por medio de la cual se dictan medidas para contrarrestar la explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones.

Autores: Honorables Senadores: *Nadia Blel Scaff, Honorio Miguel Henríquez, Norma Hurtado Sánchez, Soledad Tamayo, Miguel Ángel Barreto, Lorena Ríos Cuéllar, Nicolás Albeiro Echeverry, Claudia Pérez Giraldo, Karina Espinosa Oliver, Berenice Bedoya Pérez, Ana María Castañeda, Miguel Ángel Pinto, Mauricio Gómez Amín, Laura Fortich Sánchez, Jonathan Pulido Hernández, Pedro Flórez Porras, Efraín Cepeda Sarabia, Carlos Mario Farelo, Didier Lobo Chinchilla, Fabián Díaz Plata, Liliana Benavides Solarte, José Alfredo Marín Lozano, Juan Carlos Garcés Rojas*. – Honorables Representantes: *Luis Miguel López*, y otras firmas ilegibles.

Ponente: Primer Debate: Honorable Senador: *Juan Carlos García Gómez*.

Publicación: Proyecto Original: *Gaceta del Congreso* número 1001 de 2023.

Ponencia Primer Debate: *Gaceta del Congreso* número 1252 de 2023.

3. Proyecto de Acto Legislativo número 21 de 2024 Senado, por el cual se modifica el inciso 1° del artículo 217 de la Constitución Política de Colombia, se cambia el nombre de la Fuerza Aérea por Fuerza Aeroespacial y se dictan otras disposiciones.

Autores: Ministro de Defensa, doctor *Iván Velásquez Gómez*. – Honorables Senadores: *Germán Blanco Álvarez, Carlos Alberto Benavides Mora, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, Alejandro Carlos Chacón Camargo, Gloria Inés Flórez Schneider*. – Honorables Representantes: *David Alejandro Toro Ramírez, Elizabeth Jay-Pang Díaz, James Mosquera Torres, Gerson Lisímaco Montaña Arizala, Haiver Rincón Gutiérrez, Gloria Liliana Rodríguez Valencia, Cristóbal Caicedo Angulo, José Jaime Uscátegui Pastrana*.

Ponente: Primer Debate: Honorable Senador: *Alejandro Carlos Chacón Camargo*.

Publicación: Proyecto Original: *Gaceta del Congreso* número 338 de 2024.

Ponencia Primer Debate: *Gaceta del Congreso* número

Para ver la ponencia por favor dar clic [aquí](#).

4. Proyecto de Ley número 164 de 2023 Senado - 065 de 2022 Cámara, por medio del cual se modifica la Ley 5ª de 1992 con el fin de implementar medios y/o herramientas tecnológicas o digitales en los procesos legislativos del Congreso y se dictan otras disposiciones.

Autores: Honorable Senador: *Armando Zabaraín D'Arce*.

Ponente: Primer Debate: Honorable Senador: *Juan Carlos García Gómez*.

Publicación: Proyecto Original: *Gaceta del Congreso* número 916 de 2022.

Texto aprobado Plenaria Cámara: *Gaceta del Congreso* número 1339 de 2023.

Ponencia Primer Debate Senado: *Gaceta del Congreso* número 1585 de 2023.

5. Proyecto de Ley número 156 de 2023 Senado, por medio de la cual se determina el funcionamiento y competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones.

Autores: Ministro del Interior; doctor *Luis Fernando Velasco Chávez*, Ministro de Justicia y del Derecho, doctor *Néstor Iván Osuna Patiño*, Ministra (e) de Agricultura y Desarrollo Rural, doctora *Aura María Duarte Rojas*. – Honorables Senadores:

Carlos Alberto Benavides Mora, Alexánder López Maya, Alfredo Deluque Zuleta, Alejandro Carlos Chacón Camargo, Wilson Arias Castillo, Clara López Obregón, Ariel Ávila Martínez, Julio Chagüi Flórez, Aída Quilcué Vivas, Alejandro Vega Pérez, Julián Gallo Cubillos, Fabio Raúl Amín Saleme, Berenice Bedoya Pérez, Pablo Catatumbo Torres, Robert Daza Guevara, Catalina del Socorro Pérez, Gloria Inés Flores Schneider, Isabel Cristina Zuleta López, Óscar Barreto Quiroga, Marcos Daniel Pineda, Imelda Daza Cotes, Alfredo Marín Lozano, Jairo Castellanos Serrano, Inti Raúl Asprilla Reyes, Carolina Espitia Jerez, Antonio Correa Jiménez, Édgar Díaz Contreras, Piedad Córdoba Ruiz, Alex Flórez Hernández, Jahel Quiroga Carrillo, Aída Avella Esquivel, Sandra Ramírez Lobo, María José Pizarro, Martha Isabel Peralta, Iván Cepeda Castro. – Honorables Representantes: Juan Carlos Wills Ospina, Gabriel Becerra Yáñez, Gabriel Parrado Durán, Agmeth Escaf Tijerino, Susana Gómez Castaño, Alejandro Ocampo Giraldo, Luis Alberto Albán Urbano, David Racero Mayorca, María del Mar Pizarro, Delcy Isaza Buenaventura, Juan Daniel Peñuela Calvache, Daniel Restrepo Carmona, Gerardo Yepes Caro, Alirio Uribe Muñoz, Heráclito Landínez, María Fernanda Carrascal, Jorge Tamayo Marulanda, Andrés Cancimance López, Gloria Arizabaleta Corral, Eduard Sarmiento Hidalgo, Pedro Suárez Vacca, Alejandro Toro Ramírez, Jorge Bastidas Rosero, Leyla Rincón Trujillo y otras firmas ilegibles.

Ponente: Primer Debate: Honorables Senadores: María José Pizarro Rodríguez, Paloma Valencia Laserna, Alejandro Carlos Chacón Camargo (Coordinadores), Julio Chagüi Flórez, Jorge Benedetti Martelo, Óscar Barreto Quiroga, Julián Gallo Cubillos, Ariel Ávila Martínez, Alejandro Vega Pérez.

Publicación: Proyecto Original: **Gaceta del Congreso** número 1350 de 2023.

Ponencia Primer Debate: (Honorable Senadora: Paloma Valencia) **Gaceta del Congreso** número 1656 de 2023

Ponencia Primer Debate: (Mayoritaria) **Gaceta del Congreso** número 1654 de 2023.

6. **Proyecto de Ley Estatutaria número 05 de 2023 Senado**, por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a ajustar y fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizar a toda la población el derecho fundamental a la salud consagrado en la Ley 1751 de 2015, mejorar los resultados en salud, aumentar la satisfacción del usuario y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. **Acumulado con el Proyecto de Ley número 86 de 2023 Senado.**

Autores: **PL 05/23** Honorables Senadores: Carlos Fernando Mota Solarte, David Luna Sánchez, Jorge Benedetti Martelo, José Luis Pérez Oyuela, Antonio Zabaraín Guevara, Carlos

Julio González, Carlos Abraham Jiménez, Carlos Farelo Daza, Didier Lobo Chinchilla, Édgar Jesús Díaz, Ana María Castañeda Gómez. Honorables Representantes: Adriana Carolina Arbeláez, Gersel Pérez Altamiranda, Jorge Méndez, Julio César Triana, Rodrigo Campo, Dilson Murcia, Bayardo Betancourt, Carlos Alberto Cuenca, Néstor Leonardo Rico, Javier Sánchez, John Édgar Pérez, Mauricio Parodi, Modesto Aguilera, Jaime Rodríguez, Sandra Milena Ramírez, Hernando González, Lina María Garrido, Betsy Judith Pérez, Jairo Humberto Cristo.

Autores: **PL86/23** Honorables Senadores: Paloma Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, José Vicente Carreño Castro, Paola Holguín Moreno, Ciro Alejandro Ramírez Cortés, Andrés Guerra Hoyos, Miguel Uribe Turbay, Josué Alirio Barrera Rodríguez, Carlos Manuel Meissel Vergara, Enrique Cabrales Baquero, María Fernanda Cabal Molina. – Honorables Representantes: Yenica Sujein Acosta Infante, Cristian Garcés Aljure, Holmes Echeverría de la Rosa, Juan Espinal Ramírez, Óscar Darío Pérez Pineda, Hernán Darío Cadavid Márquez, Hugo Danilo Lozano Pimiento, Edison Vladimír Olaya Mancipe, Eduar Alexis Triana Rincón, José Jaime Uscátegui Pastrana, Edward Osorio Aguiar.

Ponente: Primer Debate: Honorables Senadores: Carlos Fernando Mota Solarte, Paloma Valencia Laserna (Coordinadores), Juan Carlos García, Ariel Ávila Martínez, Julián Gallo Cubillos, Fabio Amín Saleme, Clara López Obregón, Julio Chagüi Flórez.

Publicación: Proyecto Original- **PL 05/23: Gaceta del Congreso** número 898 de 2023.

Proyecto Original-**PL 86/23: Gaceta del Congreso** número 1067 de 2023.

Ponencia Primer Debate: (Honorables Senadores: Carlos Fernando Mota, Paloma Valencia): **Gaceta del Congreso** número 1355 de 2023.

Ponencia Primer Debate: (Honorables Senadores: Ariel Ávila, Clara López, Julián Gallo): **Gaceta del Congreso** número 1371 de 2023.

Audiencia Pública: **Gaceta del Congreso** número 03 de 2024.

7. **Proyecto de Ley número 84 de 2023 Senado**, por la cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión Legal para la protección integral de la infancia y la adolescencia del Congreso de la República de Colombia y se dictan otras disposiciones.

Autores: Honorables Senadores: Lorena Ríos Cuéllar, Esteban Quintero Cardona, Karina Espinosa Oliver, Paola Holguín Moreno, Soledad Tamayo Tamayo. – Honorables Representantes: Erika Sánchez Pinto, Julián Peinado Ramírez, Jezmi Lizeth Barraza Arraut, Juan Diego Muñoz Cabrera, Wilmer Castellanos Hernández, Alexánder Guarín Silva, Delcy Isaza Buenaventura, Norman David Bañol Álvarez, José Jaime Uscátegui, Hugo Alfonso Archila Suárez, Irma Luz Herrera Rodríguez, Mónica Karina Bocanegra Pantoja.

Ponente: Primer Debate: Honorable Senador: *David Luna Sánchez.*

Publicación: Proyecto Original: ***Gaceta del Congreso*** número 1066 de 2023.

Ponencia Primer Debate: ***Gaceta del Congreso*** número 1584 de 2023.

8. **Proyecto de Ley número 02 de 2023 Senado**, por la cual se reforma la Ley 675 de 2001 con el fin de contribuir a la convivencia responsable y compasiva con animales y promover la participación comunitaria y la solidaridad social en el cuidado y la protección de los animales en las propiedades horizontales”

Autor: Honorable Senadora: *Andrea Padilla Villarraga.*

Ponente: Primer Debate: Honorable Senador: *Alejandro Vega Pérez.*

Publicación: Proyecto Original: ***Gaceta del Congreso*** número 897 de 2023.

Ponencia Primer Debate: ***Gaceta del Congreso*** número 266 de 2024.

9. **Proyecto de Ley número 129 de 2023 Senado**, por medio de la cual se conmemoran las juventudes rurales y campesinas, con acciones afirmativas para promover su acceso a la educación, formación e inserción en la economía, se modifica el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y las Leyes 1429 de 2010, 1780 de 2016, 2096 de 2020 y 2214 de 2022 y se dictan otras disposiciones - Ley Juventudes Rurales y Campesinas.

Autores: Honorables Senadores: *Alfredo Deluque Zuleta, Julio Elías Chagüi Flórez, Juan Felipe Lemos, José Alfredo Gnecco, Juan Carlos Garcés, Norma Hurtado Sánchez, Julio Elías Vidal, Germán Blanco Álvarez, Jahel Quiroga Carrillo, Fabio Amín Saleme, John Jairo Roldán Avendaño, José David Name, Alejandro Carlos Chacón, Antonio Correa Jiménez, Jairo Castellanos Serrano, Alejandro Vega Pérez, Jorge Benedetti Martelo, Piedad Córdoba Ruiz, David Luna Sánchez, Pedro Flórez Porras, Soledad Tamayo, Humberto de la Calle, Imelda Daza, Ariel Ávila, Ana María Castañeda, Fabián Díaz Plata.* – Honorables Representantes: *José Eliécer Salazar López, Teresa Enríquez Rosero, Ángela Vergara González, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, Hernando Guida Ponce, Hugo Archila Suárez.*

Ponente: Primer Debate: Honorables Senadores: *Alfredo Deluque Zuleta.*

Publicación: Proyecto Original: ***Gaceta del Congreso*** número 1227 de 2023.

Ponencia Primer Debate: ***Gaceta del Congreso*** número 69 de 2024.

10. **Proyecto de Ley número 43 de 2023 Senado**, por medio de la cual se modifican los artículos 297, 310 y 449 de la Ley 906 de 2004 y se adoptan medidas para propender

por la eficacia de la justicia en materia penal -Justicia eficaz y más seguridad-.

Autor: Honorable Senador: *David Luna Sánchez.*

Ponente: Primer Debate: Honorable Senador: *David Luna Sánchez.*

Publicación: Proyecto Original: ***Gaceta del Congreso*** número 952 de 2023.

Ponencia Primer Debate: ***Gaceta del Congreso*** número 1155 de 2023.

11. **Proyecto de Ley número 99 de 2023 Senado**, por medio de la cual se adicionan dos párrafos al artículo 91 de la Ley 1708 de 2014 “Código de Extinción de Dominio” en beneficio de la primera infancia y se dictan otras disposiciones.

Autores: Honorable Senador: *Enrique Cabrales Baquero.*

Ponente: Primer Debate: Honorable Senadora: *Paloma Valencia Laserna.*

Publicación: Proyecto Original: ***Gaceta del Congreso*** número 1117 de 2023.

Ponencia Primer Debate: ***Gaceta del Congreso*** número 1353 de 2023.

12. **Proyecto de Ley número 70 de 2023 Senado**, por medio de la cual se modifica el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, se establecen medidas para garantizar los derechos prevalentes de las niñas y niños en materia de abuso sexual infantil y se dictan otras disposiciones.

Autores: Honorables Senadores: *Sandra Yaneth Jaimes Cruz, Julio Elías Vidal, Sandra Ramírez Lobo Silva, Robert Daza Guevara, John Jairo Roldán, Catalina del Socorro Pérez, Julio César Estrada Cordero, Alex Flórez Hernández, Pedro Hernando Flórez Porras, Clara López Obregón, Piedad Córdoba Ruiz.*

Ponente: Primer Debate: Honorable Senador: *Óscar Barreto Quiroga.*

Publicación: Proyecto Original: ***Gaceta del Congreso*** número 1004 de 2023.

Ponencia Primer Debate: ***Gaceta del Congreso*** número 01 de 2024.

13. **Proyecto de Ley número 121 de 2023 Senado**, por medio de la cual se regula el derecho al trabajo como derecho fundamental y se dictan otras disposiciones.

Autores: Honorables Senadores: *Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Ciro Ramírez Cortés, Paloma Valencia Laserna, María Fernanda Cabal Molina, Esteban Quintero Cardona, Carlos Meisel Vergara, Paola Holguín Moreno, Andrés Guerra Hoyos.*

Ponente: Primer Debate: Honorable Senadora: *María Fernanda Cabal Molina.*

Publicación: Proyecto Original: ***Gaceta del Congreso*** número 1199 de 2023.

Ponencia Primer Debate: *Gaceta del Congreso* número 1371 de 2023.

14. **Proyecto de Ley Orgánica número 66 de 2023 Senado - 023 de 2022 Cámara Acumulado con los Proyecto de Ley número 57 y 99 de 2022 Cámara**, por la cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992 y se crean las Comisiones Legales de Vigilancia y Seguimiento a los Procesos de Paz - Comisión de Paz - en el Congreso de la República y se dictan otras disposiciones.

Autores: Honorable Representante: *Diego Fernando Caicedo Navas*.

Ponente: Primer Debate: Honorable Senador: *Ariel Ávila Martínez*.

Publicación: Proyecto Original: *Gaceta del Congreso* número 856 de 2022.

Texto aprobado Plenaria Cámara: *Gaceta del Congreso* número 983 de 2023.

Ponencia Primer Debate Senado: *Gaceta del Congreso* número 1779 de 2023.

15. **Proyecto de Ley número 153 de 2023 Senado**, por la cual se faculta la permuta de bienes inmuebles de propiedad privada afectados por los delitos de invasión de tierras y avasallamiento de bien inmueble, y se dictan otras disposiciones.

Autores: Honorables Senadores: *Paloma Valencia Laserna, Paola Holguín Moreno, Enrique Cabrales Baquero, Miguel Uribe Turbay, Esteban Quintero Cardona, Jonathan Pulido Hernández, Mauricio Giraldo Hernández, Antonio Correa Jiménez, Norma Hurtado Sánchez*. – Honorables Representantes: *Christian Garcés Aljure, Yenica Sugein Acosta Infante, Holmes Echeverría de la Rosa, Juan Espinal, Óscar Darío Pérez Pineda, José Jaime Uscátegui Pastrana*.

Ponente: Primer Debate: Honorable Senadora: *María Fernanda Cabal Molina*.

Publicación: Proyecto Original: *Gaceta del Congreso* número 1315 de 2023.

Ponencia Primer Debate: *Gaceta del Congreso* número 1641 de 2023.

16. **Proyecto de Ley número 180 de 2023 Senado**, por medio de la cual se modifica la Ley 617 de 2000 y se dictan otras disposiciones.

Autores: Honorable Senadora: *Paola Holguín Moreno*. – Honorable Representante: *Juan Espinal Ramírez*.

Ponente: Primer Debate: Honorables Senadores: *Paloma Valencia Laserna* (Coordinadora), *Germán Blanco Álvarez*.

Publicación: Proyecto Original: *Gaceta del Congreso* número 1413 de 2023.

Ponencia Primer Debate: *Gaceta del Congreso* número 338 de 2024.

17. **Proyecto de Ley número 212 de 2023 Senado**, por la cual se deroga la Ley 5ª de 1972, se regulan las Juntas Defensoras de Animales y se dictan otras disposiciones.

Autores: Honorable Senadora: *Andrea Padilla Villarraga*.

Ponente: Primer Debate: Honorable Senador: *David Luna Sánchez*.

Publicación: Proyecto Original: *Gaceta del Congreso* número 10 de 2024.

Ponencia Primer Debate: *Gaceta del Congreso* número 344 de 2024.

18. **Proyecto de Ley número 194 de 2023 Senado**, por la cual se crea la conducta penal de tráfico, venta o comercialización indebida de fentanilo como delito autónomo y se dictan otras disposiciones.

Autores: Honorable Senador: *Jairo Alberto Castellanos Serrano*.

Ponente: Primer Debate: Honorable Senador: *Jonathan Pulido Hernández*.

Publicación: Proyecto Original: *Gaceta del Congreso* número 1587 de 2023.

Ponencia Primer Debate: *Gaceta del Congreso* número 360 de 2024.

19. **Proyecto de Ley número 199 de 2023 Senado**, por medio de la cual se modifican los artículos 397 y 447 de la Ley 1564 de 2012 y se reglamenta la entrega anticipada de títulos en el proceso ejecutivo por alimentos debidos a un niño, niña y adolescente (Ley Sarita).

Autores: Honorables Senadores: *Liliana Bitar Castilla, Diela Benavides Solarte, Efraín Cepeda Sarabia, Nadia Blel Scaff, Óscar Barreto Quiroga, Karina Espinosa Oliver*. – Honorables Representantes: *Héctor Mauricio Cuéllar Rincón, Andrés Felipe Jiménez Vargas, Armando Zabaraín D'Arce, Wadith Manzur Imbett*.

Ponente: Primer Debate: Honorable Senador: *Óscar Barreto Quiroga*.

Publicación: Proyecto Original: *Gaceta del Congreso* número 1635 de 2023.

Ponencia Primer Debate: *Gaceta del Congreso* número 360 de 2024.

V

Postulación, elección y posesión integrante de la Comisión Primera ante el Consejo Superior de Política Criminal

VI

Lo que propongan los honorables Senadores (as)

VII

Negocios sustanciados por la Presidencia

El Presidente,

Honorable Senador *Germán Alcides Blanco Álvarez*.

El Vicepresidente,

Honorable Senador *Alejandro Alberto Vega Pérez*.

La Secretaria General,

Doctora *Yury Lineth Sierra Torres*.

La Presidencia abre la discusión del orden del día e informa que cuando se registre quórum decisorio se someterá a votación.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura al siguiente punto del orden del día.

III

Anuncio de proyectos para la próxima sesión

La Secretaria da lectura a los proyectos que por disposición de la Presidencia se someterán a discusión y votación en la próxima sesión de conformidad con el artículo 160 de la Constitución:

- **Proyecto de Ley número 43 de 2023 Senado**, por medio de la cual se modifican los artículos 297, 310 y 449 de la Ley 906 de 2004 y se adoptan medidas para propender por la eficacia de la justicia en materia penal -Justicia eficaz y más seguridad-.
- **Proyecto de Ley número 61 de 2023 Senado**, por medio de la cual se dictan medidas para contrarrestar la explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones.
- **Proyecto de Ley número 99 de 2023 Senado**, por medio de la cual se adicionan dos parágrafos al artículo 91 de la Ley 1708 de 2014 “Código de Extinción de Dominio” en beneficio de la primera infancia y se dictan otras disposiciones.
- **Proyecto de Ley Estatutaria número 05 de 2023 Senado**, por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a ajustar y fortalecer el sistema general de seguridad social en salud, garantizar a toda la población el derecho fundamental a la salud consagrado en la Ley 1751 de 2015, mejorar los resultados en salud, aumentar la satisfacción del usuario y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud.
- **Acumulado Proyecto de Ley número 86 de 2023 Senado**.
- **Proyecto de Ley número 121 de 2023 Senado**, por medio de la cual se regula el derecho al trabajo como derecho fundamental y se dictan otras disposiciones.
- **Proyecto de Ley Estatutaria número 123 de 2023 Senado**, por medio del cual se expide el Estatuto de la Igualdad para la garantía de los derechos de las niñas y las mujeres en toda su diversidad y se dictan otras disposiciones.
- **Proyecto de Ley número 164 de 2023 Senado - 65 de 2022 Cámara**, por medio del cual se modifica la Ley 5ª de 1992 con el fin de implementar medios y/o herramientas tecnológicas o digitales en los procesos legislativos del Congreso y se dictan otras disposiciones.
- **Proyecto de Ley número 84 de 2023 Senado**, por la cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión Legal para la protección integral de la infancia y la adolescencia del Congreso de la República de Colombia y se dictan otras disposiciones.
- **Proyecto de Ley número 153 de 2023 Senado**, por la cual se faculta la permuta de bienes inmuebles de propiedad privada afectados por los delitos de invasión de tierras y avasallamiento de bien inmueble, y se dictan otras disposiciones.
- **Proyecto de Ley número 156 de 2023 Senado**, por medio de la cual se determina el funcionamiento y competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones.
- **Proyecto de Ley Orgánica número 66 de 2023 Senado - 023 de 2022 Cámara Acumulado con los Proyectos de Ley número 57 y 99 de 2022 Cámara**, por el cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992 y se crean las comisiones legales de vigilancia y seguimiento a los procesos de Paz - Comisión de Paz - en el Congreso de la República y se dictan otras disposiciones.
- **Proyecto de Ley número 198 de 2023 Senado - 326 de 2023 Cámara**, por la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1563 de 2012 y se dictan otras disposiciones.
- **Proyecto de Ley número 70 de 2023 Senado**, por medio de la cual se modifica el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, se establecen medidas para garantizar los derechos prevalentes de las niñas y niños en materia de abuso sexual infantil y se dictan otras disposiciones.
- **Proyecto de Ley número 129 de 2023 Senado**, por medio de la cual se conmemoran las juventudes rurales y campesinas, con acciones afirmativas para promover su acceso a la educación, formación e inserción en la economía, se modifica el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y las Leyes 1429 de 2010, 1780 de 2016, 2096 de 2020 y 2214 de 2022 y se dictan otras disposiciones - Ley Juventudes Rurales y Campesinas.
- **Proyecto de Ley número 02 de 2023 Senado**, por la cual se reforma la Ley 675 de 2001 con el fin de contribuir a la convivencia responsable y compasiva con animales y promover la participación comunitaria y la solidaridad social en el

cuidado y la protección de los animales en las propiedades horizontales.

- **Proyecto de Ley número 51 de 2023 Senado.** *“Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.*
- **Proyecto de Ley número 180 de 2023 Senado,** *por medio de la cual se modifica la Ley 617 de 2000 y se dictan otras disposiciones.*
- **Proyecto de Ley número 212 de 2023 Senado,** *por la cual se deroga la Ley 5ª de 1972, se regulan las juntas defensoras de animales y se dictan otras disposiciones.*
- **Proyecto de Ley número 194 de 2023 Senado,** *por la cual se crea la conducta penal de tráfico, venta o comercialización indebida de fentanilo como delito autónomo y se dictan otras disposiciones.*
- **Proyecto de Ley número 199 de 2023 Senado,** *por medio de la cual se modifican los artículos 397 y 447 de la Ley 1564 de 2012 y se reglamenta la entrega anticipada de títulos en el proceso ejecutivo por alimentos debidos a un niño, niña y adolescente (Ley Sarita).*
- **Proyecto de Acto Legislativo número 21 de 2024 Senado,** *por el cual se modifica el inciso 1º del artículo 217 de la Constitución Política de Colombia, se cambia el nombre de la Fuerza Aérea por Fuerza Aeroespacial y se dictan otras disposiciones.*
- **Proyecto de Ley número 254 de 2024 Senado,** *por medio de la cual se formulan lineamientos de política pública para la seguridad digital de niños, niñas y adolescentes, se modifica la Ley 1146 de 2007, la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones.*

La Presidencia solicita a la Secretaria certificar qué quórum se ha registrado.

La Secretaria informa que se ha registrado quórum decisorio.

La Presidencia cierra la discusión del orden del día y sometido a votación ha sido aprobado por unanimidad de los asistentes.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Bien, antes de continuar con el siguiente punto en el orden del día, absolutamente importante relacionar la presencia en este recinto además de los Senadores, de quienes nos acompañan en las barras y de los medios de comunicación, del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia - el doctor Gerson Chaverra Castro, pero también de la señora Presidenta de la Sala Laboral - la doctora Marjorie Zúñiga Romero, del magistrado actual Ómar Ángel Mejía, que conoce profundamente la temática del proyecto, con quien hicimos también la audiencia y hemos trabajado la temática y del doctor

Gerardo Botero Zuluaga, que hasta hace 10 días fue magistrado de la Sala Laboral, terminó su periodo pero también actúa o funge como coautor del mismo, entonces es demasiado importante que nos esté acompañando, le agradecemos profundamente. También relacionar la presencia del doctor Néstor Osuna - Ministro de la Justicia y del Derecho, está con nosotros.

O sea, que tenemos los autores, está el cuerpo de Coordinadores ponentes, el doctor Carlos Alejandro Chacón, la doctora Paloma Valencia y quien les habla fungimos como Coordinadores ponentes, yo voy a dirigir la sesión, van a hacer la intervención la doctora Paloma y el doctor Chacón.

Vamos a buscar avanzar en un proyecto de 331 artículos, pero primero vamos a siguiente punto en orden del día y ahí hacemos alusión al proyecto como tal. Bien pueda Secretaria, siguiente punto en el orden del día.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura al siguiente punto del orden del día.

II

Consideración y aprobación de actas

Sesiones Ordinarias

Acta número 30 del 27 de febrero de 2024; *Gaceta del Congreso* número 237 de 2024.

Acta número 31 del 28 de febrero de 2024; Acta número 32 del 5 de marzo de 2024; Acta número 33 del 12 de marzo de 2024; Acta número 34 del 19 de marzo de 2024; Acta número 35 del 20 de marzo de 2024; Acta número 36 del 2 de abril de 2024; Acta número 37 del 3 de abril de 2024; Acta número 38 del 10 de abril de 2024.

La Presidencia abre y cierra la discusión del Acta número 30 del 27 de febrero de 2024 publicada en la *Gaceta del Congreso* número 237 de 2024 y sometida a votación es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura al siguiente punto del orden del día

IV

Consideración y votación de proyectos en primer debate

Proyecto de Ley número 51 de 2023 Senado. *“Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.*

La Presidencia hace una introducción antes de iniciar formalmente la discusión y votación del primer proyecto en el orden del día:

Bien, después de 76 años se va a hacer una reforma completa y articulada al Código Procesal del Trabajo y de la seguridad social, 76 años, o sea, que quienes lo crearon posiblemente no están entre nosotros, se han hecho sí algunas modificaciones en el 2001, en el 2017 y en el 2018, unas modificaciones temáticas, pero no articuladas completas, o sea, que

este es un momento histórico para el derecho y su normatividad en el que se va a ocupar la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado, es el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Se ha radicado por Senado, es un proyecto de ley ordinaria como bien conocemos, tiene 331 artículos, es un compendio importante, de un tamaño importante, que vamos a tener el cuidado de votarlo en unos bloques temáticos que por su tamaño pues no nos vayan a generar dificultades en la Corte Constitucional, como sucedió con otros, por ejemplo, el Código Electoral, que se votaron bloques muy grandes y después no fueron avalados constitucionalmente.

Se busca aprovechar avances tecnológicos y la virtualidad con las herramientas digitales para agilizar procedimientos laborales y facilitar el acceso a la justicia, más o menos el resumen del objetivo del proyecto.

Y está estructurado en 3 grandes libros que vamos a mirar, tienen unas proposiciones que han sido suscritas por los Senadores, otras por los mismos autores, unas están avaladas, otras no, entrarán en discusión, vamos a iniciar esa discusión, esa aprobación progresiva, si el día de hoy nos es insuficiente, pues continuaremos en próxima sesión.

La Presidencia concede el uso de la palabra en primer lugar a los autores de esta iniciativa:

La Presidencia ofrece el uso de la palabra al doctor Gerson Chaverra Castro – Presidente de la Corte Suprema de Justicia:

Gracias Presidente, buenos días para la Corte Suprema de Justicia, para los magistrados que integran la Sala de Casación Laboral, en particular y para el Presidente de la Corte es realmente un honor estar aquí en la casa natural de la democracia colombiana.

Y en ese orden de ideas, nosotros con un respetuoso saludo nos dirigimos al señor Presidente de la Comisión Primera del Senado – el doctor Germán Blanco, al señor Vicepresidente de la Comisión – doctor Alejandro Vega, a la señora Secretaria de la Comisión - doctora Yuri Sierra, a la señora Subsecretaria - la doctora Lucena González, a los honorables Senadores que integran la Comisión Primera del Senado, al público y demás asistentes que están presentes en este recinto.

Como usted lo ha destacado señor Presidente, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que actualmente nos rige tiene más de 75 años, por consiguiente, esta iniciativa presentada por la Corte Suprema de Justicia desde el año pasado a través de la Presidencia de nuestra Corporación y bajo el apoyo y el acompañamiento de la Sala de Casación Laboral, es de cardinal importancia, porque la reforma está estructurada a partir de 2 ejes fundamentales.

El primero, que es establecer un Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que unifique el

trámite general de las causas procesales, para evitar la dispersión normativa que se tiene, donde ante unas lagunas y vacíos se vienen los diferentes distritos judiciales y por parte de los jueces apoyándose en las normas por virtud del principio de remisión del Código General del Proceso y del Código de Procedimiento Administrativo.

Entonces la propuesta busca que tengamos un Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social autónomo, que tenga sus instituciones propias, que tenga sus trámites propios y a partir de ello, se permita una unificación en la tramitación procesal y evitar la dispersión que actualmente e históricamente se ha venido presentando en los trámites procesales.

Y también como usted bien lo destacaba señor Presidente, al hablar de que esto constituye un hito histórico, el implementar en los procesos laborales las tecnologías de la información para lograr que los trámites procesales se surtan con mayor eficacia y eficiencia.

De manera que, la Corte Suprema de Justicia agradece a los honorables Senadores, especialmente a la Comisión Primera del Senado, el apoyo que se le ha venido dando a esta iniciativa para efectos de tener un proceso de estructura laboral robusto y completo, que permita alcanzar los fines de una pronta y cumplida justicia.

Presidente y honorables Senadores, aquí vamos a estar atentos, muy pendientes, muy receptivos, en las deliberaciones que este centro de democracia tenga a bien dar a la propuesta presentada para la Corte, con la certeza que a través de este debate democrático lo que va a terminar siendo es una ley adecuada para los fines de la justicia laboral, muchísimas gracias.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

A usted señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a darle el uso de la palabra a la señora Presidenta de la Sala Laboral, la Corte Suprema de Justicia es la autora del proyecto y en su momento se firmó por quien fungía como Presidente y por quien fungía como Presidente de la Sala ¿cierto? la institucionalidad prevalece y hoy tiene unos nombres diferentes, pero se mantiene la institución y después de la doctora vamos dale el uso de la palabra al señor Ministro de la Justicia, en una introducción general.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la doctora Marjorie Zúñiga Romero – Presidenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

Muchas gracias Presidente, reciba usted un cordial saludo, así como el señor Vicepresidente de la Comisión - el doctor Alejandro Vega, la señora Secretaria de la Comisión - doctora Yury Sierra, la señora Subsecretaria - doctora Lucena González y por supuesto, los honorables Senadores que integran esta Comisión.

El trabajo tal y como lo hemos entendido a lo largo de la historia, cambió, se transformó y esa

transformación conlleva necesariamente a que los conflictos que se surten en relación con las relaciones laborales, deban tener unos procedimientos ágiles y acorde con este siglo.

Entre esas motivaciones y otras, por ello la Corte Suprema se propuso radicar este proyecto de nuevo Código Procesal del Trabajo y la seguridad social, en ese proceso se contó con la participación de jueces, de magistrados de tribunales, de magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, a quien también saludo y agradezco, abogados litigantes, a sindicatos y comunidad jurídica en general.

El informe de ponencia fue firmado por los 8 ponentes y esto denota de entrada que es una iniciativa que convoca, aglutina y permite la concertación entre distintos pareceres, que nos hace creer que en Colombia con diálogo y discusión constructiva, es posible llegar a acuerdos entre posturas aparentemente irreconciliables y que el resultado de ello será entregarle al país un instrumento con el que el mundo del trabajo y la seguridad social tendrá reglas aún más claras, actuales, eficientes, económicas y especialmente garantistas para resolver sus controversias.

Quisiera destacar solamente unos rasgos que caracterizan este nuevo código, primero, estamos ante un código con un cari integrador y unificador, que evita las remisiones a otros ordenamientos.

Segundo, un ordenamiento que asume los avances tecnológicos como insumos para una justicia pronta y de vanguardia.

Tercero, es una norma procesal garantista que se pone a tono con la jurisprudencia en materia de fueros, de la doble instancia, de la flexibilización del recurso extraordinario de casación, de la carga dinámica de la prueba, entre otros aspectos que por tiempo no voy a señalar.

De manera que, les agradezco no solo el interés, sino que nos acompañen en estos debates tan interesantes que vienen a continuación, gracias Presidente.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra al doctor Néstor Iván Osuna Patiño - Ministro de Justicia y del Derecho:

Gracias Presidente, prometo ser breve, no correrles la butaca y simplemente quisiera manifestar que desde el Gobierno nacional respaldamos y apoyamos este proyecto del Código Procesal del Trabajo presentado por la honorable Corte Suprema de Justicia.

Como lo dijo el señor Presidente de la Comisión Primera, estamos ante una legislación procesal laboral que por su longevidad, por más de 70 años que tiene de haber sido expedida, pero sobre todo, por los cambios que han tenido las relaciones laborales y el acceso a la justicia y el derecho procesal y la tecnología, pues se ha quedado desactualizado y el principal mérito de este proyecto de ley, es que recoge aquello de ese código de procedimiento que sigue siendo valioso, pero incorpora todas esas

novedades, la utilización de la tecnología en los procesos judiciales, lo que se ha avanzado en los procesos de derecho colectivo del trabajo, lo que se ha avanzado en temas de eliminación de las únicas instancias, en fin, distintos asuntos que modernizan, pero además también que dan certeza y seguridad jurídica estar compiladas en un solo código.

Qué bueno que los trabajadores y los patronos, las personas interesadas en una relación laboral tengan de nuevo certeza sobre las normas procesales al menos, que rigen un litigio laboral, pero encontrarlas en un solo cuerpo legislativo que recoge eso, lo que la experiencia ha aconsejado que debe mantenerse, pero también lo que la tecnología, las innovaciones, la misma experiencia ha aconsejado que deba modificarse.

De tal manera que, efectivamente el Gobierno nacional ha celebrado, lo ha conocido desde los inicios de este Gobierno las conversaciones que llevaba la Corte Suprema de Justicia para elaborar y luego radicar este proyecto de código, supe de la convocatoria amplia que se hizo desde la Corte Suprema de Justicia, distintos actores, a universidades, a gremios de abogados, a jueces, o sea, no es un proyecto así hubiese sido elaborado por la Corte Suprema de Justicia, pero sé que tuvo en cuenta la voz de magistrados de tribunal, de juzgados, de jueces laborales, del Consejo de la Judicatura que se inventó también agremiaciones sindicales.

Y en la audiencia que tuvo lugar, a la audiencia pública ese respecto que tuvo lugar hace unos meses, escuché de viva voz que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia manifestaban que en todo caso estaban dispuestos a seguir elaborando, a seguir enriqueciendo el proyecto, como corresponde por supuesto a un debate democrático y a un debate democrático que inicia nada menos que con una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia.

Quiero mencionar que me parece especialmente importante que se permitan los fallos extra y ultra petita por parte del juez laboral, habida cuenta digamos de que la sustancia debe prevalecer sobre las formalidades y algunas deficiencias que puedan tener algunas de las demandas, la carga dinámica de la prueba también me parece bien interesante, de tal manera que, aquellos asuntos que el patrono puede probar más fácilmente y que el trabajador puede tener enormes dificultades para probar, le puedan ser cargados al patrono, así no sean pruebas alegadas por él mismo.

Y así con otras instituciones que se incorporan a esta codificación, el uso de la tecnología, la virtualidad de la justicia, lo que se ha avanzado en el expediente digital, todo eso está incorporado en el código, así que ciertamente nos prepara para los tiempos actuales y para los que se están construyendo con ese experimento de digitalización de la justicia que está en curso.

Así que, aquí quedaré atento a las discusiones y decisiones que se tomen en esta Comisión y luego

en las otras células parlamentarias, pero para el Gobierno nacional es una muy buena noticia y por eso la respaldamos y la apoyamos, que la Corte Suprema de Justicia se ha tomado el trabajo, que además es dispendioso, que es de juicio, de pilera, de compilar y presentar un proyecto de código, cosa que últimamente es inusual en la vida política, todo un proyecto de código en esa materia. Gracias Presidente, no es más y le devuelvo su ilustre sillón.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Bien, vamos antes de leer la Proposición con la que culmina el informe de ponencia a darle el uso de la palabra unos minutos al doctor Humberto de la Calle Lombana, he conversado con la ponente y no encuentra ninguna dificultad, antes de leer la Proposición con que termina el informe de ponencia.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Humberto De la Calle Lombana:

Pues gracias Presidente, muy generoso de su parte y de la señora ponente. No, yo lo que quiero decir es extraordinariamente breve, primero, saludar a los señores Magistrados. al Presidente de la Corte, al señor Ministro, bueno a la Presidenta de la Sala Laboral y entender que esta es una ocasión muy afortunada, porque realmente ya era necesario un esfuerzo de esta naturaleza en términos de modernización de la legislación procesal laboral, como lo ha dicho el señor Ministro, ahí hay un contenido importante de innovaciones.

Hemos con nuestro equipo trabajado cuidadosamente en examinar el proyecto, pero mucho más que eso, pues lo que quisiera manifestar es: Primero, dijéramos una voz de agradecimiento a la Corte por haberse tomado un trabajo que es inusual y en segundo lugar, también hacer una especie de acto de fe, en el sentido de que quisiera que nuestros colegas en la Comisión y en general en el Congreso, pues aceleramos la aprobación de una norma que por su origen dijéramos tiene un aval enorme y una dijéramos solvencia no solo académica, sino práctica muy importante.

Todo eso para señalar, hemos presentado algunas proposiciones, unas han sido avaladas, otras no y en ese caso yo prefiero no insistir para no entorpecer la discusión, pero simplemente lo que quería era celebrar la ocasión y manifestar el deseo de que logremos salir adelante oportunamente con esta importante iniciativa, gracias Presidente.

La Secretaria da lectura a la Proposición positiva con que termina el informe de ponencia.

La Presidencia abre la discusión de la Proposición Positiva con que termina el informe de ponencia y concede el uso de la palabra a la ponente coordinadora Paloma Valencia Laserna:

Muchísimas gracias Presidente, no, primero un saludo muy especial al señor Presidente, a la señora Presidenta, a los Magistrados que nos acompañan

hoy, al señor Ministro que está aquí, Ministro qué gusto saludarlos, qué bueno que nos acompañen.

Yo simplemente quiero decirles que este es un proyecto muy importante, que una de las cosas que le da a uno mucha ilusión de este proyecto, es que en la audiencia pública Senador Jota Pe, donde vinieron académicos, vinieron ciudadanos, participaron litigantes, todo el mundo expresaba su complacencia con la manera como se está reformando el código.

Y este es un código de procedimiento ¿eso qué significa? que aquí podemos estar todos de acuerdo, a mí me preocupa que la Senadora Clara esté incluyendo proposiciones que nada tienen que ver y que hacen parte de debates sustantivos, yo la tranquilidad que les quiero dar es que yo creo que este es un proyecto en el que todos podemos estar de acuerdo de manera muy sencilla.

El proyecto hace varias cosas, lo primero, es integrar conceptos de la jurisprudencia y de la doctrina, ya ampliamente acogidos, que van a dar mucha más certeza jurídica, simplemente a quien interpone el proceso y a quien lo recibe y creo que eso sirve para que la justicia sea más ágil, porque si usted puede predecir lo que le va a pasar en un proceso, pues se mete o no se mete o decide conciliar de manera más rápida y yo creo que eso es bien importante.

Creo que es muy importante, además, el hecho de que logremos una regulación autónoma, que muchas veces en materia laboral terminaba yéndose a otros códigos y generaba un ruido en la interpretación de normas, que son muy específicas de la materia laboral, aquí tenemos un mecanismo completo que va a permitir que el derecho laboral se pueda digamos desarrollar dentro de una órbita y con sus normas propias.

Agiliza los procedimientos, que es tal vez lo que más me gusta del proyecto, porque uno de los temas que los colombianos se quejan en la calle, es que un proceso puede demorarse mucho y cuando ya termina el proceso pues casi que las causas han desaparecido y usted no sabe cuándo va a terminar, los nuevos términos, los procedimientos, las conciliaciones que se establecen aquí nos van a permitir que este proceso laboral sea muchísimo más rápido y esto va en beneficio de los trabajadores colombianos, pero también de los empresarios y de los empleadores, que van a poder resolver los casos de manera más rápida.

Creo que también es muy importante decir que, bueno ya lo había dicho, que vamos a salir de no tener que estar en la remisión del Código General del Proceso, que muchas veces era casi que imposible de interpretar, porque imagínese Senador Amín que a usted lo manden para otro tipo de procesos, en un proceso que tiene una relación laboral de por medio.

Y creo que también es muy importante decir, que el proyecto tiene además de un origen en la Corte Suprema y en la Sala Laboral, que nos da mucha tranquilidad, tiene como les venía diciendo, un tema de aceptación generalizada, porque hay

que decir que la Corte, no solamente nosotros hicimos audiencias, la Corte Suprema hizo muchas audiencias de socialización con la academia, con litigantes, con muchas personas, de manera que se puede decir que en muchos sentidos este es un proyecto que está concertado ampliamente con los beneficiarios del proyecto.

Nosotros hemos dispuesto señor Presidente, que para agilizar esta votación lo hagamos en 6 bloques, atendiendo la división que tiene el propio proyecto, es un proyecto que como les decía es muy grande, pero creemos que si vamos por los bloques vamos a poder avanzar.

El primer bloque que proponemos Presidente, es el título preliminar y el libro primero, que incluye los artículos del 1 al 60; El segundo bloque serían 66 artículos, donde iríamos las secciones primera, segunda, del libro segundo, de los artículos 61 al 120; el tercer bloque iríamos con la sección tercera del libro segundo, 127 al 200; el cuarto serían 54 artículos, que irían las secciones cuarta, quinta y sexta del libro segundo, artículos 201 al 258; el quinto bloque 74 artículos, que serían los artículos 255 al 328 y el sexto bloque son los artículos nuevos y los artículos que tienen temas de derogatorias, que luego de revisarlas hemos acordado los ponentes revisar algunos temas que creemos que se podían ajustar.

Nosotros creemos que el proyecto está muy bien, ya se han hecho unos análisis de las proposiciones frente a las cuales les hablaremos en el articulado y queremos decirle a la Comisión que se sientan contentos de poder sacar un proyecto que le va a ayudar a los procesos laborales de Colombia y sobre todo un proyecto que le va a servir a los colombianos para una justicia más ágil, una justicia más precisa, una justicia con mayor capacidad de predicción para el particular. Muchas gracias señor Presidente, yo con eso terminaría mi intervención.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Buena doctora Paloma, esos bloques se acordaron también previamente con los autores, obedecen a la misma dinámica que tenemos planteada desde la Presidencia, están acá exactamente, solo que en cada bloque vamos a evaluar las proposiciones presentadas, para mirar cuáles tienen aval, cuáles no, usted mencionó, por ejemplo, a la doctora Clara López, ella todavía no ha hecho presencia, si en el momento en que se discutan los artículos para los cuales presentó Proposición la doctora Clara López no se encuentra, se dejan como constancia por la presidencia, si ella está los argumenta, si ella considera los deja como constancia, si no, considera que se voten y la mesa directiva los va a votar, pero la ausencia representa que se puedan dejar como constancia, acá y en las plenarias.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Jonathan Ferney Hernández Pulido:

Buena no, muy corto señor Presidente, quiero primero saludar al Presidente de la Corte Suprema, a la honorable Presidente y a los Magistrados que

se encuentran presentes y a todos los Senadores y asistentes.

Desde la primera vez cuando nos invitaron a los Senadores de la Comisión Primera, yo recuerdo que allí estuvo la Senadora Paloma Valencia en aquel desayuno en el que nos expusieron esta iniciativa tan valiosa, fue bastante emocionante y lo expresamos poder aportar un granito de arena a la modificación de ese viejo, pero a un vigente Código Procesal del Trabajo.

Me uno hoy al reconocimiento que hacen diferentes Senadores por esta iniciativa de la Corte Suprema, de usted señor Presidente, honorable Presidente, de la honorable Presidenta, de los Magistrados y también invito no solamente a los Senadores de la Comisión Primera, sino del Senado como tal, para que le demos celeridad y total respaldo a este proyecto.

Yo presenté 12 proposiciones modificatorias, la mayoría de forma, no son tan, tan debatibles, 4 me han dicho que no las van a avalar, 8 sí y voy a tomar la misma actitud del doctor Humberto de la Calle y es que vamos entonces retirar esas 4 para darle total respaldo y avance a este proyecto ¿listo?

De nuevo, gracias, el reconocimiento porque lo que estamos haciendo hoy aquí los beneficiados son los trabajadores colombianos y los empleadores que generan esas oportunidades económicas para los colombianos, muchas gracias.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Bien, pasaron muchas generaciones de magistrados de Corte para que se observara la necesidad de la reforma, pero este es el momento y legislamos para los actuales y para los futuros, como dice Jota Pe.

Quiero relacionar que el doctor Humberto de la Calle es ponente del proyecto, que también quede en acta, como ponente es el doctor David Luna que quiere llevar también el uso de la palabra, bien pueda.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador David Luna Sánchez:

Presidente muchas gracias, un saludo muy especial a los señores y a la señora Magistrada, quiero agradecerles en nombre de los colombianos la presentación de este proyecto de ley, que creo es de gran utilidad para todos y quiero en aras de la brevedad hacer 3 reflexiones que me parecen bastante importantes.

La primera, estamos discutiendo la reforma de un Código Procesal del Trabajo, esta no es la reforma laboral y lo digo porque hay proposiciones radicadas sobre la mesa que pretenden incluir normas asociadas al código sustantivo del trabajo, entonces yo quisiera pedirle a mis colegas, en particular a la doctora Clara López, que por lo menos pensar en analizar no presentar estas proposiciones o en su defecto dejarlas como constancia, porque las proposiciones que están acá radicadas hacen referencia a lo que

se llama o lo que se podría llamar una reforma laboral, pongámonos de acuerdo y juguemos todos en la misma página de que estábamos dedicados exclusivamente a discutir hoy la reforma del Código Procesal del Trabajo.

La reforma laboral está en la Comisión Séptima de la Cámara, dejémosla allá que se discuta y hagamos ese pacto, creo yo llamémoslo de por lo menos consenso nacional en estos momentos.

En segundo lugar, yo quiero hacerle un reconocimiento muy grande a la Corte Suprema de Justicia, porque mucho más rápido que el Congreso y muchísimo más rápido que el ejecutivo, se ha dado a la tarea de entender las transformaciones tecnológicas del mundo y del país, después de 16 años fue la Corte Suprema la que resolvió finalmente el problema en materia de tecnología a propósito de las plataformas de movilidad, no pudo el Congreso y lo hizo la Corte.

Y hoy la Corte en este proyecto está trayendo a colación una serie de artículos muy importantes, desde el punto de vista tecnológico para resolverle los problemas a los ciudadanos, no a los políticos, no a los abogados, no a los sindicatos, a los ciudadanos y déjeme decirle señor Presidente de la Corte, que también valoro muchísimo que se estén inmiscuyendo de fuerte manera en el tema de inteligencia artificial, ahí tenemos un reto muy complejo, que este Congreso está afrontando, que el ejecutivo está afrontando y que veo que la Corte está liderando y creo que es muy valioso hacerlo desde ese punto de vista, porque son muy complejos los temas que se deben discutir, uno de ellos apreciado Jonathan, su proyecto, que va a ser discutido próximamente en esta Comisión.

Y, en tercer lugar, creo yo que la forma por usted propuesta querido Presidente Blanco, es la correcta, la votación por bloques en virtud del número extenso de artículos, es muy valiosa y seguramente nos permitirá mayor orden, pero la sugerencia que le hago que me parece importante, es votar esas proposiciones sobre esos artículos de manera independiente ¿qué quiero decir? los bloques que no tienen proposiciones tramitarlos y dejar a un lado los que tienen proposiciones, sobre todo en particular por estas que les estoy mencionando, que me parecen no adecuadas.

Llegó mi querida colega la doctora Clara y quiero en 1 minuto repetirle lo que acabo de decir en su ausencia, decía querida doctora Clara, que hay una serie de proposiciones radicadas por su señoría, que desde mi punto de vista hacen parte fundamental de la discusión de la reforma al Código Sustantivo del Trabajo y no al Código Procesal del Trabajo, que es el que estamos en estos momentos discutiendo, le pedía si lo considera usted pertinente, analizar si esas proposiciones en virtud de que nosotros somos ponentes, podían ser dejadas como constancia y no discutidas en este proceso, simplemente para el análisis de ella y en virtud de que está en el recinto en estos momentos, gracias Presidente.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Antes de darle el uso de la palabra al doctor Julián Gallo, al Senador. Doctor David Luna, vamos a hacer lo siguiente para efectos prácticos pedagógicos, lo hemos acordado ya con los ponentes, hay 25 artículos sobre los cuales se han presentado 28 proposiciones y 2 proposiciones de artículos nuevos, vamos a excluir esos artículos de cada bloque y vamos a votar cada bloque, en particular sus artículos los que no tienen Proposición, eso nos va a permitir votaciones sucesivas en bloques importantes, que permiten el estudio de la Corte Constitucional sin mayores contratiempos y dedicamos la parte final a las proposiciones, donde podrán dejarlas como constancia, las podremos votar, las argumentan, etc. Pero nos dedicamos inicialmente a las que no tienen Proposición, que es el 95% del articulado.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Julián Gallo Cubillos:

Gracias Presidente, con el saludo para la Magistrada, los Magistrados presentes, el Ministro de Justicia y los compañeros de la Comisión, compañeras, nosotros como ponentes firmamos la ponencia, nos parece que efectivamente el proyecto posibilita un avance importante en materia que es fundamental y vital para lograr términos de convivencia en los conflictos patronales y laborales, un aspecto que sin duda es fundamental en cualquier sociedad democrática, nosotros particularmente hemos sido críticos de la asimetría, que por lo general se da en la sociedad, en la regulación de las relaciones entre los trabajadores y los patrones.

Entendemos que, en esa medida, el proyecto es un avance importante en la medida en que como lo señaló la Senadora Paloma, simplifica los procedimientos, agrupa una serie de disposiciones legales que están dispersas y en esa medida, pues va a facilitar digamos también avanzar en la resolución de esos conflictos, posibilita así mismo que no necesariamente se tenga que llegar hasta las últimas instancias judiciales para resolver esos conflictos y eso nos parece positivo.

Nosotros tenemos radicada una Proposición Presidente, que anuncio la vamos a dejar, está en el artículo 6, como constancia, pero sí es una inquietud que nosotros queremos conversar para el segundo debate y que tiene que ver con el deber extra petita y ultra petita para el caso de la segunda instancia que está contemplado en el proyecto, pero repito, para facilitar este primer debate la vamos a dejar como constancia, pero sí nos gustaría poder profundizar digamos en ese aspecto.

De manera que, anunciamos pues nuestro voto positivo, como está ratificado allí con nuestra firma en la ponencia y pues toda la disposición de seguir avanzando, evidentemente esto debe tener un segundo momento, como ya se ha mencionado aquí y es que ojalá muy pronto estemos tramitando aquí en el Congreso de la República la necesaria

reforma laboral, que sería el complemento ideal a este proyecto, gracias Presidente.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Senador Gallo, voy a excluir del primer bloque la Proposición suya del artículo 6°, porque usted ha manifestado que la deja como constancia.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Julián Gallo Cubillos:

Correcto Presidente, así es.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Para que integre el bloque ¿listo?

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Julián Gallo Cubillos:

Correcto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Carlos Alberto Benavides Mora:

Gracias Presidente, en primer lugar, para que no quepa duda, de parte de la bancada del Pacto, nosotros apoyamos esta propuesta que expide el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la seguridad social, querida Senadora Paloma, para nosotros es muy importante también, sabemos del proceso que se ha desarrollado, lo hemos acompañado como lo ha acompañado el Gobierno y sabemos justamente la importancia de generar una autonomía probatoria, de tener medidas cautelares innominadas y entendemos desde ahí la especificidad también querido Senador Luna, en términos del marco del derecho procesal y la necesidad de que sea garantista.

Y para nosotros algo que es fundamental, que una y otra vez lo señalamos, pues que genere justamente esas posibilidades garantistas para todos los trabajadores, para los diversos conflictos laborales, yo pienso que eso es muy importante, ese espíritu queridos amigos de la Corte, amigas de la Corte, Presidenta, es muy importante que quede muy claro, necesitamos relaciones laborales más equilibradas, procesos mucho más expeditos, reducir los términos de los procedimientos y obviamente como ya lo han dicho nuestros colegas, implementar las Tics de cara a las actualizaciones y al mundo que estamos viviendo.

Y nuestro espíritu siempre acoge como lo ha dicho el Ministro de Justicia, a quien saludo, pues la búsqueda del bienestar de todos los ciudadanos. Ahora bien, nosotros hemos presentado y acompañado a la Senadora Clara en una serie de proposiciones, ella extenderá ya la propuesta y las razones, no pensando en que no entendemos la particularidad de la propuesta, sino porque para nosotros justamente estas garantías laborales son muy importantes y eso tenemos que expresarlo a la ciudadanía, para que no generen confusión ¿no? y el alcance lo medimos no porque estemos pensando que estamos haciendo algún tipo de juego para involucrar la reforma laboral, ni mucho menos, sino justamente para precisar ese carácter autónomo.

Yo he pasado Presidente una Proposición, le agradezco a la Corte haberme dado claridad frente a esa Proposición, yo voy a quitarla para que no esté dentro de la dinámica, pero si le dejamos a la doctora Clara la sustentación de las otras proposiciones, muchas gracias.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Bien, quiero también anunciarle a la Comisión, a los Magistrados y a quienes están presentes, que este debate se está transmitiendo en directo por el Canal Institucional, todos los colombianos están observando los que están interesados en esta temática y están pendientes del resultado de la discusión de lo que será para Colombia el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Clara López Obregón:

Muchas gracias señor Presidente, le solicito acepte mis disculpas por llegar tardíamente a la reunión, tuve un imprevisto, pero gracias a Dios pude llegar a tiempo, porque estas 4 proposiciones en mi criterio de verdad son de suma importancia, el derecho laboral tiene la característica de ser un derecho protector, es un derecho en que hay conciencia de que el trabajador es la parte débil por la relación asimétrica que suele existir entre el empleador, que tiene mucha facultad sobre el trabajador en materia disciplinaria, en materia de subordinación, etc.

Y por ello, las 2 primeras propuestas, las de las presunciones y la de la garantía de indemnidad, me parecen que merecerían una discusión y desde luego, yo accedo señor Presidente, a que se queden como constancias, pero yo si quisiera ante la Comisión en pleno explicar su procedencia, las presunciones dicho sea de paso, como la indemnidad, no fueron rechazadas por la Corte, ellos vieron con buenos ojos estas 2 iniciativas, por cuanto se trata de equilibrar en el proceso las cargas, la capacidad probatoria del trabajador frente a la capacidad probatoria del empleador es inmensa, la diferencia, la asimetría.

Entonces que sea el empleador con una inversión de la carga de la prueba a través de las presunciones, quien deba probar y no el trabajador, la existencia de una relación laboral, etc. o desprobar que existe, me parece que es una manera de proteger lo que la sustancia del derecho laboral consagra, por eso es que consideramos que sí es el doctor Luna, ampliamente procedimental, porque es la inversión de la carga de la prueba.

Y la indemnidad, fíjense ustedes, incluso la estaban reclamando hace poco tiempo, en algún caso me pareció escuchar tal vez a la Senadora Paloma, hablar sobre ese tema o alguien ayer en la Plenaria, no recuerdo ¿qué sucede cuando un trabajador denuncia una violación a los derechos laborales propios o de un compañero de trabajo o un hecho de corrupción? pues muy fácilmente el empleador puede buscar la manera de sacarlo de la empresa, de despedirlo hasta sin justa causa y pagar la indemnización correspondiente.

Entonces es una estabilidad reforzada para el que denuncia y ese principio de indemnidad además está contemplado en la OIT y en muchas legislaciones, en Estados Unidos por ejemplo, es el que llaman el whistleblower y es uno de los derechos laborales más respetados, porque ayudan en la lucha contra la corrupción, tanto en el sector público, como en el sector privado y ayudan en la defensa de los derechos laborales y de los derechos humanos en el puesto de trabajo, donde repito, hay asimetría de poder.

Las otras 2 proposiciones, yo debo agradecer a la Comisión de ponentes porque sí aceptaron incluir esta iniciativa sobre la protección de los derechos sindicales y eso es un avance muy importante, pero nosotros quisimos precisarla más en relación o en función de lo que ha planteado la OIT al respecto, para que quede expreso y para que quede esa protección de manera taxativa en la norma.

No es un misterio que en Colombia hay muchos incentivos económicos a la persecución sindical, el solo hecho que tengamos negociación por empresa, genera un incentivo negativo a la asociación y a la sindicalización, por cuanto la empresa que tiene un sindicato se encuentra en desventaja competitiva con la empresa que no tiene sindicato, entonces estas precisiones y este reforzamiento de la protección de los derechos sindicales la consideramos verdaderamente fundamental.

Entonces señor Presidente, en ese orden de ideas nosotros no queremos dilatar o sabemos de la necesidad de que hagan tránsito estas normas que son de suma importancia y en este momento hay es que reconocer a la Corte Suprema de Justicia haber tenido la iniciativa de este código, de verdad tan importante para el ejercicio de los derechos laborales en nuestro país, que aceptamos dejarlas como constancias y pediríamos a la Comisión de ponentes que pudiésemos volver a discutir estos temas, para ver si a la Plenaria pudiésemos llevar algunos de estos temas, los 2 últimos recomendaciones firmes de la OIT directamente al Gobierno y al estado colombiano. Muchas gracias, señor Presidente.

La Presidencia cierra la discusión de la Proposición Positiva con que termina el informe de ponencia y abre la votación

NOMBRE	VOTACIÓN	
	SÍ	NO
Amín Saleme Fabio Raúl	X	
Ávila Martínez Ariel Fernando	X	
Barreto Quiroga Óscar	X	
Benavides Mora Carlos Alberto	X	
Blanco Álvarez Germán Alcides	X	
Cabal Molina María Fernanda	X	
Chagüí Flórez Julio Elías	X	
De La Calle Lombana Humberto	X	
Gallo Cubillos Julián	X	
López Obregón Clara Eugenia	X	
Luna Sánchez David	X	
Pizarro Rodríguez María José	X	
Pulido Hernández Jonathan Ferney	X	
Valencia Laserna Paloma Susana	X	
Total	14	

En consecuencia, ha sido aprobada la Proposición positiva con que termina el informe de ponencia.


La Presidencia abre la discusión del articulado en el texto del pliego de modificaciones y se inicia su estudio por bloques de la siguiente forma:


La Presidencia interviene para un punto de orden:

Hemos acordado 6 bloques en el articulado, de un proyecto extenso, 331 artículos y 2 artículos nuevos de Proposición, más 25 o algo así de proposiciones sobre el articulado, vamos a excluir en los bloques los artículos sobre los cuales hay Proposición, independientemente de que estas se puedan dejar o no como constancia, porque serán argumentadas por sus autores, lo que sí es que vamos a observar si está presente el Senador, porque por ejemplo, en el primer bloque doctor David, hay una Proposición del doctor Motoa, no lo veo, si la podemos dejar de constancia de una vez lo metemos en el bloque, usted que es su copartidario de bancada, entiendo que nos podrá decir si el doctor Motoa va a hacer presencia para dejar esa Proposición al final en la discusión o si lo hacemos en el orden aritmético que venimos haciendo el articulado.

La Presidencia abre la discusión del articulado, con el primer bloque en el texto del pliego de modificaciones compuesto por 60 artículos que integran el “Título Preliminar y Libro Primero”, los artículos del 1 al 60 y se le han radicado varias proposiciones.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura a las siguientes proposiciones radicadas al artículo 10:






PROPOSICIÓN MODIFICATIVA #143

Modifíquese el párrafo del artículo 10 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social", el cual quedará así:

Párrafo. Los procesos que se promuevan a través de medios electrónicos y en formato digital, serán repartidos a cualquier juez laboral o tribunal del país de acuerdo con sus competencias y teniendo en cuenta el equilibrio de la carga de procesos de acuerdo con las estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura y los Consejos Seccionales de la Judicatura. Estos procesos se tramitarán por medios virtuales hasta su culminación. La segunda instancia podrá ser sometida a las disposiciones de reparto del presente párrafo.

No obstante, la población rural, los grupos étnicos, las personas con discapacidad y las demás personas que tengan alguna dificultad para hacer uso de los medios digitales y la autoridad judicial competente deberán manifestar las razones por las cuales no pueden realizar una actuación judicial específica a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de lo cual se dejará constancia en el expediente y se realizará de manera presencial. En este caso, el proceso será remitido al juez laboral o al tribunal competente que corresponda al domicilio del demandado.

Atentamente,



JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO
Senador de la República


YJS
10/10/24
9:45 am

JUSTIFICACIÓN

Este artículo señala que cuando un proceso se va a adelantar de manera enteramente virtual, puede repartirse a cualquier juez laboral o tribunal del país que sea competente. Sin embargo, si una de las partes no puede adelantar el proceso de manera virtual, lo deberá manifestar al juez para que se haga de manera presencial.

Aquí entonces surge una duda: ¿el proceso se queda en el lugar al que fue repartido, que pudo haber sido cualquier parte del país, o debe devolverse a un sitio cercano a las partes para que continúe de manera presencial? Nuestra propuesta es que sea devuelto a un juez o al tribunal que corresponda al domicilio del demandado, pues tramitarlo lejos de las partes sería inconveniente.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA


República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Bogotá DC, 16 de abril de 2024

H.S. GERMAN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ
Presidente Comisión Primera del Senado

Doctora
YURY LINETH SIERRA TORRES
Secretaría Comisión Primera del Senado

Asunto: PROPOSICIÓN MODIFICATORIA A LA PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY 051 2023, SENADO, NUEVO CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Proposición. #144

Respetuosamente nos permitimos presentar proposición modificatoria del parágrafo incisos primero y segundo del artículo 10 del Proyecto de Ley 051 de 2023 Senado "por el cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los cuales quedarán así


"Artículo 10". Competencia por razón del lugar.
[...]

Parágrafo. Los procesos que se promuevan a través de medios electrónicos y en formato digital, serán repartidos a cualquier juez laboral o tribunal del país de acuerdo con sus competencias y teniendo en cuenta el equilibrio de la carga de procesos de acuerdo con las estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura y los Consejos Seccionales de la Judicatura. Estos procesos se tramitarán por medios virtuales hasta su culminación. La segunda instancia podrá ser sometida a las disposiciones de reparto del presente parágrafo. Este reparto nacional será reglamentado por el Consejo Superior de la Judicatura, dentro del año siguiente a la expedición de este código.

Lo dispuesto en el inciso anterior no es aplicable respecto de la población rural, los grupos étnicos, las personas con discapacidad y las demás personas que tengan alguna dificultad para hacer uso de los medios digitales. Para ello, al momento de presentar la demanda, el demandante deberá manifestar las razones por las cuales no pueden actuar través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, caso en el cual se aplicará la competencia establecida en el inciso primero y segundo de este artículo, con un trámite presencial.

*Yury Lineth Sierra Torres
16-04-24
10:27*

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura a la Proposición radicada al artículo 16:


República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Bogotá DC, 16 de abril de 2024

H.S. GERMAN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ
Presidente Comisión Primera del Senado

Doctora
YURY LINETH SIERRA TORRES
Secretaría Comisión Primera del Senado

Asunto: PROPOSICIÓN MODIFICATORIA A LA PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY 051 2023, SENADO, NUEVO CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Proposición. #145

Respetuosamente nos permitimos presentar proposición modificatoria al numeral 9 del literal A), y al numeral 3 del literal C) del artículo 16 del Proyecto de Ley 051 de 2023 Senado "por el cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los cuales quedarán así

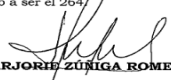
"Artículo 16". Competencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

A- La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia conoce:
[...]
9. De los asuntos señalados en el inciso 3 del artículo 236 239 de este Código.
[...]
C-Los Jueces del Circuito.
[...]

3. En primera instancia, de las controversias consagradas en el artículo 263 264 de este Código y aquellas en que se vean involucrados Estados extranjeros y sus órganos de gobierno o de representación exterior, organismos internacionales y funcionarios o empleados consulares.

Justificación.
Lo anterior, por cuanto al ajustar el proyecto con algunas propuestas presentadas por los diferentes sectores partícipes de su construcción, el artículo 236 pasó a ser el 239 y el artículo 263 pasó a ser el 264.

Atentamente,


MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
Presidenta Sala de Casación Laboral


*Yury Lineth Sierra Torres
16-04-24
10:27*

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la doctora Marjorie Zúñiga Romero – Presidenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

Gracias Presidente, a ver, a mí me parece importante explicar cuál es la filosofía de esta norma, primero, hay una regla general de competencia y está en la primera parte del artículo 10, la competencia se determina por el último lugar donde se haya prestado el servicio o por el domicilio del demandado, a elección del demandante, sin tener en cuenta la calidad de partes.

Y segundo, muy importante, esta norma al final hace realidad la propuesta, una de las propuestas de este código y es hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso judicial, me explico, imaginemos que hay un proceso que se va a presentar en forma virtual ¿qué se pretende? que se reglamente posteriormente y que el Consejo Superior de la Judicatura sea capaz de trasladar el expediente a un distrito judicial que sea seleccionado en razón al número de expedientes que tenga ¿esto a qué obedece? pues sencillamente a que hay distritos judiciales que tienen más congestión que otros, no es el mismo número de procesos que se atienden en un distrito judicial como en Bogotá, en Cali o en Barranquilla, a otros.

¿Qué va a permitir esto? agilidad en los procesos, que a usted un juez de conocimiento en un distrito judicial que haya sido seleccionado por reparto, de manera ágil le resuelve la controversia jurídica y en esa medida, por eso en el primer inciso del parágrafo 10, se hace necesario agregar lo que está en nuestra Proposición Presidente, y es que el Consejo Superior de la Judicatura que es quien tiene la competencia,



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Justificación.

Lo anterior, por cuanto en el primer inciso del parágrafo del artículo 10 del proyecto del código procesal, se hace necesario agregar que sea el Consejo Superior de la Judicatura, en razón a su competencia, quien reglamente lo concerniente al reparto nacional aquí contemplado.

Y, frente a la proposición del Senador Jorge Benedetti Martelo, frente al inciso segundo del referido parágrafo, se considera procedente, y se sugiere que quede redactado en los anteriores términos, clarificando que, en los eventos que el proceso deba tramitarse en forma física, se siguen las reglas generales de los incisos 1 y 2 de este artículo.

Atentamente,


MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
Presidenta Sala de Casación Laboral

reglamento lo concerniente al reparto nacional aquí contemplado.

Ahora bien, frente a la Proposición del Senador Benedetti, se considera procedente y se sugiere que quede redactado tal y como lo leyó la señora Secretaria, gracias Presidente.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura a la siguiente Proposición formulada por el honorable Senador Óscar Barreto Quiroga quien la deja como constancia:

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA
 Modifíquese, el artículo 28 de los Deberes del Juez, del Proyecto de Ley 051 de 2023 S "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social", el cual tendrá la siguiente redacción:

"Artículo 28. Deberes del juez. Son deberes del juez:

(...)

14. Usar el Plan de Justicia Digital cuando se encuentre implementado en su despacho judicial.
 15. Adoptar las herramientas tecnológicas que permitan una correcta validación de identidad de las partes y de los intervinientes en el proceso.
 16. Verificar, usando herramientas tecnológicas, la fecha y hora del envío y recepción de documentos, de acuerdo con los términos procesales.
 17. Los demás que se consagren en la ley."

JUSTIFICACION
 Teniendo en cuenta que una de las motivaciones de este proyecto de Ley es actualizar el procedimiento laboral de acuerdo con las nuevas tecnologías, no es menos importante tener en cuenta que dicho uso debe llevarse a cabo, bajo condiciones seguras que generen confianza digital. Es así, como ante la posibilidad de llevar a cabo audiencias virtuales, (debe) existir un mecanismo de seguridad digital que garantice que la persona compareciente es quien dice ser, evitando así suplantaciones de identidad, incluso por la misma IA; mecanismos tales como el uso de biometría facial y/o dactilar, firmas electrónicas, preguntas reto, códigos OTP etc.

En el mismo sentido, y con el ánimo de soportar lo establecido en el artículo 81 Presentación y trámite de memoriales y comunicaciones, respecto de la Obligación de la Secretaría, de hacer constar la fecha y hora de presentación de los memoriales y comunicaciones que reciba, es importante la implementación de una herramienta que brinde seguridad jurídica a las partes con atributos como:

- Utilizar la hora legal colombiana, del reloj atómico del Instituto Nacional de Metrología.
- Certificación del tiempo (hh:mm:ss), fecha (dd/mm/aaaa), la cual se encuentre vinculada a una firma digital.
- Imposibilidad de un tercero pueda cambiar o solicitar la aplicación de valores distintos de tiempo del día y fecha.
- Operar como mecanismo de control de la integridad de los documentos durante todo su ciclo de vida.

Const

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Senador, debe manifestar usted simplemente si la deja como constancia, para que quede en el acta.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Óscar Barreto Quiroga:

Señor Presidente, por supuesto que sí, la dejo como constancia, además para agilizar el debate.

La Presidencia informa que hay una Proposición al artículo 18 el cual queda excluido del bloque en discusión.

Las siguientes Proposiciones sus autores de acuerdo a su intervención mencionaron retiradas del bloque en discusión del artículo 1º al artículo 60:

PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 6 del texto propuesto para primer debate del Proyecto de Ley 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social" que quedará así:

Artículo 6o. Deber extra y ultra petita. El Juez deberá ordenar el pago de salarios, prestaciones, indemnizaciones, y demás derechos laborales distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con las fuentes formales del derecho.

Este deber será ejercido en segunda instancia, siempre y cuando se trate de derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, afiliado, pensionado o beneficiario y se cumplan las condiciones del inciso anterior.

Constancia

Umi hys
Nuvia pre Barro R
10-04-24
11:11

FACTO HISTÓRICO
UN PARTIDO POR TIEMPOS

#AlimentarLaVida

Bogotá D.C., 10 de abril de 2024

ALBERTO BENAVIDES
 #AlimentarLaVida
Retirado

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA A LA PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY 051 DE 2023 SENADO "NUEVO CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

No eliminar el numeral 3 del Ordinal A del artículo 16 que otorga la competencia de conocer del Recurso de Revisión a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto no está repetido como se indica en la observación, y no puede confundirse con la casación por cuanto son dos recursos diferentes, por lo tanto, debe quedar como se indicaba en el texto inicial.

Adiciónese el numeral 3 del Ordinal A del artículo 16 del Proyecto de Ley 051 de 2023 Senado, el cual quedará así:

ARTÍCULO 16. Competencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

A- (...)

3. Del recurso de revisión.

Atentamente,

Y S R
10/04/24
11:08 AM

Carlos Alberto Benavides Mora
 Senador de la República
 Pacto Histórico

www.albertobenavides.com

HUMBERTO DE LA CALLE
 SENADOR

Retirado

Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social"

Proposición

Modifíquese el artículo 20 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social", el cual quedará así:

Artículo 20. Conciliación antes del proceso. La persona o personas que tengan interés en conciliar una diferencia en asuntos del trabajo y la seguridad social antes de presentar demanda, podrán solicitar, a través de los medios dispuestos para ello, a los Jueces Laborales y sin perjuicio de la competencia asignada por la ley a otras autoridades, que hagan la correspondiente citación, señalando día y hora con tal fin.

En caso de que las partes acudan a los jueces para celebrar conciliación extraprocesal, se observarán las siguientes reglas:

(...)

11. Las conciliaciones extraprocesales y la terminación anticipada por una conciliación judicial exitosa se tendrán en cuenta como carga efectiva para la estadística judicial.

Justificación

De acuerdo con la Misión de Empleo 2021¹ solo 8% de los procesos laborales terminan de forma anticipada por conciliación. Por esa razón, se considera necesario incentivar a los jueces para que sean más activos en esa etapa procesal, de forma que se pueda desesalar la conflictividad laboral y, con ello, descongestionar el aparato judicial.

Natalia Ramírez Bustamante, "Cumplimiento de la regulación y conflictividad laboral en Colombia: Contribución a la misión de empleo 2021", Borrador de trabajo, Borradores de Trabajo y Derecho (Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, 2021), 86, http://hdl.handle.net/1992/65685.

10-04-24
10:20

HUMBERTO DE LA CALLE
 SENADOR

Retirado

Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social"

Proposición

Modifíquese el artículo 22 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social", el cual quedará así:

Artículo 22. Reglas generales. La comisión solo podrá conferirse para la práctica de pruebas en los casos que autoriza el artículo 5º de este código, para la de otras diligencias que deban surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento, y para secuestro y entrega de bienes en dicha sede, en cuanto fuere menester. No podrá comisionarse para la práctica de medidas cautelares extraprocesales.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia podrán delegar la práctica de pruebas a un(a) magistrado(a) auxiliar.

(...)

Justificación

Esta facultad existe, por ejemplo, en el Reglamento Interno de la Corte Constitucional y en la JEP. Consideramos que debe quedar expreso en esta reforma para los procesos laborales y en el marco de la actividad judicial de la Sala de Casación Laboral de Corte Suprema de Justicia.

10-04-24
10:20

La Presidencia cierra la discusión del primer bloque de artículos del 1° al 60 “Título Preliminar y Libro Primero” los artículos: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, en el texto del pliego; el artículo 10 en el texto del pliego con la modificación de las Proposiciones: La Proposición número 143 formulada por el honorable Senador Jorge Enrique Benedetti Martelo y la Proposición número 144 formulada por la Magistrada Marjorie Zúñiga Romero - Presidenta de la sala laboral Corte Suprema de Justicia, los artículos 11, 12, 13, 14, 15, en el texto del pliego, el artículo 16 en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 145 formulada por la Magistrada Marjorie Zúñiga Romero - Presidenta de la Sala Laboral Corte Suprema de Justicia, los artículos 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 en el texto del pliego de modificaciones, el artículo 18 se excluye de este bloque y abre la votación

NOMBRE	VOTACIÓN	
	SÍ	NO
Amin Saleme Fabio Raúl	X	
Ávila Martínez Ariel Fernando	X	
Barreto Quiroga Óscar	X	
Benavides Mora Carlos Alberto	X	
Benedetti Martelo Jorge Enrique	X	
Blanco Álvarez Germán Alcides	X	
Cabal Molina María Fernanda	X	
Chacón Camargo Alejandro Carlos	X	
Chagüí Flórez Julio Elías	X	
De la Calle Lombana Humberto	X	
Gallo Cubillos Julián	X	
López Obregón Clara Eugenia	X	
Luna Sánchez David	X	
Motoa Solarte Carlos Fernando	X	
Pizarro Rodríguez María José	X	
Pulido Hernández Jonathan Ferney	X	
Valencia Laserna Paloma Susana	X	
Vega Pérez Alejandro Alberto	X	
Total	18	



La Presidencia cierra la votación y por Secretaría se informa el resultado:

Total, votos: 18
Por el Sí: 18
Por el No: 00

En consecuencia, ha sido aprobada el primer bloque de artículos del 1° al 60 “Título Preliminar y Libro Primero” de la siguiente forma, los artículos: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, en el texto del pliego; el artículo 10 con la modificación de la Proposición número 143 y la Proposición número 144, los artículos 11, 12, 13, 14, 15, en el texto del pliego, el artículo 16 con la modificación de la Proposición número 145, los artículos 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 en el texto del pliego, el artículo 18 se excluye de este bloque.

La Presidencia abre la discusión del segundo bloque compuesto por 66 artículos que integran las “Secciones Primera y Segunda del Libro Segundo” del artículo 61 al 126 y se le han radicado varias Proposiciones avaladas y otras retiradas.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia solicita a la Secretaria dar lectura a la Proposición radicada al artículo 61:





PROPOSICIÓN MODIFICATIVA #146

Modifíquese el numeral 11 del artículo 61 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado “Por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”, el cual quedará así:

11. La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. No obstante, en caso que el demandante desconozca el canal digital donde deben ser notificados los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podrá indicarlo así, bajo juramento que se entenderá prestado con la demanda sin que ello implique su inadmisión. El demandante tampoco estará obligado a indicar su canal digital en caso de carecer de uno, lo cual deberá manifestar en la demanda.

Atentamente,



JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO
Senador de la República

YSA
10/10/24
9:45 am.

JUSTIFICACIÓN

El objetivo de la modificación es precisar que el demandante (que es diferente a su apoderado) no tiene que señalar su canal digital si no tiene uno, pues no es razonable obligar a alguien a crearlo si en todo caso su apoderado si debe tener.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia solicita a la Secretaria dar lectura a la Proposición radicada al artículo 66:




PROPOSICIÓN MODIFICATIVA #147

Modifíquese el numeral 6 del artículo 66 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado “Por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”, el cual quedará así:

6. Cuando no se indica el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, salvo que el demandante manifieste no tener uno o desconocerlos.

Atentamente,



JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO
Senador de la República

YSA
10/10/24
9:45 am.

JUSTIFICACIÓN

Esta modificación está intrínsecamente ligada con la modificación al artículo 61, y tiene como objetivo establecer que la no inclusión del canal digital del demandante no es causal de inadmisión.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna:

Sí señor, aquí lo que estamos es haciendo una cosa muy sencilla, que es diciendo que, si no tiene un canal digital, pues no tiene que incluirlo y la otra también es muy sencilla, que es exactamente lo mismo, que puede no tener alguno. Entonces creemos que complementan el proyecto y han sido avaladas y se pueden votar Presidente.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia solicita a la Secretaria dar lectura a la Proposición radicada al artículo 73:

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENADO DE LA REPÚBLICA

CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE
Senador de la República
Comisión Primera

PROPOSICIÓN ADITIVA #148

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 al 115 de la Ley 5 de 1992, respetuosamente, presento ante la Comisión Primera del Senado de la República la siguiente proposición frente al artículo 73 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social":

Adiciónense dos numerales al artículo 73 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social", el cual quedará así:

Artículo 73. Excepciones previas.

(...)

12. Prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión.

13. Cosa juzgada.

CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE
SENADOR DE LA REPÚBLICA

[Handwritten signature and date: 10-04-24 a.s.b.]

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENADO DE LA REPÚBLICA

JUSTIFICACIÓN

Se considera que, a efectos de garantizar a las partes el acceso al expediente y las actuaciones allí contenidas, se deben conservar los mensajes de datos remitidos al Despacho, al menos hasta que el proceso se archive de forma definitiva. Lo anterior, con la finalidad de evitar incidentes que retrasen o afecten el normal curso del proceso, como por ejemplo las reconstrucciones, que pueden derivar en la vulneración de las garantías de las partes.

Por otra parte, en lo que respecta a la impresión del mensaje de datos, se estima que es la mejor manera de dejar constancia de la fecha, hora y remitente del mismo, ya que brinda mayor seguridad a las partes este tipo de soporte. Por el contrario, una constancia secretarial puede estar expuesta a errores humanos de digitación, y con ello, generar afectaciones al proceso y a las garantías de las partes, como por ejemplo, en la contabilización de términos para el traslado de un recurso, o que se considere extemporáneo un escrito fundamental para una de las partes.

Atentamente,

JONATHAN PULIDO HERNÁNDEZ
SENADOR

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna:

Presidente, esta es una Proposición muy importante porque en las excepciones previas se introduce la prescripción de la obligación y por supuesto, los temas de exigibilidad de cosa juzgada, que yo creo que era bien importante, Presidente.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia solicita a la Secretaria dar lectura a la Proposición radicada al artículo 87:

Atendiendo instrucciones de la Presidencia solicita a la Secretaria dar lectura a la Proposición radicada al artículo 92:

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, abril de 2024

Doctor:
H.S GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ
Presidente Comisión Primera Constitucional

Doctora:
YURY LINETH SIERRA TORRES
Secretaría Comisión Primera Constitucional Permanente

Cordial Saludo,

Respetuosamente me permito presentar **PROPOSICIÓN MODIFICATORIA #149** al inciso 4 del artículo 87 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social" el cual quedará así:

Artículo 87. Formación y archivo de los expedientes. De cada proceso en curso se formará un expediente, en el que se insertará la demanda, su contestación, y los demás documentos que le correspondan. En él se tomará nota de los datos que identifiquen las grabaciones en que se registren las audiencias y diligencias. (...)

(...) Cuando el proceso conste en un expediente físico, los mencionados documentos y el mensaje de datos a través del cual fueron remitidos, se incorporarán a este de forma impresa, con la anotación del secretario con la finalidad de dejar constancia acerca de la fecha y hora en la que fue recibido en la cuenta de correo del despacho, y la información de la cuenta desde la cual fue enviado el mensaje de datos. El despacho deberá conservar el mensaje recibido en su cuenta de correo, por lo menos, hasta la siguiente oportunidad en que el juez ejerza el control de legalidad, salvo que, por la naturaleza de la información enviada, la parte requiera la incorporación del documento y en otro soporte que permita la conservación del mensaje en el mismo formato en que fue generado, por lo menos, hasta que el proceso sea archivado de forma definitiva. Las expensas generadas por las impresiones harán parte de la liquidación de costas.

[Handwritten signature and date: 10-04-24 12:24]

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, abril de 2024

Doctor:
H.S GERMÁN ALCIDES BLANCO ALVAREZ
Presidente Comisión Primera Constitucional

Doctora:
YURY LINETH SIERRA TORRES
Secretaría Comisión Primera Constitucional Permanente

Cordial Saludo,

Respetuosamente me permito presentar **PROPOSICIÓN MODIFICATORIA** al artículo 92 del Proyecto de Ley No. 051 de 2024 "Por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social", el cual quedará así:

Artículo 92°. Causales de nulidad. El juez deberá, en todo caso, precaver nulidades procesales a efectos de impartir decisión de fondo en los asuntos sometidos a su conocimiento y resolución.

El proceso laboral es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o sí, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.

[Handwritten signature and date: 10-04-24 10:14]

.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
 AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.

7. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas o el emplazamiento de las demás, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes o que deban suceder en el proceso a cualquiera de ellas, cuando la ley así lo ordena o no se cita en debida forma a alguna otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió serlo.

8. Cuando se omita surtir el grado jurisdiccional de consulta en los términos que este código regula.

Parágrafo 1°. Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

Parágrafo 2°. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.


NUOVO Parágrafo 3°. El proceso también será nulo cuando las actuaciones judiciales y la práctica de pruebas en las instancias, no se efectúen oralmente y en audiencia pública, conforme lo dispuesto en el artículo 123 de esta Ley. También serán causales de nulidad las demás que se encuentren establecidas en este código.

.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
 AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

JUSTIFICACIÓN

Proposición modificatoria. Se propone adicionar el numeral 9 al artículo 92 del proyecto de Ley, en consideración a lo expuesto en el artículo 123 del mismo, el cual consagra la obligatoriedad de que las actuaciones judiciales y la práctica de pruebas en las instancias deba darse de manera oral y en audiencia pública. Con la presente inclusión se pretende ampliar el catálogo de nulidades taxativas dispuestas en el código procesal, para efectos de no entrar a futuro en contrariedades entre el mismo articulado.

Atentamente,


JONATHAN PULIDO HERNÁNDEZ
 SENADOR

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Jonathan Pulido Hernández el cual deja como constancia la Proposición leída.

Jonathan Ferney Pulido Hernández:

Presidente, Secretaria, hablando con el señor Magistrado Auxiliar, ya estuvimos revisando y vamos a retirar esta Proposición modificatoria del artículo 92.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia solicita a la Secretaria dar lectura a la Proposición radicada al artículo 96:

.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
 AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Bogotá, abril de 2024

Doctor:
H.S. GERMÁN ALCIDES BLANCO ALVAREZ
 Presidente Comisión Primera Constitucional

Doctora:
YURY LINETH SIERRA TORRES
 Secretaria Comisión Primera Constitucional Permanente

Cordial Saludo,

Respetuosamente me permito presentar PROPOSICIÓN MODIFICATORIA al parágrafo del artículo 96 del Proyecto de Ley No. 051 de 2024 "Por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social", el cual quedará así: #150

Artículo 96°. Saneamiento de la nulidad. En los procesos laborales la nulidad se considerará saneada en los siguientes casos:

(-)

Parágrafo 2. En cualquier estado del proceso el juez ordenará poner en conocimiento de la parte afectada de las nulidades que no hayan sido saneadas. Cuando se originen en las causales 4, 6 y 7 del artículo 89, el auto se le notificará al afectado de conformidad con las reglas generales previstas en los artículos **208 al 211**. Si dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación dicha parte no alega la nulidad, ésta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario el juez la declarará.

JUSTIFICACIÓN


Proposición modificatoria. Se propone modificar la referencia de los artículos en los cuales se encuentran contenidas las reglas de notificación, en la medida que, en el proyecto original estaban contenidas entre los artículo 205 a 208 y, en el

J.P.H. 10-04-24 10:15

.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
 AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

informe para primer debate se reformuló la numeración, estableciéndose del artículo 208 a 211.

Atentamente,


JONATHAN PULIDO HERNÁNDEZ
 SENADOR

Atendiendo instrucciones de la Presidencia solicita a la Secretaria dar lectura a la Proposición radicada al artículo 103:

.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
 AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Bogotá, abril de 2024

Doctor:
H.S. GERMÁN ALCIDES BLANCO ALVAREZ
 Presidente Comisión Primera Constitucional

Doctora:
YURY LINETH SIERRA TORRES
 Secretaria Comisión Primera Constitucional Permanente

Cordial Saludo,

Respetuosamente me permito presentar PROPOSICIÓN MODIFICATORIA al artículo 103 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social" el cual quedará así: #151

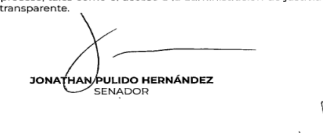
Artículo 103°. Suspensión del proceso por impedimento o recusación. El proceso se suspenderá desde que el funcionario se declare impedido o se formule la recusación hasta cuando se resuelva, sin que por ello se afecte la validez de los actos surtidos con anterioridad. **En caso que la recusación resulte procedente, el nuevo juez deberá revisar la validez de todo lo actuado.**

(-)

JUSTIFICACIÓN

Para evitar conflictos de interpretación, se debe aclarar que los actos procesales conservarán su validez mientras dure la suspensión del proceso y se resuelve el impedimento o recusación, pero cuando se decida lo pertinente, y de manera especial una recusación, el nuevo juez debe evaluar si se deben retrotraer o anular los actos surtidos. Lo anterior, con la finalidad de proteger las garantías de las partes dentro del proceso, tales como el acceso a la administración de justicia de forma imparcial y transparente.

Atentamente,


JONATHAN PULIDO HERNÁNDEZ
 SENADOR

J.P.H. 10-04-24 10:15

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna:

Gracias Presidente, mire en el artículo 87 el Senador Jota Pe está simplemente agregando que los mensajes de datos con los que se haya remitido la demanda, también harán parte de lo que se imprime, ha sido una Proposición avalada y pues simplemente complementa lo que ya se quería.

La del artículo 92 nos informa el Senador que ha sido retirada.

La del artículo 98, simplemente corrige los artículos dejando claro que es del 208 al 211, que me parece que es una precisión importante, simplemente es una corrección, también está avalada.

Y finalmente estamos hablando de la del artículo 103, que se refiere a la suspensión del proceso por impedimento y recusación, simplemente habla de que en caso de que la recusación resulte procedente, el nuevo juez deberá revisar la validez de todo lo actuado, que también ha sido avalada señor Presidente.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Senador Jota Pe Hernández – autor, de acuerdo con la argumentación. Bien, en consideración entonces el segundo bloque de artículos que corresponden a las secciones primera y segunda del libro segundo, artículos que se comprenden entre el número 61 y el 126, en consideración los artículos 61 con Proposición avalada del Senador Jorge Benedetti.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna:

Es que Presidente, aquí estamos revisando con el Senador Amín y nos da la impresión de que al Senador Jota Pe se le borró la última frase sobre cuándo proceden las recusaciones, entonces vamos a pedir que se incorpore para que se pueda votar sin la eliminación de ese pedazo que es fundamental, porque lo que dice es que.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

¿Sacamos ese artículo y lo ponemos ahora? ¿o que sacieren?

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna:

No, no, no, simplemente le vamos a agregar a la Proposición del Senador Jota Pe la frase: que las recusaciones proceden 5 días antes de cualquier audiencia. Gracias Presidente.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Hay que leerla acá entonces, agréguela antes de someter, que ella la lea completa y quede en el acta para no viciarla.

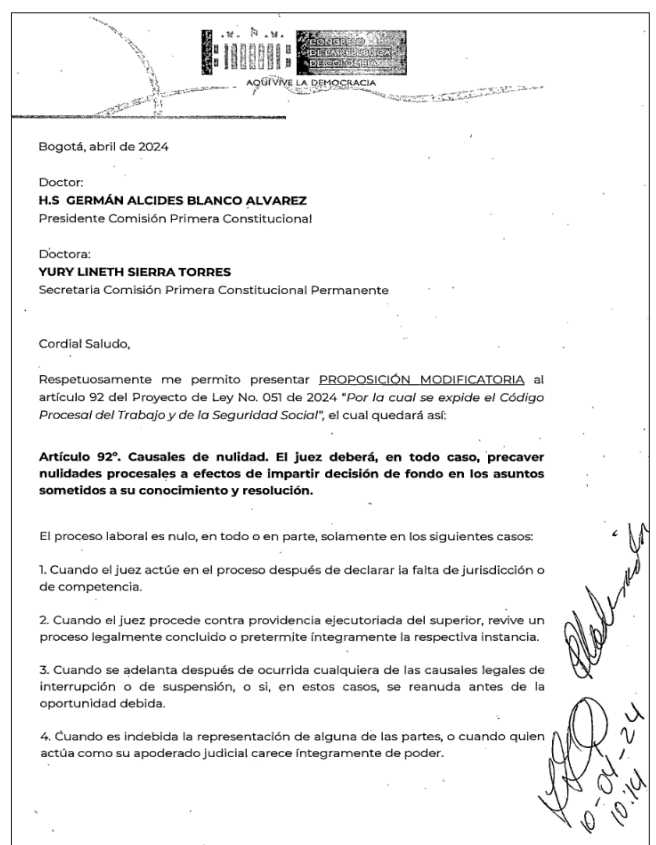
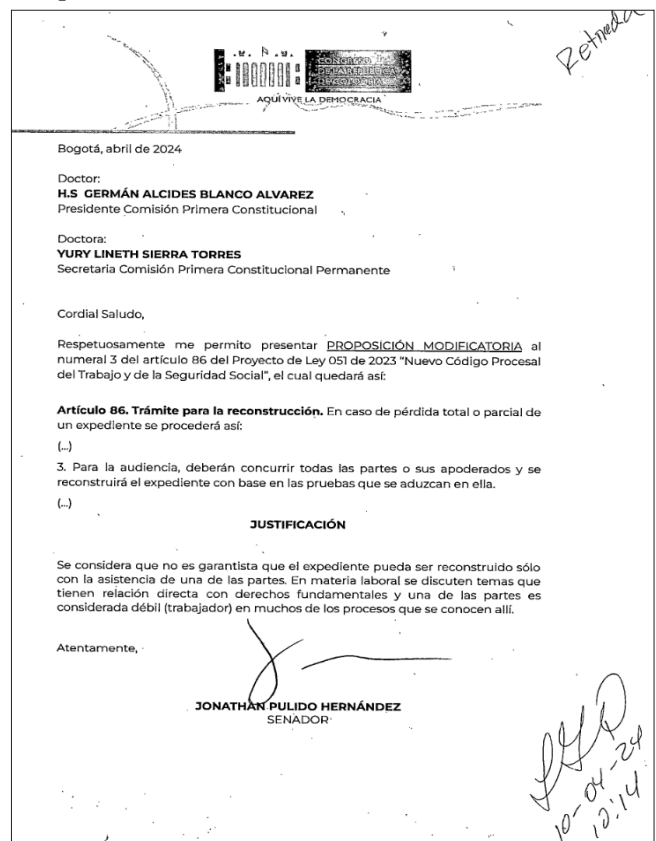
Senador Jota Pe, Proposiciones suyas en el artículo 86, 93 y 109, ahora pues la del 92, importante que usted lo manifieste, que han sido retiradas,

bueno de este bloque y 109, que usted manifieste que fueron retiradas, para que quede el acta, 86, 93, 109 y ahorita la del 92.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Jonathan Ferney Pulido Hernández:

Sí Presidente, de 12 Proposiciones la del artículo 86, 93, 109 y 92 en común acuerdo con los señores Magistrados hemos decidido y los señores ponentes, Senadores ponentes, hemos decidido retirarlas.

El honorable Senador Jonathan Ferney Pulido Hernández retira las siguientes Proposiciones a este bloque de artículos:



5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.

7. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas o el emplazamiento de las demás, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes o que deban suceder en el proceso a cualquiera de ellas, cuando la ley así lo ordena o no se cita en debida forma a alguna otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió serlo.

8. Cuando se omita surtir el grado jurisdiccional de consulta en los términos que este código regula.

Parágrafo 1°. Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

Parágrafo 2°. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.

Nuevo Parágrafo 3°. El proceso también será nulo cuando las actuaciones judiciales y la práctica de pruebas en las instancias, no se efectúen oralmente y en audiencia pública, conforme lo dispuesto en el artículo 123 de esta Ley. También serán causales de nulidad las demás que se encuentren establecidas en este código.

JUSTIFICACIÓN

Proposición modificatoria. Se propone adicionar el numeral 9 al artículo 92 del proyecto de Ley, en consideración a lo expuesto en el artículo 123 del mismo, el cual consagra la obligatoriedad de que las actuaciones judiciales y la práctica de pruebas en las instancias deba darse de manera oral y en audiencia pública. Con la presente inclusión se pretende ampliar el catálogo de nulidades taxativas dispuestas en el código procesal, para efectos de no entrar a futuro en contrariedades entre el mismo articulado.

Atentamente,

JONATHAN PULIDO HERNÁNDEZ
SENADOR

JUSTIFICACIÓN

La modificación del artículo 93 tiene la finalidad de adecuar el mismo a la naturaleza laboral, toda vez que el apartado referente "a la diligencia de entrega" es propia de los procesos civiles, más no de los laborales

Atentamente,

JONATHAN PULIDO HERNÁNDEZ
SENADOR

Bogotá, abril de 2024

Doctor:
H.S GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ
Presidente Comisión Primera Constitucional

Doctora:
YURY LINETH SIERRA TORRES
Secretaría Comisión Primera Constitucional Permanente

Cordial Saludo,

Respetuosamente me permito presentar **PROPOSICIÓN MODIFICATORIA** al artículo 109 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social" el cual quedará así, en lo relativo al **Amparo de Pobreza**:

Artículo 109°. Procedencia. Se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, ~~salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso.~~

JUSTIFICACIÓN

Debe eliminarse la última frase "salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso", dado que en materia laboral y de seguridad social las personas no adquieren a título oneroso los derechos que pretenden hacer valer en un proceso judicial, como sí sucede en materia civil. Puede tomarse de base el Código General del Proceso, pero sin duda se debe adaptar a las especiales situaciones en materia laboral, que está compuesta por un derecho más social, donde se debe vejar por la protección de la parte débil de la relación laboral o de seguridad social a saber: trabajador y afiliado.

Atentamente,

JONATHAN PULIDO HERNÁNDEZ
SENADOR

Paloma Valencia Laserna
10-04-24
10:16

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura nuevamente a la Proposición número 151 de acuerdo a lo propuesto por la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna:

Bogotá, abril de 2024

Doctor:
H.S GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ
Presidente Comisión Primera Constitucional

Doctora:
YURY LINETH SIERRA TORRES
Secretaría Comisión Primera Constitucional Permanente

Cordial Saludo,

Respetuosamente me permito presentar **PROPOSICIÓN MODIFICATORIA** al artículo 103 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social" el cual quedará así:

Artículo 103°. Suspensión del proceso por impedimento o recusación. El proceso se suspenderá desde que el funcionario se declare impedido o se formule la recusación hasta cuando se resuelva, sin que por ello se afecte la validez de los actos surtidos con anterioridad. En caso que la recusación resulte procedente, ~~si nuevo juez deberá revisar la validez de todo lo actuado.~~

JUSTIFICACIÓN

Para evitar conflictos de interpretación, se debe aclarar que los actos procesales conservarán su validez mientras dure la suspensión del proceso y se resuelve el impedimento o recusación, pero cuando se decida lo pertinente, y de manera especial una recusación, el nuevo juez debe evaluar si se deben retrotraer o anular los actos surtidos. Lo anterior, con la finalidad de proteger las garantías de las partes dentro del proceso, tales como el acceso a la administración de justicia de forma imparcial y transparente.

Atentamente,

JONATHAN PULIDO HERNÁNDEZ
SENADOR

#151
Jorge Enrique Benedetti Martelo
10-04-24
10:17

La Presidencia cierra la discusión del segundo bloque de artículos que van del 61 al 126 "Secciones Primaras y Segunda del Libro segundo" de la siguiente forma: el **artículo 61** en el texto del pliego con las modificaciones de la Proposición número 146 formulada por el honorable Senador Jorge Enrique Benedetti Martelo, los **artículos 62, 63, 64, 65** en el texto del pliego de modificaciones, el **artículo**

66 en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 147 formulada por el honorable Senador Jorge Enrique Benedetti Martelo, los artículos 67, 68, 69, 70, 71, 72 en el texto del pliego de modificaciones, el artículo 73 en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 148 formulada por el honorable Senador Carlos Fernando Moota Solarte, los artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 en el texto del pliego de modificaciones, el artículo 87 en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 149 formulada por el honorable Senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, los artículos 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 en el texto del pliego de modificaciones, el artículo 96 en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 150 formula por el honorable Senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, los artículos 97, 98, 99, 100, 101, 102 en el texto del pliego de modificaciones, el artículo 103 en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 151 formulada por el honorable Senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 en el texto del pliego de modificaciones y abre la votación:

NOMBRE	VOTACIÓN	
	SÍ	NO
Amín Saleme Fabio Raúl	X	
Barreto Quiroga Óscar	X	
Benavides Mora Carlos Alberto	X	
Benedetti Martelo Jorge Enrique	X	
Blanco Álvarez Germán Alcides	X	
Cabal Molina María Fernanda	X	
Chacon Camargo Alejandro Carlos	X	
Chagüí Flórez Julio Elías	X	
De La Calle Lombana Humberto	X	
Luna Sánchez David	X	
Moota Solarte Carlos Fernando	X	
Pizarro Rodríguez María José	X	
Pulido Hernández Jonathan Ferney	X	
Valencia Laserna Paloma Susana	X	
Vega Perez Alejandro Alberto	X	
Total	15	00

La Presidencia cierra la votación y por Secretaría se informa el resultado:

Total, votos: 15

Por el Sí: 15

Por el No: 00

En consecuencia, ha sido aprobado el segundo bloque de artículos que van del artículo 61 al artículo 126 “Secciones Primeras y Segunda del Libro segundo”, el artículo 61 en el texto del pliego con las modificaciones de la Proposición número 146, los artículos 62, 63, 64, 65 en el texto del pliego de modificaciones, el artículo 66 en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 147, los artículos 67, 68, 69, 70, 71, 72 en el texto del pliego de modificaciones, el artículo 73 en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 148, los artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79,

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 en el texto del pliego de modificaciones, el artículo 87 en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 149, los artículos 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 en el texto del pliego de modificaciones, el artículo 96 en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 150, los artículos 97, 98, 99, 100, 101, 102 en el texto del pliego de modificaciones, el artículo 103 en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 151, los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 en el texto del pliego de modificaciones.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Bien, vamos a antes de votar el tercer bloque, vamos a darle el uso de la palabra a la Senadora María José Pizarro ¡vea qué belleza la visita que tenemos hoy! La paloma de la paz, creo que es la primera vez, es histórico, el responsable pues que levante la mano, quien la trajo ahí, muy bien, muy bien, muy bien, que no sea una paloma mensajera, o sea, esta Comisión tiene 2 palomas, esa es la otra.

Bien, la Senadora María José Pizarro que nos va a relacionar la visita de nuestros homólogos franceses, Senadores Franceses en el recinto de la Comisión Primera, es un placer recibirlos, doctora María José, que nos relacione quiénes son y cuál es la misión que cumplen hoy en territorio colombiano.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora María José Pizarro Rodríguez:

Bueno, muy buenos días, hacemos una interrupción un momento aquí en la votación de este importante proyecto de ley con la venia de los magistrados, queremos presentarles a un grupo de Senadores, una delegación que viene de Francia, colegas nuestros en Francia.

Traducción del Francés:

Bienvenidos a esta Comisión, la Comisión Primera del Senado de la República, ahora les presentaré y un momento por favor y si alguno de ustedes quisiera dar unas palabras para saludar al resto de la Comisión, gracias. La Senadora Maryse Carrère, el Senador Fabien Genet, la Senadora Patricia Schillinger, Jean Hingray Senador y Frédéric Doré - el Embajador de Francia en Colombia, sí, el señor Embajador que se encuentra aquí y bueno.

Siendo 12:22 p. m. la Presidencia pregunta a los miembros de la Comisión si se declara en sesión informal para escuchar a los funcionarios de Francia a lo que respondieron afirmativamente los Senadores asistentes a la sesión.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra al doctor:

La Presidencia ofrece el uso de la palabra al doctor Frédéric Doré – Embajador de Francia en Colombia:

Sí, buenas tardes, Yo soy embajador de Francia y quisiera saludar a todos ustedes los miembros de

esta Comisión Primera, muy importante, lo sabemos en el trabajo del Congreso y también agradecer a ustedes para la acogida de la delegación del grupo interparlamentario francés de amistad con los países andinos y quisiera si usted está de acuerdo, dar la palabra a la presidenta de este grupo, gracias.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la doctora Maryse Carrère – Senadora y Presidenta del Grupo Interparlamentario de Amistad Francia – Países Andinos:

Buenos días a todos, mi español es muy malo y voy continuar en francés. Muchas gracias a todos, es un honor para nosotros estar aquí y ser recibidos por ustedes, somos una delegación de 4 Senadores, estamos aquí con el Embajador de Francia, nos sentimos muy honrados y contentos de estar en Colombia, llegamos el viernes pasado y nos vamos este sábado, aquí uno de los miembros de nuestro grupo el señor Genet ya conoce mucho más a Colombia y renovamos pues nuestra satisfacción por encontrarnos aquí con ustedes.

Es emocionante para nosotros estar aquí con ustedes, a nosotros los 4 Senadores, el Embajador de Francia, el administrador que nos acompaña, sobre todo por los lazos y los vínculos que unen a nuestros 2 países y sabemos qué pues tenemos vínculos muy estrechos desde hace tiempo y atravesamos en ambos países situaciones parecidas y para finalizar ¡Viva Colombia! y ¡Viva Francia!

La Presidencia ofrece el uso de la palabra al doctor Fabien Genet - Senador y Vicepresidente del Grupo Interparlamentario de Amistad Francia – Países Andinos:

En efecto, estamos muy contentos, reitero lo que dijo la Presidenta, de estar con ustedes acá, yo conozco a Colombia, ya la he visitado varias veces y mis colegas Senadores es la primera vez que vienen, muy satisfechos de estar aquí en el Congreso.

Es un placer siempre venir acá, reunirme con ustedes y ver sobre todo la vitalidad colombiana.

Y, para terminar, quiero decirles que me siento profundamente honrado de poder participar durante algunos minutos en esta sesión y en lo que están debatiendo aquí.

Y se los digo sobre todo por lo siguiente, es que mis colegas Senadores en Francia no encontraron en mí suficientes calidades y cualidades para poder participar en la Comisión legislativa, en cambio aquí he podido estar con ustedes.

Muchas gracias ¡Viva Francia! ¡Viva Colombia!

Siendo 12:30 p. m. la Presidencia pregunta a los miembros de la Comisión primera regresar a la sesión formal a los que respondieron afirmativamente.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora María José Pizarro Rodríguez:

Bueno muchas gracias a todas, a todos, disculpen Magistrados por haber interrumpido la votación del proyecto, pero era importante para los Senadores

poder saludar la Comisión, muchas gracias y siga usted señor Presidente, Muchas gracias.

La Presidencia abre la discusión del tercer bloque que corresponde “Sección Tercera del Libro Segundo” que van del artículo 127 al 200 e informa que los siguientes Senadores retiraron sus proposiciones a este tercer bloque de artículos:

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Clara Eugenia López Obregón quien retira las siguientes Proposiciones:

CLARA LÓPEZ OBREGÓN SENADORA

PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN

Modifíquese el artículo 128 del Proyecto de ley 051 de 2023 “Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social” el cual quedará así

Artículo 128. Carga dinámica de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso de reposición, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.

El juez tomará como presunciones la ocurrencia de alguno de los siguientes hechos:

1. Acreditada la prestación del servicio, se presume la existencia de la relación laboral;
2. La falta de presentación del registro de trabajo suplementario o la relación de horas extras laboradas de cada trabajador hará presumir la existencia de las horas extraordinarias trabajadas alegadas;
3. Si el empleador no demuestra el pago de viáticos, su cuantía o destinación específica, hará presumir su impago y su carácter salarial;
4. La relación de laboral terminada por despido, se entiende sin justa causa;
5. Todo contrato de trabajo se presume por término indefinido, salvo que se pruebe que se ejecutó bajo cualquier otra modalidad;
6. Si se invoca el despido por razones de sexo, orientación o identidad sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad,

16 Oct 2024
10:57

CLARA LÓPEZ OBREGÓN SENADORA

sindicación, acoso, por haber promovido acciones judiciales o administrativas, y en cualquier otro supuesto de vulneración de un derecho fundamental o libertad pública, el despido se presume discriminatorio e injusto, salvo que el empleador demuestre que la terminación se produjo por razones objetivas o no discriminatorias.

7. En los asuntos en los que se alegue que un empresario incurrió en actos de intermediación laboral ilegal a través de personas ficticias, le corresponderá a las empresas involucradas acreditar que cuentan con una estructura productiva y organización empresarial especializada en el servicio o producto contratado.

CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN
Senadora de la República
Pacto Histórico

Carlos A. Benavito Díaz

Maryse Carrère

CLARA LÓPEZ OBREGÓN SENADORA *Retirada*

PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN

Modifíquese el artículo 145 del Proyecto de ley 051 de 2023 "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social" el cual quedará así

Artículo 145°. Deber de testimoniar. Toda persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida, excepto en los casos determinados por la ley.

El trabajador que rinda testimonio, no puede ser objeto de represalia por parte del empresario, ni puede ser objeto de trato discriminatorio o perjudicial dentro de la empresa. Cuando un trabajador afirme haber sido despedido, su contrato no renovado o prorrogado o su situación laboral afectada en cualquier forma, por haber rendido testimonio en un procedimiento administrativo o judicial, el empleador tendrá la carga de demostrar que esa determinación obedeció a razones objetivas o no discriminatorias, so pena de que el respectivo acto no produzca efectos.

CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN
Senadora de la República
Pacto Histórico

Carla A. Baravito de Nov...
Nancy Fe...

16-04-24
10/17

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Clara Eugenia López Obregón:

Las dejamos como constancia señor Presidente, muchas gracias.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Humberto De la Calle Lombana quien deja como constancia la siguiente Proposición:

HUMBERTO DE LA CALLE SENADOR *Constancia*

Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social"

Proposición

Modifíquese el artículo 169° del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social", el cual quedará así:

Artículo 169°. Procedencia de la Inspección. Cuando se presenten graves y fundados motivos y con el fin de verificar y esclarecer hechos dudosos, el juez podrá decretar de oficio o a petición parte el examen de personas, lugares, objetos o documentos.

En los casos que versen sobre derechos irrenunciables, en los que opere la presunción de discriminación o se solicite la aplicación del principio "a trabajo igual, salario igual", el juez tiene el deber de decretar las pruebas de oficio necesarias para verificar y esclarecer estos hechos dudosos.

Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la Inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba.

Cuando exista en el proceso una Inspección Judicial practicada dentro de él o como prueba extraprocesal con audiencia de todas las partes, no podrá decretarse otra nueva sobre los mismos puntos, a menos que el juez la considere necesaria para aclararlos.

El juez podrá negarse a decretar la Inspección si considera que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso o que para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, caso en el cual otorgará a la parte interesada el término para presentarlo. Contra estas decisiones del juez no procede recurso.

Justificación.

El artículo otorga una facultad discrecional respecto de la aclaración de hechos dudosos. Sin embargo, dicha discrecionalidad no es suficiente cuando se trata de bienes jurídicos de una entidad especial, por ejemplo, los relativos al principio de no discriminación. Por eso consideramos que en esos casos debe ser una obligación, teniendo en cuenta, además, que en esos eventos los demandantes tienen mayores dificultades para acceder al material probatorio necesario para defender su causa.

16-04-24
10/17

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Humberto De la Calle Lombana:

La dejo como constancia Presidente, gracias.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Jonathan Ferney Pulido Hernández quien retira la siguiente Proposición:

CLARA LÓPEZ OBREGÓN SENADORA *Retirada*

Bogotá, abril de 2024

Doctor:
H.S GERMÁN ALCIDES BLANCO ALVAREZ
Presidente Comisión Primera Constitucional

Doctora:
YURY LINETH SIERRA TORRES
Secretaría Comisión Primera Constitucional Permanente

Cordial Saludo,

Respetuosamente me permito presentar PROPOSICIÓN MODIFICATORIA al inciso final del artículo 142 del Proyecto de Ley No. 051 de 2024 "Por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social", el cual quedará así:

Artículo 142°. Interrogatorio de las partes. Las personas naturales capaces deberán absolver personalmente el Interrogatorio.

(-)

Practicado el interrogatorio o frustrado este por la no comparecencia del citado se reanudará la diligencia.

JUSTIFICACIÓN

Proposición modificatoria. Se propone eliminar la última parte del inciso final del artículo, en la medida que, se dispone el uso de expresiones propias del Código General del Proceso que en nada se relaciona con el proceso laboral, como es el caso de los poseedores.

Atentamente,

JONATHAN PULIDO HERNÁNDEZ
SENADOR

16-04-24
10/17

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Jonathan Ferney Pulido Hernández:

Presidente sí, de las 12 esta ya es la última que nosotros cordialmente retiramos, artículo 142.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura a la siguiente Proposición que modifica el artículo 174.

CLARA LÓPEZ OBREGÓN SENADORA *Retirada*

Bogotá, abril de 2024

Doctor:
H.S GERMÁN ALCIDES BLANCO ALVAREZ
Presidente Comisión Primera Constitucional

Doctora:
YURY LINETH SIERRA TORRES
Secretaría Comisión Primera Constitucional Permanente

Cordial Saludo,

Respetuosamente me permito presentar PROPOSICIÓN MODIFICATORIA al título del artículo 174 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social" el cual quedará así:

Artículo 174. Distintas clases de documentos.

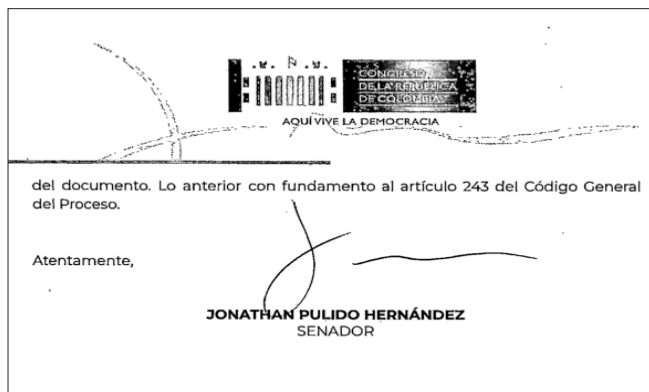
Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.

Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.

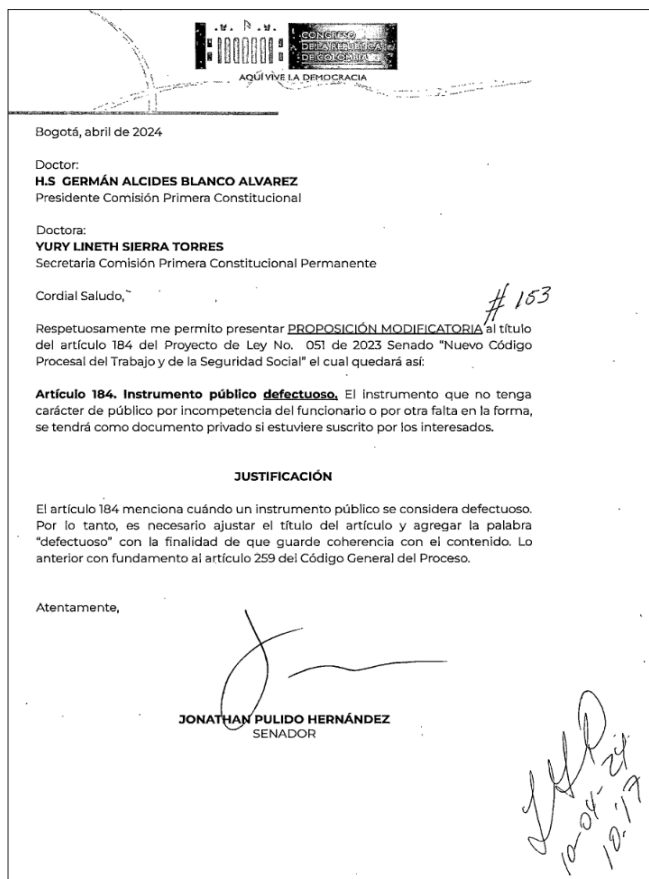
JUSTIFICACIÓN

Es necesario corregir el título del artículo 174, toda vez que el contenido del mismo habla sobre las distintas clases de documentos y no sobre la autenticidad

16-04-24
10/17



Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura a la siguiente Proposición que modifica el artículo 184.



La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna:

Sí, están avaladas, la 174 Presidente simplemente cambia el nombre del artículo, dejando distintas clases de documentos, que facilita la comprensión del artículo, el artículo 184 completa el nombre poniendo instrumento público defectuoso, con eso Presidente, las 2 se pueden votar.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Jonathan Ferney Pulido Hernández:

Pues Presidente, con el ánimo de avanzar y darle celeridad, no quiero ser redundante son 2 artículos que se está modificando por cuestiones de forma, no, es más, gracias.

La Presidencia cierra la discusión del tercer bloque “Secciones Tercera del libro Segundo” que van del artículo 127 al 200. Los artículos 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,

159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 en el texto del pliego de modificaciones, el artículo 174 en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 152 formulada por el honorable Senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, los artículos 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 en el texto del pliego de modificaciones, el artículo 184 en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 153 formulado por el honorable Senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, los artículos 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 en el texto del pliego de modificaciones y abre la votación.

NOMBRE	VOTACIÓN	
	SÍ	NO
Amín Saleme Fabio Raúl	X	
Ávila Martínez Ariel Fernando	X	
Benedetti Martelo Jorge Enrique	X	
Blanco Álvarez Germán Alcides	X	
Cabal Molina María Fernanda	X	
Chacón Camargo Alejandro Carlos	X	
Chagüi Flórez Julio Elías	X	
De La Calle Lombana Humberto	X	
López Obregón Clara Eugenia	X	
Luna Sánchez David	X	
Motoa Solarte Carlos Fernando	X	
Pulido Hernández Jonathan Ferney	X	
Valencia Laserna Paloma Susana	X	
Total	13	00

La Presidencia cierra la votación y por Secretaría se informa el resultado:

Total, votos: 13

Por el Sí: 13

Por el No: 00

En consecuencia, ha sido aprobada el tercer bloque “Secciones Tercera del Libro Segundo” que van del artículo 127 al 200. Los artículos 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 en el texto del pliego de modificaciones, el artículo 174 en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 152, los artículos 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 en el texto del pliego de modificaciones, el artículo 184 en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 153, los artículos 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 en el texto del pliego de modificaciones.

La Presidencia abre la discusión del Bloque Cuarto “Secciones Cuarta, Quinta y Sexta del Libro Segundo” que van del artículo 201 al 254 y se han radicado las siguientes Proposiciones:

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura a la Proposición que modifica el artículo 213.

Bogotá, abril de 2024

Doctor:
H.S. GERMÁN ALCIDES BLANCO ALVAREZ
Presidente Comisión Primera Constitucional

Doctora:
YURY LINETH SIERRA TORRES
Secretaría Comisión Primera Constitucional Permanente

Cordial Saludo,

Respetuosamente me permito presentar **PROPOSICIÓN MODIFICATORIA** al inciso 2 del artículo 213 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 "Por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social", el cual quedará así:

Artículo 213. Emplazamiento del demandado y designación de curador ad litem:
(...)
Ahora bien, cuando el demandado no es hallado o se oculta para evadir la notificación; o no comparece en el término establecido en la comunicación de que trata el artículo 211 de este código, el juez le nombrará un curador ad litem, con quien se continuará el proceso, se le notificará el auto admisorio de la demanda, y se ordenará el emplazamiento del demandado, con la advertencia de habersele nombrado el curador.

JUSTIFICACIÓN

Proposición modificatoria. Se propone modificar la referencia del artículo 208 contemplada en el texto del apartado señalado, en la medida que, la regla contenida en el artículo 208 pasó a establecerse en el artículo 211, por reorganización de la numeración en el Informe para primer debate.

Atentamente,

JONATHAN PULIDO HERNÁNDEZ
SENADOR

#154
10-04-24
10:17

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna:

Sí, está avalada Presidente, es la modificación del artículo 213 simplemente en un tema formal y es que el artículo se refería al artículo 208, pero por las modificaciones del proyecto corresponde a las 211, gracias Presidente.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura a la Proposición que modifica el artículo 225.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA | **CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE**
Senador de la República
Comisión Primera

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA #155

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 al 115 de la Ley 5 de 1992, respetuosamente, presento ante la Comisión Primera del Senado de la República la siguiente proposición frente al inciso 1 del artículo 225 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social", el cual quedará así:

Artículo 225. Desistimiento de ciertos actos procesales. Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. Las partes podrán desistir de las pruebas no practicadas que hubieren solicitado. No podrán desistir de las pruebas ya practicadas. Excepto cuando en el marco del trámite de la tacha se termine cuando quien aportó el documento desista de invocarlo como prueba.

CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE
SENADOR DE LA REPUBLICA

10-04-24
9:57

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna:

Esta es una modificación al 225 Presidente, donde el Senador Mota hace explícito que las partes pueden desistir de todas las pruebas mientras no se hayan practicado y hace una excepción que básicamente es en el trámite de tacha cuando quien ha aportado el documento decida no hacerlo prevalecer durante el proceso, Presidente gracias.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Avalada, perfecto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Carlos Fernando Mota Solarte:

No Presidente, en 1 minuto agradeciéndole a los ponentes y a los autores el tener en cuenta un número considerable de Proposiciones y en esta particularmente del 225, como bien lo señalaba la coordinadora ponente Paloma Valencia, buscamos digamos coadyuvar a la descongestión judicial teniendo en cuenta las que establece el Código General del Proceso y como yo le había dicho a la Senadora Paloma Valencia, es que puedan no requerirse o desistir de ciertas pruebas que la parte solicitante estime que ya no son necesarias, me parece que esto coadyuva a lo que busca como principio también este proyecto de ley y es la celeridad en los procesos laborales, gracias Presidente.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura a la Proposición que modifica el artículo 227.

CONSEJO DE ESTADO | **JORGE BENEDETTI**

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA #156

Modifíquese el inciso 2° del artículo 227 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social", el cual quedará así:

~~Con excepción de las excepciones~~ los que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja. Tampoco será procedente el recurso de reposición contra el auto que decide el recurso, salvo que contenga puntos novedosos.

Atentamente,

JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO
Senador de la República

JUSTIFICACIÓN

Consultada la Intención de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, se encontró que tenían por propósito eliminar el recurso de súplica del proceso laboral. Por tanto, se suprime la referencia a este medio de impugnación. Además, se modifica la redacción de la parte inicial del inciso.

Y S R.
10/04/24
9:45am

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna:

Esta es una Proposición Presidente donde el Senador Benedetti con toda la razón, dice que tenemos que eliminar la súplica, toda vez que la súplica no cabe en el derecho laboral y por lo tanto, se elimina simplemente eso, dejando claro cuáles son los actos judiciales que no son susceptibles de un recurso de reposición, entonces quedarían la apelación o la queja.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Está avalada entonces. Senador Jorge Benedetti sobre su Proposición avalada, si considera argumento adicional al de la ponente.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Jorge Enrique Benedetti Martelo:

No Presidente, yo creo que estamos muy bien representados bajo la argumentación de la Senadora Paloma.

La Presidencia cierra la discusión del Bloque Cuarto “Secciones Cuarta, Quinta y Sexta del Libro Segundo” que van del artículo 201 al 254. **Los artículos 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212** en el texto del pliego de modificaciones, **el artículo 213** en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 154 formulada por el honorable Senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, **los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224**, en el texto del pliego de modificaciones, **el artículo 225** en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 155 formulada por el honorable Senador Carlos Fernando Mota Solarte, **el artículo 226** en el texto del pliego de modificaciones, **el artículo 227** en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 156 formulada por el honorable Senador Jorge Enrique Benedetti Martelo, **los artículos 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254** en el texto del pliego de modificaciones y abre la votación.

NOMBRE	VOTACIÓN	
	SÍ	NO
Amín Saleme Fabio Raúl	X	
Ávila Martínez Ariel Fernando	X	
Benedetti Martelo Jorge Enrique	X	
Blanco Álvarez Germán Alcides	X	
Cabal Molina María Fernanda	X	
Chacón Camargo Alejandro Carlos	X	
Chagüí Flórez Julio Elías	X	
De La Calle Lombana Humberto	X	
López Obregón Clara Eugenia	X	
Luna Sánchez David	X	
Mota Solarte Carlos Fernando	X	
Pulido Hernández Jonathan Ferney	X	
Valencia Laserna Paloma Susana	X	
Total	13	00

La Presidencia cierra la votación y por Secretaria se informa el resultado:

Total, votos: 13
Por el Sí: 13
Por el No: 00

En consecuencia, ha sido aprobado el Bloque Cuarto “Secciones Cuarta, Quinta y Sexta del Libro Segundo” que van del artículo 201 al 254. **Los artículos 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212** en el texto del pliego de modificaciones, **el artículo 213** en el texto del

pliego con la modificación de la Proposición número 154, **los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224**, en el texto del pliego de modificaciones, **el artículo 225** en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 155, **el artículo 226** en el texto del pliego de modificaciones, **el artículo 227** en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 156, **los artículos 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254** en el texto del pliego de modificaciones.


La Presidencia abre la discusión el Bloque Quinto “Libro Tercero” que van del artículo 255 al 328 y se han radicado 5 Proposiciones y una Proposición retirada.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Doctora Clara López en el artículo 315 aparece como retirada su Proposición, para que quede en el acta.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Clara Eugenia López Obregón:

Efectivamente señor Presidente, la dejo como constancia.



3

CLARA LÓPEZ OBREGÓN
SENADORA

Retirada

PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN

Modifíquese el artículo 315 del Proyecto de ley 051 de 2023 “Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social” el cual quedará así

Artículo 315°. Protección de los Derechos Sindicales.

1. Los trabajadores y las organizaciones de trabajadores podrán acudir ante el juez del trabajo del lugar en el que ocurrieron los hechos, a fin de obtener protección judicial frente a conductas antisindicales, para lo cual se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 292 a 300 para los fueros especiales.
2. En la demanda, quien alegue ser víctima de conductas antisindicales deberá indicar lo que pretende, los hechos que sirven de fundamento a sus pretensiones, la identificación del empleador y/o personas acusadas de tales conductas y la dirección electrónica o canal digital de su notificación o en su defecto el lugar de su domicilio, y las pruebas que pretenden hacer valer.

PARÁGRAFO 1. Cuando el juez lo considere necesario y urgente, podrá, de oficio o a petición de parte, decretar como medida cautelar la cesación de las acciones u omisiones que afecten los derechos sindicales.

PARÁGRAFO 2. Los jueces que conozcan de este procedimiento sumario disponen de amplias facultades para proteger los derechos y libertades sindicales de los trabajadores y de sus organizaciones. En consecuencia, podrán adoptar cualquier medida que consideren pertinente para su efectiva protección; además deberán imponer una multa entre 1 y 100 smlmv a las personas naturales que realicen, promuevan, instiguen o asesoren tales conductas, sin perjuicio de las sanciones que podrá imponer el Ministerio del Trabajo al empleador que incurra en conductas antisindicales y de las penales o disciplinarias a que haya lugar.

PARÁGRAFO 3. La persona que incumpliere la orden de un juez proferida con base en este procedimiento incurrirá en desacato sancionable en la forma prevista en los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.

PARÁGRAFO 4. La desatención de los términos aquí previstos hará incurrir al juez en causal de mala conducta.


[Signature]

CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN
Senadora de la República
Pacto Histórico

[Signature]

Carlos A. Benavides

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura a la Proposición que modifica el artículo 293.



HUMBERTO DE LA CALLE
SENADOR

Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social"

Proposición #159

Modifíquese el artículo 293 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social", el cual quedará así:


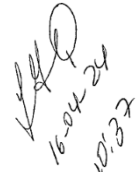
Artículo 293. Demanda del trabajador. El trabajador que hubiere sido despedido o desmejorado en sus condiciones de trabajo o trasladado sin justa causa previamente calificada por el juez laboral, podrá demandar el amparo del fuero sindical.

Con la certificación de inscripción en el registro sindical o la comunicación al empleador de la elección, se presume la existencia del fuero del demandante.


Esta acción también será procedente cuando se trate de demandas en las que se solicite el reintegro por ~~para~~ el fuero circunstancial de que trata el Artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

Justificación

Se requiere claridad al señalar que el proceso especial solo opera para la solicitud de reintegro por fuero circunstancial, ya que la terminación del contrato existiendo fuero circunstancial no requiere de autorización previa y una lectura ambigua supondría una grave congestión en materia judicial por el número de autorizaciones que se requeriría tramitar.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura a la Proposición que modifica el artículo 302.



HUMBERTO DE LA CALLE
SENADOR

Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social"

Proposición #160

Modifíquese el último inciso del artículo 302 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social", el cual quedará así:

Artículo 302. Calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo.



(...)

El término de prescripción, que será de (2) meses, comenzará a transcurrir desde la ocurrencia de la causal o causales que soporten la pretensión de declaratoria de legalidad del cese o paro colectivo de actividades ~~en que se levante el acta de constatación del cese de actividades. Si se levantara más de una, el plazo prescriptivo correrá desde la primera:~~

Justificación

Las condiciones de prescripción que trae el proyecto resultan inconvenientes y hacen nugatoria la posibilidad de demandar la ilegalidad del cese de actividades, por las siguientes razones:

1. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha resaltado que la constatación del cese de actividades por parte del Ministerio de Trabajo no es una prueba solemne acerca de la existencia de un cese de actividades, el cual puede ser acreditado por cualquier medio probatorio.
2. En muchos casos, el Ministerio de Trabajo no concurre a verificar el cese de actividades o lo hace cuando el cese ya se ha levantado, lo que en la práctica impediría contar el término de prescripción señalado en el proyecto.
3. De conformidad con el artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, la huelga puede extenderse por 60 días calendario y a partir de ese momento pueden operar mecanismos de composición con participación del Ministerio de Trabajo, de manera que la huelga puede terminar prorrogándose. Pero pueden ocurrir hechos que den lugar a la declaratoria de ilegalidad de huelga después del día 60 desde la constatación del cese de actividades y en ese evento el empleador no podría presentar la demanda porque, precisamente, habrían transcurrido más de 2 meses desde la fecha de verificación del cese.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna:

Presidente, la del 293 me parece que es muy clara porque mejora la redacción y deja claro, aquí frente a la del 302 la vamos a aprobar doctor Humberto, pero le propondría que la revisemos, porque cuando

estamos cambiando una fecha cierta y precisa como el acta, por una fecha que va a merecer la discusión de las partes como la ocurrencia de la causal o causales que soportan la pretensión, podemos ampliar el proceso en términos de que se nos distienda la discusión sobre cuál es la fecha cierta, entonces pues yo lo invitaría a que miráramos el tema para la ponencia doctor Humberto, porque lo que siento ahí es que estamos cambiando una fecha cierta, como la fecha en la que se levanta el acta frente a la fecha de la ocurrencia de la causal, si se trata pues de evento sucesivos o de eventos indeterminados, puede volverse una fecha difícil de precisar.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Bien, recordarle a los Senadores y a los asistentes que estamos siendo televisados por el Canal Institucional, este proyecto reviste una muy gran importancia en muchos aspectos de la vida de los colombianos, en el litigio, en las empresas, en lo laboral, en los juzgados, etc. y quiero resaltar la presencia acá del abogado Wbeimar Cano, que es un abogado especialista en litigio y que ha querido participar acá presencial y vino desde la ciudad de Medellín a eso, yo le he hecho la invitación, muchas gracias Wbeimar Cano por estar acá.

Senadora, perdóneme Senadora, lo que pasa es que estamos en la discusión de 2 Proposiciones, el autor interviene e inmediatamente le doy el uso la palabra.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Humberto De la Calle Lombana:

No, para decirlo de manera sencilla, mil gracias a la Senadora Paloma Valencia y estoy de acuerdo en que la aprobemos y con apertura mental la revisemos en el momento oportuno.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora María Fernanda Cabal Molina:

Sí, es que nosotros hemos venido revisando una a una y nos parece de todas maneras muy peligroso que al usted aplicar un fuero por demandar se vuelva un incentivo perverso y se convierte en recurrente esa conducta.

Entonces yo quiero que analicemos cuál es el efecto de eso, o sea, yo sé que la Corte aprobó la Proposición, esto sigue a la discusión en Plenaria, pero usualmente en muchas ocasiones cuando siempre hay una inclinación, perfecto, no, es que creo que es la fecha y yo estoy con una que ustedes avalaron también del Senador De la Calle, ok, perdón.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Bien, vamos a verificar el quórum porque la importancia de este proyecto nos permite no cometer errores en el trámite legislativo, no obstante, estemos haciendo votaciones nominales, esta Comisión está integrada por 21 miembros incluido, se deben tomar

decisiones por mayoría, obviamente 11 son más que 10, pero necesitamos que quede claro, porque hay inquietudes de algunos Senadores.

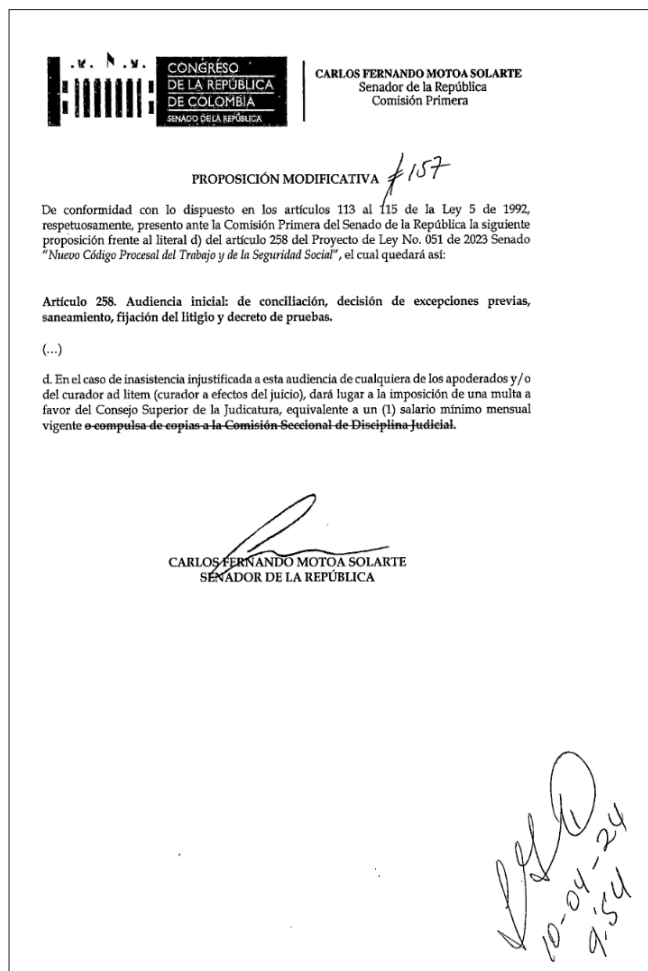
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador David Luna Sánchez:

Presidente gracias, no, es que quiero felicitarlo y agradecerle a usted porque creo que el trámite de este muy importante proyecto ha sido expedito, hemos avanzado de una manera muy importante y también no lo pude hacer antes y quería expresarlo ahora, agradecerle a la doctora Clara López haber permitido que algunas de sus proposiciones pudiesen ser dejadas como constancia, otras no y lo propio a los colegas, creo que eso es muy valioso, pero no dejar de decir que entonces la discusión, que todavía nos falta y para segundo debate va a ser interesante, porque claro que tenemos unos temas valiosos, quería simplemente señalar eso Presidente, agradeciéndole mucho el uso de la palabra.

La Presidencia solicita a la Secretaria verificar el quórum.

La Secretaria informa que se ha registrado quórum decisorio, con el registro de catorce (14) Senadores y Senadoras.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura a la Proposición que modifica el artículo 258 formulada por el honorable Senador Carlos Fernando Moota Solarte.



La Presidencia interviene para un punto de orden:

Senadora Paloma Valencia ¿la Proposición en el artículo 258 del Senador Moota tiene respaldo?

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna:

Sí, está avalada, el 258 simplemente lo que hace es eliminar, aquí lo que debería era la opción del juez para escoger si le ponía una multa pecuniaria o si lo mandaba con copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, lo que hace el Senador Moota es reducir las sanciones para que sea directamente la sanción pecuniaria, lo que nos parece apropiado Presidente, por eso está avalada.

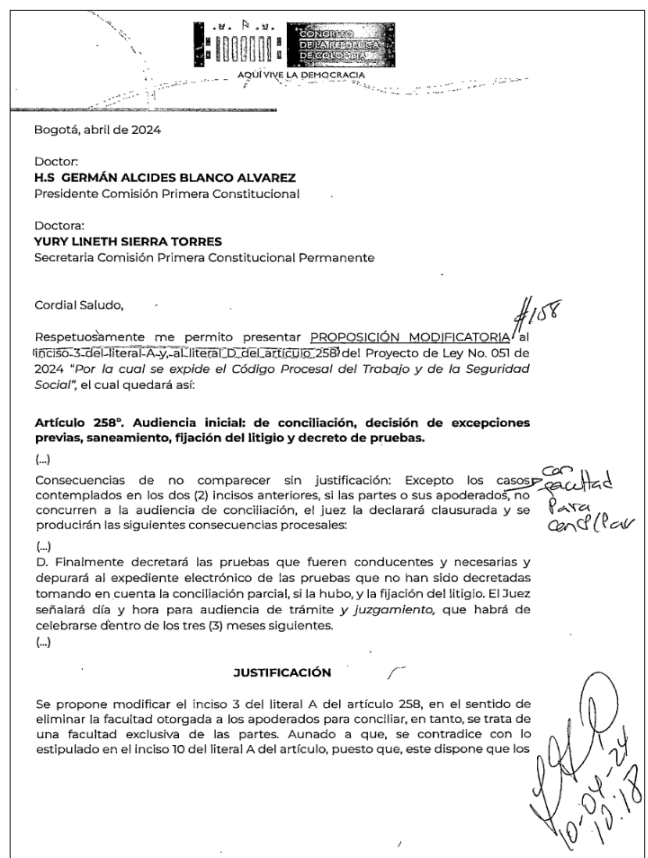
La Presidencia interviene para un punto de orden:

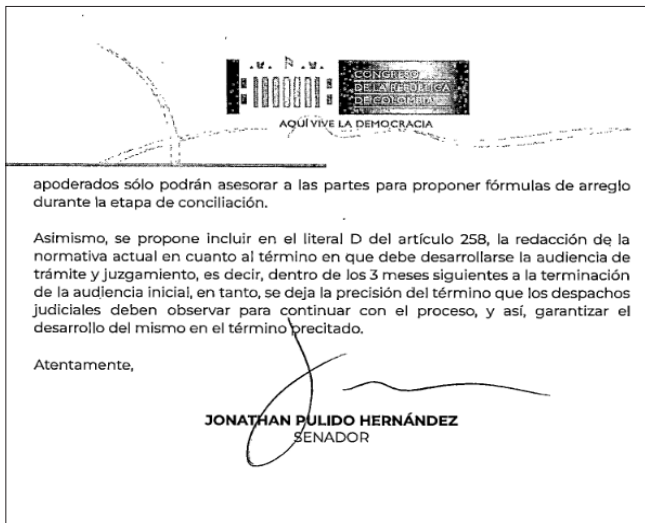
Senador Moota sobre su Proposición avalada, Carlos Fernando sobre su Proposición avalada.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Carlos Fernando Moota Solarte:

Presidente lo ha explicado muy bien la Senadora Paloma Valencia, pero me parece importante precisar que en el texto inicialmente presentado se da una alternativa al juez de conocimiento de establecer o una multa o inasistencia de apoderados o de curador ad litem o como bien lo decía la Senadora Paloma Valencia, una compulsas de copias al Consejo Seccional de Disciplina Judicial para iniciar una investigación, se le daba esa alternativa al juez, nos parece que la precisión debe ser o este tipo de sanciones deben ser lo más preciso posible y sugerimos que se establezca únicamente la posibilidad de la multa por inasistencia de las diferentes audiencias. Esa es la explicación sucinta de este artículo, Presidente.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura a la Proposición que modifica el artículo 258 formulada por el honorable Senador Jonathan Ferney Pulido Hernández.





La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna:

Sobre el artículo 258 el Senador Jota Pe traía 2 modificaciones, una donde se eliminaba la palabra facultades para conciliar, sin embargo, hablando con la señora Presidenta se consideró que es mejor mantener esas facultades, toda vez que no todos los apoderados tienen facultades para conciliar y si usted realizará una audiencia de conciliación donde llega un apoderado que no tiene facultades, pues carecería de sentido.

Lo segundo, es muy importante el aporte que hace el Senador Jota Pe, que es poner un término máximo de 3 meses para que el juez fije el día y la hora de la audiencia para el trámite y juzgamiento.

De manera que, en estos términos la Proposición queda avalada, Presidente.

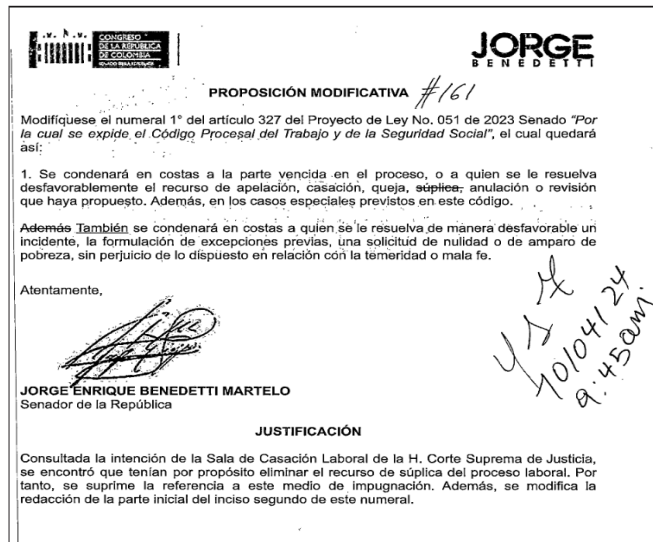
La Presidencia interviene para un punto de orden:

Senador Jota Pe ¿tiene para agregar? sobre el artículo 258 ha sido avalada su Proposición, sí, avalada.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Jonathan Ferney Pulido Hernández.

Muy bien, de acuerdo Presidente.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura a la Proposición que modifica el artículo 327.



La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna:

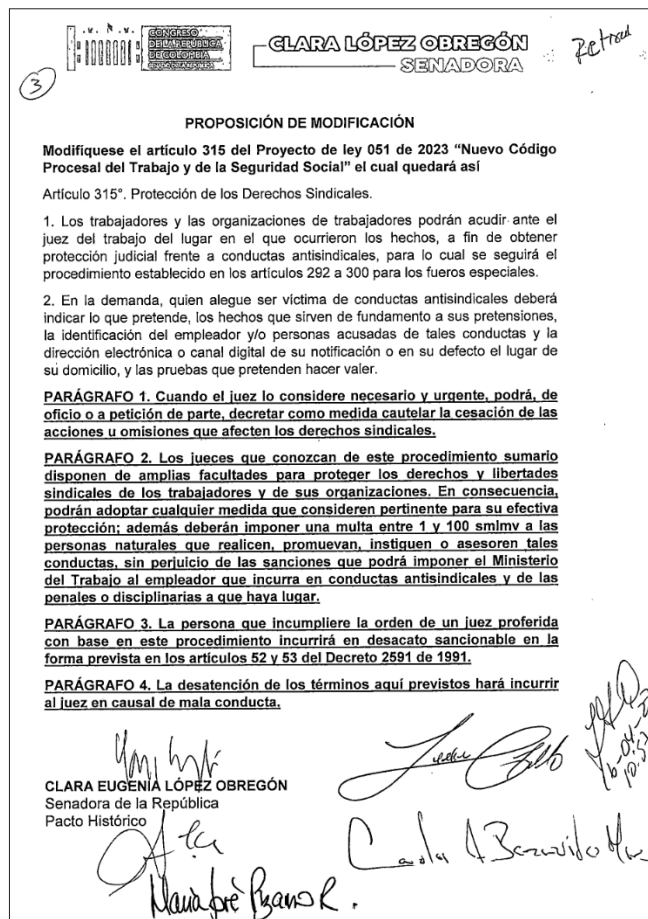
La Proposición del 327 del Senador Benedetti ha sido avalada, toda vez que elimina la palabra súplica, como hemos explicado, en el derecho laboral no procede y transforma la palabra además por también dándole una mayor coherencia y facilidad de lectura del artículo, gracias Presidente.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Bien, Senadora Clara López en el artículo 315 aparece una Proposición y dice estar retirada por usted, que es la autora ¿es cierto? para que quede en el acta.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Clara Eugenia López Obregón:

Sí señor Presidente, he convenido retirarla para que quede como constancia, muchas gracias.



La Presidencia cierra la discusión del Bloque Quinto "Libro Tercero" que van del artículo 255 al 328. Los artículos 255, 256, 257 en el texto del pliego de modificaciones, el artículo 258 en el texto del pliego con las modificaciones de la Proposición número 157 formulada por el honorable Senador Carlos Fernando Motoa Solarte y la Proposición número 158 formulada por el honorable Senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, los artículos 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 en el texto del pliego de modificaciones, el artículo 293 en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 159 formulada por el honorable Senador Humberto de

la Calle Lombana. **Los artículos 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301**, en el texto del pliego de modificaciones, **el artículo 302** en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 160 formulada por el honorable Senador Humberto De la Calle Lombana. **Los artículos 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326** en el texto del pliego de modificaciones, **el artículo 327** en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 161 formulada por el honorable Senador Jorge Enrique Benedetti Martelo, **el artículo 328** en el texto del pliego de modificaciones y abre la votación.

NOMBRE	VOTACIÓN	
	SÍ	NO
Amin Saleme Fabio Raúl	X	
Ávila Martínez Ariel Fernando	X	
Barreto Quiroga Óscar	X	
Benavides Mora Carlos Alberto	X	
Benedetti Martelo Jorge Enrique	X	
Blanco Álvarez Germán Alcides	X	
Chacón Camargo Alejandro Carlos	X	
Chagüí Flórez Julio Elías	X	
De La Calle Lombana Humberto	X	
López Obregón Clara Eugenia	X	
Luna Sánchez David	X	
Motoa Solarte Carlos Fernando	X	
Pulido Hernández Jonathan Ferney	X	
Valencia Laserna Paloma Susana	X	
Total	14	00

La Presidencia cierra la votación y por Secretaria se informa el resultado:

Total, votos: 14


Por el Sí: 14

Por el No: 00

En consecuencia, ha sido aprobado el Bloque Quinto “Libro Tercero” que van del artículo 255 al 328. **Los artículos 255, 256, 257** en el texto del pliego de modificaciones, **el artículo 258** en el texto del pliego con las modificaciones de la Proposición número 157 y la Proposición número 158, **los artículos 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292** en el texto del pliego de modificaciones, **el artículo 293** en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 159. **Los artículos 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301**, en el texto del pliego de modificaciones, **el artículo 302** en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 160. **Los artículos 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326** en el texto del pliego de modificaciones, **el artículo 327** en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 161, **el artículo 328** en el texto del pliego de modificaciones.

La Presidencia abre la discusión el Bloque Sexto que son los artículos 18, 329, 330 y 331 y abre la discusión del artículo 18 del Bloque Primero el cual no se había votado.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura a la Proposición que modifica el artículo 18



CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENADO DE LA REPÚBLICA

CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE
Senador de la República
Comisión Primera

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA #162

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 al 115 de la Ley 5 de 1992, respetuosamente, presento ante la Comisión Primera del Senado de la República la siguiente proposición frente al artículo 18 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado “Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”, el cual quedará así:

Artículo 18. Intervención del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

A) El Ministerio Público podrá intervenir en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción del trabajo y de la seguridad social, en defensa del orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y derechos fundamentales, individuales o colectivos, de los trabajadores o pensionados o de las minorías étnicas.

Dicha intervención, podrá realizarse a solicitud de las partes intervinientes, o cuando se evidencien posibles vulneraciones de los bienes jurídicos de que trata el numeral 7o del Artículo 277 de la Constitución Política. El Ministerio Público intervendrá como sujeto procesal especial con amplias facultades, entre ellas la de interponer recursos, emitir conceptos, solicitar nulidades, pedir, aportar y controvertir pruebas, entre otras garantías, facultades, oportunidades y recursos de las partes. Para tal efecto, tendrá las mismas garantías, facultades, oportunidades y recursos de las partes, salvo los que impliquen disposición del derecho debatido.

La actuación del Ministerio Público deberá sujetarse conforme a los parámetros y principios que gobiernan el proceso laboral y de la seguridad social. Para tal efecto, podrá intervenir en los términos señalados en la ley, a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o de la notificación de la providencia por medio de la cual se le vincule al proceso.

Los delegados del Ministerio Público, asumen su intervención en el proceso, en el estado que aquel se encuentre sin que sea posible retrotraer etapas o actuaciones.

B) La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como Unidad Administrativa Especial, podrá intervenir, en la etapa procesal que estime pertinente, con amplias facultades legales en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción del trabajo y de la seguridad social, en cuyos asuntos funjan como parte demandante o demandada, la Nación o los organismos y entidades públicas del orden nacional.

f. Quintero

10-04-24
11:55

CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE
SENADOR DE LA REPÚBLICA

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna:

Presidente nosotros creemos que es artículo muy importante en la participación del Ministerio Público, todos estamos totalmente de acuerdo con eso, lo que no hemos logrado es a una redacción que nos convenza a todos, el compromiso sería que con el Senador Motoa busquemos una redacción que quede acorde, con la señora Presidenta de la Sala, para que podamos tener total claridad en cómo queda, porque aquí hay varias cosas.

Primero, la facultad del Ministerio Público a intervenir, lo segundo, que intervendrá como un sujeto procesal especial, es decir, como una parte, el tercer elemento es que puede aparecer o no aparecer y eso no dificulta el trámite y, por lo tanto, si no ha aparecido pues no puede retrotraer el proceso en el momento donde aparezca.

Entonces creemos que con esos 3 elementos podemos hacer una redacción que nos permitiría estar de acuerdo con todos, entonces Presidente yo le pediría al Senador Motoa si nos la puede dejar como constancia, con el compromiso de que, con ayuda de los honorables Magistrados, el Senador Motoa y los ponentes, podemos construir una Proposición que incluya estos 3 elementos, Presidente.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la doctora Marjorie Zúñiga Romero – Presidenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

Gracias Presidente, coadyuvamos la petición de la Senadora Paloma Valencia y le pedimos al Senador que nos permita llegar a un entendimiento sobre la redacción de este artículo.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Carlos Fernando Motoa Solarte:

Presidente venía en un cortísimo periodo de fortuna, la mayoría de proposiciones aceptadas, conciliadas, el consenso y un proyecto de ley de decenas de artículos para ser votado en una única sesión, una capacidad de productividad interesante de esta Comisión, pero sí quería Presidente, permítame justificar el porqué de la Proposición modificativa que he presentado.

Y debo decir que lo primero, es precisar que el Ministerio Público no es una parte dentro del proceso cualquiera que se adelante, en cualquiera de las jurisdicciones, aquí queremos incluir que sea un sujeto especial, como puede ser considerado en las normas generales del proceso, pero además de ello y esto me parece muy relevante que lo tenga en cuenta la Comisión Primera, estamos hablando de la Comisión Constitucional, es precisamente el artículo que establece las competencias de la Procuraduría y sus delegados.

Y el artículo 277 la Carta Política, el numeral séptimo establece, me permito leerlo:

Le corresponde al Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos o garantías fundamentales.

A mí sí me parece que como está concebido en el artículo 18 en el informe de ponencia, pues desconoce en mi criterio o limita mejor, este principio constitucional, por eso insisto en la necesidad de que este artículo sea tenido en cuenta y aprobada la modificación que he propuesto que, entre otras cosas, el Ministerio Público no persigue ningún interés personal o directo, está propendiendo por el interés general.

Yo debo Senadora Clara López, usted que hace alguna mofa de mi intervención, reconocer o recordar mejor, lo que mencionaba un procesalista importante, además de jurista filósofo Francesco Carnelutti, que decía que las partes actúan en un proceso por interés, el Ministerio Público actúa por deber.

Con esas consideraciones, además de también pretender modificar la intervención del Ministerio Público a partir de la notificación del proceso, es que, si considero que aquí se están limitando, con todo respeto lo digo, garantías que establece el

Código General del Proceso y que, en esta norma en particular, pues no se tienen en cuenta.

Con estos argumentos Presidente, muy generales, para no entrar a una discusión de fondo, si queremos la podemos dar, pues sí me parece que este artículo con esas 2 modificaciones es de la mayor importancia.

Yo quisiera que se votara en esta misma sesión y que si la digamos redacción no es la apropiada, pues hiciéramos las mesas de trabajo para corregirla en el informe de ponencia para segundo debate, pero tener en cuenta estos argumentos y que ojalá pudiera contar con la sororidad de los integrantes de la Comisión Primera, Presidente.

Por lo tanto, no estaría yo, no podría ser un tema tan importante dejarlo como constancia y si quisiera que se votara, entre otras cosas, para no desconocer esos principios de consecutividad, de identidad relativa que la Corte Constitucional ha sido tan no, no, no solamente reiterada, sino varía sus conceptos, a veces dice que si lo deja como constancia no se puede retomar en el segundo debate, otra vez dice que tiene que votarse y discutirse en la misma sesión y votarse y ahí sí retomarse, entonces para la buena salud de esta Proposición quisiera que se votara, señor Presidente.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Bien, usted es el autor señor Senador y como tal su voluntad es la que debemos acatar, en consideración entonces la Proposición que ya fue leída por la señora Secretaria, que no tiene el aval de los ponentes y que fue suscrita por el Senador Carlos Fernando Motoa, se abre la discusión.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna:

Yo le propondría al Senador Motoa, por lo menos retire la segunda parte, que es la que más nos complica para podérsela votar Presidente y es si la Secretaria nos ayuda a leerla, simplemente eliminando el pedazo que se elimina: que los delegados del Ministerio Público asumen su intervención en el proceso en el estado en que aquel se encuentre sin que sea posible retrotraer etapas o actuaciones.


Creemos que eso es muy importante, porque entonces imagínense lo que significaría un proceso que ya llevé 3 años, llega el Ministerio Público y toca devolverlo, por supuesto, aquí estamos dejando que si el Ministerio Público encuentra una nulidad pues la puede actuar y retrotraería el proceso de acuerdo a la nulidad, querido Senador, le rogaríamos eliminar ese pedazo para poderlo acompañar en la votación.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Carlos Fernando Motoa Solarte:

Presidente, en ánimo de seguir construyendo colectivamente esta iniciativa, acepto la sugerencia de la Senadora Paloma Valencia, de la segunda parte de la Proposición que pretende modificar en lo que

requiera la notificación del Ministerio Público, pues estaría de acuerdo, eso no significa que descarte o que quede eliminada cualquier discusión en el futuro, pero me parece que el ánimo constructivo de esta Comisión pues debe mantenerse y no va a ser yo quien vulnere ese principio de unidad de concertación que hoy ha reinado en la Comisión Primera.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Carlos Fernando Mota la cual deja como constancia la siguiente Proposición.




CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE
Senador de la República
Comisión Primera

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA


De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 al 115 de la Ley 5 de 1992, respetuosamente, presento ante la Comisión Primera del Senado de la República la siguiente proposición frente al artículo 329 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social", el cual quedará así:

Artículo 329°. Analogía. A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas laborales y de la seguridad social y, en su defecto, las del régimen procesal común, con la necesaria adaptación a las particularidades del proceso del trabajo y la seguridad social.



CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE
SENADOR DE LA REPÚBLICA

JUSTIFICACIÓN




La Presidencia interviene para un punto de orden:

Senador Carlos Fernando Mota en el artículo 329 hay una Proposición que se manifiesta se deja como constancia, de su autoría, para que usted lo mencione.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Carlos Fernando Mota Solarte:

Sí Presidente, confirmo lo que usted ha mencionado, lo que corresponde al artículo 329, lo dejo como constancia Presidente.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura a la siguiente Proposición al artículo 331.




PROPOSICIÓN #163


Modifíquese el artículo 331 del Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social", el cual quedara así:

Artículo 331°. Derogatoria. Deróguense todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente el Decreto Ley 2158 de 1948 sobre los procedimientos en los juicios del trabajo, adoptado como legislación permanente mediante la Ley 141 de 1961, así como el numeral 2 del artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 52 de la Ley 50 de 1990, el artículo 62 del Decreto ley 528 de 1964 en lo relativo a la materia laboral, el artículo 23 de la Ley 16 de 1968, modificado por el artículo 7° de la Ley 16 de 1969, la Ley 712 de 2001, el último inciso del artículo 13 de la ley 1010 de 2006; la Ley 1149 de 2007, los artículos 3° y 4° de la Ley 1210 de 2008, los artículos 46 y 49 de la Ley 1395 de 2010 y el artículo 622 del Código General del Proceso.


Cordialmente,




GERMÁN BLANCO ÁLVAREZ
Senador de la República
Coordinadora Ponente



PALOMA VALENCIA LASERNA
Senadora de la República
Coordinadora Ponente



ALEJANDRO CARLOS CHACÓN
Senador de la República
Coordinador Ponente



La Presidencia interviene para un punto de orden:

Senadora Paloma Valencia – Coordinadora ponente, Proposición firmada por los ponentes artículo 331 ¿aval?

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna:

Sí Presidente, esta Proposición está avalada, estamos incorporando el numeral 2 del artículo 380, que eran básicamente las multas, se precisa que es en lo relativo a materia laboral, para no incluir la materia penal y civil que estaban incluidas y se incorpora el tema de las sanciones a los sindicatos que había sido eliminado, pero que debe quedar incorporado, así mismo el procedimiento para la imposición de esas sanciones. El otro pedazo que se elimina, se eliminó porque ya fue incorporado dentro del texto total del proyecto.

Entonces con esto creemos que arreglamos algunas derogatorias que no habían quedado precisas, Presidente.

La Presidencia cierra la discusión del artículo 18 del bloque primero en el texto del pliego de modificaciones con la modificación de la Proposición número 162 formulada por el honorable Senador Carlos Fernando Mota Solarte, los artículos 329, 330 en el texto del pliego de modificaciones, el artículo 331 en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 163 formulada por los honorable Senadores Germán Blanco Álvarez, Paloma Valencia Laserna y Alejandro Carlos Chacón Camargo y abre la votación.

NOMBRE	VOTACIÓN	
	SÍ	NO
Amin Saleme Fabio Raúl	X	
Barreto Quiroga Óscar	X	
Benavides Mora Carlos Alberto	X	
Benedetti Martelo Jorge Enrique	X	
Blanco Álvarez Germán Alcides	X	
Cabal Molina María Fernanda	X	
Chacón Camargo Alejandro Carlos	X	
Chagüi Flórez Julio Elías	X	
López Obregón Clara Eugenia	X	
Luna Sánchez David	X	
Motoa Solarte Carlos Fernando	X	
Pulido Hernández Jonathan Ferney	X	
Valencia Laserna Paloma Susana	X	
Total	13	00

La Presidencia cierra la votación y por Secretaría se informa el resultado:

Total, votos: 13

Por el Sí: 13

Por el No: 00

En consecuencia, han sido aprobados el **artículo 18** del bloque primero en el texto del pliego de modificaciones con la modificación de la Proposición número 162, **los artículos 329, 330** en el texto del pliego de modificaciones, **el artículo 331** en el texto del pliego con la modificación de la Proposición número 163.

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Existen 2 Proposiciones de artículos nuevos, doctora Clara López, doctora Clara hay una Proposición de artículo nuevo de su autoría, acá se manifiesta que usted la retiró, pero debe quedar así la constancia en el acta.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Clara Eugenia López Obregón:

Efectivamente señor Presidente, he retirado la Proposición para que quede como constancia para la discusión de la ponencia de segundo debate.

CLARA LÓPEZ OBREGÓN
SENADORA

Pacto Histórico

PROPOSICIÓN DE ADICIÓN

Adiciónese un nuevo artículo al Proyecto de ley 051 de 2023 "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social" el cual quedará así

Artículo 315 A. Acción de titularidad sindical con efectos inter comunis

Las organizaciones sindicales podrán acudir ante los jueces del trabajo conforme al procedimiento establecido en los artículos 292 a 300 para los fueros especiales, a fin de que se declare con efectos sobre sus afiliados, las siguientes situaciones:

- Que la empresa incurre en prácticas de intermediación laboral ilegal y subcontratación ilegal.
- Que los trabajadores de la empresa que laboran en idénticas condiciones, tienen un contrato de trabajo y no un contrato comercial, civil o de índole no laboral.
- Que la empresa incurre en actos de discriminación por motivos de sexo, orientación o identidad sexual, origen racial o étnico, religión, convicción u opinión, discapacidad, estado seriológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, edad, actividades sindicales, expresión de género, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de las personas trabajadoras.
- El sentido y alcance de una norma convencional aplicable en la empresa
- Que el empleador desatiende o incobsera cualquier norma legal o convencional cuyo incumplimiento afecta a un grupo de trabajadores.

PARÁGRAFO 1º. En la sentencia, el juez señalará concretamente la orden que deberá cumplir la persona responsable, quien estará obligada a corregir de inmediato su conducta, práctica o interpretación.

PARÁGRAFO 2º. La persona que incumpliere la orden de un juez, proferida con base en este procedimiento, incurrirá en desacato sancionable en la forma prevista en los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991, sin perjuicio de las sanciones que podrá imponer el Ministerio del Trabajo.

Retirada


10-04-24
15:33

CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN
Senadora de la República
Pacto Histórico

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Carlos Fernando Motoa Solarte:

Presidente una explicación muy muy muy corta, este esta Proposición busca incluir como medio probatorio el careo, es un medio probatorio que está incluido en las normas del Código General del Proceso, por alguna razón no se incluye particularmente como medio probatorio en esta iniciativa, por eso la Proposición de incluirlo y quisiera escuchar a los autores y a la ponente, para saber cuál decisión tomar sobre esta Proposición.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura a la siguiente Proposición aun artículo nuevo.



CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA


CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE
Senador de la República
Comisión Primera

PROPOSICIÓN ADITIVA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 al 115 de la Ley 5 de 1992, respetuosamente, presento ante la Comisión Primera del Senado de la República la siguiente proposición frente al Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social":

Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social", el cual quedará así:

Artículo nuevo, CAREOS. El juez, si lo considera conveniente, podrá ordenar careos de las partes entre sí, de los testigos entre sí y de estos con las partes, cuando advierta contradicción.



CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE
SENADOR DE LA REPÚBLICA

Retirada

10-04-24

15:33

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la doctora Marjorie Zúñiga Romero – Presidenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

Gracias Presidente, Senador aunque pues puede parecer persuasiva el tema del careo, lo cierto es que en el derecho del trabajo no es algo a lo que estemos acostumbrados, además, en el derecho penal se eliminó, pero adicionalmente tenemos una particularidad que yo lo invito a que reflexionemos, el derecho laboral plantea una relación que no es equitativa entre empleador y trabajador, imagínese la desigualdad que hay entre esas 2 partes de la relación laboral, someter, por ejemplo, a un trabajador a un careo frente al empleador, no es estar en igualdad de condiciones.

Pero piénsese en otro tipo de procesos, imagínese en el del acoso, cuando yo me siento frente ahí a mi acosador, quizás eso no es tan útil para darle un


buen resultado al proceso, por eso nosotros no es una práctica y no lo contemplamos dentro de las pruebas que practicamos en el derecho del trabajo.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Carlos Fernando Motoa Solarte:

Presidente entiendo la razón y los argumentos de los autores del proyecto, sin embargo, precisamente por eso la importancia del Ministerio Público en esas actuaciones y por eso también la imparcialidad y el buen juicio del juez condecorador del caso de estudio, lo que sugeriría respetuosamente es si este medio probatorio tiene esos reparos y no es aplicado, no es tenido en cuenta en la jurisdicción laboral ¿por qué no eliminarlo de manera precisa y clara? y no dejar esa norma que hoy existe en el Código General del Proceso como medio probatorio.

No, pero es que en el proyecto no se contempla, se deja ese vacío y uno podría, por eso lo incluí, porque en el Código General del Proceso sí se incluye como medio probatorio, si no están y claro y este código reenvía en las normas generales al Código General del Proceso, si no les parece, si no es lo adecuado, pues eliminar ese medio probatorio, porque si no la duda que puedo tener yo la podría tener mañana en la aplicación cualquier operador judicial, simplemente para precisar, no quiero que se genere tampoco una discusión sobre este medio probatorio y salvo mejor criterio, pues yo sí creo que podría dejarlo como constancia, pero lo retomaría, lo retomaría para el texto en segundo debate.

El honorable Senador Carlos Fernando Motoa deja como constancia la siguiente Proposición para un artículo nuevo.



CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

SENADO DE LA REPÚBLICA


CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE
Senador de la República
Comisión Primera

PROPOSICIÓN ADITIVA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 al 115 de la Ley 5 de 1992, respetuosamente, presento ante la Comisión Primera del Senado de la República la siguiente proposición frente al Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social":

Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley No. 051 de 2023 Senado "Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social", el cual quedará así:

Artículo nuevo. CAREOS. El juez, si lo considera conveniente, podrá ordenar careos de las partes entre sí, de los testigos entre sí y de estos con las partes, cuando advierta contradicción.



CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE
SENADOR DE LA REPÚBLICA

Comisión

10-04-24

153

Atendiendo instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura al título del proyecto.

"POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

La Presidencia abre la discusión del título leído y cerrada esta, pregunta si cumplidos los trámites constitucionales y legales ¿quieren los honorable Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea ley de la República? y abre la votación.

NOMBRE	VOTACIÓN	
	SÍ	NO
Amín Saleme Fabio Raúl	X	
Barreto Quiroga Óscar	X	
Benavides Mora Carlos Alberto	X	
Benedetti Martelo Jorge Enrique	X	
Blanco Álvarez Germán Alcides	X	
Cabal Molina María Fernanda	X	
Chacón Camargo Alejandro Carlos	X	
Chagüí Flórez Julio Elías	X	
López Obregón Clara Eugenia	X	
Luna Sánchez David	X	
Pulido Hernández Jonathan Ferney	X	
Valencia Laserna Paloma Susana	X	
Total	12	00

La Presidencia cierra la votación y por Secretaría se informa el resultado:

Total, votos: 12

Por el Sí: 12

Por el No: 00

En consecuencia, ha sido aprobado el título y la pregunta de tránsito a la plenaria.

El texto aprobado es el siguiente:

TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN PRIMERA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO DE LEY N° 51 DE 2023 SENADO

"POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

**TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES**

ARTÍCULO 1°. APLICACIÓN DE ESTE CÓDIGO. Los asuntos de que conoce la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el presente Código y se regirán, entre otros, por los siguientes principios.

ARTÍCULO 2°. PRINCIPIO DE LIBERTAD. Los actos del proceso para los cuales las leyes o este código no prescriban una forma determinada, los realizará el Juez o dispondrá que se lleven a cabo, de manera adecuada al logro de su finalidad. En ningún caso el juez podrá acudir al principio de libertad cuando el acto procesal esté regulado legalmente.

<p>ARTÍCULO 3º. EL JUEZ DIRECTOR DEL PROCESO. El juez asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y celeridad en su trámite, atendiendo en todo caso, el enfoque diferencial de género.</p> <p>El juez en sus decisiones aplicará fórmulas de justicia retributiva, compensatoria, restaurativa y terapéutica, con el fin de concertar medidas de reparación y reconstrucción positiva de las relaciones.</p> <p>ARTÍCULO 4º. PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL. Las partes deberán comportarse con lealtad y probidad durante el proceso, y el Juez hará uso de sus poderes para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta o ineficaz del litigio.</p> <p>Cuando de los medios de prueba llegue al convencimiento de que cualquiera de las partes o ambas se sirven del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley, podrá admitir la intervención de terceros interesados.</p> <p>ARTÍCULO 5º. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. El juez practicará personalmente todas las pruebas, para lo cual podrá valerse de los medios digitales o físicos disponibles o de cualquier otra forma de comunicación que garantice la inmediatez, concentración y contradicción.</p> <p>Cuando no fuere posible practicar las pruebas o llevar a cabo determinados actos procesales directamente por el juez que conoce del proceso, se podrá comisionar a un juzgado con competencia en asuntos laborales para que se surta con su presencia e intervención.</p> <p>ARTÍCULO 6º. DEBER EXTRA Y ULTRA PETITA. El Juez deberá ordenar el pago de salarios, prestaciones, indemnizaciones, y demás derechos laborales distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con las fuentes formales del derecho.</p>	<p>Este deber será ejercido en segunda instancia, siempre y cuando se trate de derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, afiliado, pensionado o beneficiario y se cumplan las condiciones del inciso anterior.</p> <p style="text-align: center;">LIBRO PRIMERO SUJETOS PROCESALES</p> <p style="text-align: center;">SECCIÓN PRIMERA ÓRGANOS JUDICIALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA</p> <p style="text-align: center;">TÍTULO PRIMERO JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO I COMPETENCIA</p> <p>ARTÍCULO 7º. COMPETENCIA GENERAL. La Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social se ejercerá en los siguientes ámbitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Del trabajo. <ol style="list-style-type: none"> a) Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. Tratándose de controversias en las que se discuta el contrato de trabajo o la primacía de la realidad sobre la forma de vinculación, entre un trabajador oficial y una entidad pública, bastará el señalamiento de su existencia a efectos de radicar en el juez laboral la competencia. b) Los que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones derivados del trabajo humano cualquiera que sea la relación que los motive, exceptuando aquellas que se susciten respecto de personas jurídicas dedicadas a la prestación de servicios. c) Los asuntos sobre fuero de estabilidad laboral reforzada, cualquiera sea la naturaleza de la relación de trabajo. d) Los asuntos de acoso laboral, relativo a las formas de agresión, maltrato, trato desconsiderado y ofensivo y, en general, todo ultraje a la dignidad humana que se ejerza sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública. 2) De la seguridad social:
<p>Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, pensionados, los empleados públicos cuando la entidad que administra el sistema no sea pública o, en caso de serlo, cuyo conocimiento no corresponda a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; empleadores privados y las entidades administradoras o prestadoras, salvo las de responsabilidad médica y los relacionados con contratos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Superintendencia Nacional de Salud.</p> <p>3) Del derecho colectivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Los asuntos sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral. b) Los asuntos relativos a la suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación de la personería y del registro sindical de las agrupaciones sindicales. c) Los asuntos tendientes a garantizar la libertad sindical, así como las que se refieran al régimen jurídico de sindicatos y organizaciones de trabajadores o empresariales. d) La calificación de la ilegalidad de la suspensión, huelga o paro colectivo del trabajo; así como las acciones derivadas de esa declaración, tendientes a que el empleador obtenga la reparación de perjuicios que ese acto le hubiere causado. e) Los asuntos tendientes a la protección derivada del fuero circunstancial. <p>4) El recurso de anulación de laudos arbitrales en asuntos laborales.</p> <p>5) El recurso de revisión.</p> <p>6) La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo, del derecho de asociación sindical y del sistema de seguridad social integral y las que no correspondan a otra autoridad.</p> <p>ARTÍCULO 8º. EXCLUSIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES. La tramitación de los conflictos de intereses entre empleadores y trabajadores se continuará adelantando de acuerdo con las leyes especiales sobre la materia. En tratándose de conflictos colectivos, estos se solucionarán conforme al proceso de negociación previsto en el Código Sustantivo del Trabajo y en cuanto a los de carácter individual por acuerdo de las partes o los mecanismos alternativos establecidos en la ley.</p> <p>ARTÍCULO 9º. JURISDICCIÓN TERRITORIAL. La Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral ejerce su jurisdicción en todo el territorio nacional y tiene su sede en la capital de la República.</p>	<p>Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial la ejercen en el territorio donde tienen su jurisdicción.</p> <p>Los Jueces del Circuito la ejercen en el mismo territorio señalado por la ley.</p> <p>Los Jueces Laborales Municipales, quienes ejercen su jurisdicción en el respectivo municipio.</p> <p>PARÁGRAFO 1º. La jurisdicción territorial a que hace referencia el presente Artículo se ejercerá sin perjuicio de la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para todas las actuaciones, audiencias y diligencias. El cumplimiento de las funciones correspondientes podrá adelantarse en sedes virtuales y/o a través de las modalidades de trabajo en casa, con arreglo a las disposiciones que regulen la materia.</p> <p>PARÁGRAFO 2º. No obstante, la población rural, los grupos étnicos, las personas con discapacidad y las demás personas que tengan alguna dificultad para hacer uso de los medios digitales y la autoridad judicial competente, deberán manifestar las razones por las cuales no pueden realizar una actuación judicial específica a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de lo cual se dejará constancia en el expediente y se realizará de manera presencial.</p> <p>ARTÍCULO 10º. COMPETENCIA POR RAZÓN DEL LUGAR. La competencia se determina por el último lugar donde se haya prestado el servicio, o por el domicilio del demandado, a elección del demandante, sin tener en cuenta la calidad de las partes.</p> <p>En los lugares donde no haya juez laboral del circuito, o juez laboral municipal, conocerá de estos procesos el respectivo Juez del Circuito en lo Civil, o Promiscuo del Circuito con conocimiento laboral.</p> <p>Parágrafo. Los procesos que se promuevan a través de medios electrónicos y en formato digital, serán repartidos a cualquier juez laboral o tribunal del país de acuerdo con sus competencias y teniendo en cuenta el equilibrio de la carga de procesos de acuerdo con las estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura y los Consejos Seccionales de la Judicatura. Estos procesos se tramitarán por medios virtuales hasta su culminación. La</p>

<p>segunda instancia podrá ser sometida a las disposiciones de reparto del presente parágrafo. Este reparto nacional será reglamentado por el Consejo Superior de la Judicatura, dentro del año siguiente a la expedición de este Código.</p> <p>Lo dispuesto en el inciso anterior no es aplicable respecto de la población rural, los grupos étnicos, las personas con discapacidad y las demás personas que tengan alguna dificultad para hacer uso de los medios digitales. Para ello al momento de presentar la demanda, el demandante deberá manifestar las razones por las cuales no pueden actuar a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, caso en el cual se aplicará la competencia establecida en el inciso primero y segundo de este artículo, con un trámite presencial. En este caso, el proceso será remitido al juez laboral o al Tribunal competente que corresponda al domicilio del demandado.</p> <p>ARTÍCULO 11°. RECLAMACIÓN DE DERECHOS. Las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública, así como las Entidades del Sistema de Seguridad Social, podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa, sin que en ningún caso sea requisito de procedibilidad. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta.</p> <p>Cuando la reclamación se haga a través de medios virtuales, esta se entenderá presentada en el domicilio del iniciador.</p> <p>ARTÍCULO 12°. COMPETENCIA EN LOS PROCESOS EN DONDE SON PARTE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.</p> <p>A) En los procesos que se sigan en contra de las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral, será competente el Juez Laboral del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social demandada o el del lugar donde se haya surtido la reclamación del derecho, a elección del demandante.</p> <p>En los lugares donde no haya Juez Laboral conocerá de estos procesos el respectivo Juez del Circuito en lo Civil o Promiscuo.</p>	<p>En los eventos en que la reclamación se realice a través de canales digitales se tendrá surtida en el domicilio del iniciador del cual se hubiese remitido la petición.</p> <p>En caso de haberse presentado varias reclamaciones frente a un mismo asunto, se tendrá en cuenta la primera solicitud.</p> <p>B) En los procesos promovidos por las entidades del sistema de seguridad social, será competente el juez laboral del domicilio del demandado.</p> <p>ARTÍCULO 13°. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. Los jueces laborales municipales conocen en primera instancia de los procesos de mínima cuantía cuyo monto no exceda del equivalente a cuarenta (40) veces el salario mínimo legal mensual vigente.</p> <p>Los jueces laborales del circuito conocen en primera instancia de los procesos de mayor cuantía cuyo monto exceda del equivalente a cuarenta (40) veces el salario mínimo legal mensual vigente.</p> <p>En los lugares o municipios que no cuenten con jueces laborales del circuito, conocerán de estos asuntos, conforme a la cuantía que precede, los jueces civiles del circuito o promiscuos.</p> <p>La competencia por razón de cuantía se determina por el valor de las pretensiones al momento de la presentación de la demanda y no variará por el aumento en el trámite del proceso o el aumento en las condenas.</p> <p>ARTÍCULO 14°. COMPETENCIA EN ASUNTOS SIN CUANTÍA Y EN RAZÓN DE LA NATURALEZA DE LA PRETENSIÓN. De los asuntos que no sean susceptibles de fijación de cuantía, conocerán en primera instancia los Jueces Laborales del Circuito salvo disposición expresa en contrario.</p> <p>En los lugares donde no haya Juez Laboral del Circuito conocerá de estos procesos el respectivo juez civil o promiscuo del circuito.</p>
<p>Sin perjuicio de la cuantía será competencia del juez del circuito los procesos de naturaleza especial a que se refiere este Código en el artículo 264.</p> <p>ARTÍCULO 15°. PLURALIDAD DE JUECES COMPETENTES. Cuando la demanda se dirija simultáneamente contra dos o más demandados, y, por tanto, tengan competencia para conocer de ella dos o más Jueces, el demandante elegirá entre éstos.</p> <p>Lo anterior sin tener en cuenta la competencia prevalente por la calidad de las partes.</p> <p>ARTÍCULO 16°. COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y DE LAS SALAS LABORALES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL.</p> <p>A- La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia conoce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Del recurso de casación promovido contra las sentencias emitidas en procesos ordinarios, acoso laboral, y especiales de fuero. 2. De las acciones de tutela, conforme a las leyes y reglamentos vigentes sobre la materia. 3. Del recurso de anulación de los laudos proferidos por tribunales de arbitramento que decidan conflictos colectivos de carácter económico. 4. Del recurso de queja contra los autos que nieguen el recurso de casación o el de anulación. 5. De los conflictos de competencia que se susciten entre tribunales de dos o más distritos judiciales, entre un tribunal y un juzgado de otro distrito judicial y entre juzgados de diferente distrito judicial. 6. Del recurso de revisión que no esté atribuido a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. 7. Del recurso de apelación contra las sentencias de primera instancia que deciden la calificación de la ilegalidad de la suspensión, huelga o paro colectivo del trabajo y de su grado jurisdiccional de consulta. 8. De asuntos señalados en el numeral 8 del art. 235 de la Constitución Política. 9. De los asuntos señalados en el inciso 3 del artículo 239 de este Código. 10. De las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación, que implique su remisión de un distrito judicial a otro. 	<p>El cambio de radicación procederá, excepcionalmente, cuando en el lugar en donde se esté tramitando el proceso existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes. A la solicitud de cambio de radicación se adjuntarán las pruebas que se pretenda hacer valer y se resolverá de plano por auto que no admite recursos. La solicitud de cambio de radicación no suspende el trámite.</p> <p>Parágrafo. El Procurador General de la Nación o el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; también están legitimados para solicitar el cambio de radicación previsto en el numeral 10.</p> <p>B- Las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial conocen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Del recurso de apelación contra los autos señalados en este Código y contra las sentencias proferidas en primera instancia proferidos por los jueces del circuito. 2. Del recurso de anulación de los laudos proferidos por tribunales de arbitramento que decidan conflictos de carácter jurídico. 3. Del grado jurisdiccional de consulta frente a las sentencias proferidas por los jueces del circuito. 4. Del recurso de queja contra los autos que nieguen el recurso de apelación o el de anulación. 5. De los conflictos de competencia que se susciten entre dos juzgados del mismo distrito judicial. 6. Del recurso de revisión, contra las sentencias dictadas por los jueces de circuito. 7. En primera instancia, del proceso de la calificación de la ilegalidad de la suspensión, huelga o paro colectivo del trabajo. 8. De los asuntos señalados en el inciso 3 del artículo 239 de este Código. 9. De los recursos de apelación contra las sentencias emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de su función jurisdiccional. <p>C- Jueces del circuito.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Del recurso de apelación contra los autos señalados en este Código y contra las sentencias proferidas en primera instancia por los Jueces Laborales Municipales. 2. Del grado jurisdiccional de consulta, respecto de las sentencias proferidas por los Jueces Laborales Municipales.

<p>3. En primera instancia, de las controversias consagradas en el artículo 264 de este Código y aquellas en que se vean involucrados Estados extranjeros y sus órganos de gobierno o de representación exterior, organismos internacionales y funcionarios o empleados consulares.</p> <p>4. Del recurso de revisión, contra las sentencias dictadas por los Jueces Laborales Municipales, cuando no fuesen apeladas.</p> <p>5. Del recurso de queja contra los autos que nieguen el recurso de apelación contra las decisiones de los Jueces Laborales Municipales.</p> <p>6. A prevención con los Jueces Laborales Municipales, de las peticiones sobre pruebas extraprocesales, sin consideración a la calidad de las personas interesadas, siempre y cuando se aduzca ante los jueces de la especialidad laboral y seguridad social.</p> <p>D) Jueces Laborales Municipales:</p> <p>1. De los procesos ordinarios y ejecutivos que por razón de la cuantía sean de su competencia.</p> <p>Parágrafo. Corresponde a la Sala de Decisión dictar las sentencias, y los autos interlocutorios. Contra los autos que decidan los recursos de apelación, de queja, los conflictos de competencia y los que decretan pruebas, no procede recurso. El Magistrado ponente dictará los autos de trámite.</p> <p>2. A prevención con los Jueces Laborales del Circuito, de las peticiones sobre pruebas extraprocesales, sin consideración a la calidad de las personas interesadas, siempre y cuando se aduzca ante los jueces de la especialidad laboral y seguridad social.</p> <p>ARTÍCULO 17º. FACTOR FUNCIONAL. La jurisdicción y la competencia por el factor funcional es improrrogable. Cuando se declare de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo.</p> <p>La falta de competencia por factor distinto del funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente.</p>	<p style="text-align: center;">CAPÍTULO II MINISTERIO PÚBLICO Y LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO</p> <p>ARTÍCULO 18º. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.</p> <p>A) El Ministerio Público podrá intervenir en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción del trabajo y de la seguridad social, en defensa del orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y derechos fundamentales, individuales o colectivos, de los trabajadores o pensionados o de las minorías étnicas.</p> <p>Dicha intervención, podrá realizarse a solicitud de las partes intervinientes, o cuando se evidencien posibles vulneraciones de los bienes jurídicos de que trata el numeral 7º del Artículo 277 de la Constitución Política. El Ministerio Público intervendrá como sujeto procesal especial con amplias facultades, entre ellas la de interponer recursos, emitir conceptos, solicitar nulidades, pedir, aportar y controvertir pruebas, entre otras garantías, facultades, oportunidades y recursos de las partes.</p> <p>La actuación del Ministerio Público deberá sujetarse conforme a los parámetros y principios que gobiernan el proceso laboral y de la seguridad social. Para tal efecto, podrá intervenir en los términos señalados en la ley, a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o de la notificación de la providencia por medio de la cual se le vincule al proceso.</p> <p>Los delegados del Ministerio Público, asumen su intervención en el proceso, en el estado que aquel se encuentre sin que sea posible retrotraer etapas o actuaciones.</p> <p>B) La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como Unidad Administrativa Especial, podrá intervenir, en la etapa procesal que estime pertinente, con amplias facultades legales en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción del trabajo y de la seguridad social, en cuyos asuntos funjan como parte demandante o demandada, la Nación o los organismos y entidades públicas del orden nacional.</p>
<p style="text-align: center;">CAPÍTULO III CONCILIACIÓN</p> <p>ARTÍCULO 19º. CONCILIACIÓN. La conciliación podrá intentarse antes o después de presentada la demanda, o en cualquiera de las instancias, cuando las partes de común acuerdo lo soliciten.</p> <p>Por regla general, las partes deberán asistir a la audiencia de conciliación. No obstante, podrá celebrarse con la sola comparecencia de los apoderados, siempre que estos estén debidamente facultados para conciliar.</p> <p>La conciliación en asuntos laborales no constituye requisito de procedibilidad.</p> <p>ARTÍCULO 20º. CONCILIACIÓN ANTES DEL PROCESO. La persona o personas que tengan interés en conciliar una diferencia en asuntos del trabajo y la seguridad social antes de presentar demanda, podrán solicitar, a través de los medios dispuestos para ello, a los Jueces Laborales y sin perjuicio de la competencia asignada por la ley a otras autoridades, que hagan la correspondiente citación, señalando día y hora con tal fin.</p> <p>En caso de que las partes acudan a los jueces para celebrar conciliación extraprocesal, se observarán las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los jueces laborales del circuito y municipales laborales, adelantarán, de acuerdo a sus competencias por razón de la cuantía, conciliaciones extraprocesales. 2. Esta solicitud deberá tramitarse con prelación sobre los demás asuntos, a excepción del habeas corpus, acciones de tutela y procesos especiales. 3. La solicitud de conciliación podrá ser presentada de manera conjunta o individual, por las personas naturales y/o jurídicas interesadas en solucionar sus diferencias a través de este mecanismo. 4. La petición deberá estar acompañada de los soportes documentales con que cuenten las partes o, en su defecto, de la declaración bajo juramento, que se entiende prestado con la presentación de la solicitud, de que los hechos en que se funda son ciertos. 5. La solicitud se radicará ante la oficina judicial de reparto, conforme a las reglas de competencia establecidas en este Código. 6. Una vez recibida, el juez la admitirá y, de considerarla procedente, por no desconocer derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, afiliado o beneficiario, fijará fecha para 	<p>la audiencia especial de conciliación, que se realizará dentro de los 10 días siguientes. En caso contrario, la rechazará de manera motivada, decisión contra la que no procede recurso alguno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Al iniciar la audiencia, la que podrá ser presencial o virtual, atendiendo las circunstancias específicas, el funcionario, interrogará a los interesados acerca de los hechos que originan la diferencia, para determinar con la mayor precisión posible los derechos y obligaciones de cada uno, y los invitará a un acuerdo amigable, pudiendo proponer fórmulas al efecto, sin que lo anterior constituya prejuzgamiento o las manifestaciones de las partes, confesión. 8. Si se llegare a un acuerdo total o parcial, se dejará constancia de sus términos en el acta correspondiente, con la advertencia de que este tendrá fuerza de cosa juzgada y aquel documento presta mérito ejecutivo. 9. En caso de no prosperar la conciliación total o parcialmente, el titular de los derechos en conflicto, podrá presentar la correspondiente demanda ante el mismo funcionario judicial dentro de los treinta (30) días siguientes a la celebración de la precitada audiencia. 10. La presentación de la solicitud de conciliación suspende el término de prescripción hasta que se suscriba el acta de conciliación, se emita constancia de no acuerdo o hasta que se venza el término de tres (3) meses, lo que ocurra primero. <p>Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Las conciliaciones extraprocesales, se tendrán en cuenta como carga efectiva para la estadística judicial. <p>ARTÍCULO 21º. ASUNTOS CONCILIABLES. Serán conciliables todos los asuntos que no estén prohibidos por la ley, siendo principio general que se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y los derechos respecto de los cuales su titular tenga capacidad de disposición. En asuntos de naturaleza laboral y de la seguridad social podrá conciliarse si con el acuerdo no se afectan derechos ciertos e indiscutibles.</p> <p style="text-align: center;">TÍTULO SEGUNDO COMISIÓN</p> <p>ARTÍCULO 22º. REGLAS GENERALES. La comisión solo podrá conferirse para la práctica de pruebas en los casos que autoriza el Artículo 5º de este Código, para la de otras diligencias</p>

<p>que deban surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento, y para secuestro y entrega de bienes en dicha sede, en cuanto fuere menester. No podrá comisionarse para la práctica de medidas cautelares extraprocesales.</p> <p>La comisión podrá consistir en la solicitud, por cualquier vía expedita, de auxilio a otro servidor público para que realice las diligencias necesarias que faciliten la práctica de las pruebas por medio de videoconferencia, teleconferencia o cualquier otro medio idóneo de comunicación simultánea.</p> <p>Cuando se ordene practicar medidas cautelares antes de la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, a petición y costa de la parte actora y sin necesidad de que el juez lo ordene, se anexará al despacho comisorio una copia del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, para efectos de que el comisionado realice la notificación personal.</p> <p>El retiro y entrega de copias de la demanda y sus anexos, así como la fecha a partir de la cual debe computarse el término de traslado de la demanda, estará sujeto a lo previsto en el Artículo 244 de este Código.</p> <p>Cuando el despacho judicial comitente y el comisionado tengan habilitado el Plan de Justicia Digital, no será necesaria la remisión física de dichos documentos por parte del comitente.</p> <p>ARTÍCULO 23º. COMPETENCIA. La Corte podrá comisionar a las demás autoridades judiciales. Los tribunales superiores y los jueces podrán comisionar a las autoridades judiciales de igual o de inferior categoría.</p> <p>Podrá comisionarse a las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales o administrativas en lo que concierne a esa especialidad.</p> <p>Cuando no se trate de recepción o práctica de pruebas podrá comisionarse a los alcaldes y demás funcionarios de policía, sin perjuicio del auxilio que deban prestar, en la forma señalada en el Artículo anterior.</p> <p>El comisionado deberá tener competencia en el lugar de la diligencia que se le delegue, pero cuando esta verse sobre inmuebles ubicados en distintas jurisdicciones territoriales podrá</p>	<p>comisionarse a cualquiera de las mencionadas autoridades de dichos territorios, la que ejercerá competencia en ellos para tal efecto.</p> <p>El comisionado que carezca de competencia territorial para la diligencia devolverá inmediatamente el despacho al comitente. La nulidad por falta de competencia territorial del comisionado podrá alegarse hasta el momento de iniciarse la práctica de la diligencia.</p> <p>Parágrafo 1º. Cuando los alcaldes o demás funcionarios de policía sean comisionados o subcomisionados para los fines establecidos en este Artículo, deberán ejecutar la comisión directamente o podrán subcomisionar a una autoridad que tenga jurisdicción y competencia de la respectiva alcaldía, quienes ejercerán transitoriamente como autoridad administrativa de policía. No se podrá comisionar a los cuerpos colegiados de policía.</p> <p>Parágrafo 2º. Cuando los alcaldes o demás autoridades sean comisionados para los fines establecidos en este Artículo, deberán ejecutar la comisión exactamente en el mismo orden en que hayan sido recibidos para tal fin.</p> <p>Parágrafo 3º. La subcomisión de diligencias jurisdiccionales o administrativas de los alcaldes a los inspectores de policía solamente procederá cuando existan previamente o se creen las capacidades institucionales suficientes para el desarrollo de la nueva carga laboral que la subcomisión implica.</p> <p>ARTÍCULO 24º. OTORGAMIENTO Y PRÁCTICA DE LA COMISIÓN. La providencia que confiera una comisión indicará su objeto con precisión y claridad. El despacho que se libre llevará una reproducción del contenido de aquella, de las piezas que haya ordenado el comitente y de las demás que soliciten las partes, siempre que suministren las expensas en el momento de la solicitud. En ningún caso se remitirá al comisionado el expediente original.</p> <p>Cuando el despacho judicial comitente y el comisionado tengan habilitado el Plan de Justicia Digital, se le comunicará al juez comisionado la providencia que confiere la comisión sin necesidad de librar despacho comisorio y se le dará acceso a la totalidad del expediente.</p> <p>Cuando la comisión tenga por objeto la práctica de pruebas el comitente señalará el término para su realización en un plazo máximo de seis (6) meses. En los demás casos, el comisionado fijará para tal efecto el día más próximo posible y la hora para su iniciación, en auto que se notificará por estado.</p>
<p>Concluida la comisión se devolverá el despacho al comitente, sin que sea permitido al comisionado realizar ninguna actuación posterior.</p> <p>El comisionado que incumpla el término señalado por el comitente o retarde injustificadamente el cumplimiento de la comisión, será sancionado con multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) que le será impuesta por el comitente.</p> <p>ARTÍCULO 25º. PODERES DEL COMISIONADO. El comisionado tendrá las mismas facultades del comitente en relación con la diligencia que se le delegue, inclusive las de resolver reposiciones y conceder apelaciones contra las providencias que dicte, susceptibles de esos recursos. Sobre la concesión de las apelaciones que se interpongan se resolverá al final de la diligencia.</p> <p>Toda actuación del comisionado que exceda los límites de sus facultades es nula. La nulidad podrá alegarse a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al de la notificación del auto que ordene agregar el despacho diligenciado al expediente. La petición de nulidad se resolverá de plano por el comitente, y el auto que la decida sólo será susceptible de reposición.</p> <p>ARTÍCULO 26º. COMISIÓN EN EL EXTERIOR. Cuando el acto procesal haya de practicarse en territorio extranjero, el juez, según la naturaleza de la actuación y la urgencia de la misma, y con arreglo a los tratados y convenios internacionales de cooperación judicial, podrá:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Enviar carta rogatoria, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a una de las autoridades judiciales del país donde ha de practicarse la diligencia, a fin de que la practique y devuelva por conducto del agente diplomático o consular de Colombia o el de un país amigo. 2. Comisionar directamente al cónsul o agente diplomático de Colombia en el país respectivo para que practique la diligencia de conformidad con las leyes nacionales y la devuelva directamente. Los cónsules y agentes diplomáticos de Colombia en el exterior quedan facultados para practicar todas las diligencias judiciales para las cuales sean comisionados. 	<p style="text-align: center;">TÍTULO TERCERO DEBERES Y PODERES DEL JUEZ</p> <p>ARTÍCULO 27º. PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ. Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sancionar con arresto inmutable hasta por cinco (5) días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas. 2. Sancionar con arresto inmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia. 3. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución. 4. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), a los empleadores o representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores o representantes para rendir declaración o atender cualquier otra citación que les haga. 5. Expulsar de las audiencias y diligencias a quienes perturben su curso. 6. Ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos contra los funcionarios, las partes o terceros. 7. Los demás que se consagren en la ley. <p>Parágrafo. Para la imposición de las sanciones previstas en los cinco primeros numerales, el juez seguirá el procedimiento previsto en el Artículo 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. El juez aplicará la respectiva sanción, teniendo en cuenta la gravedad de la falta.</p> <p>Cuando el infractor no se encuentre presente, la sanción se impondrá por medio de incidente que se tramitará en forma independiente de la actuación principal del proceso.</p> <p>Contra las sanciones correccionales sólo procede el recurso de reposición, que se resolverá de plano.</p>

<p>ARTÍCULO 28º. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del proceso y procurar la mayor economía procesal. 2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, atendiendo en todo caso, el enfoque diferencial de género, usando los poderes que este código le otorga. 3. Prevenir, remediar, sancionar o denunciar por los medios que este código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deban observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal. 4. Emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes, en busca de la verdad real por encima de la meramente formal. 5. Adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia. 6. Decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, o aquella sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho sustancial y procesal del trabajo y de la seguridad social. 7. Motivar la sentencia y las demás providencias, salvo los autos de mero trámite. La sustentación de las providencias deberá también tener en cuenta lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico sobre doctrina probable. 8. Dictar las providencias dentro de los términos legales, fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal y asistir a ellas. 9. Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos. El mismo deber rige para los empleados judiciales. 10. Presidir el reparto de los asuntos cuando corresponda. 11. Verificar con el secretario las cuestiones relativas al proceso y abstenerse de solicitarle por auto informe sobre hechos que consten en el expediente. 12. Realizar el control de legalidad de la actuación procesal una vez agotada cada etapa del proceso. 13. Usar la toga en las audiencias. 14. Usar el Plan de Justicia Digital cuando se encuentre implementado en su despacho judicial. 	<p>15. Los demás que se consagren en la ley.</p> <p>ARTÍCULO 29º. PODERES DE ORDENACIÓN E INSTRUCCIÓN. El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta. 2. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten. 3. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado. 4. Ratificar, por el medio más expedito posible, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten las partes o sus apoderados o terceros para justificar su inasistencia a las audiencias o diligencias. En caso de encontrar inconsistencias o irregularidades, además de rechazar la excusa y aplicar las consecuencias legales que correspondan dentro del proceso o actuación, el juez compulsará copias para las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar. 5. Los demás que se consagren en la ley. <p>ARTÍCULO 30º. RECHAZO DE PLANO. El juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito.</p> <p>En cuanto a la prueba de testigos, el juez limitará el número de ellos cuando considere que son suficientes los testimonios recibidos o los otros medios de convicción que obran en el proceso.</p> <p style="text-align: center;">TÍTULO CUARTO AUXILIARES DE LA JUSTICIA</p>
<p>ARTÍCULO 31º. NATURALEZA DE LOS CARGOS. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas e imparciales. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento.</p> <p>Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.</p> <p>Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio y no podrán gravar en exceso a quienes acceden a la administración de justicia.</p> <p>ARTÍCULO 32º. EXCLUSIÓN DE LA LISTA. El Consejo Superior de la Judicatura excluirá de las listas de auxiliares de la justicia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración de justicia o la Administración Pública o sancionados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o sus Seccionales. 2. A quienes se les haya suspendido o cancelado la matrícula o licencia. 3. A quienes hayan entrado a ejercer un cargo oficial. 4. A quienes hayan fallecido o se incapaciten física o mentalmente. 5. A quienes se ausenten definitivamente del respectivo distrito judicial. 6. A las personas jurídicas que se disuelvan. 7. A quienes como secuestrados, liquidadores o administradores de bienes, no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestión, o depositado los dineros habidos a órdenes del despacho judicial, o cubierto el saldo a su cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron, o los hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les halle responsables de administración negligente. 8. A quienes no hayan realizado a cabalidad la actividad encomendada o no hayan cumplido con el encargo en el término otorgado. 9. A quienes sin causa justificada rehusaren la aceptación del cargo o no asistieren a la diligencia para la que fueron designados. 10. A quienes hayan convenido, solicitado o recibido indebidamente retribución de alguna de las partes. 11. A los secuestrados cuya garantía de cumplimiento hubiere vencido y no la hubieren renovado oportunamente. 	<p>En los casos previstos en los numerales 7 y 10, una vez establecido el hecho determinante de la exclusión, el juez de conocimiento lo comunicará al Consejo Superior de la Judicatura, que podrá imponer sanciones de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv). Lo mismo deberá hacer en los casos de los numerales 8 y 9, si dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término o a la fecha de la diligencia el auxiliar no demuestra fuerza mayor o caso fortuito que le haya impedido el cumplimiento de su deber. Esta regla se aplicará a las personas jurídicas cuyos administradores o delegados incurran en las causales de los numerales 7, 8, 9 y 10.</p> <p>Parágrafo 1o. Las personas jurídicas no podrán actuar como auxiliares de la justicia por conducto de personas que hayan incurrido en las causales de exclusión previstas en este artículo.</p> <p>Parágrafo 2o. Siempre que un secuestrado sea excluido de la lista se entenderá relevado del cargo en todos los procesos en que haya sido designado y deberá proceder inmediatamente a hacer entrega de los bienes que se le hayan confiado. El incumplimiento de este deber se sancionará con multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) en cada proceso. Esta regla también se aplicará cuando habiendo terminado las funciones del secuestrado, este se abstenga de entregar los bienes que se le hubieren confiado.</p> <p>En los eventos previstos en este parágrafo el juez procederá, a solicitud del interesado, a realizar la entrega de bienes a quien corresponda.</p> <p>Parágrafo 3o. No podrá ser designada como perito la persona que haya incurrido en alguna de las causales de exclusión previstas en este artículo.</p> <p>ARTÍCULO 33º. DESIGNACIÓN. Para la designación de los auxiliares de la justicia se observarán las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La de los secuestrados, liquidadores, síndicos, intérpretes y traductores, se hará por el magistrado ponente o por el juez del conocimiento, de la lista oficial de auxiliares de la justicia. La designación será rotatoria, de manera que la misma persona no pueda ser nombrada por segunda vez sino cuando se haya agotado la lista. En el auto de designación del liquidador, síndico, intérprete o traductor se incluirán tres (3) nombres, pero el cargo será ejercido por el primero que concurra a notificarse del

<p>auto que lo designó, y del admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, si fuere el caso, con lo cual se entenderá aceptado el nombramiento. Los otros dos auxiliares nominados conservarán el turno de nombramiento en la lista. Si dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación de la designación ninguno de los auxiliares nominados ha concurrido a notificarse, se procederá a su reemplazo con aplicación de la misma regla.</p> <p>El secuestre será designado en forma uninominal por el juez de conocimiento, y el comisionado sólo podrá relevarlo por las razones señaladas en este Artículo. Solo podrán ser designados como secuestres las personas naturales o jurídicas que hayan obtenido licencia con arreglo a la reglamentación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, la cual deberá establecer las condiciones para su renovación. La licencia se concederá a quienes previamente hayan acreditado su idoneidad y hayan garantizado el cumplimiento de sus deberes y la indemnización de los perjuicios que llegaren a ocasionar por la indebida administración de los bienes a su cargo, mediante las garantías que determine la reglamentación que expida el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Los requisitos de idoneidad que determine el Consejo Superior de la Judicatura para cada distrito judicial deberán incluir parámetros de solvencia, liquidez, experiencia, capacidad técnica, organización administrativa y contable, e infraestructura física.</p> <ol style="list-style-type: none"> Para la designación de los peritos, las partes y el juez acudirán a instituciones especializadas, públicas o privadas, o a profesionales de reconocida trayectoria e idoneidad. El director o representante legal de la respectiva institución designará la persona o personas que deben rendir el dictamen, quien, en caso de ser citado, deberá acudir a la audiencia. Si al iniciarse o proseguirse una diligencia faltaren los auxiliares nombrados, serán relevados por cualquiera de los que figuren en la lista correspondiente y esté en aptitud para el desempeño inmediato del cargo. Esta regla no se aplicará respecto de los peritos. Las partes, de consuno, podrán en cualquier momento designar al auxiliar de la justicia o reemplazarlo. Las listas de auxiliares de la justicia serán obligatorias para magistrados y jueces. Cuando en la lista oficial del respectivo distrito no existiere el auxiliar requerido, podrá designarse de la lista de un distrito cercano. El juez no podrá designar como auxiliar de la justicia al cónyuge, compañero permanente o alguno de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o cuarto civil del funcionario que conozca del proceso, de los empleados del despacho, de las partes o los apoderados que actúen en él. Tampoco podrá designarse como auxiliar de la justicia a quien tenga interés, directo o indirecto, en la gestión o 	<p>decisión objeto del proceso. Las mismas reglas se aplicarán respecto de la persona natural por medio de la cual una persona jurídica actúe como auxiliar de la justicia.</p> <ol style="list-style-type: none"> La designación del curador ad litem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, quien desempeñará el cargo como defensor de oficio. El nombramiento es de forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se compulsarán copias a la autoridad competente. <p>Parágrafo 1: Los gastos de curaduría harán parte de las costas del proceso.</p> <p>Parágrafo 2: Lo dispuesto en este Artículo no afectará la competencia de las autoridades administrativas para la elaboración de las listas, la designación y exclusión, de conformidad con lo previsto en la ley.</p> <p>ARTÍCULO 34º. COMUNICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO, ACEPTACIÓN DEL CARGO Y RELEVO DEL AUXILIAR DE LA JUSTICIA. El nombramiento del auxiliar de la justicia se le comunicará por cualquier medio idóneo enviado a la dirección que figure en la lista oficial, o de preferencia a través de mensajes de datos. De ello se dejará constancia en el expediente. En la comunicación se indicará el día y la hora de la diligencia a la cual deba concurrir el auxiliar designado. De la misma forma se hará cualquier otra comunicación.</p> <p>El cargo de auxiliar de la justicia es de obligatoria aceptación para quienes estén inscritos en la lista oficial. Siempre que el auxiliar designado no acepte el cargo dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación de su nombramiento, se excuse de prestar el servicio, no concurra a la diligencia, no cumpla el encargo en el término otorgado, o incurra en causal de exclusión de la lista, será relevado inmediatamente.</p> <p>La actividad y remuneración de los auxiliares será regulada conforme los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>ARTÍCULO 35º. CUSTODIA DE BIENES Y DINEROS. Los auxiliares de la justicia que como depositarios, secuestres o administradores de bienes perciban sus productos en dinero, o</p>
<p>reciban en dinero el resultado de la enajenación de los bienes o de sus frutos, constituirán inmediatamente certificado de depósito a órdenes del juzgado.</p> <p>El juez podrá autorizar el pago de impuestos y expensas con los dineros depositados; igualmente cuando se trate de empresas industriales, comerciales o agropecuarias, podrá facultar al administrador para que, bajo su responsabilidad, lleve los dineros a una cuenta bancaria que tenga la denominación del cargo que desempeña. El banco respectivo enviará al despacho judicial copia de los extractos mensuales.</p> <p>En todo caso, el depositario o administrador dará al juzgado informe mensual de su gestión, sin perjuicio del deber de rendir cuentas.</p> <p>ARTÍCULO 36º. FUNCIONES DEL SECUESTRE. El secuestre tendrá, como depositario, la custodia de los bienes que se le entreguen, y si se trata de empresa o de bienes productivos de renta, las atribuciones previstas para el mandatario en el Código Civil, sin perjuicio de las facultades y deberes de su cargo. Bajo su responsabilidad y con previa autorización judicial, podrá designar los dependientes que requiera para el buen desempeño del cargo y asignarles funciones. La retribución deberá ser autorizada por el juez.</p> <p>Cuando los bienes secuestrados sean consumibles y se hallen expuestos a deteriorarse o perderse, y cuando se trate de muebles cuya depreciación por el paso del tiempo sea inevitable, el secuestre los enajenará en las condiciones normales del mercado, constituirá certificado de depósito a órdenes del juzgado con el dinero producto de la venta, y rendirá inmediatamente informe al juez.</p> <p>ARTÍCULO 37º. DESIGNACIÓN. Para la reglamentación de la actividad de los auxiliares de la justicia se estará a lo reglamentado por el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p style="text-align: center;">SECCIÓN SEGUNDA PARTES, REPRESENTANTES Y APODERADOS</p> <p style="text-align: center;">TÍTULO ÚNICO PARTES, TERCEROS Y APODERADOS</p>	<p style="text-align: center;">CAPÍTULO I REPRESENTACIÓN JUDICIAL</p> <p>ARTÍCULO 38º. CAPACIDAD PARA SER PARTE. Podrán ser parte en un proceso:</p> <ol style="list-style-type: none"> Las personas naturales y jurídicas. Los patrimonios autónomos. Los consorcios y las uniones temporales, sin perjuicio de la responsabilidad que se atribuya a sus integrantes. El concebido, para la defensa de sus derechos. Los demás que determine la ley. <p>ARTÍCULO 39º. COMPARECENCIA AL PROCESO. Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.</p> <p>Cuando los padres que ejerzan la patria potestad, o el defensor de familia, estuvieren en desacuerdo sobre la representación judicial del hijo, o cuando hubiere varios guardadores de un mismo pupilo en desacuerdo, el juez designará curador ad litem, a solicitud de cualquiera de ellos o de oficio. El concebido comparecerá por medio de quienes ejercerán su representación si ya hubiese nacido.</p> <p>El sindicato, la federación o confederación, previa delegación por parte de los trabajadores puede hacer valer en juicio, el derecho particular de que cualquiera de sus miembros sea titular.</p> <p>Las personas jurídicas, los patrimonios autónomos, los consorcios y las uniones temporales, las juntas calificación de invalidez, comparecerán al proceso por medio de su representante legal o voceros, con arreglo a lo que dispongan la Constitución, la ley o los estatutos. En el caso de los patrimonios autónomos constituidos a través de sociedades fiduciarias, comparecerán por medio del representante legal o apoderado de la respectiva sociedad</p>

<p>fiduciaria, quien actuará como su vocera. Tratándose de los consorcios o uniones temporales, lo harán a través del representante contractual inscrito en el registro único de proponentes -RUP- cuya notificación tendrá efecto respecto de todos sus integrantes.</p> <p>Cuando la persona jurídica tenga varios representantes o apoderados distintos de aquellos, podrá citarse a cualquiera de ellos, aunque no esté facultado para obrar separadamente. Las personas jurídicas también podrán comparecer a través de representantes legales para asuntos judiciales o apoderados generales debidamente inscritos. Cuando se encuentren en estado de liquidación deberán ser representadas por su liquidador.</p> <p>ARTÍCULO 40º. FUNCIONES Y FACULTADES DEL CURADOR AD LITEM. El curador ad litem actuará en el proceso hasta cuando concurra la persona a quien representa, o un representante de esta. Dicho curador está facultado para realizar todos los actos procesales que no estén reservados a la parte misma, pero no puede recibir ni disponer del derecho en litigio.</p> <p>ARTÍCULO 41º. AGENCIA OFICIOSA PROCESAL. Se podrá demandar o contestar la demanda a nombre de una persona de quien no se tenga poder, siempre que ella se encuentre ausente o impedida para hacerlo; bastará afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por la presentación de la demanda o la contestación.</p> <p>El agente oficioso del demandante deberá prestar caución dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación que se haga a aquel del auto que admita la demanda. Si la parte no la ratifica, dentro de los treinta (30) días siguientes, se declarará terminado el proceso y se condenará al agente oficioso a pagar las costas y los perjuicios causados al demandado. Si la ratificación se produce antes del vencimiento del término para prestar la caución, el agente oficioso quedará eximido de tal carga procesal.</p> <p>La actuación se suspenderá una vez practicada la notificación al demandado del auto admisorio de la demanda, y ella comprenderá el término de ejecutoria y el de traslado. Ratificada oportunamente la demanda por la parte, el proceso se reanuda a partir de la notificación del auto que levante la suspensión. No ratificada la demanda o ratificada extemporáneamente, el proceso se declarará terminado.</p>	<p>Quien pretenda obrar como agente oficioso de un demandado deberá contestar la demanda dentro del término de traslado, manifestando que lo hace como agente oficioso.</p> <p>Vencido el término del traslado de la demanda, el juez ordenará la suspensión del proceso por el término de treinta (30) días y fijará caución que deberá ser prestada en el término de diez (10) días.</p> <p>Si la ratificación de la contestación de la demanda se produce antes del vencimiento del término para prestar la caución, el agente oficioso quedará eximido de tal carga procesal.</p> <p>Si no se presta la caución o no se ratifica oportunamente la actuación del agente, la demanda se tendrá por no contestada y se reanuda la actuación.</p> <p>El agente oficioso deberá actuar por medio de abogado, salvo en los casos exceptuados por la ley.</p> <p>ARTÍCULO 42º. REPRESENTACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS. La representación de las sociedades extranjeras con negocios permanentes en Colombia se regirá por las normas del Código de Comercio.</p> <p>Las demás personas jurídicas de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior que establezcan negocios o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, constituirán apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. Para tal efecto protocolizarán en una notaría del respectivo círculo la prueba idónea de la existencia y representación de dichas personas jurídicas y del poder correspondiente. Además, un extracto de los documentos protocolizados se inscribirá en la oficina pública de registro correspondiente.</p> <p>Las personas jurídicas extranjeras que no tengan negocios permanentes en Colombia estarán representadas en los procesos por el apoderado que constituyan con las formalidades previstas en este Código. Mientras no lo constituyan, llevarán su representación quienes les administren sus negocios en el país.</p> <p>ARTÍCULO 43º. REPRESENTACIÓN AGENCIAS Y SUCURSALES DE SOCIEDADES NACIONALES. Las sociedades domiciliadas en Colombia deberán constituir apoderados, con</p>
<p>capacidad para representarlas, en los lugares en donde se establezcan agencias, en la forma indicada en el inciso 2o del Artículo precedente, pero el registro se efectuará en la respectiva Cámara de Comercio. Si no los constituyen llevará su representación quien tenga la dirección de la respectiva agencia.</p> <p>Cuando se trate de sociedad domiciliada en Colombia que carezca de representante en alguna de sus sucursales, será representada por quien lleve la dirección de esta.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO II LITISCONSORTES Y OTRAS PARTES</p> <p>ARTÍCULO 44º. LITISCONSORTES FACULTATIVOS. Salvo disposición en contrario, los litisconsortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la contraparte, como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso.</p> <p>ARTÍCULO 45º. LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.</p> <p>En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término.</p> <p>Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.</p>	<p>Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si emanan de todos.</p> <p>Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio.</p> <p>ARTÍCULO 46º. LITISCONSORTES CUASINECESARIOS. Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte y con las mismas facultades de esta, quienes sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso.</p> <p>Podrán solicitar pruebas si intervienen antes de ser decretadas las pedidas por las partes; si concurren después, tomarán el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención.</p> <p>ARTÍCULO 47º. INTERVENCIÓN EXCLUYENTE. Quien en proceso declarativo pretenda, en todo o en parte, el derecho controvertido, podrá intervenir formulando demanda, hasta antes de la sentencia de segunda instancia, para que en el mismo proceso se le reconozca.</p> <p>La intervención se tramitará conjuntamente con el proceso principal.</p> <p>Si alguno de los intervinientes solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.</p> <p>ARTÍCULO 48º. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, podrá pedir, en la demanda, en su reforma o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.</p>

<p>ARTÍCULO 49º. REQUISITOS DEL LLAMAMIENTO. El llamamiento en garantía deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos en este Código para la demanda.</p> <p>El convocado podrá a su vez llamar en garantía.</p> <p>En ejercicio de sus poderes de ordenación, el juez podrá adoptar los correctivos necesarios para el cumplimiento de los requisitos de que trata este Artículo.</p> <p>ARTÍCULO 50º. TRÁMITE. Si el juez halla procedente el llamamiento, ordenará notificar personalmente al convocado y correrle traslado del mismo y de la demanda con sus anexos por el término previsto para su contestación. Si la notificación no se logra dentro de los seis (6) meses siguientes, el llamamiento será ineficaz. La misma regla se aplicará en el caso contemplado en el inciso segundo del artículo anterior.</p> <p>El llamado en garantía podrá contestar en un solo escrito la demanda y el llamamiento, y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.</p> <p>En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial aducida y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo del llamado en garantía.</p> <p>Parágrafo. No será necesario notificar personalmente el auto que admite el llamamiento cuando el llamado actúe en el proceso como parte o como representante de alguna de las partes.</p> <p>ARTÍCULO 51º. SUCESIÓN PROCESAL. Fallecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuará con el cónyuge o compañero (a) permanente, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador.</p> <p>No le es dable al juez declarar la condición del sucesor procesal, de manera oficiosa.</p> <p>Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica, patrimonio autónomo, consorcio o unión temporal que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer al mismo; siendo aquellos a quienes</p>	<p>les corresponderá presentarse para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurren.</p> <p>El adquirente del derecho litigioso podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO III TERCEROS</p> <p>ARTÍCULO 52º. COADYUVANCIA. Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia.</p> <p>El coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio.</p> <p>La coadyuvancia sólo es procedente en los procesos declarativos. La solicitud de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes.</p> <p>Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las peticiones que hubiere formulado el interviniente.</p> <p>La intervención anterior al traslado de la demanda se resolverá luego de efectuada esta.</p> <p>ARTÍCULO 53º. LLAMAMIENTO DE OFICIO. En cualquiera de las instancias, siempre que el juez advierta colusión, fraude o cualquier otra situación similar en el proceso, ordenará la citación de las personas que puedan resultar perjudicadas, para que hagan valer sus derechos.</p>
<p>El citado podrá solicitar pruebas si interviene antes de la audiencia de juzgamiento.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO IV APODERADOS</p> <p>ARTÍCULO 54º. FACULTADES DEL APODERADO. Salvo estipulación en contrario, el poder para litigar se entiende conferido para solicitar medidas cautelares extraprocesales, pruebas extraprocesales y demás actos preparatorios del proceso, adelantar todo el trámite de este, solicitar medidas cautelares, interponer recursos ordinarios y extraordinarios, realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo proceso, y cobrar ejecutivamente las condenas impuestas en aquella, sin que se requiera para ello nuevo poder.</p> <p>El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime convenientes para beneficio del poderdante. En ningún caso se podrá exigir en el poder especial que se otorgue para representar judicialmente a una de las partes, el que se relacionen todas las pretensiones de la demanda.</p> <p>El poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, y confesar espontáneamente. Cualquier restricción sobre tales facultades se tendrá como no escrita. El poder también habilita al apoderado para reconvenir y representar al poderdante en todo lo relacionado con la reconvenición y la intervención de otras partes o de terceros.</p> <p>El apoderado no podrá realizar actos reservados por la ley a la parte misma; tampoco recibir, allanarse, ni disponer del derecho en litigio, salvo que el poderdante lo haya autorizado de manera expresa.</p> <p>Cuando se confiera poder a una persona jurídica para que designe o reemplace apoderados judiciales, aquella indicará las facultades que tendrá el apoderado sin exceder las otorgadas por el poderdante a la persona jurídica.</p> <p>ARTÍCULO 55º. DESIGNACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE APODERADOS. Podrá conferirse poder a uno o varios abogados, pero en ningún caso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona.</p>	<p>Igualmente podrá otorgarse poder a una persona jurídica cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios jurídicos. En este evento, se reconocerá personería a la sociedad quien podrá actuar en el proceso a través de cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia y representación legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jurídica pueda otorgar o sustituir el poder a otros abogados a quienes les será reconocida personería en los términos conferidos. Las Cámaras de Comercio deberán proceder al registro de que trata este inciso.</p> <p>El poder especial para un proceso prevalece sobre el general conferido por la misma parte.</p> <p>Si se trata de procesos acumulados y una parte tiene en ellos distintos apoderados, continuará con dicho carácter el que ejercía el poder en el proceso más antiguo, mientras el poderdante no disponga otra cosa.</p> <p>Podrá sustituirse el poder siempre que no esté expresamente prohibido.</p> <p>El poder conferido por escritura pública, puede sustituirse para un asunto determinado, por medio de memorial.</p> <p>Quien sustituya un poder podrá reasumirlo en cualquier momento, con lo cual quedará revocada la sustitución.</p> <p>ARTÍCULO 56º. TERMINACIÓN DEL PODER. El poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso.</p> <p>El auto que admite la revocación no tendrá recursos. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de dicha providencia; el apoderado a quien se le haya revocado el poder podrá pedir al juez de conocimiento que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. Para la determinación del monto de los honorarios el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en este código para la fijación de las agencias en derecho. Vencido el término indicado, la regulación de los honorarios se hará mediante demanda que deberá someterse a reparto ante esta jurisdicción.</p>

<p>Igual derecho tienen los herederos y el cónyuge sobreviviente del apoderado fallecido.</p> <p>La renuncia debe ser justificada y no pone término al poder sino cinco (5) días después de presentado el memorial respectivo en el juzgado, acompañado de la comunicación enviada al poderdante en tal sentido.</p> <p>La muerte del mandante o la extinción de las personas jurídicas no ponen fin al mandato judicial si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser revocado por los herederos o sucesores.</p> <p>Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO V DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS</p> <p>ARTÍCULO 57º. DEBERES DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS. Son deberes de las partes y sus apoderados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. 2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales. 3. Abstenerse de obstaculizar el desarrollo de las audiencias y diligencias. 4. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez; a los empleados de este, a las partes y a los auxiliares de la justicia. 5. Comunicar por escrito cualquier cambio de domicilio o del lugar señalado para recibir notificaciones personales, en la demanda o en su contestación o en el escrito de excepciones en el proceso ejecutivo, so pena de que éstas se surtan válidamente en el anterior y, sin perjuicio de las acciones disciplinarias a que haya lugar. 6. Realizar las gestiones y diligencias necesarias para lograr oportunamente la integración del contradictorio. 7. Concurrir al despacho cuando sean citados por el juez y acatar sus órdenes en las audiencias y diligencias. 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias. 9. Abstenerse de hacer anotaciones marginales o interlineadas, subrayados o dibujos de cualquier clase en el expediente, so pena de incurrir en multa de un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv). 10. Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir. 11. Comunicar a su representado el día y la hora que el juez haya fijado para interrogatorio de parte, reconocimiento de documentos, inspección judicial o exhibición, en general la de cualquier audiencia y el objeto de la misma, y darle a conocer de inmediato la renuncia del poder. 12. Citar a los testigos cuya declaración haya sido decretada a instancia suya o por el juez de oficio, por cualquier medio eficaz, y allegar al expediente la prueba de la citación. 13. Adoptar las medidas para conservar en su poder las pruebas y la información contenida en mensajes de datos que tenga relación con el proceso y exhibirla cuando sea exigida por el juez, de acuerdo con los procedimientos establecidos en este código. 14. Informar oportunamente al cliente sobre el alcance y consecuencia de la demanda de reconvencción y la vinculación de otros sujetos procesales. 15. Enviar a las demás partes del proceso después de notificadas, cuando hubieren suministrado una dirección de correo electrónico o un medio equivalente para la transmisión de datos, un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso. Se exceptúa la petición de medidas cautelares. Este deber se cumplirá a más tardar el día siguiente a la presentación del memorial. El incumplimiento de este deber no afecta la validez de la actuación, pero la parte afectada podrá solicitar al juez la imposición de una multa hasta por un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) por cada infracción. 16. Limitar las transcripciones o reproducciones de actas, decisiones, conceptos, citas doctrinales y jurisprudenciales a las que sean estrictamente necesarias para la adecuada fundamentación de la solicitud. <p>ARTÍCULO 58º. TEMERIDAD O MALA FE. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. 2. Cuando se aduzcan calidades inexistentes.
<ol style="list-style-type: none"> 3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos. 4. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas. 5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso. 6. Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas. 7. Cuando simultáneamente se presenten dos o más demandas contra los mismos demandados por los mismos supuestos fácticos y jurídicos. <p>ARTÍCULO 59º. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS PARTES. Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena a través de trámite incidental.</p> <p>A la misma responsabilidad y consiguiente condena están sujetos los terceros intervinientes en el proceso o incidente.</p> <p>Siendo varios los litigantes responsables de los perjuicios, se les condenará en proporción a su interés en el proceso o incidente.</p> <p>ARTÍCULO 60º. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE APODERADOS Y PODERDANTES. Al apoderado que actúe con temeridad o mala fe se le impondrá la condena de que trató el Artículo anterior, la de pagar las costas del proceso, incidente o recurso y una multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Dicha condena será solidaria si el poderdante también obró con temeridad o mala fe.</p> <p>Copia de lo pertinente se remitirá a la autoridad que corresponda con el fin de que adelante la investigación disciplinaria al abogado por faltas a la ética profesional.</p>	<p style="text-align: center;">SECCIÓN PRIMERA OBJETO DEL PROCESO</p> <p style="text-align: center;">TÍTULO ÚNICO DEMANDA Y CONTESTACIÓN</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO I DEMANDA</p> <p>ARTÍCULO 61º. Forma y requisitos de la demanda. La demanda deberá contener:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La designación del juez a quien se dirige. 2. El nombre de quien tenga la capacidad para ser parte, su naturaleza y el de su representante o vocero, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas. Se deberá indicar el número de identificación del demandante, de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas, los patrimonios autónomos, los consorcios y las uniones temporales de patrimonios autónomos será el número de identificación tributaria (NIT). 3. El domicilio, la dirección física, correo electrónico o canal digital de las partes con observancia de lo preceptuado en el inciso 2º del Artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, y si se ignora la del demandado o la de su representante si fuere el caso, se indicará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la demanda. 4. El nombre, domicilio, dirección física y correo electrónico del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso. 5. La indicación de la clase de proceso. 6. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado. No será necesario cuantificar monetariamente cada pretensión. 7. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados. 8. Los fundamentos y razones de derecho expresados de forma sucinta y clara, salvo para quien litigue en causa propia y no tenga la calidad de abogado. 9. La petición en forma individualizada y concreta de los medios de pruebas que el demandante pretende hacer valer. Este deberá aportar todas las documentales que se

<p>encuentren en su poder, y señalará los documentos que el demandado tiene, para que este los aporte, y</p> <p>10. La cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia o el trámite, para lo cual bastará con indicar si supera o no los 40 smmlv.</p> <p>11. La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. No obstante, en caso que el demandante desconozca el canal digital donde deben ser notificados los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podrá indicarlo así, bajo juramento que se entenderá prestado con la demanda sin que ello implique su inadmisión. El demandante tampoco estará obligado a indicar su canal digital en caso de carecer de uno, lo cual deberá manifestar en la demanda.</p> <p>Así mismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda.</p> <p>Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya lugar a este.</p> <p>Parágrafo 1: La demanda deberá ser radicada por los canales digitales dispuestos para tal fin, siempre que la misma cumpla lo dispuesto en este Artículo.</p> <p>En los asuntos laborales, el demandante no estará obligado al presentar la demanda, a enviar simultáneamente por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, tal como lo dispone el art. 6 de la Ley 2213 de 2022.</p> <p>Parágrafo 2: En los procesos de primera instancia cuya competencia esté atribuida a los jueces laborales municipales no se requerirá demanda escrita. Propuesta verbalmente se extenderá un acta en que consten: los nombres y domicilios del demandante y demandado; lo que se demanda y los hechos en que se funda la acción. Esta diligencia, será firmada por el Juez, el demandante y el Secretario, se dispondrá la citación del demandado y se impartirá el trámite que haya lugar.</p>	<p>ARTÍCULO 62º. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurren los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el juez sea competente para conocer de todas, sin tener en cuenta la cuantía. 2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. 3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. <p>También podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o varios demandantes o contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de unos y otros, en cualquiera de los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Cuando provengan de la misma causa. b) Cuando versen sobre el mismo objeto. c) Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia. d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés jurídico. <p>En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan, total o parcialmente, unos mismos bienes del demandado.</p> <p>Cuando se presente una acumulación que no cumpla con los requisitos previstos en los incisos anteriores, pero sí con los tres numerales del inciso primero, se considerará subsanado el defecto cuando no se proponga oportunamente la respectiva excepción previa.</p> <p>ARTÍCULO 63º. ANEXOS DE LA DEMANDA. La demanda deberá ir acompañada de los siguientes anexos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El poder. 2. La copia del documento de identificación del demandante. 3. Las copias de la demanda para efecto del traslado, tantas cuantas sean los demandados, tratándose de radicación física. 4. Las pruebas documentales y las anticipadas que se encuentren en poder del demandante. 5. La prueba de la existencia y representación legal, si es una persona jurídica de derecho privado que actúa como demandante o demandado.
<p>Parágrafo. Ante la imposibilidad de acompañar la prueba de la existencia y representación legal del demandado, se afirmará tal circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. Esta circunstancia no será causal de inadmisión. El Juez tomará las medidas conducentes para su obtención.</p> <p>ARTÍCULO 64º. PERSONAS CONTRA LAS CUALES SE DIRIGE LA DEMANDA. La demanda se dirigirá contra quienes tengan capacidad para ser parte, según se ha definido en este código, ya sea que puedan comparecer directamente al proceso o a través de sus representantes o voceros, o debidamente autorizados por éstos, con arreglo a las normas sustanciales.</p> <p>Parágrafo: En el caso de los establecimientos de comercio se entenderá que la demanda se propone en contra de sus propietarios.</p> <p>ARTÍCULO 65º. DEMANDA CONTRA HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS, DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA HERENCIA Y EL CÓNYUGE. Cuando se pretenda demandar en proceso declarativo o de ejecución a los herederos de una persona cuyo proceso de sucesión no se haya iniciado y cuyos nombres se ignoren, la demanda deberá dirigirse indeterminadamente contra todos los que tengan dicha calidad, y el auto admisorio ordenará emplazarlos en la forma y para los fines previstos en este código. Si se conoce a alguno de los herederos, la demanda se dirigirá contra éstos y los indeterminados.</p> <p>La demanda podrá formularse contra quienes figuren como herederos abintestato o testamentarios, aun cuando no hayan aceptado la herencia. En este caso, si los demandados o ejecutados a quienes se les hubiere notificado personalmente el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo, no manifiestan su repudio de la herencia en el término para contestar la demanda, o para proponer excepciones en el proceso ejecutivo, se considerará que para efectos procesales la aceptan.</p> <p>Cuando haya proceso de sucesión, el demandante, en proceso declarativo o ejecutivo, deberá dirigir la demanda contra los herederos reconocidos en aquél, los demás conocidos y los indeterminados, o sólo contra éstos si no existieren aquellos, contra el albacea con</p>	<p>tenencia de bienes o el administrador de la herencia yacente, si fuere el caso, y contra el cónyuge si se trata de bienes o deudas sociales.</p> <p>En los procesos de ejecución, cuando se demande solo a herederos indeterminados el juez designará un administrador provisional de bienes de la herencia.</p> <p>ARTÍCULO 66º. ADMISIÓN, INADMISIÓN Y RECHAZO DE LA DEMANDA. Si la demanda reúne las exigencias legales, el juez la admitirá, ordenará la notificación personal al demandado y el respectivo traslado, así como el reconocimiento de personería al apoderado que se ha constituido, o la autorización para actuar en causa propia si así se hace, y se dispondrá imprimirle el trámite que legalmente le corresponde, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. Así mismo, le ordenará al demandado que aporte, durante el traslado de la demanda, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el actor.</p> <p>En caso contrario, se inadmitirá mediante auto no susceptible de recurso. El juez mediante proveído relacionará con precisión y claridad los defectos de que adolece la demanda, para que el demandante los subsane en un término de cinco (5) días, so pena de ser rechazada.</p> <p>Son causales de inadmisión las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando no reúna los requisitos formales. 2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la Ley. 3. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos de Ley. 4. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante. 5. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso. 6. Cuando no se indica el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, salvo que el demandante manifieste no tener uno o desconocerlos. <p>De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias físicas ni electrónicas para el archivo del juzgado, ni para el respectivo traslado, a menos que la misma se presente en forma presencial y mediante documento físico, evento en el cual sí deberá adjuntarse con copia para los traslados al demandado o demandados.</p>

<p>El juez rechazará in limine o de plano la demanda, cuando carezca de jurisdicción o de competencia; en el mismo auto dispondrá la remisión al que considere competente.</p> <p>Parágrafo. El Juez deberá integrar la litis con quienes advierta que es necesario; ello sin perjuicio de que, en el desarrollo del proceso y antes de dictar sentencia de primera instancia, advierta la existencia de un tercero que pudiere pretender en proceso del mismo tipo, en todo o en parte, el derecho controvertido, caso en el cual deberá citársele para que comparezca al trámite, presentando su propia demanda, que se decidirá junto con la demanda inicial en una sola sentencia.</p> <p>ARTÍCULO 67º. RETIRO DE LA DEMANDA. El demandante podrá retirar la demanda mientras no se haya notificado a ninguno de los demandados. Si hubiere medidas cautelares practicadas, será necesario auto que autorice el retiro, en el cual se ordenará el levantamiento de aquellas y se condenará al demandante al pago de perjuicios, salvo acuerdo de las partes.</p> <p>El trámite del incidente para la regulación de tales perjuicios se sujetará a lo previsto en el Artículo 86 de este código (proposición y trámite de incidentes), y no impedirá el retiro de la demanda.</p> <p>ARTÍCULO 68º. REFORMA DE LA DEMANDA. La demanda podrá ser reformada, desde su presentación y hasta dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término del traslado de la inicial o de la de reconvenición, si fuere el caso.</p> <p>La reforma de la demanda procede por una sola vez, conforme a las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solamente se considerará que existe reforma de la demanda cuando haya alteración de las partes en el proceso, o de las pretensiones o de los hechos en que ellas se fundamenten, o se pidan o alleguen nuevas pruebas. 2. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las pretensiones formuladas en la demanda, pero sí prescindir de algunas o incluir nuevas. 3. Para reformar la demanda es necesario presentarla debidamente integrada en un solo escrito. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dentro del nuevo traslado el demandado podrá ejercitar las mismas facultades que durante el inicial. <p>El auto que admita la reforma de la demanda, se notificará por estado y se correrá traslado por cinco (5) días para su contestación. Si se incluyen nuevos demandados, la notificación se hará a estos como se dispone para el auto admisorio de la demanda.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO II CONTESTACIÓN</p> <p>ARTÍCULO 69º. FORMA Y REQUISITOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. La contestación de la demanda contendrá:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El nombre del demandado, su domicilio, dirección física, correo electrónico y canal digital, los de su representante o su apoderado en caso de no comparecer por sí mismo. 2. Una manifestación expresa sobre cada pretensión. 3. Un pronunciamiento concreto sobre cada uno de los hechos de la demanda, indicando los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan. En los dos últimos casos señalará las razones de su respuesta. Si no se hiciera así, en el auto que admita la respuesta a la demanda, se tendrán como probados los respectivos hechos, siempre y cuando no requieran prueba solemne. 4. Los hechos, fundamentos y razones de derecho de su defensa. 5. La petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba. 6. Las excepciones que pretenda hacer valer, debidamente fundamentada. <p>Parágrafo 1º. La contestación de la demanda deberá ir acompañada de los siguientes anexos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El poder, si no obra en el expediente. 2. Las pruebas documentales pedidas en la contestación de la demanda, y los documentos relacionados en la demanda que se encuentren en su poder. 3. Las pruebas anticipadas que se encuentren en su poder. 4. La prueba de su existencia y representación legal, si es una persona jurídica de derecho privado.
<p>Parágrafo 2º. La falta de contestación de la demanda o de su reforma tendrá como consecuencia la consagrada en el numeral 3 del presente artículo.</p> <p>Parágrafo 3º. Cuando la contestación de la demanda no reúna los requisitos de este artículo, salvo el señalado en el numeral 3, o no esté acompañada de los anexos distintos a las pruebas que pretenda hacer valer la parte demandada, el juez le señalará los defectos de que ella adolezca para que el demandado los subsane en el término de cinco (5) días, si no lo hiciera se tendrá por no contestada con los efectos señalados en este artículo.</p> <p>ARTÍCULO 70º. ALLANAMIENTO A LA DEMANDA. En la contestación o en cualquier momento anterior a la sentencia de primera instancia el demandado podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda reconociendo sus fundamentos de hecho, caso en el cual se procederá a dictar sentencia de conformidad con lo pedido. Sin embargo, el juez podrá rechazar el allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando advierta fraude, colusión o cualquier otra situación similar.</p> <p>Cuando el allanamiento no se refiera a la totalidad de las pretensiones de la demanda o no provenga de todos los demandados, el juez proferirá sentencia parcial y el proceso continuará respecto de las pretensiones no allanadas y de los demandados que no se allanaron.</p> <p>ARTÍCULO 71º. INEFICACIA DEL ALLANAMIENTO. El allanamiento será ineficaz en los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando el demandado no tenga capacidad dispositiva. 2. Cuando el derecho no sea susceptible de disposición de las partes. 3. Cuando los hechos admitidos no puedan probarse por confesión. 4. Cuando se haga por medio de apoderado y éste carezca de facultad para allanarse. 5. Cuando la sentencia deba producir efectos de cosa juzgada respecto de terceros. 6. Cuando habiendo litisconsorcio necesario no provenga de todos los demandados. <p>ARTÍCULO 72º. PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONTUMACIA. Cuando notificada personalmente la demanda al demandado o a su representante, no fuere contestada o</p>	<p>ninguno de estos compareciere a las audiencias, sin excusa debidamente comprobada, se continuará el proceso sin necesidad de nueva citación.</p> <p>Si el demandante o su representante no concurrieren a las audiencias, sin excusa debidamente comprobada, se continuará el proceso sin su asistencia.</p> <p>Si no compareciere ninguna de las partes se seguirá la actuación sin asistencia de ellas. Todo lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto para la audiencia inicial.</p> <p>Si se presentaren las partes o una de ellas antes de dictarse la sentencia, y el juez estimare justo el motivo de la inasistencia, podrá señalar día y hora para la celebración de audiencia de trámite.</p> <p>Parágrafo. Si transcurridos un (1) año a partir del auto admisorio de la demanda, no se hubiere efectuado gestión alguna para su notificación el juez ordenará el archivo de las diligencias o dispondrá que se continúe el trámite con la demanda principal únicamente.</p> <p>Lo anterior sin perjuicio de que en cualquier momento se pueda solicitar el desarchivo.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO III EXCEPCIONES</p> <p>ARTÍCULO 73º. EXCEPCIONES PREVIAS. Salvo disposición en contrario, el demandado solamente podrá proponer las siguientes excepciones previas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de jurisdicción o de competencia. 2. Compromiso o cláusula compromisoria. 3. Inexistencia del demandante o del demandado. 4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. 5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. 6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.

<p>7. Habérselo dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde. 8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. 9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.</p> <p>10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar. 11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada. 12. Prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión. 13. Cosa Juzgada.</p> <p>ARTÍCULO 74º. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE DE LAS MEDIDAS DE DEPURACIÓN O SANEAMIENTO. Las excepciones previas se formularán en el término del traslado de la demanda que deberá expresar las razones y hechos en que se fundamentan. Al escrito deberán acompañarse todas las pruebas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandado.</p> <p>El juez se abstendrá de decretar pruebas de otra clase, salvo cuando se alegue la falta de competencia por el domicilio de persona natural o por el lugar donde ocurrieron hechos, o la falta de integración del litisconsorcio necesario, casos en los cuales además podrá practicar hasta dos testimonios.</p> <p>Las excepciones previas se tramitarán y decidirán de la siguiente manera:</p> <p>1. En el auto que señale fecha y hora para celebrar la audiencia inicial, se correrá traslado al demandante, del escrito que las contenga, por el término de tres (3) días, para que se pronuncie sobre ellas y, si fuere el caso, subsane los defectos anotados.</p> <p>2. El juez decidirá sobre las medidas de saneamiento que no requieran la práctica de pruebas, antes de la audiencia inicial y si prospera alguna que impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente, declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante.</p> <p>3. Cuando se requiera la práctica de pruebas, el juez mediante auto que señale la fecha de audiencia inicial, las decretará y resolverá respecto de aquellas en la audiencia concentrada que consagra este Código, adoptando medidas de saneamiento que correspondan.</p>	<p>Si prospera la de falta de jurisdicción o competencia, se ordenará remitir el expediente al juez que corresponda y lo actuado conservará su validez.</p> <p>Si prospera la de compromiso o cláusula compromisoria, se decretará la terminación del proceso y se devolverá al demandante la demanda con sus anexos.</p> <p>Si prospera la de trámite inadecuado, el juez ordenará darle el trámite que legalmente le corresponda.</p> <p>Cuando prospere alguna de las medidas previstas en los numerales 9, 10 y 11 del Artículo (74), el juez ordenará la respectiva citación.</p> <p>4. Si se hubiere corregido, aclarado o reformado la demanda, sólo se tramitarán una vez vencido el traslado. Si con aquella se subsanan los defectos alegados en las medidas, así se declarará.</p> <p>Dentro del traslado de la reforma el demandado podrá proponer nuevas medidas de saneamiento siempre que se originen en dicha reforma. Estas y las anteriores que no hubieren quedado subsanadas se tramitarán conjuntamente una vez vencido dicho traslado.</p> <p>5. Cuando, como consecuencia de prosperar una de las medidas propuestas, sea devuelta la demanda inicial o la de reconvenición, el proceso continuará respecto de la otra.</p> <p>ARTÍCULO 75º. INOPONIBILIDAD POSTERIOR DE LOS MISMOS HECHOS. Los hechos que configuren excepciones previas no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones.</p> <p style="text-align: center;">SECCIÓN SEGUNDA REGLAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO</p> <p style="text-align: center;">TÍTULO ÚNICO ACTUACIÓN</p>
<p style="text-align: center;">CAPÍTULO I DISPOSICIONES VARIAS</p> <p>ARTÍCULO 76º. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES. En el trámite y actuaciones de que conoce la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social, se usarán las tecnologías de la información y las comunicaciones, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura. En todo caso, se permitirá el uso de medios físicos, cuando no sea posible hacerlo por los canales digitales.</p> <p>El correo electrónico al cual se remitirán las actuaciones procesales a las partes, sus representantes y apoderados, será el que se haya indicado con la demanda, o en cualquier otro acto del proceso.</p> <p>Si se desconoce el correo electrónico de alguna de las partes, sus representantes o apoderados, la comunicación y publicidad de las actuaciones se realizará en los términos de este código para las actuaciones adelantadas por medios físicos.</p> <p>La autoridad judicial, contará con mecanismos que permitan generar, archivar y comunicar mensajes de datos.</p> <p>Parágrafo. En los eventos en que los sujetos procesales o la autoridad judicial no cuenten con los medios tecnológicos adecuados, la actuación se adelantará a través de los medios digitales o físicos disponibles, siempre que medie autorización judicial o consentimiento de las partes, evitando exigir formalidades que no sean estrictamente necesarias, prestando especial atención a la población rural, los grupos étnicos y personas con discapacidad que enfrentan barreras para el acceso a las tecnologías de información y las comunicaciones.</p> <p>En el expediente se dejará constancia de aquella situación.</p> <p>ARTÍCULO 77º. PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE LAS COMUNICACIONES. Se presumen auténticos:</p>	<p>a) Las comunicaciones mediante las cuales los funcionarios, los secretarios, o los empleados que hagan sus veces, remitan las actuaciones procesales mediante mensaje de datos, siempre que provengan del correo electrónico oficial de la autoridad judicial. b) Los memoriales y demás comunicaciones cruzadas entre las autoridades judiciales y las partes o sus abogados, cuando sean originadas desde el correo electrónico suministrado en la demanda o en cualquier otro acto del proceso. c) La reproducción efectuada a partir de los respectivos archivos electrónicos.</p> <p>En los anteriores casos, la diligencia de envío de alguna comunicación o acto a la dirección del afectado o interesado, cumple con el principio de publicidad, y garantiza el debido proceso, por ende, será válido sólo a partir del acuse de recibido de la comunicación que la contiene; o la constatación del acceso del destinatario al mensaje. La sola remisión del correo no da por surtida la actuación que se pretende comunicar.</p> <p>Parágrafo 1. Además del uso de correo, canal o dirección electrónica, también podrán utilizarse otros sistemas de envío, transmisión, acceso y almacenamiento de mensajes de datos, siempre que garanticen la autenticidad e integridad de la información.</p> <p>Parágrafo 2º. Cuando el documento electrónico o el mensaje de datos carezca de firma, el juez podrá adquirir certeza sobre su autoría, mediante el reconocimiento que del mismo haga la persona a quien se le atribuye o el que hagan sus causahabientes.</p> <p>Podrá la parte que lo aportó tramitar el incidente de autenticidad, en el que le incumbirá la carga de probarla.</p> <p>ARTÍCULO 78º. FIRMAS. En todos sus actos escritos, los funcionarios y empleados judiciales deberán usar firma acompañada de antifirma. También podrán usar firma electrónica o digital, de conformidad con las normas correspondientes.</p> <p>ARTÍCULO 79º. IDIOMA. En todo proceso laboral se empleará el idioma castellano.</p> <p>No obstante lo anterior, los operadores judiciales autorizados por los instrumentos legales y/o que dominen las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, oficiales en sus territorios, realizarán audiencias empleando tales expresiones lingüísticas, a solicitud de las partes. El juez designará a un servidor, auxiliar de la justicia o particular para que preste la función de</p>

<p>intérprete, quien tomará posesión para ese encargo en la misma audiencia. Cuando sea necesario, de oficio o a petición de parte, se hará la traducción correspondiente.</p> <p>ARTÍCULO 80º. DECLARACIÓN CON INTÉRPRETE. Siempre que deba recibirse declaración a una persona en situación de discapacidad que se dé a entender por signos o alguna persona que no entienda el castellano o no se exprese en este idioma, se designará por el juez un intérprete idóneo, quien deberá tomar posesión del cargo.</p> <p>Del mismo modo se procederá cuando sea necesario examinar documentos que se encuentren en otro idioma.</p> <p>ARTÍCULO 81º. PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. La secretaria hará constar la fecha y hora de presentación de los memoriales y comunicaciones que reciba, los agregará al expediente respectivo y, los ingresará al despacho a más tardar el día siguiente.</p> <p>Cuando se trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga señalado un término común, el secretario deberá esperar a que éste transcurra en relación con todas las partes.</p> <p>Los memoriales se presentarán y las comunicaciones se transmitirán por cualquier medio electrónico idóneo al correo institucional del despacho.</p> <p>La secretaria llevará un estricto control y relación de los mensajes de datos recibidos que incluya la fecha y hora de recepción. También mantendrán el buzón del correo electrónico con disponibilidad suficiente para recibir los mensajes de datos.</p> <p>Los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos dentro del horario de servicios preestablecido por la autoridad competente, al despacho judicial correspondiente.</p> <p>Los abogados tienen el deber de remitir a la contraparte, a través del correo electrónico registrado en el proceso de manera simultánea, un ejemplar del memorial o actuación que realice, excepto lo contemplado en el parágrafo del artículo 61.</p> <p>Se exceptúa la petición de medidas cautelares.</p>	<p>El incumplimiento de este deber no afecta la validez de la actuación, pero la parte afectada podrá solicitar al juez la imposición de una multa hasta por un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) por cada infracción.</p> <p>ARTÍCULO 82º. TRASLADOS. Cualquier traslado que deba surtir en audiencia se cumplirá permitiéndole a la parte respectiva que haga uso de la palabra.</p> <p>Salvo norma en contrario, todo traslado que deba surtir por fuera de audiencia, se surtirá en secretaria por el término de tres (3) días y no requerirá auto ni constancia en el expediente. Estos traslados se incluirán en una lista que se mantendrá a disposición de las partes en la secretaria del juzgado por un (1) día y correrán desde el siguiente.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO II COPIAS, CERTIFICACIONES Y DESGLOSES</p> <p>ARTÍCULO 83º. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. Salvo que exista reserva, del expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias o el acceso virtual con observancia de las reglas siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A petición verbal el secretario expedirá copias sin necesidad de auto que las autorice. 2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria. 3. Las copias que expida el secretario se autenticarán cuando lo exija la ley o lo pida el interesado. 4. Siempre que sea necesario reproducir todo o parte del expediente para el trámite de un recurso o de cualquiera otra actuación, se utilizarán los medios técnicos disponibles. Si careciere de ellos, será de cargo de la parte interesada pagar el valor de la reproducción dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ordene, so pena de que se declare desierto el recurso o terminada la respectiva actuación. 5. Cuando deban expedirse copias por solicitud de otra autoridad, podrán ser adicionadas de oficio o a solicitud de parte.
<p>ARTÍCULO 84º. CERTIFICACIONES. El secretario, por solicitud verbal o escrita, puede expedir certificaciones sobre la existencia de procesos, el estado de los mismos y la ejecutoria de providencias judiciales, sin necesidad de auto que las ordene. El juez expedirá certificaciones sobre hechos ocurridos en su presencia y en ejercicio de sus funciones de que no haya constancia en el expediente, y en los demás casos autorizados por la ley.</p> <p>ARTÍCULO 85º. DESGLOSES. Los documentos podrán desglosarse del expediente y entregarse a quien los haya presentado, una vez precluida la oportunidad para tacharlos de falsos o desestimada la tacha, todo con sujeción a las siguientes reglas y por orden del juez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los documentos aducidos por los acreedores como títulos ejecutivos podrán desglosarse: <ol style="list-style-type: none"> a) Cuando contengan crédito distinto del que se cobra en el proceso, para lo cual el secretario hará constar en cada documento qué crédito es el allí exigido; b) Cuando en ellos aparezcan hipotecas o prendas que garanticen otras obligaciones; c) Una vez terminado el proceso, caso en el cual se hará constar en cada documento si la obligación se ha extinguido en todo o en parte; y, d) Cuando lo solicite un juez penal en procesos sobre falsedad material del documento. 2. En los demás procesos, al desglosarse un documento en que conste una obligación, con indicación del modo que la produjo y demás circunstancias relevantes. 3. En todos los casos en que la obligación haya sido cumplida en su totalidad por el deudor, el documento contentivo de la obligación sólo podrá desglosarse a petición suya, a quien se entregará con constancia de la cancelación. 4. En el expediente se dejará una reproducción del documento desglosado. <p style="text-align: center;">CAPÍTULO III RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES</p>	<p>ARTÍCULO 86. TRÁMITE PARA LA RECONSTRUCCIÓN. En caso de pérdida total o parcial de un expediente se procederá así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El apoderado de la parte interesada formulará su solicitud de reconstrucción y expresará el estado en que se encontraba el proceso y la actuación surtida en él. La reconstrucción también procederá de oficio. 2. El juez fijará fecha para audiencia con el objeto de comprobar la actuación surtida y el estado en que se hallaba el proceso, para lo cual ordenará a las partes que aporten las grabaciones y documentos que posean. En la misma audiencia resolverá sobre la reconstrucción. 3. Si solo concurriere a la audiencia una de las partes o su apoderado, se declarará reconstruido el expediente con base en la exposición jurada y las demás pruebas que se aduzcan en ella. 4. Cuando se trate de pérdida total del expediente y las partes no concurran a la audiencia o la reconstrucción no fuere posible, o de pérdida parcial que impida la continuación del proceso, el juez declarará terminado el proceso, quedando a salvo el derecho que tenga el demandante a promoverlo de nuevo. 5. Reconstruido totalmente el expediente, o de manera parcial que no impida la continuación del proceso, este se adelantará, incluido, con prescindencia de lo perdido o destruido. <p>ARTÍCULO 87. FORMACIÓN Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES. De cada proceso en curso se formará un expediente, en el que se insertará la demanda, su contestación, y los demás documentos que le correspondan. En él se tomará nota de los datos que identifiquen las grabaciones en que se registren las audiencias y diligencias.</p> <p>En aquellos juzgados en los que se encuentre implementado el Plan de Justicia Digital, el expediente estará conformado íntegramente por mensajes de datos.</p> <p>Los memoriales o demás documentos que sean remitidos como mensaje de datos, por correo electrónico o medios tecnológicos similares, serán incorporados al expediente cuando hayan sido enviados a la cuenta del juzgado desde una dirección electrónica inscrita por el sujeto procesal respectivo.</p> <p>Cuando el proceso conste en un expediente físico, los mencionados documentos y el mensaje de datos a través del cual fueron remitidos, se incorporarán a este de forma impresa, con la finalidad de dejar constancia acerca de la fecha y hora en la que fue recibido</p>

<p>en la cuenta de correo del despacho, y la información de la cuenta desde la cual fue enviado el mensaje de datos. El despacho deberá conservar el mensaje recibido en su cuenta de correo, y en otro soporte que permita la conservación del mensaje en el mismo formato en que fue generado, por lo menos, hasta que el proceso sea archivado de forma definitiva. Las expensas generadas por las impresiones harán parte de la liquidación de costas.</p> <p>El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.</p> <p>ARTÍCULO 88. EXAMEN DE LOS EXPEDIENTES. Los expedientes sólo podrán ser examinados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes autorizados por éstos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los asuntos en que aquellos intervengan. 2. Por los abogados inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes. Estos podrán examinar el expediente una vez se haya notificado a la parte demandada. 3. Por los auxiliares de la justicia en los casos donde estén actuando, para lo de su cargo. 4. Por los funcionarios públicos en razón de su cargo. 5. Por las personas autorizadas por el juez con fines de docencia o de investigación científica. 6. Por los directores y miembros de consultorio jurídico debidamente acreditados, en los casos donde actúen. <p>Hallándose pendiente alguna notificación que deba hacerse personalmente a una parte o a su apoderado, estos solo podrán examinar el expediente después de surtida la notificación.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO III INCIDENTES</p>	<p>ARTÍCULO 89º. PROPOSICIÓN Y TRÁMITE DE INCIDENTES. Los incidentes sólo podrán proponerse en la audiencia inicial, a menos de que se trate de hechos ocurridos con posterioridad. Quien los propone deberá aportar las pruebas en la misma audiencia; se decidirán en la sentencia definitiva, salvo los que por su naturaleza y fines requieren de una decisión previa.</p> <p>ARTÍCULO 90º. INTERVENCIÓN EN INCIDENTES O PARA TRÁMITES ESPECIALES. Cuando la intervención se concrete a un incidente o trámite, el interviniente sólo será parte en ellos.</p> <p>ARTÍCULO 91º. IRREVERSIBILIDAD DEL PROCESO. Las partes, los terceros intervinientes y sucesores de que trata este código tomarán el proceso en el estado en que se halle en el momento de su intervención o comparecencia, garantizando los derechos aquí consagrados.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO IV NULIDADES</p> <p>ARTÍCULO 92º. CAUSALES DE NULIDAD. El juez deberá, en todo caso, precaver nulidades procesales a efectos de impartir decisión de fondo en los asuntos sometidos a su conocimiento y resolución.</p> <p>El proceso laboral es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. 2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida. 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.
<ol style="list-style-type: none"> 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. 6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. 7. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas o el emplazamiento de las demás, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes o que deban suceder en el proceso a cualquiera de ellas, cuando la ley así lo ordena o no se cita en debida forma a alguna otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió serlo. 8. Cuando se omite surtir el grado jurisdiccional de consulta en los términos que este código regula. <p>Parágrafo 1º. Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.</p> <p>Parágrafo 2º. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.</p> <p>ARTÍCULO 93º. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a esta, si ocurrieren en ella.</p> <p>La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrá también alegarse en la diligencia de entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades.</p> <p>Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo, incluso con posterioridad a la orden de seguir adelante con la ejecución, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores o por cualquier otra causa legal.</p>	<p>El juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica de las pruebas que fueren necesarias.</p> <p>La nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento, sólo beneficiará a quien la haya invocado. Cuando exista litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se integrará el contradictorio.</p> <p>ARTÍCULO 94º. REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD. La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada, los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.</p> <p>No podrá alegar la nulidad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quien haya dado lugar al hecho que la origina. 2. Quien omitió alegarla como excepción previa, si tuvo oportunidad para hacerlo. 3. Quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla. <p>La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento sólo podrá ser alegada por la persona afectada.</p> <p>El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación.</p> <p>ARTÍCULO 95º. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN O COMPETENCIA Y DE LA NULIDAD DECLARADA. Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; quien invalidará la sentencia si se hubiere dictado.</p> <p>La nulidad sólo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares practicadas.</p>

<p>El auto que declare una nulidad indicará concretamente la actuación que debe renovarse:</p> <p>ARTÍCULO 96º. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD. En los procesos laborales la nulidad se considerará saneada en los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla. 2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada. 3. Cuando se origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa. 4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa. <p>Parágrafo 1. Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido, pretermitir íntegramente la respectiva instancia, son insaneables.</p> <p>Parágrafo 2. En cualquier estado del proceso el juez ordenará poner en conocimiento de la parte afectada las nulidades que no hayan sido saneadas. Cuando se originen en las causales 4, 6 y 7 del artículo 89, el auto se le notificará al afectado de conformidad con las reglas generales previstas en los artículos 208 al 211. Si dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación dicha parte no alega la nulidad, ésta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario el juez la declarará.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO V CONFLICTOS DE COMPETENCIA, IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES, ACUMULACIÓN DE PROCESOS, AMPARO DE POBREZA, INTERRUPTIÓN Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO</p> <p>ARTÍCULO 97º. CONFLICTOS DE COMPETENCIA Y TRÁMITE. Siempre que el juez declare su falta de competencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente,</p>	<p>solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.</p> <p>El juez no podrá declarar su falta de competencia cuando ésta haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.</p> <p>El juez que reciba el expediente no podrá rehusar su competencia cuando le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.</p> <p>El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.</p> <p>Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.</p> <p>La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO VI IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES</p> <p>ARTÍCULO 98º. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS. Los magistrados, jueces, conjuces, en quienes concurra alguna causal de recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta.</p> <p>El juez impedido pasará el expediente al que deba reemplazarlo, quien si encuentra configurada la causal asumirá su conocimiento. En caso contrario, remitirá el expediente al superior para que resuelva.</p> <p>Si el superior encuentra fundado el impedimento enviará el expediente al juez que debe reemplazar al impedido. Si lo considera infundado lo devolverá al juez que venía conociendo de él.</p>
<p>El magistrado o conjuce que se considere impedido pondrá los hechos en conocimiento del que le sigue en turno en la respectiva sala, con expresión de la causal invocada y de los hechos en que se funda, para que resuelva sobre el impedimento y en caso de aceptarlo pase el expediente a quien deba reemplazarlo o fije fecha y hora para el sorteo de conjuce, si hubiere lugar a ello.</p> <p>El auto en que se manifieste el impedimento, el que lo decida y el que disponga el envío del expediente, no admiten recurso.</p> <p>Cuando se declaren impedidos varios o todos los magistrados de una misma sala del tribunal o de la Corte, todos los impedimentos se tramitarán conjuntamente y se resolverán en un mismo acto por sala de conjuces.</p> <p>ARTÍCULO 99º. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso. 2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, acción constitucional, o trámite arbitral, relacionado con el mismo asunto, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente. 3. Ser cónyuge, compañero permanente o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. 4. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, curador, consejero o administrador de bienes de cualquiera de las partes. 5. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios. 6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado. 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación. 8. Haber formulado el juez, su cónyuge, compañero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, denuncia penal o disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil o víctima en el respectivo proceso penal. 9. Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado. 10. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, o primero de afinidad, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito, sociedad anónima o empresa de servicio público. 11. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las partes o su representante o apoderado en sociedad de personas. 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. 13. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las partes, antes de la iniciación del proceso. 14. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar.

<p>ARTÍCULO 100º. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA RECUSACIÓN. Podrá formularse la recusación en cualquier momento del proceso, de la ejecución de la sentencia, de la complementación de la condena en concreto o de la actuación para practicar pruebas o medidas cautelares extraprocesales.</p> <p>No podrá recusar quien sin formular la recusación haya hecho cualquier gestión en el proceso después de que el juez haya asumido su conocimiento, si la causal invocada fuere anterior a dicha gestión, ni quien haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación. En estos casos la recusación debe ser rechazada de plano.</p> <p>No habrá lugar a recusación cuando la causal se origine por cambio de apoderado de una de las partes, a menos que la formule la parte contraria. En este caso, si la recusación prospera, en la misma providencia se impondrá a quien hizo la designación y al designado; solidariamente, multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales.</p> <p>No serán recusables ni podrán declararse impedidos los magistrados o jueces a quienes corresponde conocer de la recusación, ni los que deben dirimir los conflictos de competencia, ni los funcionarios comisionados.</p> <p>Cuando la recusación se base en causal diferente a las previstas en este capítulo, el juez debe rechazarla de plano mediante auto que no admite recurso.</p> <p>ARTÍCULO 101º. FORMULACIÓN Y TRÁMITE DE LA RECUSACIÓN. La recusación se propondrá ante el juez del conocimiento o el magistrado ponente, con expresión de la causal alegada, de los hechos en que se fundamenta y de las pruebas que se pretenda hacer valer.</p> <p>Si la causal alegada es la del numeral 7 del Artículo 99, deberá acompañarse la prueba correspondiente.</p> <p>Cuando el juez recusado acepte los hechos y la procedencia de la causal, en la misma providencia se declarará separado del proceso o trámite, ordenará su envío a quien debe reemplazarlo, y aplicará lo dispuesto en el Artículo 98. Si no acepta como ciertos los hechos alegados por el recusante o considera que no están comprendidos en ninguna de las causales de recusación, remitirá el expediente al superior, quien decidirá de plano si considera que no se requiere la práctica de pruebas; en caso contrario decretará las que de</p>	<p>oficio estime convenientes y fijará fecha y hora para audiencia con el fin de practicarlas, cumplido lo cual pronunciará su decisión.</p> <p>La recusación de un magistrado o conjuer la resolverá el que le siga en turno en la respectiva sala, con observancia de lo dispuesto en el inciso anterior, en lo pertinente.</p> <p>Si se recusa simultáneamente a dos o más magistrados de una sala, cada uno de ellos deberá actuar como se indica en el inciso 3o, en cuanto fuere procedente. Corresponderá al magistrado que no fue recusado tramitar y decidir la recusación.</p> <p>Si se recusa a todos los magistrados de una sala de decisión, cada uno de ellos deberá proceder como se indica en el inciso 3o, siguiendo el orden alfabético de apellidos. Cumplido esto corresponderá al magistrado de la siguiente sala de decisión, por orden alfabético de apellidos, tramitar y decidir la recusación.</p> <p>Si no existe otra sala de decisión, corresponderá conocer de la recusación al magistrado de una sala de otra especialidad, a quien por reparto se le asigne.</p> <p>Cuando se aleguen causales de recusación que existan en el mismo momento contra varios magistrados del tribunal superior o de la Corte Suprema de Justicia, deberá formularse simultáneamente la recusación de todos ellos, y si así no se hiciere se rechazarán de plano las posteriores recusaciones. Todas las recusaciones se resolverán en un mismo auto.</p> <p>Siempre que se declare procedente la recusación de un magistrado, en el mismo auto se ordenará que sea sustituido por quien deba reemplazarlo.</p> <p>En el trámite de la recusación el recusado no es parte y las providencias que se dicten no son susceptibles de recurso alguno.</p> <p>ARTÍCULO 102º. JUEZ O MAGISTRADO QUE DEBE REEMPLAZAR AL IMPEDIDO O RECUSADO. El juez que deba separarse del conocimiento por impedimento o recusación será reemplazado por el del mismo ramo y categoría que le siga en turno atendiendo el orden numérico, y a falta de este por el juez de igual categoría, promiscuo o de otra especialidad que determine la corporación respectiva.</p>
<p>El magistrado o conjuer impedido o recusado será reemplazado por el que siga en turno o por un conjuer si no fuere posible integrar la sala por ese medio.</p> <p>Parágrafo. Sin perjuicio de la prelación que corresponde a las acciones constitucionales, la tramitación de los impedimentos y recusaciones tendrá preferencia.</p> <p>ARTÍCULO 103º. SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR IMPEDIMENTO O RECUSACIÓN. El proceso se suspenderá desde que el funcionario se declare impedido o se formule la recusación hasta cuando se resuelva, sin que por ello se afecte la validez de los actos surtidos con anterioridad.</p> <p>Cuando se hubiere señalado fecha para una audiencia o diligencia, esta solo se suspenderá si la recusación se presenta por lo menos cinco (5) días antes de su celebración.</p> <p>En caso que la recusación resulte procedente, el nuevo juez deberá revisar la validez de todo lo actuado.</p> <p>ARTÍCULO 104º. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES DE LOS SECRETARIOS. Los secretarios están impedidos y pueden ser recusados en la misma oportunidad y por las causales señaladas para los jueces, salvo las de los numerales 2 y 12 del artículo 99.</p> <p>De los impedimentos y recusaciones de los secretarios conocerá el juez o el magistrado ponente.</p> <p>Aceptado el impedimento o formulada la recusación, actuará como secretario el oficial mayor, si lo hubiere, y en su defecto la sala o el juez designará un secretario ad hoc, quien seguirá actuando si prospera la recusación. Los autos que decidan el impedimento o la recusación no tienen recurso alguno. En este caso la recusación no suspende el curso del proceso.</p> <p>ARTÍCULO 105º. SANCIONES AL RECUSANTE. Cuando una recusación se declare no probada y se disponga que hubo temeridad o mala fe en su proposición; en el mismo auto se</p>	<p>impondrá al recusante y al apoderado de este, solidariamente, multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a que haya lugar.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO VII ACUMULACIÓN DE PROCESOS Y DEMANDAS</p> <p>ARTÍCULO 106º. PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN EN LOS PROCESOS DECLARATIVOS. Para la acumulación de procesos y demandas se aplicarán las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acumulación de procesos. De oficio o a petición de parte podrán acumularse dos (2) o más procesos que se encuentren en la misma instancia, aunque no se haya notificado el auto admisorio de la demanda, siempre que deban tramitarse por el mismo procedimiento, en cualquiera de los siguientes casos: <ol style="list-style-type: none"> a) Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda. b) Cuando se trate de pretensiones conexas y las partes sean demandantes y demandados recíprocos. c) Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones de mérito propuestas se fundamenten en los mismos hechos. 2. Acumulación de demandas. Aun antes de haber sido notificado el auto admisorio de la demanda, podrán formularse nuevas demandas declarativas en los mismos eventos en que hubiese sido procedente la acumulación de pretensiones. 3. Disposiciones comunes. Las acumulaciones en los procesos declarativos procederán hasta antes de señalarse fecha y hora para la audiencia inicial. <p>Si en alguno de los procesos ya se hubiere notificado al demandado el auto admisorio de la demanda, al decretarse la acumulación de procesos se dispondrá la notificación por estado del auto admisorio que estuviere pendiente de notificación.</p> <p>De la misma manera se notificará el auto admisorio de la nueva demanda acumulada, cuando el demandado ya esté notificado en el proceso donde se presenta la acumulación.</p>

<p>En estos casos el demandado podrá solicitar en la secretaría que se le suministre la reproducción de la demanda y de sus anexos dentro de los tres (3) días siguientes, vencidos los cuales comenzará a correr el término de ejecutoria y el de traslado de la demanda que estaba pendiente de notificación al momento de la acumulación.</p> <p>Cuando un demandado no se hubiere notificado personalmente en ninguno de los procesos, se aplicarán las reglas generales.</p> <p>La acumulación de demandas y de procesos ejecutivos se registrará por lo dispuesto en los Artículos 463 y 464 del CGP (acumulación de demandas – acumulación de procesos ejecutivos).</p> <p>ARTÍCULO 107º. COMPETENCIA. Cuando alguno de los procesos o demandas objeto de acumulación corresponda a un juez de superior categoría, se le remitirá el expediente para que resuelva y continúe conociendo del proceso. En los demás casos asumirá la competencia el juez que adelante el proceso más antiguo, lo cual se determinará por la fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo al demandado, o de la práctica de medidas cautelares.</p> <p>ARTÍCULO 108º. TRÁMITE. Quien solicite la acumulación de procesos o presente demanda acumulada, deberá expresar las razones en que se apoya.</p> <p>Cuando los procesos por acumular cursen en el mismo despacho judicial, la solicitud de acumulación se decidirá de plano. Si los otros procesos cuya acumulación se solicita cursan en distintos despachos judiciales, el peticionario indicará con precisión el estado en que se encuentren y aportará copia de las demandas con que fueron promovidos.</p> <p>Si el juez ordena la acumulación de procesos, se oficiará al que conozca de los otros para que remita los expedientes respectivos.</p> <p>Los procesos o demandas acumuladas se tramitarán conjuntamente, con suspensión de la actuación más adelantada, hasta que se encuentren en el mismo estado, y se decidirán en la misma sentencia.</p>	<p>Cuando los procesos por acumular cursen en el mismo despacho judicial, la acumulación oficiosa o requerida se decidirá de plano. Si cursan en diferentes despachos, el juez, cuando obre de oficio, solicitará la certificación y las copias respectivas por el medio más expedito.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo VIII Amparo de pobreza</p> <p>ARTÍCULO 109º. PROCEDENCIA. Se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso.</p> <p>ARTÍCULO 110º. OPORTUNIDAD, COMPETENCIA Y REQUISITOS. El amparo podrá solicitarse por el presunto demandante antes o con la presentación de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso. En tratándose de la solicitud presentada antes de la demanda deberá someterse a reparto, si fuere el caso.</p> <p>El solicitante o su apoderado deberá afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones previstas en el artículo precedente. A la solicitud se acompañará prueba siquiera sumaria de dicha condición o del registro oficial que lo acredite como persona en condición de pobreza vigente al momento de la presentación de la demanda. Si se trata de demandante que actúe por medio de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado.</p> <p>Cuando se trate de demandado o persona citada o emplazada para que concurra al proceso, que actúe por medio de apoderado, y el término para contestar la demanda o comparecer no haya vencido, el solicitante deberá presentar, simultáneamente la contestación de aquella, el escrito de intervención y la solicitud de amparo; si fuere el caso de designarle apoderado, el término para contestar la demanda o para comparecer se suspenderá hasta cuando éste acepte el encargo.</p> <p>El apoderado del solicitante podrá realizar la misma petición siempre que en el poder se encuentre facultado para ello y se consigne que bajo gravedad de juramento el solicitante se encuentra bajo esa condición.</p>
<p>ARTÍCULO 111º. TRÁMITE. Cuando se presente junto con la demanda, o la solicitud de amparo se resolverá en el auto admisorio de la demanda.</p> <p>ARTÍCULO 112º. EFECTOS. El amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será condenado en costas.</p> <p>En la providencia que conceda el amparo el juez designará el apoderado que represente en el proceso al amparado, en la forma prevista para los curadores ad litem, salvo que aquel lo haya designado por su cuenta.</p> <p>El cargo de apoderado será de forzoso desempeño y el designado deberá manifestar su aceptación o presentar prueba del motivo que justifique su rechazo, dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación de la designación; si no lo hiciera, incurrirá en falta a la debida diligencia profesional, será excluido de toda lista en la que sea requisito ser abogado y sancionado con multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).</p> <p>Si el apoderado no reside en el lugar donde deba tramitarse la segunda instancia o el recurso de casación, el funcionario correspondiente procederá en la forma prevista en este Artículo a designar el que deba sustituirlo.</p> <p>Están impedidos para apoderar al amparado los abogados que se encuentren, en relación con el amparado o con la parte contraria, en alguno de los casos de impedimento de los jueces. El impedimento deberá manifestarse dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación de la designación.</p> <p>Salvo que el juez rechace la solicitud de amparo, su presentación antes de la demanda interrumpe la prescripción que corra contra quien la formula siempre que la demanda se presente dentro de los treinta (30) días siguientes a la aceptación del apoderado que el juez designe y se cumpla lo dispuesto en el artículo 310.</p> <p>El amparado gozará de los beneficios que este Artículo consagra, desde la presentación de la solicitud.</p>	<p>ARTÍCULO 113º. REMUNERACIÓN DEL APODERADO. Al apoderado corresponden las agencias en derecho que el juez señale a cargo de la parte contraria.</p> <p>Si el amparado obtiene provecho económico por razón del proceso, deberá pagar al apoderado el veinte por ciento (20%) de tal provecho si el proceso fuere declarativo y el diez por ciento (10%) en los demás casos. El juez regulará los honorarios de plano.</p> <p>Si el amparado constituye apoderado, el que designó el juez podrá pedir la regulación de sus honorarios, como dispone el artículo 56.</p> <p>ARTÍCULO 114º. FACULTADES Y RESPONSABILIDAD DEL APODERADO. El apoderado que designe el juez tendrá las facultades de los curadores ad litem y las que el amparado le confiera, y podrá sustituir por su cuenta y bajo su responsabilidad a representación del amparado.</p> <p>El incumplimiento de sus deberes profesionales o la exigencia de mayores honorarios de los que le correspondan, constituyen faltas graves contra la ética profesional que el juez pondrá en conocimiento de la autoridad competente, a la que le enviará las copias pertinentes.</p> <p>ARTÍCULO 115º. REMUNERACIÓN DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA. El juez fijará los honorarios de los auxiliares de la justicia conforme a las reglas generales, los que serán pagados por la parte contraria si fuere condenada en costas, una vez ejecutoriada la providencia que las imponga.</p> <p>ARTÍCULO 116º. TERMINACIÓN DEL AMPARO. A solicitud de parte, en cualquier estado del proceso podrá declararse terminado el amparo de pobreza, si se prueba que han cesado los motivos para su concesión. A la misma se acompañarán las pruebas correspondientes, y será resuelta previo traslado de tres (3) días a la parte contraria, dentro de los cuales podrá esta presentar pruebas; el juez practicará las pruebas que considere necesarias. En caso de que la solicitud no prospere, al peticionario y a su apoderado se les impondrá sendas multas de un salario mínimo mensual.</p>

<p style="text-align: center;">Capítulo IX Interrupción y suspensión del proceso</p> <p>ARTÍCULO 117º. CAUSALES DE INTERRUPCIÓN. El proceso o la actuación posterior a la sentencia se interrumpirá:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad litem. 2. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado judicial de alguna de las partes, o por inhabilidad, exclusión o suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado. Cuando la parte tenga varios apoderados para el mismo proceso, la interrupción solo se producirá si el motivo afecta a todos los apoderados constituidos. 3. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del representante o curador ad litem (Curador a efectos del juicio) que esté actuando en el proceso y que carezca de apoderado judicial. <p>La interrupción se producirá a partir del hecho que la origine, pero si este sucede estando el expediente al despacho, surtirá efectos a partir de la notificación de la providencia que se pronuncie seguidamente. Durante la interrupción no correrán los términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento.</p> <p>ARTÍCULO 118º. CITACIONES. El juez, inmediatamente tenga conocimiento del hecho que origina la interrupción, ordenará notificar al cónyuge o compañero permanente, a los herederos, al albacea con tenencia de bienes, al curador de la herencia yacente, o a la parte cuyo apoderado falleció o fue excluido o suspendido del ejercicio de la profesión, privado de la libertad o inhabilitado, según fuere el caso.</p> <p>Los citados deberán comparecer al proceso dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. Vencido este término, o antes cuando concurran o designen nuevo apoderado, se reanudará el proceso.</p>	<p>Quienes pretendan apersonarse en un proceso interrumpido, deberán presentar las pruebas que demuestren el derecho que les asista.</p> <p>ARTÍCULO 119º. SUSPENSIÓN DEL PROCESO. El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso cuando las partes la pidan de común acuerdo, por tiempo determinado. La presentación verbal o escrita de la solicitud suspende inmediatamente el proceso, salvo que las partes hayan convenido otra cosa.</p> <p>Parágrafo. Si la suspensión recae solamente sobre uno de los procesos acumulados, aquel será excluido de la acumulación para continuar el trámite de los demás.</p> <p>También se suspenderá el trámite principal del proceso en los demás casos previstos en este código o en disposiciones especiales, sin necesidad de decreto del juez.</p> <p>ARTÍCULO 120º. DECRETO DE LA SUSPENSIÓN Y SUS EFECTOS. Corresponderá al juez que conoce del proceso resolver sobre la procedencia de la suspensión.</p> <p>La suspensión del proceso producirá los mismos efectos de la interrupción a partir de la ejecutoria del auto que la decreta.</p> <p>El curso de los incidentes no se afectará si la suspensión recae únicamente sobre el trámite principal.</p> <p>ARTÍCULO 121º. REANUDACIÓN DEL PROCESO. Vencido el término de la suspensión solicitada por las partes se reanudará de oficio el proceso. También se reanudará cuando las partes de común acuerdo lo soliciten.</p> <p>La suspensión del proceso ejecutivo por secuestro del ejecutado operará por el tiempo en que permanezca secuestrado más un periodo adicional igual a este. En todo caso la suspensión no podrá extenderse más allá del término de un (1) año contado a partir de la fecha en que el ejecutado recuperé su libertad.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo X</p>
<p style="text-align: center;">Audiencias</p> <p>ARTÍCULO 122º. PROTOCOLO. El juez realizará y presidirá las audiencias en la sede el despacho, por lo que, previo a la iniciación de esta advertirá a las partes, a sus apoderados y a los demás intervinientes de los poderes disciplinarios y correccionales de orden legal y reglamentario de que dispone para evitar dilaciones injustificadas y contravenciones de las normas de disciplina, así como dará a conocer las reglas de comportamiento a seguir de acuerdo con la reglamentación que al respecto expida el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Los empleados judiciales, las partes, sus apoderados y los demás intervinientes participarán en la audiencia presencialmente o a través de los medios digitales o de comunicación disponibles, previamente autorizados e informados por el juez.</p> <p>El empleado judicial designado por este deberá comunicar por el medio tecnológico más expedito a las partes, a sus apoderados y a los demás intervinientes convocados a la audiencia, con anticipación, claridad y suficiencia, el lugar de realización o la plataforma virtual que se empleará, los mecanismos y la forma de acceder a esta, así como todas las instrucciones y recomendaciones de acceso, conectividad, entre otras que sean necesarias para el cabal desarrollo de la audiencia o diligencia.</p> <p>Las intervenciones de los sujetos procesales no excederán de veinte (20) minutos, salvo disposición en contrario. No obstante, el juez de oficio o a solicitud de alguna de las partes, podrá autorizar un tiempo superior, atendiendo a las condiciones del caso y garantizando la igualdad. Contra esta decisión no procede recurso alguno.</p> <p>ARTÍCULO 123º. ORALIDAD Y PUBLICIDAD. Las actuaciones judiciales y la práctica de pruebas en las instancias, se efectuarán oralmente y en audiencia pública, so pena de nulidad, salvo las excepciones que señale expresamente la ley, y los siguientes autos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los de sustanciación por fuera de audiencia. 2. Los interlocutorios no susceptibles de apelación. 3. Los interlocutorios que se dicten antes de la audiencia inicial y con posterioridad a las sentencias de instancias. 4. El que resuelve las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo. <p>Parágrafo 1º. En los procesos ejecutivos se aplicarán estas reglas en la práctica de pruebas.</p>	<p>Parágrafo 2º. El juez limitará la duración de las intervenciones de las partes y de sus apoderados, respetando el derecho a la defensa.</p> <p>Parágrafo 3º. En el auto que fije fecha y hora para una audiencia pública virtual, se deberá suministrar el enlace de acceso al medio digital, donde las terceras personas interesadas puedan conectarse, salvo que el juez, justificadamente, considere necesario restringir su difusión o limitar la asistencia.</p> <p>ARTÍCULO 124º. CLASES DE AUDIENCIAS. Las audiencias serán dos: la inicial en la que se llevará a cabo: la conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio y decreto de pruebas; y otra de trámite y de juzgamiento. El juez, atendiendo las particularidades del caso, podrá desarrollarlas en un mismo acto, para lo cual deberá advertirlo en el auto por medio del cual señale fecha y hora para realizarlas.</p> <p>ARTÍCULO 125º. SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIAS. Antes de terminar la audiencia el juez señalará fecha y hora para efectuar la siguiente.</p> <p>Las audiencias se desarrollarán sin solución de continuidad dentro de las horas hábiles. Podrán continuarse en horas inhábiles sin necesidad de habilitación ex-resa hasta que sea agotado su objeto, y no podrán suspenderse, salvo cuando sea estrictamente necesario para la práctica de pruebas, caso en el que deberá continuarla en la primera hora judicial del día hábil inmediatamente siguiente.</p> <p>En ningún caso podrán celebrarse más de dos (2) audiencias.</p> <p>ARTÍCULO 126º. ACTAS Y GRABACIÓN DE AUDIENCIAS. Las audiencias serán grabadas en audio y video a través de medios tecnológicos con las herramientas técnicas que ofrezcan fidelidad y seguridad de registro, las cuales deberán ser proporcionadas por el Estado, o excepcionalmente, con las que las partes suministren.</p> <p>En un acta, que será firmada por el juez, se consignará el nombre de las personas que intervinieron como partes, apoderados, testigos y auxiliares de la justicia, de los</p>

<p>documentos que se hayan presentado, y del auto que en su caso haya suspendido la audiencia y ordenado reanudarla.</p> <p>Las grabaciones de las audiencias se incorporarán al expediente y también serán conservadas por el juzgado en los medios de almacenamiento digitales disponibles proporcionados por el Estado, que cuenten con la debida seguridad informática.</p> <p>Cualquier interesado podrá solicitar una copia de las grabaciones o del acta, y para su obtención deberá proporcionar los medios necesarios para ello, de ser el caso.</p> <p>En ningún caso se hará la reproducción escrita de las grabaciones.</p> <p style="text-align: center;">LIBRO SEGUNDO ACTOS PROCESALES</p> <p style="text-align: center;">SECCIÓN TERCERA RÉGIMEN PROBATORIO</p> <p style="text-align: center;">TÍTULO ÚNICO ACTUACIÓN</p> <p style="text-align: center;">Capítulo I Disposiciones Generales</p> <p>ARTÍCULO 127º. NECESIDAD DE LA PRUEBA. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, atendiendo en todo caso, el enfoque diferencial de género. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho.</p> <p>ARTÍCULO 128º. CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.</p> <p>No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de</p>	<p>su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.</p> <p>Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso de reposición, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.</p> <p>Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.</p> <p>ARTÍCULO 129º. PRESUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY. Las presunciones establecidas por la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados.</p> <p>El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice.</p> <p>ARTÍCULO 130º. MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualquier otro medio que sea útil para la formación del convencimiento del juez.</p> <p>El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.</p> <p>ARTÍCULO 131º. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.</p> <p>En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás</p>
<p>pruebas que estas hayan aportado y tendrá en cuenta para ello la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada parte. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.</p> <p>El juez practicará personalmente las pruebas en la sede del juzgado de forma presencial o virtual, garantizando la publicidad, integridad, legalidad, derecho de defensa e inmediatez en la valoración de las pruebas y el debate probatorio, que se encuentran estrechamente ligadas con la construcción de la verdad.</p> <p>Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades públicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la decisión, previo el cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción.</p> <p>ARTÍCULO 132º. PRUEBAS DE OFICIO. Además de las pruebas solicitadas por los sujetos procesales, el juez en cualquier estado del proceso y antes de proferir sentencia, deberá ordenar a costa de una de las partes o de ambas, la práctica de todas aquellas que a su juicio sean útiles y necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos, en consideración a su disponibilidad y facilidad.</p> <p>El juez tomará las medidas que se requieran para garantizar su contradicción.</p> <p>La providencia que decreta pruebas de oficio no admite recurso.</p> <p style="text-align: center;">Análisis de las pruebas</p> <p>ARTÍCULO 133º. LIBRE FORMACIÓN DEL CONVENCIMIENTO. El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio.</p>	<p>En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento.</p> <p>ARTÍCULO 134º. PRUEBA DE LAS NORMAS JURÍDICAS. El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte.</p> <p>La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país, por el cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país.</p> <p>También podrá adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un país o territorio fuera de Colombia, con independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí.</p> <p>Cuando se trate de ley extranjera no escrita, podrá probarse con el testimonio de dos o más abogados del país de origen o mediante dictamen pericial en los términos del inciso precedente.</p> <p>Estas reglas se aplicarán a las resoluciones, circulares y conceptos de las autoridades administrativas. Sin embargo, no será necesaria su presentación cuando estén publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente.</p> <p>Parágrafo. Cuando sea necesario se solicitará constancia de su vigencia.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo II Pruebas extraprocesales</p> <p>ARTÍCULO 135º. PRUEBA TRASLADADA Y PRUEBA EXTRAPROCESAL. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales.</p>

<p>La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo III Declaración de parte y confesión</p> <p>ARTÍCULO 136º. INTERROGATORIOS DE PARTE Y CONFESIÓN, REQUISITOS DE LA CONFESIÓN. La confesión requiere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado. 2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. 3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba. 4. Que sea expresa, consciente y libre. 5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento. 6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada. <p>La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas:</p> <p>ARTÍCULO 137º. CONFESIÓN DE LITISCONSORTE. La confesión que no provenga de todos los litisconsortes necesarios tendrá el valor de testimonio de tercero.</p> <p>Igual valor tendrá la que haga un litisconsorte facultativo, respecto de los demás.</p> <p>ARTÍCULO 138º. CONFESIÓN POR APODERADO JUDICIAL. La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita.</p>	<p>ARTÍCULO 139º. INDIVISIBILIDAD DE LA CONFESIÓN Y DIVISIBILIDAD DE LA DECLARACIÓN DE PARTE. La confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúe.</p> <p>Cuando la declaración de parte comprenda hechos distintos que no guarden íntima conexión con el confesado, aquellos se apreciarán separadamente.</p> <p>ARTÍCULO 140º. INFORMACIÓN DE LA CONFESIÓN. Toda confesión admite prueba en contrario.</p> <p>ARTÍCULO 141º. El Juez deberá de oficio o a solicitud de contraparte, ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos del proceso. Sin perjuicio de que pueda realizarlo en cualquier otra oportunidad en el transcurso del proceso.</p> <p>El citado será interrogado inicialmente por el juez, de modo exhaustivo sobre los hechos del proceso, seguido por la parte que solicitó la prueba quien no podrá exceder de 20 preguntas, cada una de las cuales deberá referirse a un solo hecho, so pena de ser divididas por el juez, quien además las podrá adicionar con las que estime convenientes.</p> <p>El juez rechazará las preguntas que no se relacionen con la materia del litigio, las que no sean claras y precisas, las que hayan sido contestadas en la misma audiencia, las inconducentes y las manifiestamente superfluas e inútiles.</p> <p>Las partes podrán igualmente objetarlas, indicando en cuál de las causales referidas en el inciso anterior se encuentra incurso la pregunta, objeción que será resuelta de plano.</p> <p>La pregunta asertiva deberá ser contestada con la negación o confirmación, pero podrá adicionar la respuesta con las explicaciones que considere necesarias.</p> <p>Parágrafo 1º. La inasistencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder y las respuestas evasivas, hará tener por probados ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito.</p>
<p>La misma consecuencia probatoria se aplicará, respecto de los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la demanda y en las excepciones de mérito o en sus contestaciones, cuando no habiendo interrogatorio escrito el citado no comparezca, o cuando el interrogado se niegue a responder sobre hechos que deba conocer como parte o como representante legal de una de las partes.</p> <p>Si las preguntas no fueren asertivas o el hecho no admitiere prueba de confesión, la inasistencia, la respuesta evasiva o la negativa a responder se apreciarán como indicio grave en contra de la parte citada.</p> <p>Parágrafo 2º. La inasistencia del citado a interrogatorio solo podrá justificarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa que el juez podrá verificar por el medio más expedito, si lo considera necesario.</p> <p>Si el citado se excusa con anterioridad a la audiencia, el juez resolverá mediante auto contra el cual no procede ningún recurso.</p> <p>Las justificaciones que presente el citado con posterioridad a la fecha en que debía comparecer, solo serán apreciadas si se aportan dentro de los tres (3) días siguientes a la audiencia. El juez solo admitirá aquellas que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito. Si acepta la excusa presentada por el citado, se fijará nueva fecha y hora para la audiencia, sin que sea admisible nueva excusa.</p> <p>La decisión que acepte la excusa no admitirá ningún recurso.</p> <p>Parágrafo 3º. El juez deberá señalar con plena claridad y precisión cuáles hechos se presumirán ciertos y cuáles como indicio grave, en la respectiva audiencia.</p> <p>ARTÍCULO 142º. INTERROGATORIO DE LAS PARTES. Las personas naturales capaces deberán absolver personalmente el interrogatorio.</p> <p>Cuando una persona jurídica tenga varios representantes o mandatarios generales cualquiera de ellos deberá concurrir a absolver el interrogatorio, sin que pueda invocar limitaciones de tiempo, cuantía o materia o manifestar que no le constan los hechos, que no esté facultado para obrar separadamente o que no está dentro de sus competencias,</p>	<p>funciones o atribuciones. Para estos efectos es responsabilidad del representante informarse suficientemente.</p> <p>Cuando se trate de incidentes y de diligencias de entrega o secuestro de bienes podrá decretarse de oficio o a solicitud del interesado el interrogatorio de las partes y de los opositores que se encuentren presentes, en relación con los hechos objeto del incidente o de la diligencia; aun cuando hayan absuelto otro en el proceso.</p> <p>Si se trata de terceros que no estuvieron presentes en la diligencia y se opusieron por intermedio de apoderado, el auto que lo decreta quedará notificado en estrados, no admitirá recurso, y en él se ordenará que las personas que deben absolverlo comparezcan al juzgado en el día y la hora señalados; la diligencia solo se suspenderá una vez que se hayan practicado las demás pruebas que fueren procedentes.</p> <p>Practicado el interrogatorio o frustrado este por la no comparecencia del citado se reanudará la diligencia; en el segundo caso se tendrá por cierto que el opositor no es poseedor.</p> <p>ARTÍCULO 143º. PRÁCTICA DEL INTERROGATORIO. Antes de iniciarse el interrogatorio se recibirá al interrogado juramento de no faltar a la verdad.</p> <p>En la audiencia también podrán interrogar los litisconsortes facultativos del interrogado. El interrogado deberá concurrir personalmente a la audiencia, debidamente informado sobre los hechos materia del proceso.</p> <p>Si el interrogado manifestare que no entiende la pregunta el juez le dará las explicaciones a que hubiere lugar.</p> <p>Cuando la pregunta fuere asertiva, la contestación deberá limitarse a negar o a afirmar la existencia del hecho preguntado, pero el interrogado podrá adicionarla con las explicaciones que considere necesarias. La pregunta no asertiva deberá responderse concretamente y sin evasivas. El juez podrá pedir explicaciones sobre el sentido y los alcances de las respuestas.</p>

<p>Si el interrogado se negare a contestar o diere respuestas evasivas o impertinentes, el juez lo amonestará para que responda o para que lo haga explícitamente con prevención sobre los efectos de su renuencia.</p> <p>El juez, de oficio o a petición de una de las partes, podrá interrogar a las demás que se encuentren presentes, si lo considera conveniente.</p> <p>La parte al rendir su declaración, podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio; estos serán agregados al expediente y serán apreciados como parte integrante del interrogatorio y no como documentos. Así mismo, durante la declaración el interrogado podrá reconocer documentos que obren en el expediente.</p> <p>ARTÍCULO 144º. DECLARACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO. No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas. Sin embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernen, determinados en la solicitud. El juez ordenará rendir informe dentro del término que señale, con la advertencia de que si no se remite en oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma explícita, se impondrá al responsable una multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv).</p> <p style="text-align: center;">Capítulo IV Declaración de terceros</p> <p>ARTÍCULO 145º. DEBER DE TESTIMONIAR. Toda persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida, excepto en los casos determinados por la ley.</p> <p>ARTÍCULO 146º. EXCEPCIONES AL DEBER DE TESTIMONIAR. No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, oficio o profesión, los abogados, médicos, enfermeros, laboratoristas, contadores, en relación con hechos amparados legalmente por el secreto profesional; los</p>	<p>ministros de cualquier culto admitido en la República, y toda persona que por disposición de la ley pueda o deba guardar secreto.</p> <p>ARTÍCULO 147º. INHABILIDADES PARA TESTIMONIAR. Son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones psicológicas graves, o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas y las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.</p> <p>La tacha por inhabilidad deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella. El juez resolverá en la audiencia, y si encuentra probada la causal se abstendrá de recibir la declaración.</p> <p>ARTÍCULO 148º. IMPARCIALIDAD DEL TESTIGO. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.</p> <p>La tacha deberá formularse antes de que sea rendida la respectiva declaración con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso.</p> <p>ARTÍCULO 149º. PETICIÓN DE LA PRUEBA. Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia, correo electrónico o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba.</p> <p>Si la petición reúne los requisitos indicados en el artículo precedente, el juez ordenará que se practique el testimonio en la audiencia correspondiente.</p>
<p>ARTÍCULO 150º. TESTIMONIO EN EL DESPACHO DEL TESTIGO. Al Presidente o al Vicepresidente de la República se les recibirá testimonio en su despacho.</p> <p>En la citación se prevendrá al testigo y al empleador sobre las consecuencias del desacato.</p> <p>ARTÍCULO 151º. TESTIMONIO DE AGENTES DIPLOMÁTICOS Y DE SUS DEPENDIENTES. Cuando se requiera el testimonio de un agente diplomático de nación extranjera o de una persona de su comitiva o familia o de un dependiente, se enviará carta rogatoria a aquel por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores con copia de lo conducente, para que si lo tiene a bien declare o permita declarar al testigo.</p> <p>ARTÍCULO 152º. CITACIÓN DE LOS TESTIGOS. La parte que haya solicitado el testimonio deberá procurar la comparecencia del testigo. Cuando la declaración de los testigos se decrete de oficio o la parte que solicitó la prueba lo requiera, el secretario los citará por cualquier medio de comunicación expedito e idóneo, dejando constancia de ello en el expediente.</p> <p>Cuando el testigo fuere dependiente de otra persona, también se comunicará al empleador o superior para los efectos del permiso que este debe darle.</p> <p>ARTÍCULO 153º. EFECTOS DE LA INASISTENCIA DEL TESTIGO. En caso de que el testigo desatienda la citación se procederá así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sin perjuicio de las facultades oficiosas del juez, se prescindirá del testimonio de quien no comparezca. 2. Si el interesado lo solicita y el testigo se encuentra en el municipio, el juez podrá ordenar a la policía la conducción del testigo a la audiencia si fuere factible. Esta conducción también podrá adoptarse oficiosamente por el juez cuando lo considere conveniente. 3. Si no pudiere convocarse al testigo para la misma audiencia, y se considere fundamental su declaración, el juez suspenderá la audiencia y ordenará su citación. 	<p>Al testigo que no comparezca a la audiencia y no presente causa justificativa de su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes, se le impondrá multa de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).</p> <p>ARTÍCULO 154º. REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE TERCEROS. Las preguntas se formularán oralmente en la audiencia. Sin embargo, excepcionalmente y cuando los medios tecnológicos no lo permitan si la prueba se practica por comisionado las partes podrán entregar cuestionario escrito antes del inicio de la audiencia. Cada pregunta versará sobre un hecho y deberá ser clara y concisa. Si no reúne los anteriores requisitos el juez la formulará de la manera indicada.</p> <p>ARTÍCULO 155º. FORMALIDADES DE LA DECLARACIÓN DE TERCEROS. Los testigos no podrán escuchar las declaraciones de quienes les precedan. Cuando la actuación se realice por medios digitales, los testigos deberán esperar su turno en la sala de espera dispuesta por la aplicación que se esté utilizando para llevar a cabo la diligencia.</p> <p>Presente e identificado el testigo con documento idóneo a juicio del juez, este le exigirá juramento de decir lo que conozca o le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conocimiento, previéndole sobre la responsabilidad penal por el falso testimonio.</p> <p>A los menores de edad no se les recibirá juramento, pero el juez los exhortará a decir la verdad.</p> <p>El juez rechazará las preguntas inconducentes, las manifiestamente impertinentes y las superfluas por ser repetición de una ya respondida, a menos que sean útiles para precisar la razón del conocimiento del testigo sobre el hecho.</p> <p>El juez rechazará las preguntas que tiendan a provocar conceptos del declarante que no sean necesarios para precisar o aclarar sus percepciones, excepto cuando se trate de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia.</p>

<p>Las partes podrán objetar preguntas por las mismas causas de exclusión a que se refiere el inciso precedente, y cuando fueren sugestivas. En este evento, el objetante se limitará a indicar la causal</p> <p>Cuando la pregunta insinúe la respuesta deberá ser rechazada, sin perjuicio de que, una vez terminada la práctica de esa prueba, el juez la formule eliminando la insinuación, si la considera necesaria.</p> <p>En todos los eventos que anteceden el juez resolverá de plano y sin motivación, mediante decisión no susceptible de recurso.</p> <p>ARTÍCULO 156º. PRÁCTICA DE LA DECLARACIÓN DE TERCEROS. La recepción de la declaración se sujetará a las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El juez interrogará al testigo acerca de su nombre, apellido, edad, domicilio, profesión, ocupación, estudios que haya realizado, demás circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si existe en relación con él algún motivo que afecte su imparcialidad. 2. A continuación el juez informará sucintamente al testigo acerca de los hechos objeto de su declaración y le ordenará que haga un relato de cuanto conozca o le conste sobre los mismos. Cumplido lo anterior continuará interrogándolo para precisar el conocimiento que pueda tener sobre esos hechos y obtener del testigo un informe espontáneo sobre ellos. 3. El juez pondrá especial empeño en que el testimonio sea exacto y completo, para lo cual exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento. Si la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiere oído, o contiene conceptos propios, el juez ordenará que explique las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance. 4. A continuación el juez podrá interrogar quien solicitó la prueba y contrainterrogar la parte contraria. En el mismo orden, las partes tendrán derecho por una sola vez, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al testigo, con fines de aclaración y refutación. El juez podrá interrogar en cualquier momento. 5. No se admitirá como respuesta la simple expresión de que es cierto el contenido de la pregunta, ni a reproducción del texto de ella. 6. El testigo al rendir su declaración, podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio; estos serán agregados al expediente y serán apreciados 	<p>como parte integrante del testimonio. Así mismo el testigo podrá aportar y reconocer documentos relacionados con su declaración.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. El testigo no podrá leer notas, apuntes o similares, a menos que el juez lo autorice cuando se trate de cifras o fechas, y en los demás casos que considere justificados siempre que no afecte la espontaneidad del testimonio. 8. Al testigo que sin causa legal se rehúse a declarar a pesar de ser requerido por el juez para que conteste, o al que compareciendo, realice alguna de las actuaciones del numeral 7, sin la autorización del juez, se le impondrá multa de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) o le impondrá arresto incommutable de uno (1) a diez (10) días. El que diere respuestas evasivas a pesar de ser requerido, se le impondrá únicamente la sanción pecuniaria. 9. Cuando el declarante manifieste que el conocimiento de los hechos lo tiene otra persona, deberá indicar el nombre de esta y explicar la razón de su conocimiento. En este caso el juez, si lo considera conveniente, citará de oficio a esa persona aun cuando se haya vencido el término probatorio. <p>Parágrafo 1º. Cuando quiera que para la práctica de la prueba se utilicen las tecnologías de la información y de las comunicaciones, se deberá cumplir con las formalidades a que se refiere el artículo 151 de este estatuto y las reglas contenidas en los numerales anteriores, evitando que los apoderados interfieran con el principio de libertad y espontaneidad que debe acompañar la declaración, cuando se encuentren presentes en el mismo recinto.</p> <p>Parágrafo 2º. En el evento en que el declarante se encuentre ubicado en lugar distinto de la sede judicial, y la práctica de la prueba deba surtir a través de medios tecnológicos, para efectos de garantizar el acceso a la actuación virtual de quien carezca de estos recursos, y la observancia de las formalidades y reglas de la recepción del testimonio, el director del proceso deberá requerir el apoyo de la autoridad judicial, administrativa u otra entidad pública.</p> <p>ARTÍCULO 157º. RATIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES RECIBIDAS FUERA DEL PROCESO. Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos cuando se hayan rendido en otro o en forma anticipada y extraprocesal sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan, siempre que esta lo solicite.</p> <p>Para la ratificación se repetirá la actuación en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior.</p>
<p>Cuando el testigo no concurre a la audiencia de ratificación, el testimonio no tendrá valor.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo V Dictamen pericial</p> <p>ARTÍCULO 158º. PROCEDENCIA. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar o solicitar la práctica de un dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito.</p> <p>No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 155 de este código para la prueba de la ley y de la costumbre extranjera. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de abogados, cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas.</p> <p>El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito.</p> <p>Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones.</p> <p>El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones e informaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. 2. La dirección física y electrónica, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos que faciliten la localización del perito. 3. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística. 4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya realizado en los últimos diez (10) años, si las tuviere. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) años. Dicha lista deberá incluir el juzgado o despacho en donde se presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual versó el dictamen. 6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen. 7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el Artículo 33º de este código en lo pertinente. 8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación. 9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación. 10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen. <p>ARTÍCULO 159º. DICTAMEN APORTADO POR UNA DE LAS PARTES. La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el término previsto sea insuficiente para incorporar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá allegarlo dentro del término que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días. En este evento el juez hará los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la práctica de la prueba.</p> <p>El dictamen deberá ser emitido por institución o profesional especializado.</p> <p>ARTÍCULO 160º. CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN. La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Éstas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro del término que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a los diez días.</p> <p>En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuantes. Las</p>

<p>partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor.</p> <p>Si se excusa al perito, antes de su intervención en la audiencia, por fuerza mayor o caso fortuito, el juez recaudará las demás pruebas y suspenderá la audiencia para continuarla en nueva fecha y hora que señalará antes de cerrarla, en la cual se interrogará al experto y se surtirán las etapas del proceso pendientes. El perito solo podrá excusarse una vez.</p> <p>Las justificaciones que por las mismas causas sean presentadas dentro de los tres (3) días siguientes a la audiencia, solo autorizan el decreto de la prueba en segunda instancia, si ya se hubiere proferido sentencia.</p> <p>En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave.</p> <p>ARTÍCULO 161º. DISPOSICIONES DEL JUEZ RESPECTO DE LA PRUEBA PERICIAL. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá disponer lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adoptar las medidas para facilitar la actividad del perito designado por la parte que lo solicite y ordenar a la otra parte prestar la colaboración para la práctica del dictamen, previéndola sobre las consecuencias de su renuencia. 2. Cuando el juez decrete la prueba de oficio o a petición de amparado por pobre, para designar el perito deberá acudir, preferiblemente, a instituciones especializadas públicas o privadas de reconocida trayectoria e idoneidad. <p>ARTÍCULO 162º. DICTAMEN DECRETADO DE OFICIO. Cuando el juez lo decrete de oficio, determinará el cuestionario que el perito debe absolver, fijará término para que rinda el dictamen y le señalará provisionalmente los honorarios y gastos que deberán ser consignados a órdenes del juzgado dentro de los tres (3) días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 129 de este estatuto. Si no se hiciera la consignación, el juez podrá ordenar al perito que rinda el dictamen si lo estima indispensable.</p> <p>Si el perito no rinde el dictamen en tiempo se le impondrá multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y se le informará a la entidad de la cual dependa o a cuya vigilancia esté sometido.</p>	<p>Con el dictamen pericial el perito deberá acompañar los soportes de los gastos en que incurrió para la elaboración del dictamen. Las sumas no acreditadas deberá reembolsarlas a órdenes del juzgado.</p> <p>ARTÍCULO 163º. PRÁCTICA Y CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN DECRETADO DE OFICIO. Rendido el dictamen permanecerá en secretaría a disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, la cual solo podrá realizarse cuando hayan pasado por lo menos diez (10) días desde la presentación del dictamen.</p> <p>Para los efectos de la contradicción del dictamen, se aplicarán las reglas contenidas en este código.</p> <p>ARTÍCULO 164º. SOLICITUD DEL DICTAMEN. Podrá solicitarse la prueba pericial, por parte de quien implore el amparo de pobreza o no cuente con los recursos para aportarlo en la oportunidad correspondiente; para tal efecto se dará aplicación a las reglas establecidas para el dictamen de oficio, según los artículos anteriores.</p> <p>ARTÍCULO 165º. APRECIACIÓN DEL DICTAMEN. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la libre formación del convencimiento teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento y, las demás pruebas que obren en el proceso.</p> <p>ARTÍCULO 166º. DEBER DE COLABORACIÓN DE LAS PARTES. Las partes tienen el deber de colaborar con el perito, de facilitarle los datos, objetos y el acceso a los lugares necesarios para el desempeño de su cargo; si alguno no lo hiciera se hará constar así en el dictamen y el juez apreciará tal conducta como indicio en su contra.</p> <p>Si alguna de las partes impide la práctica del dictamen, se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión que la otra parte pretenda demostrar con el dictamen y se le impondrá multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales.</p> <p>Parágrafo. El juez deberá tener en cuenta las razones que las partes aduzcan para justificar su negativa a facilitar datos, objetos o acceso a los lugares, cuando lo pedido no se relacione</p>
<p>con la materia del litigio o cuando la solicitud implique vulneración o amenaza de un derecho propio o de un tercero.</p> <p>ARTÍCULO 167º. EL DICTAMEN PERICIAL DE ENTIDADES Y DEPENDENCIAS OFICIALES. Los jueces deberán ordenar de oficio o a petición de parte los servicios de entidades y dependencias oficiales para los dictámenes periciales que versen sobre materias propias de la actividad de aquellas. Con tal fin las decretará y ordenará librar el oficio respectivo para que el director de las mismas designe el funcionario o los funcionarios que deben rendir el dictamen.</p> <p>La contradicción de tales dictámenes se someterá a las reglas establecidas en este capítulo. El dinero para transporte, viáticos u otros gastos necesarios para la práctica de la prueba deberá ser suministrado a la entidad dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que el respectivo director o el juez haya señalado el monto. El juez indicará que parte asume dicho rubro, el cual se imputará a las costas del proceso. Cuando el director informe al juez que no fue aportada la suma señalada, se prescindirá de la prueba.</p> <p>ARTÍCULO 168º. IMPARCIALIDAD DEL PERITO. El perito desempeñará su labor con objetividad e imparcialidad, y deberá tener en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes.</p> <p>Las partes se abstendrán de aportar dictámenes rendidos por personas en quienes concurre alguna de las causales de recusación establecidas para los jueces. La misma regla deberá observar el juez cuando deba designar perito.</p> <p>El juez apreciará el cumplimiento de ese deber de acuerdo con las reglas de la libre formación convencimiento, pudiendo incluso negarle efectos al dictamen cuando existan circunstancias que afecten gravemente su credibilidad.</p> <p>En la audiencia las partes y el juez podrán interrogar al perito sobre las circunstancias o razones que puedan comprometer su imparcialidad.</p> <p>Parágrafo. No se entenderá que el perito designado por la parte tiene interés directo o indirecto en el proceso por el solo hecho de recibir una retribución proporcional por la</p>	<p>elaboración del dictamen. Sin embargo, se prohíbe pactar cualquier remuneración que penda del resultado del litigio.</p> <p>El perito podrá ser tachado por las mismas causales de impedimento y recusación que los jueces. La tacha se deberá proponer hasta el momento de la contradicción del dictamen, acompañando la prueba al menos sumaria del hecho que la genere y en que se funde la misma; el juez la resolverá de plano, que de encontrarla pros-pera procederá a relevar al perito y a designar uno nuevo.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo VI Inspección judicial</p> <p>ARTÍCULO 169º. PROCEDENCIA DE LA INSPECCIÓN. Cuando se presenten graves y fundados motivos y con el fin de verificar y esclarecer hechos dudosos, el juez podrá decretar de oficio o a petición de parte el examen de personas, lugares, objetos o documentos. Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videgrabación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba.</p> <p>Cuando exista en el proceso una inspección judicial practicada dentro de él o como prueba extraprocetal con audiencia de todas las partes, no podrá decretarse otra nueva sobre los mismos puntos, a menos que el juez la considere necesaria para aclararlos.</p> <p>El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso o que para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, caso en el cual otorgará a la parte interesada el término para presentarlo. Contra estas decisiones del juez no procede recurso.</p> <p>ARTÍCULO 170º. SOLICITUD Y DECRETO DE LA INSPECCIÓN. Quien pida la inspección expresará con claridad y precisión los hechos que pretende probar.</p> <p>En el auto que decrete la inspección el juez señalará fecha, hora y lugar para iniciarla y dispondrá cuánto estime necesario para que la prueba se cumpla con la mayor eficacia.</p>

<p>ARTÍCULO 171º. PRÁCTICA DE LA INSPECCIÓN. En la práctica de la inspección se observarán las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La diligencia se iniciará en el juzgado o en el lugar ordenado y se practicará con las partes que concurren; si la parte que la pidió no comparece el juez podrá abstenerse de practicarla. 2. En la diligencia el juez procederá al examen y reconocimiento de que se trate. Si no se llevara a cabo por renuencia de la parte que deba facilitarla, se tendrán como probados en su contra los hechos que la otra parte se proponía demostrar en los casos en que sea admisible la prueba de confesión, el juez así lo declarará en el acto, y si no fuere admisible la prueba de confesión se le condenará sin más actuaciones al pago de una multa equivalente hasta de cinco (5) salarios mínimos mensuales vigentes a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Si es un tercero el que obstaculiza la práctica de la inspección, sin que aduzca causa justificada para ello, se le impondrá breve y sumariamente una multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales a favor del Consejo Superior de la Judicatura. 3. En la diligencia el juez identificará las personas, bienes muebles o hechos examinados y expresará los resultados de lo percibido por él. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar las pruebas que se relacionen con los hechos materia de la inspección. Las partes podrán dejar las constancias del caso. 4. Cuando se trate de inspección de personas podrá el juez ordenar los exámenes necesarios, respetando la dignidad, intimidad e integridad de aquellas. <p>ARTÍCULO 172º. INSPECCIÓN DE BIENES MUEBLES O DOCUMENTOS. Cuando la inspección deba versar sobre bienes muebles o documentos que se hallen en poder de la parte contraria o de terceros se aplicarán también las disposiciones sobre exhibición.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo VII Indicios</p> <p>ARTÍCULO 173º. REQUISITOS DE LOS INDICIOS. Para que un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso.</p> <p>Parágrafo 1º. El juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes, sin perjuicio del valor probatorio asignado por otras normas de este código.</p>	<p>Parágrafo 2. El juez apreciará los indicios teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo VIII Documentos</p> <p>1. Disposiciones generales</p> <p>ARTÍCULO 174º. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.</p> <p>Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.</p> <p>ARTÍCULO 175º. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.</p> <p>Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.</p> <p>También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.</p>
<p>Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo.</p> <p>La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.</p> <p>ARTÍCULO 176º. APORTACIÓN DE DOCUMENTOS. Los documentos se aportarán al proceso en original o en copia.</p> <p>Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello.</p> <p>ARTÍCULO 177º. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia.</p> <p>Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella.</p> <p>El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia de trámite y juzgamiento. Los documentos o sus reproducciones simples presentados por las partes con fines probatorios se reputarán auténticos, sin necesidad de autenticación ni presentación personal, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros.</p> <p>Cuando una parte presente copia parcial de un documento, las demás partes podrán completarlo o aportar el documento de manera integral.</p>	<p>ARTÍCULO 178º. VALORACIÓN DE MENSAJES DE DATOS. Serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud. La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos. Por lo tanto, se presumirá auténtico en su contenido y firma, si la contraparte no lo tacha o lo desconoce.</p> <p>La eficacia jurídica y el valor probatorio del mensaje de datos, son equiparables al del documento escrito.</p> <p>ARTÍCULO 179º. COPIAS REGISTRADAS. Cuando la ley exija la inscripción de un documento en un registro público, la copia que se aduzca como prueba deberá llevar la nota de haberse efectuado aquella o certificación anexa sobre la misma. Si no existiere dicha inscripción la copia solo producirá efectos probatorios entre los otorgantes y sus causahabientes.</p> <p>ARTÍCULO 180º. DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO Y OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. Para que el documento extendido en idioma distinto del castellano pueda ser apreciado como medio de prueba, por parte del juzgador, se requiere que obre en el expediente con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos, la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor.</p> <p>El documento público otorgado en un país extranjero por parte de su respectivo funcionario público o con su intervención, se aportará apostillado, de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia.</p> <p>En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, el aludido documento deberá ser presentado con la correspondiente constancia de autenticación por parte del cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país; y en su defecto, por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata</p>

<p>de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano.</p> <p>Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país.</p> <p>ARTÍCULO 181º. DOCUMENTO ROTO O ALTERADO. El juez apreciara bajo las reglas de la libre formación del convencimiento el documento roto, raspado, parcialmente destruido, enmendado e interlineado o de cualquiera otra forma alterado.</p> <p>ARTÍCULO 182º. DOCUMENTOS QUE REQUIEREN SOLEMNIDAD. PARA LA EXISTENCIA O VALIDEZ DE UNA ACTO O CONTRATO. La falta del documento que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato, no podrá suplirse por otra prueba, salvo que se haya producido su destrucción, ocultamiento, pérdida o desaparición debidamente probada, caso en el cual podrá acreditarse con otros medios de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de este código.</p> <p>2. Documentos públicos</p> <p>ARTÍCULO 183º. ALCANCE PROBATORIO. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza.</p> <p>ARTÍCULO 184º. INSTRUMENTO PÚBLICO DEFECTUOSO. El instrumento que no tenga carácter de público por incompetencia del funcionario o por otra falta en la forma, se tendrá como documento privado si estuviere suscrito por los interesados.</p> <p>3. Documentos privados</p>	<p>ARTÍCULO 185º. ALCANCE PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. Los documentos privados tienen el mismo valor que los públicos, tanto entre quienes los suscribieron o crearon y sus causahabientes como respecto de terceros.</p> <p>ARTÍCULO 186º. DOCUMENTOS DECLARATIVOS EMANADOS DE TERCEROS. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación.</p> <p>ARTÍCULO 187º. DOCUMENTOS SIN FIRMA; FIRMADOS EN BLANCO O CON ESPACIOS SIN LLENAR. Se tendrá como medio de prueba el documento sin firma, firmado en blanco o con espacios sin llenar.</p> <p>ARTÍCULO 188º. LIBROS Y PAPELES DE COMERCIO. Para los efectos de este código, los libros y papeles de comercio, empleados conforme a las normas que le sean aplicables, se tendrán medio de prueba y, harán fe contra quien los lleva. En estos eventos, solo constituyen un principio de prueba a favor del comerciante que necesitará ser completado con otros medios probatorios.</p> <p>La fe debida a los libros es indivisible. En consecuencia, la parte que acepte en lo favorable los libros de su adversario, estará obligada a aceptar las enunciaciões perjudiciales que ellos contengan, si se ajustan a las prescripciones legales y no se comprueba fraude.</p> <p>Si un comerciante lleva doble contabilidad o incurre en cualquier otro fraude de tal naturaleza, sus libros y papeles solo tendrán valor en su contra. Habrá doble contabilidad cuando un comerciante lleva dos o más libros iguales en los que registre en forma diferente las mismas operaciones, o cuando tenga distintos comprobantes sobre los mismos actos.</p> <p>4. Exhibición</p> <p>ARTÍCULO 189º. PROCEDENCIA DE LA EXHIBICIÓN. La parte que pretenda utilizar documentos o bienes muebles que se hallen en poder de otra parte o de un tercero, deberá solicitar, en la oportunidad para pedir pruebas, que se ordene su exhibición.</p>
<p>ARTÍCULO 190º. TRÁMITE DE LA EXHIBICIÓN. Quien pida la exhibición expresará los hechos que pretende demostrar y deberá afirmar que el documento o bienes muebles se encuentran en poder de la persona llamada a exhibirlos, su clase y la relación que tenga con aquellos hechos. Si la solicitud reúne los anteriores requisitos el juez ordenará que se realice la exhibición en la respectiva audiencia y señalará la forma en que deba hacerse.</p> <p>Cuando la persona a quien se ordena la exhibición sea un tercero, el auto respectivo se le notificará personalmente.</p> <p>Presentado el documento el juez lo hará transcribir o reproducir, a menos que quien lo exhiba permita que se incorpore al expediente. De la misma manera procederá cuando se exhiba espontáneamente un documento. Si se trata de cosa distinta de documento el juez ordenará elaborar una representación física mediante fotografías, videograbación o cualquier otro medio idóneo.</p> <p>ARTÍCULO 191º. RENUENCIA Y OPOSICIÓN A LA EXHIBICIÓN. Si la parte a quien se ordenó la exhibición se opone en el término de ejecutoria del auto que la decreta, o en la diligencia en que ella se ordenó, el juez al decidir la instancia o el incidente en que aquella se solicitó, apreciará los motivos de la oposición; si no la encontrare justificada y se hubiere acreditado que el documento estaba en poder del opositor, se tendrán por probado los hechos que quien pidió la exhibición se proponía probar, salvo cuando tales hechos no admitan prueba de confesión, caso en el cual la oposición se apreciará como indicio en contra del opositor. En la misma forma se procederá cuando no habiendo formulado oposición, la parte deje de exhibir el documento, salvo que dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha señalada para la diligencia pruebe, siquiera sumariamente, causa justificativa de su renuencia y exhiba el documento en la oportunidad que el juez señale.</p> <p>Cuando es un tercero quien se opone a la exhibición o la rehúsa sin causa justificada, el juez le impondrá multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smmlv).</p> <p>Los terceros no están obligados a exhibir documentos de su propiedad exclusiva, cuando gocen de reserva legal o la exhibición les cause perjuicio.</p>	<p>5. Tacha de falsedad y desconocimiento de documento</p> <p>ARTÍCULO 192º. PROCEDENCIA DE LA TACHA DE FALSEDAD Y DESCONOCIMIENTO DE DOCUMENTO. La parte a quien se le atribuya algún tipo de documento, declarativo o representativo, de los consignados en el presente Código, afirmándose que está suscrito, manuscrito o que proviene de aquella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba.</p> <p>No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión.</p> <p>Los herederos de la persona a quien se atribuye un documento podrán tacharlo de falso en las mismas oportunidades.</p> <p>ARTÍCULO 193º. TRÁMITE DE LA TACHA. Quien tache el documento expresará con claridad, en qué consiste la falsedad y pedirá las pruebas que fueren necesarias para su demostración. No se tramitará la tacha que no reúna estos requisitos.</p> <p>Cuando el documento tachado de falso haya sido aportado en copia, el juez podrá exigir que se presente el original.</p> <p>El juez ordenará, a expensas del impugnante la reproducción, la cual quedará bajo su custodia.</p> <p>En la misma diligencia, se correrá traslado a las demás partes para que presenten o soliciten las pruebas correspondientes.</p> <p>Surtido el trámite de rigor, se decretarán las pruebas y se ordenará el cotejo pericial de la firma o del manuscrito, o se ordenará un dictamen sobre las posibles adulteraciones. Tales pruebas deberán producirse dentro de la oportunidad procesal prevista.</p> <p>La decisión sobre la tacha se resolverá en la sentencia.</p>

<p>En el proceso ejecutivo, la tacha deberá proponerse como excepción.</p> <p>La tacha podrá ser desistida antes de que ésta sea resuelta.</p> <p>ARTÍCULO 194º. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE FALSEDAD. Cuando se declare total o parcialmente falso un documento, el juez lo hará constar así al margen o a continuación de él, en nota debidamente especificada. Si la falsedad recae sobre el original de un documento público, el juez la comunicará con los datos necesarios a la oficina de origen o a la de procedencia del documento, para que allí se ponga la correspondiente nota. En todo caso dará aviso al fiscal competente, a quien enviará las copias necesarias para la correspondiente investigación.</p> <p>El proceso penal sobre falsedad no suspenderá el trámite de la tacha, pero la providencia con que termine aquel surtirá efectos en el proceso laboral, siempre que el juez penal se hubiere pronunciado sobre la existencia del delito y se allegue copia de su decisión en cualquiera de las instancias, con anterioridad a la sentencia.</p> <p>ARTÍCULO 195º. DESCONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO. En similar oportunidad para formular la tacha de falsedad, la parte a quien se le atribuya algún tipo de documento -de los consignados en el presente Código-, y no firmado, ni manuscrito, podrá desconocerlo. La misma regla se aplicará a los documentos dispositivos y representativos emanados de terceros. Para tal efecto, expresará con claridad los motivos del desconocimiento.</p> <p>No se tendrá en cuenta el desconocimiento que se presente fuera de la oportunidad prevista en el inciso anterior, ni el que omita los requisitos allí señalados.</p> <p>De la manifestación de desconocimiento el juez correrá el traslado respectivo a la otra parte, en el curso de la misma diligencia; quien podrá solicitar que se verifique la autenticidad del documento en igual forma a la establecida para la tacha.</p> <p>Corrido el traslado anterior, el juez decretará aquellas pruebas que considere sean pertinentes, conducentes y útiles, de acuerdo con las reglas de la libre formación del convencimiento.</p> <p>La decisión sobre el desconocimiento de documento se reservará en la providencia que resuelva el conflicto de fondo.</p>	<p>La verificación de autenticidad también procederá de oficio, cuando el juez considere que el documento es fundamental para proferir su decisión.</p> <p>Si no se establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de eficacia probatoria.</p> <p>El desconocimiento no procede respecto de las reproducciones de la voz o de la imagen de la parte contra la cual se aducen, ni de los documentos suscritos o manuscritos por dicha parte, respecto de los cuales deberá presentarse la tacha y probarse por quien la alega.</p> <p>ARTÍCULO 196º. COTEJO DE LETRAS O FIRMAS. Para demostrar la autenticidad o la falsedad podrá solicitarse un cotejo con las letras o firmas de cualquier documento en el que conste la firma, la letra, manuscritos, la voz o la imagen de la persona a quien se atribuye el documento. A falta de estos medios, o adicionalmente, el juez podrá ordenar que la persona a quien se le atribuye el escrito o firma materia del cotejo, escriba lo que le dicte y ponga su firma al pie, para los fines probatorios a que haya lugar.</p> <p>La firma digital o electrónica sólo podrá cotejarse mediante el algoritmo de verificación que cada una establezca.</p> <p>ARTÍCULO 197º. SANCIONES AL IMPUGNANTE VENCIDO. Cuando la tacha de falsedad se resuelva en contra de la parte solicitante, el juez condenará a aquella a pagar a quien aportó el documento, el valor del veinte por ciento (20%) del monto de las obligaciones contenidas en él, o de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), cuando no represente un valor económico. La misma sanción se aplicará a la parte que adujo el documento a favor de la que probó la tacha.</p> <p>Cuando el apoderado judicial formule la tacha sin autorización expresa de su mandante, será solidariamente responsable del pago de la suma a que se refiere el inciso anterior y de las costas.</p> <p>Las mismas consecuencias se aplicarán a la parte vencida y, en su caso, a su apoderado judicial, en el trámite de verificación de autenticidad del documento desconocido. Tratándose de documentos emanados de terceros, la sanción sólo procede cuando esté acreditada la mala fe de quien desconoce el documento y, en su caso, de su apoderado.</p>
<p>No obstante lo anterior, una vez declarada la falsedad del documento, el juez procederá a librar las comunicaciones que estime pertinentes, informando el cometimiento de tal conducta punitiva a las autoridades competentes, para que se adelanten las investigaciones a que haya lugar.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo IX Prueba por informe</p> <p>ARTÍCULO 198º. PROCEDENCIA. A petición de parte o de oficio el juez podrá solicitar informes a entidades públicas o privadas, o a sus representantes, o a cualquier persona sobre hechos, actuaciones, cifras o demás datos que resulten de los archivos o registros de quien rinde el informe, salvo los casos de reserva legal. Tales informes se entenderán rendidos bajo la gravedad del juramento por el representante, funcionario o persona responsable del mismo.</p> <p>Las partes o sus apoderados, unilateralmente o de común acuerdo, pueden solicitar ante cualquier entidad pública o privada copias de documentos, informes o actuaciones administrativas o jurisdiccionales, no sujetas a reserva legal, expresando que tienen como objeto servir de prueba en un proceso judicial en curso, o por iniciarse.</p> <p>ARTÍCULO 199º. OBLIGACIÓN DE QUIEN RINDE EL INFORME. El juez solicitará los informes indicando en forma precisa su objeto y el plazo para rendirlos. La demora, renuencia o inexactitud injustificada para rendir el informe será sancionada con multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar.</p> <p>Si la persona requerida considera que alguna parte de la información solicitada se encuentra bajo reserva legal, deberá indicarlo expresamente en su informe y justificar tal afirmación. Si el informe hubiere omitido algún punto o el juez considera que debe ampliarse, o que no tiene reserva, ordenará rendirlo, complementarlo o aclarar lo correspondiente en un plazo que no superará la mitad del inicial.</p>	<p>ARTÍCULO 200º. FACULTADES DE LAS PARTES. Rendido el informe, se dará traslado a las partes, dentro del cual podrán solicitar su aclaración, complementación o ajuste a los asuntos solicitados.</p> <p style="text-align: center;">LIBRO SEGUNDO ACTOS PROCESALES</p> <p style="text-align: center;">SECCIÓN CUARTA PROVIDENCIAS DEL JUEZ, SU NOTIFICACIÓN Y SUS EFECTOS</p> <p style="text-align: center;">TÍTULO PRIMERO PROVIDENCIAS DEL JUEZ</p> <p style="text-align: center;">Capítulo I Autos y sentencias</p> <p>ARTÍCULO 201º. CLASES DE PROVIDENCIAS. El juez dentro del proceso se pronunciará mediante providencias que pueden ser autos o sentencias.</p> <p>Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda; las excepciones de mérito cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien; el incidente de liquidación de perjuicios, la condena en concreto y la regulación de honorarios, y las que resuelven los recursos de casación, revisión y anulación de laudos.</p> <p>Son autos todas las demás providencias de trámite o interlocutorias.</p> <p>ARTÍCULO 202º. FORMALIDADES. Salvo los autos que se limiten a disponer un trámite, las providencias serán motivadas de manera breve y precisa. No se podrá hacer transcripciones o reproducciones de actas, decisiones o conceptos que obren en el expediente. Las citas jurisprudenciales y doctrinales se limitarán a las que sean estrictamente necesarias para la adecuada fundamentación de la providencia.</p> <p>Cuando proceda dictarse por escrito, la providencia se encabezará con la denominación del juzgado o corporación, seguido del lugar y la fecha en que se pronuncie y terminará con la firma del juez o de los magistrados.</p>

<p>Las que se profieran en audiencia o diligencia en forma oral, se insertará en las actas respectivas además de lo dispuesto en el inciso anterior, la parte resolutive de la decisión. Sólo se mencionarán los nombres de los apoderados judiciales, cuando se reconozca su personería o se les imponga alguna condena.</p> <p>Las aclaraciones y salvamentos de voto se harán constar por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del fallo.</p> <p>Ninguna providencia tendrá valor o efecto jurídico hasta tanto haya sido pronunciada, y en su caso, suscrita por el juez o magistrados respectivos y, sea debidamente notificada.</p> <p>ARTÍCULO 203º. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. Las sentencias que resuelvan los recursos de casación, de revisión, de anulación, declaratoria de ilegalidad del cese de actividades y demás que dentro de sus competencias profieran la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial siempre constarán por escrito.</p> <p>La motivación de la sentencia se limitará al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios.</p> <p>Para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas, el juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella.</p> <p>La sentencia tendrá una síntesis de la demanda y su contestación.</p> <p>La parte resolutive se proferirá bajo la fórmula "administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley"; contendrá la decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código.</p> <p>Parágrafo 1º. Los jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley, por lo que tendrán en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.</p>	<p>Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos.</p> <p>Parágrafo 2º. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificador o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado.</p> <p>Parágrafo 3º. Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo II Condena en concreto</p> <p>ARTÍCULO 204º. CONDENA EN CONCRETO. Las sentencias de condena deberán dictarse en cantidad determinada o determinable.</p> <p>El juez de segunda instancia siempre extenderá la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, en el evento de confirmar la misma.</p> <p>En todo proceso jurisdiccional la valoración de daños atenderá los principios de reparación integral y equidad, y observará los criterios técnicos actuariales.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo III Aclaración, corrección y adición de las sentencias</p> <p>ARTÍCULO 205º. ACLARACIÓN DE PROVIDENCIAS. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella. En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.</p>
<p>La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.</p> <p>ARTÍCULO 206º. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.</p> <p>Si la corrección se hiciera luego de terminado el proceso, el auto se notificará por el envío como mensajes de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado.</p> <p>Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutive o influyan en ella.</p> <p>ARTÍCULO 207º. ADICIÓN DE PROVIDENCIAS. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.</p> <p style="text-align: center;">LIBRO SEGUNDO ACTOS PROCESALES</p> <p style="text-align: center;">SECCIÓN CUARTA PROVIDENCIAS DEL JUEZ, SU NOTIFICACIÓN Y SUS EFECTOS</p> <p style="text-align: center;">TÍTULO SEGUNDO NOTIFICACIONES</p> <p>ARTÍCULO 208º. NOTIFICACIÓN DE LAS PROVIDENCIAS. Las providencias judiciales se darán a conocer a las partes, apoderados y demás interesados por medio de notificaciones, en la siguiente forma:</p>	<p>1. Personalmente</p> <p>a) Al demandado o a su representante o apoderado judicial, la del auto admisorio de la demanda, y en general, la que tenga por objeto hacerle saber la primera providencia que se dicte en el proceso.</p> <p>b) La primera que se haga a los empleados públicos en su carácter de tales, y</p> <p>c) La primera que se haga a terceros.</p> <p>2. En estrados</p> <p>Oralmente, las de las providencias que se dicten en las audiencias públicas. Se entenderán surtidos los efectos de estas notificaciones inmediatamente después de su pronunciamiento, aunque no hayan concurrido las partes.</p> <p>3. Por estados</p> <p>a) La de los autos que se dicten fuera de audiencia.</p> <p>b) La de las sentencias que resuelvan los recursos de casación, de revisión y de anulación, y demás que dentro de sus competencias profieran la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en primera o segunda instancia.</p> <p>c) Las sentencias que resuelvan los recursos de apelación y la consulta.</p> <p>Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente, con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva.</p> <p>No obstante, no se insertarán en el estado electrónico las providencias que decretan medidas cautelares o hagan mención a menores, o cuando la autoridad judicial así lo disponga por estar sujetas a reserva legal.</p> <p>De la misma forma podrán surtir los traslados que deban hacerse por fuera de audiencia. Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservarán en línea para consulta permanente por cualquier interesado y deberán contener:</p> <p>a. El número único de identificación del proceso.</p> <p>b. Los nombres de las partes o sujetos procesales. Si varias personas integran una parte, bastará la designación de la primera de ellas añadiendo la expresión "y otros".</p> <p>c. La fecha de la providencia.</p>

<p>Los autos de cumpase no requieren ser notificados.</p> <p>Parágrafo. Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por Secretaría, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.</p> <p>ARTÍCULO 209º. PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL ELECTRÓNICA. Las notificaciones que deban hacerse personalmente podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación física o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.</p> <p>El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la demanda, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, para lo cual informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes.</p> <p>La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse a partir del día siguiente cuando el iniciador recepcione, acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje, para lo cual se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos. El Secretario hará constar este hecho en el expediente.</p> <p>De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta permanente en línea por cualquier interesado.</p> <p>Se presume que el mensaje fue enviado, recibido y leído o descargado, cuando el destinatario acuse su recibo. En caso de no obtenerse confirmación o respuesta a ese respecto, el juez deberá constatar por cualquier otro medio, que el respectivo mensaje no</p>	<p>solo fue enviado, sino también recibido y leído o descargado, sin que sea suficiente para su comprobación la captura de pantalla que se tenga.</p> <p>Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, que no se enteró de la providencia.</p> <p>Parágrafo 1º. Las entidades públicas de todos los niveles, las privadas que cumplan funciones públicas, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se notificarán mediante mensaje de datos al buzón electrónico para recibir notificaciones judiciales en los términos del Artículo 197 del CPACA o las normas que lo reglamenten.</p> <p>Parágrafo 2º. En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde estén involucrados intereses litigiosos de la Nación, en los términos del Artículo 2o del Decreto Ley 4085 de 2011 o la norma que lo sustituya, deberá remitirse copia electrónica del auto admisorio o mandamiento ejecutivo, en conjunto con la demanda y sus anexos, al buzón de correo electrónico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta comunicación no genera su vinculación como sujeto procesal, sin perjuicio de la facultad de intervención prevista en el Artículo 610 de la Ley 1564 de 2012. En la misma forma se le remitirá copia de la providencia que termina el proceso por cualquier causa y de las sentencias.</p> <p>Parágrafo 3º. La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o físicas de la parte por notificar que estén alojadas en los registros de las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas web o en redes sociales.</p> <p>ARTÍCULO 210º. AVISO. Si no es posible cumplir con el acto de notificación personal, se deberá enviar una comunicación a la dirección física suministrada, en la que se le informará a la persona, que debe comparecer física o virtualmente al juzgado dentro de los diez (10) días siguientes al de su fijación para notificarle el auto admisorio de la demanda y que si no comparece se le nombrará un curador para la litis.</p> <p>Vencido el término anterior sin que el demandado comparezca, el juez procederá a nombrar al curador ad litem, con quien se continuará el proceso, se le notificará el auto admisorio</p>
<p>de la demanda, y se ordenará el emplazamiento del demandado, con la advertencia de habérsele nombrado el curador.</p> <p>El emplazamiento se surtirá con arreglo en lo dispuesto en el artículo 213 de este Código. Cuando el juez considere necesario hacer el emplazamiento por un medio masivo de comunicación, atendiendo las circunstancias especiales del asunto, como poblaciones marginales, con falta de conectividad, grupos indígenas, entre otros, así lo dispondrá en providencia motivada.</p> <p>ARTÍCULO 211º. PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIOS FÍSICOS. Cuando se desconozca la dirección electrónica del demandado, la parte interesada remitirá una comunicación a quien deba ser notificado, a su representante o apoderado, por medio de servicio postal autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en la que le informará sobre la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que debe ser notificada, previniéndolo para que comparezca al juzgado a recibir notificación dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su entrega en el lugar de destino. Cuando la comunicación deba ser entregada en municipio distinto al de la sede del juzgado, el término para comparecer será de diez (10) días; y si fuere en el exterior el término será de treinta (30) días.</p> <p>La comunicación deberá ser enviada a cualquiera de las direcciones físicas que le hubieren sido informadas al juez de conocimiento como correspondientes a quien deba ser notificado. Cuando se trate de persona jurídica de derecho privado la comunicación deberá remitirse a la dirección que aparezca registrada en la Cámara de Comercio o en la oficina de registro correspondiente.</p> <p>Cuando la dirección del destinatario se encuentre en una unidad inmobiliaria cerrada, la entrega podrá realizarse a quien atienda la recepción.</p> <p>La empresa de servicio postal deberá cotejar y sellar una copia de la comunicación, y expedir constancia sobre la entrega de esta en la dirección correspondiente. Ambos documentos deberán ser incorporados al expediente.</p> <p>Si la comunicación es devuelta con la anotación de que la dirección no existe o que la persona no reside o no trabaja en el lugar, a petición del interesado se procederá al nombramiento de curador ad litem (curador a efectos del juicio), y su emplazamiento en la forma prevista en este código.</p>	<p>Cuando en el lugar de destino rehusaren recibir la comunicación, la empresa de servicio postal la dejará en el lugar y emitirá constancia de ello. Para todos los efectos legales, la comunicación se entenderá entregada.</p> <p>Si la persona por notificar comparece al juzgado, se le pondrá en conocimiento la providencia previa su identificación mediante cualquier documento idóneo, de lo cual se entenderá acta en la que se expresará la fecha en que se practique, el nombre del notificado y la providencia que se notifica, acta que deberá firmarse por aquel y el empleado que haga la notificación. Al notificado no se le admitirán otras manifestaciones que la de asentimiento a lo resuelto, la convalidación de lo actuado. Si el notificado no sabe, no quiere o no puede firmar, el notificador expresará esa circunstancia en el acta.</p> <p>Parágrafo 1º. La notificación personal podrá hacerse por un empleado del juzgado cuando en el lugar no haya empresa de servicio postal autorizado o el juez lo estime aconsejable para agilizar o viabilizar el trámite de notificación. Si la persona no fuere encontrada, el empleado dejará la comunicación de que trata este artículo.</p> <p>Parágrafo 2º. El interesado podrá solicitar al juez que se oficie a determinadas entidades públicas o privadas que cuenten con bases de datos para que suministren la información que sirva para localizar al demandado.</p> <p>ARTÍCULO 212º. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. La notificación por conducta concluyente surte los mismos efectos de la notificación personal.</p> <p>Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se considerará notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la manifestación verbal.</p> <p>Quien constituya apoderado judicial se entenderá notificado por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el día en que se notifique el auto que le reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad. Cuando se hubiese reconocido personería antes de admitirse la demanda o de librarse el mandamiento ejecutivo, la parte será notificada por estado de tales providencias.</p>

<p>Cuando se decreta la nulidad por indebida notificación de una providencia, esta se entenderá surtida por conducta concluyente el día en que se solicitó la nulidad, pero los términos de ejecutoria o traslado, según fuere el caso, solo empezarán a correr a partir del día siguiente al de la ejecutoria del auto que la decretó o de la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior:</p> <p>ARTÍCULO 213º. EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO Y DESIGNACIÓN DE CURADOR AD LITEM. Cuando el demandante manifieste bajo la gravedad de juramento que ignora el domicilio del demandado, aseveración cuya legitimidad emana con la presentación de la demanda; una vez le es admitida, en el correspondiente auto admisorio, el juez deberá proceder a nombrarle un curador para la litis con quien se continuará el proceso; y paralelamente, ordenará su emplazamiento, con la advertencia de habersele designado el respectivo curador ad litem.</p> <p>Ahora bien, cuando el demandado no es hallado o se oculta para evadir la notificación; o no comparece en el término establecido en la comunicación de que trata el artículo 211 de este código, el juez le nombrará un curador ad litem, con quien se continuará el proceso, se le notificará el auto admisorio de la demanda, y se ordenará el emplazamiento del demandado, con la advertencia de habersele nombrado el curador.</p> <p>El emplazamiento se surtirá a través del Registro Nacional de personas emplazadas, sin perjuicio de que el juez cuando considere necesario ordene hacerlo por un medio masivo de comunicación, atendiendo las circunstancias especiales del asunto, como poblaciones marginales, con falta de conectividad, grupos indígenas, entre otros, así lo dispondrá en providencia motivada</p> <p>En ningún caso se podrá proferir sentencia, mientras no se haya surtido el emplazamiento, en debida forma. No obstante, el término de espera no podrá exceder al contemplado en el párrafo único del artículo 72 del presente código. Para lo cual el juez deberá requerir a la parte obligada con el fin de cumplir lo ordenado.</p> <p style="text-align: center;">LIBRO SEGUNDO ACTOS PROCESALES</p> <p style="text-align: center;">SECCIÓN CUARTA</p>	<p style="text-align: center;">PROVIDENCIAS DEL JUEZ, SU NOTIFICACIÓN Y SUS EFECTOS</p> <p style="text-align: center;">TÍTULO TERCERO EFFECTO Y EJECUCIÓN DE LAS PROVIDENCIAS</p> <p style="text-align: center;">Capítulo I Ejecutoria y cosa juzgada</p> <p>ARTÍCULO 214º. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.</p> <p>No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.</p> <p>Cuando se haya pedido oportunamente la aclaración, complementación, adición, corrección de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.</p> <p>Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.</p> <p>ARTÍCULO 215º. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso declarativo tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.</p> <p>Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo II Ejecución de las providencias judiciales</p>
<p>ARTÍCULO 216º. PROCEDENCIA. Podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, y cuando contra ellas se haya concedido apelación en el efecto devolutivo.</p> <p>Si en la providencia se fija un plazo para su cumplimiento o para hacer uso de una opción, este solo empezará a correr a partir de la ejecutoria de aquella o de la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso. La condena total o parcial que se haya subordinado a una condición sólo podrá ejecutarse una vez demostrado el cumplimiento de esta.</p> <p>ARTÍCULO 217º. EJECUCIÓN. Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de bienes muebles que no hayan sido secuestrados en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.</p> <p>Si la solicitud de la ejecución se formula dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, el mandamiento ejecutivo se notificará por estado. De ser formulada con posterioridad, la notificación del mandamiento ejecutivo al ejecutado deberá realizarse personalmente.</p> <p>Lo previsto en este Artículo se aplicará para obtener, ante el mismo juez de conocimiento, el cumplimiento forzado de las sumas que hayan sido liquidadas en el proceso y las obligaciones reconocidas mediante conciliación o transacción aprobadas en el mismo.</p> <p>ARTÍCULO 218º. EJECUCIÓN CONTRA ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO. Cuando una entidad de derecho público sea condenada al pago una suma de dinero derivada de una obligación pensional solo podrá ser ejecutada pasados cuatro meses desde la ejecutoria de la respectiva providencia. Las demás condenas laborales podrán ser ejecutadas de manera inmediata una vez ejecutoriadas.</p>	<p>ARTÍCULO 219º. ENTREGA DE BIENES. Para la entrega de bienes se observarán las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Corresponde al juez que haya conocido del proceso en primera instancia hacer la entrega ordenada en la sentencia, de los inmuebles y de los muebles que puedan ser habidos. Si la diligencia de entrega se solicita dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto de obediencia al superior, el auto que disponga su realización se notificará por estado. 2. El juez identificará el bien objeto de la entrega y a las personas que lo ocupen. Sin embargo, para efectos de la entrega de un inmueble no es indispensable recorrer ni identificar los linderos, cuando al juez o al comisionado no le quede duda acerca de que se trata del mismo bien. 3. Cuando la entrega verse sobre cuota en bien singular, el juez advertirá a los demás comuneros que deben entenderse con el demandante para el ejercicio de los derechos que a todos corresponda sobre el bien. 4. Cuando el bien esté secuestrado, la orden de entrega se le comunicará al secuestro por el medio más expedito. Si vencido el término señalado en la providencia respectiva el secuestro no ha entregado el bien, a petición del interesado se ordenará la diligencia de entrega, en la que no se admitirá ninguna oposición y se condenará al secuestro al pago de los perjuicios que por su renuencia o demora haya sufrido la parte a quien debía hacerse la entrega y se le impondrán las sanciones previstas para los auxiliares de la justicia. <p>El auto mediante el cual se sancione al secuestro no tendrá recurso alguno y se notificará personalmente. No obstante, dentro de los diez (10) días siguientes a dicha notificación podrá el secuestro promover incidente, alegando que su incumplimiento se debió a fuerza mayor o caso fortuito, y si lo probare se levantarán las sanciones. Este incidente no afectará ni interferirá las demás actuaciones que se hallen en curso, o que deban iniciarse para otros fines.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Lo dispuesto en este Artículo es aplicable a las entidades de derecho público. <p>ARTÍCULO 220º. OPOSICIONES A LA ENTREGA. Las oposiciones a la entrega se someterán a las siguientes reglas:</p>

<p>1. El juez rechazará de plano la oposición a la entrega formulada por persona contra quien produzca efectos la sentencia, o por quien sea tenedor a nombre de aquella.</p> <p>2. Podrá oponerse la persona en cuyo poder se encuentra el bien y contra quien la sentencia no produzca efectos, si en cualquier forma alega hechos constitutivos de posesión y presenta prueba siquiera sumaria que los demuestre. El opositor y el interesado en la entrega podrán solicitar testimonios de personas que concurran a la diligencia, relacionados con la posesión. El juez agregará al expediente los documentos que se aduzcan, siempre que se relacionen con la posesión, y practicará el interrogatorio del opositor, si estuviere presente, y las demás pruebas que estime necesarias.</p> <p>3. Lo dispuesto en el numeral anterior se aplicará cuando la oposición se formule por tenedor que derive sus derechos de un tercero que se encuentre en las circunstancias allí previstas, quien deberá aducir prueba siquiera sumaria de su tenencia y de la posesión del tercero. En este caso, el tenedor será interrogado bajo juramento sobre los hechos constitutivos de su tenencia, de la posesión alegada y los lugares de habitación y de trabajo del supuesto poseedor.</p> <p>4. Cuando la diligencia se efectúe en varios días, solo se atenderán las oposiciones que se formulen el día en que el juez identifique el sector del inmueble o los bienes muebles a que se refieran las oposiciones. Al mismo tiempo se hará la identificación de las personas que ocupen el inmueble o el correspondiente sector, si fuere el caso.</p> <p>5. Si se admite la oposición y en el acto de la diligencia el interesado insiste expresamente en la entrega, el bien se dejará al opositor en calidad de secuestre.</p> <p>Si la oposición se admite solo respecto de alguno de los bienes o de parte de estos, se llevará a cabo la entrega de lo demás.</p> <p>Cuando la oposición sea formulada por un tenedor que derive sus derechos de un tercero poseedor, el juez le ordenará a aquel comunicarle a este para que comparezca a ratificar su actuación. Si no lo hace dentro de los cinco (5) días siguientes quedará sin efecto la oposición y se procederá a la entrega sin atender más oposiciones.</p> <p>6. Cuando la diligencia haya sido practicada por el juez de conocimiento y quien solicitó la entrega haya insistido, este y el opositor, dentro de los cinco (5) días siguientes, podrán solicitar pruebas que se relacionen con la oposición. Vencido dicho término, el juez convocará a audiencia en la que practicará las pruebas y resolverá lo que corresponda.</p> <p>7. Si la diligencia se practicó por comisionado y la oposición se refiere a todos los bienes objeto de ella, se remitirá inmediatamente el despacho al comitente, y el término previsto en el numeral anterior se contará a partir de la notificación del auto que ordena agregar al expediente el despacho comisorio. Si la oposición fuere parcial la remisión del despacho se hará cuando termine la diligencia.</p>	<p>8. Si se rechaza la oposición, la entrega se practicará sin atender a ninguna otra oposición, haciendo uso de la fuerza pública si fuera necesario. Cuando la decisión sea favorable al opositor, se levantará el secuestro, a menos que dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del auto que decida la oposición o del que ordene obedecer lo resuelto por el superior, el demandante presente prueba de haber promovido contra dicho tercero el proceso a que hubiere lugar, en cuyo caso el secuestro continuará vigente hasta la terminación de dicho proceso. Copia de la diligencia de secuestro se remitirá al juez de aquel.</p> <p>9. Quien resulte vencido en el trámite de la oposición será condenado en costas y en perjuicios; estos últimos se liquidarán como dispone el inciso 3o del artículo 201.</p> <p>Parágrafo. Restitución al tercero poseedor. Si el tercero poseedor con derecho a oponerse no hubiere estado presente al practicarse la diligencia de entrega, podrá solicitar al juez de conocimiento, dentro de los veinte (20) días siguientes, que se le restituya en su posesión. Presentada en tiempo la solicitud, el juez convocará a audiencia en la que practicará las pruebas que considere necesarias y resolverá. Si la decisión es desfavorable al tercero, este será condenado a pagar multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), costas y perjuicios. Dentro del término que el juez señale, antes de citar para audiencia, el tercero deberá prestar caución para garantizar el pago de las mencionadas condenas.</p> <p>Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará también al tercero poseedor con derecho a oponerse, que habiendo concurrido a la diligencia de entrega no estuvo representado por apoderado judicial, pero el término para formular la solicitud será de cinco (5) días.</p> <p>Los términos anteriores correrán a partir del día siguiente al de la fecha en que se practicó la diligencia de entrega.</p> <p style="text-align: center;">LIBRO SEGUNDO ACTOS PROCESALES</p> <p style="text-align: center;">SECCIÓN QUINTA TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO</p> <p style="text-align: center;">TÍTULO TERCERO EFFECTO Y EJECUCIÓN DE LAS PROVIDENCIAS</p>
<p style="text-align: center;">Capítulo I Transacción</p> <p>ARTÍCULO 221º. TRÁMITE. En cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la litis, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles.</p> <p>Para que la transacción produzca efectos procesales deberá solicitarse por quienes la hayan celebrado, dirigida al juez o tribunal que conozca del proceso o de la respectiva actuación posterior a este, según fuere el caso, precisando sus alcances o acompañando el documento que la contenga. Dicha solicitud podrá presentarla también cualquiera de las partes, acompañando el documento de transacción; en este caso se dará traslado del escrito a las otras partes por tres (3) días.</p> <p>El juez aceptará la transacción que se ajuste al derecho sustancial y declarará terminado el proceso, si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas o sobre las condenas impuestas en la sentencia. Si la transacción solo recae sobre parte del litigio o de la actuación posterior a la sentencia, el proceso o la actuación posterior a este continuará respecto de las personas o los aspectos no comprendidos en aquella, lo cual deberá precisar el juez en el auto que admita la transacción.</p> <p>El auto que resuelva sobre la transacción parcial es apelable en el efecto diferido, y el que resuelva sobre la transacción total lo será en el efecto suspensivo.</p> <p>Cuando el proceso termine por transacción o esta sea parcial, no habrá lugar a costas, salvo que las partes convengan otra cosa.</p> <p>ARTÍCULO 222º. TRANSACCIÓN POR ENTIDADES PÚBLICAS. Los representantes de la nación, departamentos y municipios no podrán transigir sin autorización del Gobierno Nacional, del gobernador o alcalde, según fuere el caso, conforme al comité de conciliación de la entidad.</p> <p>Cuando por ley, ordenanza o acuerdo se haya ordenado promover el proceso en que intervenga una de las mencionadas entidades la transacción deberá ser autorizada por un acto de igual naturaleza.</p>	<p>ARTÍCULO 223º. DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES. El demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso. Cuando el desistimiento se presente ante el superior por haberse interpuesto por la demandante apelación de la sentencia o casación, se entenderá que comprende el del recurso.</p> <p>El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos de aquella sentencia.</p> <p>Si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si sólo proviene de alguno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él.</p> <p>El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, y sólo perjudica a la persona que lo hace y a sus causahabientes.</p> <p>El desistimiento de la demanda principal no impide el trámite de la reconvencción, que continuará ante el mismo juez cualquiera que fuere su cuantía.</p> <p>Cuando el demandante sea la Nación, un departamento o municipio, el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial y por el representante del Gobierno Nacional, el gobernador o el alcalde respectivo.</p> <p>ARTÍCULO 224º. QUIÉNES NO PUEDEN DESISTIR DE LAS PRETENSIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los incapaces y sus representantes, a menos que previamente obtengan licencia judicial. En este caso la licencia deberá solicitarse en el mismo proceso, y el juez podrá concederla en el auto que acepte el desistimiento si considera que no requiere la práctica de pruebas; en caso contrario fijará fecha y hora para audiencia con tal fin. 2. Los apoderados que no tengan facultad expresa para ello. 3. Los curadores ad litem. (curador a efectos del juicio).

<p>ARTÍCULO 225°. DESISTIMIENTO DE CIERTOS ACTOS PROCESALES. Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. Las partes podrán desistir de las pruebas no practicadas que hubieren solicitado. No podrán desistir de las pruebas ya practicadas. Excepto cuando en el marco del trámite de la tacha se termine cuando quien aportó el documento desista de invocarlos como prueba.</p> <p>El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario.</p> <p>El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.</p> <p>No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando las partes así lo convengan. 2. Cuando se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido. 3. Cuando se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén vigentes medidas cautelares. 4. Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas. <p style="text-align: center;">LIBRO SEGUNDO ACTOS PROCESALES SECCIÓN SEXTA MEDIOS DE IMPUGNACIÓN</p>	<p style="text-align: center;">TÍTULO ÚNICO MEDIOS DE IMPUGNACIÓN</p> <p style="text-align: center;">Capítulo I Medios de impugnación</p> <p>ARTÍCULO 226°. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. Contra las providencias judiciales procederán los siguientes recursos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ordinarios: <ol style="list-style-type: none"> a. El de reposición. b. El de apelación. c. El de queja. 2. Extraordinarios: <ol style="list-style-type: none"> a. El de revisión. b. El de casación. c. El de anulación. <p>Cuando se formule un recurso improcedente contra una providencia judicial, el juez deberá tramitarlo por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo II Reposición</p> <p>ARTÍCULO 227°. RECURSO DE REPOSICIÓN – PROCEDENCIA, OPORTUNIDAD Y DECISIÓN. El recurso de reposición procederá contra los autos interlocutorios, proferidos por el juez o salas de decisión, para que se reformen o repongán.</p> <p>Se exceptúan los que resuelvan un recurso de apelación o una queja. Tampoco será procedente el recurso de reposición contra el auto que decide el recurso, salvo que contenga puntos novedosos.</p> <p>El recurso de reposición debe ser interpuesto, sustentando y resuelto en la misma audiencia en la que se haya proferido el auto, previo traslado a los no recurrentes.</p>
<p>Si el auto es proferido por fuera de audiencia, el recurso de reposición debe ser interpuesto y sustentando dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación por estado electrónico. El cual debe ser enviado al correo electrónico institucional del juzgado o de la secretaría de la Sala correspondiente y de manera simultánea al correo electrónico de los demás sujetos procesales.</p> <p>Previo traslado por secretaría, se resolverá dentro de los tres (3) días siguientes.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo III Recurso de apelación</p> <p>ARTÍCULO 228°. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revise la providencia impugnada, para que sea revocada o reformada. La decisión de segunda instancia se referirá única y exclusivamente sobre los puntos concretos de inconformidad planteada por el recurrente, a menos que se trate de derechos mínimos irrenunciables del trabajador, pensionado, afiliado, beneficiario o usuario del Sistema de Seguridad Social.</p> <p>El superior no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella o que se trate de derechos mínimos irrenunciables del trabajador, pensionado, afiliado, beneficiario, o usuario al sistema de la seguridad social.</p> <p>Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en este código.</p> <p>Son apelables los siguientes autos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El que rechace la demanda o su reforma y el que las tenga por no contestadas. 2. El que resuelva la intervención de los sucesores procesales, o de terceros y la representación de una de las partes o la intervención de terceros. 3. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba. 4. El que decida el trámite de un incidente. 5. El que decida el trámite de una nulidad procesal. 6. El que por cualquier causa ponga fin al proceso. 	<ol style="list-style-type: none"> 7. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago. 8. El que rechace de plano o resuelva sobre las excepciones contra el mandamiento de pago. 9. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de una caución para decretarla, impedirle o levantarla. 10. El que resuelva sobre la oposición al secuestro, entrega de bienes y el que las rechace de plano. 11. El que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo, cuando decida una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. 12. El que apruebe la liquidación de costas. 13. Los demás expresamente señalados en este código. <p>ARTÍCULO 229°. EFECTOS EN QUE SE CONCEDE LA APELACIÓN. Podrá concederse la apelación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De las sentencias en el efecto suspensivo. En este caso la competencia del juez de primera instancia se suspenderá desde la ejecutoria del auto que la concede hasta que se notifique el de obediencia a lo resuelto por el superior. <p>Si la apelación se interpone de forma parcial, lo no impugnado hará tránsito a cosa juzgada, salvo: a) cuando los asuntos que no fueron objeto de inconformidad dependan de las materias controvertidas, b) cuando fueren susceptibles de consulta, y, c) si la contraparte la hubiere apelado.</p> <p>Bajo las mismas reglas del inciso anterior, si la apelación tiene por objeto obtener más de lo concedido en la providencia recurrida, podrá pedirse el cumplimiento de lo que esta hubiere reconocido.</p> <p>Sin embargo, el inferior conservará competencia para conocer de todo lo relacionado con medidas cautelares.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. De los autos en el efecto devolutivo. En este caso no se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada, ni el curso del proceso, salvo que la providencia recurrida impida la continuación del proceso o implique su terminación, caso en el cual se concederá en el efecto suspensivo. <p>ARTÍCULO 230°. OPORTUNIDAD Y REQUISITOS El recurso de apelación se interpondrá:</p>

<p>1. Oralmente en la audiencia en que se profiera la sentencia o el respectivo auto. La sustentación, se presentará por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes, si se trata de sentencia y en la misma audiencia, contra un auto.</p> <p>2. Por escrito, dentro de los tres (3) días siguientes, cuando la providencia se notifique por fuera de audiencia, término dentro del cual, igualmente, deberá sustentarse.</p> <p>Una vez sustentado, se correrá traslado por secretaría a las partes no recurrentes, por el mismo término. Si son varios los recurrentes, se surtirá de manera conjunta.</p> <p>Vencido el término del traslado, el juez decidirá dentro de los tres (3) días siguientes sobre la concesión del recurso y el efecto, ordenando la remisión del expediente.</p> <p>El secretario deberá remitir la actuación dentro del término máximo de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria del auto que concede el recurso.</p> <p>Parágrafo 1º. Quien no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por el recurrente, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. La adhesión a la apelación se presentará y sustentará ante el juez que profirió la providencia dentro del término que este tiene para resolver. La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.</p> <p>Parágrafo 2º. La sustentación del recurso deberá expresar las razones jurídicas y fácticas de la inconformidad. En caso de no hacerlo, o presentarlo extemporáneamente, el juez de primera instancia lo declarará desierto.</p> <p>Parágrafo 3º. Proferida una providencia complementaria o que niegue la adición solicitada, dentro del término de ejecutoria de esta, también se podrá apelar la principal. La apelación de una providencia comprende la de aquella que resolvió sobre la complementación.</p> <p>Si antes de resolverse sobre la adición o aclaración de una providencia se hubiere interpuesto apelación contra esta, en auto que la decida se resolverá sobre la concesión de dicha apelación.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo IV Grado jurisdiccional de consulta</p>	<p>ARTÍCULO 231º. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA. Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción denominado de "consulta".</p> <p>Serán necesariamente consultadas ante el superior, si no fueren apeladas total o parcialmente, las siguientes sentencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Las totalmente adversas a los intereses del trabajador, pensionado, afiliado, beneficiario o usuario del Sistema de Seguridad Social. 2. Las adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante. 3. Las que declaren la ilegalidad en los procesos de calificación de la huelga. 4. Las adversas al trabajador en calidad de demandado en los procesos especiales de fuero. 5. Las meramente declarativas y que nieguen derechos consecuenciales. 6. Las que nieguen el reconocimiento y pago de honorarios. 7. Los fallos inhibitorios. <p>Parágrafo: mientras no se surta el grado jurisdiccional de consulta, la providencia no quedará ejecutoriada.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo V Recurso de queja</p> <p>ARTÍCULO 232º. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE QUEJA. Cuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelación o lo conceda en el efecto que no corresponda, el recurrente podrá interponer el de queja para que el superior lo conceda si fuere procedente. El mismo recurso procede cuando se deniegue el de casación y anulación.</p> <p>Deberá interponerse y sustentarse en el acto, cuando el auto que lo niegue fuere proferido en audiencia, o, dentro de los tres (3) días si este fuere emitido fuera de audiencia.</p> <p>Interpuesta la queja, según el caso, el Juez ordenará la remisión del expediente al superior, para lo cual se procederá en la forma prevista para el trámite de la apelación.</p> <p>Cumplido lo anterior, el escrito se mantendrá en la secretaría por tres (3) días a disposición de la otra parte para que manifieste lo que estime oportuno y, surtido el traslado, se decidirá el recurso.</p>
<p>Si el superior estima indebida la denegación de la apelación, la casación o la anulación, la admitirá y comunicará su decisión al inferior, con indicación del efecto en que corresponda en el primer caso.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo VI Revisión</p> <p>ARTÍCULO 233º. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las Salas Laborales de los Tribunales Superiores, los Jueces Laborales Municipales y del Circuito, dictadas en procesos ordinarios.</p> <p>Igualmente procede el recurso, respecto de las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento de sumas que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza.</p> <p>El recurso de revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.</p> <p>ARTÍCULO 234º. COMPETENCIA. La competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión, la tendrá el superior jerárquico por el factor funcional, del juez que hay proferido la decisión objeto del medio de impugnación, o de quien haya intervenido en el acto de conciliación.</p> <p>Frente a las decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia, será esta misma Corporación quien resuelva el mismo.</p> <p>ARTÍCULO 235º. CAUSALES DE REVISIÓN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida. 2. Haberse cimentado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falsos testimonios en razón de ellas. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Cuando después de ejecutoriada la sentencia se demuestre que la decisión fue determinada por un hecho delictivo del juez, decidido por la justicia penal. 4. Haber incurrido el apoderado judicial o mandatario en el delito de infidelidad de los deberes profesionales, en perjuicio de la parte que representó en el proceso laboral, siempre que ello haya sido determinante en este. 5. Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y 6. Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. <p>Parágrafo 1. las causales 5 y 6 de este artículo solo serán esgrimidas a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación y UGGPP. Y respecto del reconocimiento de condenas impuestas al tesoro público o a fondos de naturaleza pública que tengan como obligación cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza.</p> <p>Parágrafo 2. Este recurso también procede respecto de conciliaciones laborales en los casos previstos en los numerales 1, 3 y 4 de este Artículo.</p> <p>ARTÍCULO 236º TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El recurso podrá interponerse dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia penal sin que pueda excederse de cinco (5) años contados a partir de la sentencia laboral o de la conciliación, o transacción según el caso.</p> <p>ARTÍCULO 237º. FORMULACIÓN DEL RECURSO. El recurso se interpondrá, ante la autoridad competente para conocer de la revisión, mediante demanda que deberá contener:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nombre y domicilio del recurrente. 2. Nombre y domicilio de las personas que fueron parte en el proceso en que se dictó la sentencia. 3. La designación del proceso en que se dictó la sentencia, con indicación de su fecha, el día en que quedó ejecutoriada y el despacho judicial en que se halla el expediente. 4. Las pruebas documentales que se pretendan hacer valer, incluida la copia del proceso laboral.

<p>ARTÍCULO 238°. TRÁMITE. El juez competente que reciba la demanda examinará si reúne los requisitos exigidos en los dos artículos precedentes, y si los encuentra cumplidos, se resolverá sobre su admisión.</p> <p>Se declarará inadmisibile la demanda cuando no reúna los requisitos formales exigidos en el artículo anterior. Y se concederá el término de 5 días para que la subsane so pena de su rechazo.</p> <p>Admitida la demanda se correrá traslado al demandado por un término de diez (10) días. A la contestación se deberán acompañar las pruebas documentales que se pretendan hacer valer y no se podrá proponer excepciones previas.</p> <p>En este trámite especial no se admitirá reforma de la demanda de revisión.</p> <p>El juez competente fallará de plano, en un término de veinte (20) días. Si se encontrare fundada la causal invocada se invalidará la sentencia y se dictará la que en derecho corresponda. Contra esta decisión no procede recurso alguno.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo VII Casación</p> <p>ARTÍCULO 239°. SENTENCIAS SUSCEPTIBLES DEL RECURSO. El recurso extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida.</p> <p>A partir de la vigencia de la presente Ley, y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, sólo serán susceptibles del recurso de casación las sentencias proferidas por los tribunales en los procesos declarativos – ordinarios y especiales – cuando el valor actual de la decisión desfavorable del recurrente exceda de ciento cincuenta (150) veces el salario mínimo legal mensual vigente.</p>	<p>No obstante, en las sentencias que no cumplan los requisitos del inciso anterior, para los fines de unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos, se podrá seleccionar las sentencias de segunda instancia, proferidas por los Tribunales Superiores ya sea de manera oficiosa por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia o por remisión de aquellos, mediante providencia debidamente motivada, con estricto cumplimiento de lo dispuesto en el procedimiento y criterios establecidos en el artículo 240 de este Código. Contra estas decisiones no procede recurso alguno.</p> <p>ARTÍCULO 240°. _En los eventos en que la Sala de Casación Laboral o los Tribunales Superiores evidencien una eventual vulneración de derechos laborales y de la seguridad social, podrán seleccionar las sentencias de segunda instancia, proferidas por los Tribunales Superiores.</p> <p>El proceso de selección deberá cumplir las siguientes etapas, en las que se garantice la transparencia, publicidad y economía procesal así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Previa selección de cualquiera de los Magistrados que integran la Sala de Casación Laboral, dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, se elevará solicitud a la Sala de Casación Laboral en pleno, en la que se deberá consignar la motivación de la selección. Previa comunicación a las partes. 2. Los fundamentos de la misma deberán tener en cuenta los siguientes criterios: <ol style="list-style-type: none"> a) Criterio objetivo: unificación de jurisprudencia o vulneración de un derecho del trabajo y de la seguridad social. b) Subjetivo: la necesidad de garantizar un enfoque diferencial. 3. La solicitud deberá aprobarse por la mayoría de los integrantes de la Sala de Casación Laboral en un término de 20 días. La decisión tomada será comunicada a las partes, con el fin de que se pronuncien respecto de la solicitud. Contra dicha decisión no procede recurso alguno. 4. La solicitud de selección no constituye prejuzgamiento en la medida en que la decisión se sujetará estrictamente al análisis de los criterios señalados en la solicitud y con estricto cumplimiento de la técnica de casación.
<p>ARTÍCULO 241°. CAUSALES O MOTIVOS DEL RECURSO. Son causales del recurso extraordinario de casación en materia laboral:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ser la sentencia violatoria de una norma jurídica de derecho sustancial en forma directa. 2. Ser la sentencia violatoria de la norma sustancial que contiene el derecho pretendido o la base del derecho reclamado, por violación de medio a través de la transgresión de las normas procesales 3. Presentar la sentencia error de hecho manifiesto, que provenga de la apreciación de la demanda, contestación de la demanda o de las pruebas reguladas en este Código. 4. Contener la sentencia impugnada decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló la de primera instancia, o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. 5. Cuando en la sentencia se hubiere dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir esta una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se puede admitir su prueba por otra media y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de serlo. <p>La Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las que han sido expresamente alegadas en el recurso extraordinario. Sin embargo, podrá casar la sentencia, aún de oficio, para efectos cumplir con los fines del recurso cuando sea manifiesto que la misma transgrede derechos fundamentales.</p> <p>ARTÍCULO 242°. SELECCIÓN EN EL TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN. La Sala, aunque la demanda de casación cumpla los requisitos formales, podrá inadmitirla, mediante providencia motivada, en los siguientes eventos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando exista identidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de la Corte, salvo que el recurrente demuestre la necesidad de variar su sentido. 2. Cuando no es evidente la transgresión del ordenamiento jurídico en detrimento del recurrente. <p>ARTÍCULO 243°. INTERPOSICIÓN, CONCESIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL RECURSO. El recurso de casación deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la sentencia de segunda instancia.</p>	<p>El Tribunal concederá el recurso en el efecto devolutivo y correrá traslado por el término de veinte (20) días para que lo sustente. Presentado en término remitirá la actuación a la Corte Suprema de Justicia, si no se sustenta lo declarará desierto.</p> <p>No obstante, al momento de interponerlo, el recurrente podrá pedir que se suspenda el cumplimiento de la sentencia del tribunal. Para que la solicitud sea atendible, la parte que interpone el recurso deberá ofrecer caución suficiente para garantizar el pago de los perjuicios que la suspensión del fallo impugnado ocasione a su contraparte.</p> <p>En la providencia que concede el recurso, se fijarán el monto y la naturaleza de la caución, que será constituida dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de aquella. De no procederse en el sentido indicado, o si la caución prestada no satisface los términos en que fue ordenada, la sentencia recurrida podrá ser ejecutada. De lo contrario, en el mismo auto en que en que califica la caución prestada, se dispondrá la suspensión del cumplimiento de la sentencia.</p> <p>Si al sustentar el recurso, el recurrente limita la impugnación a solo algunas de las condenas, la parte no recurrente podrá pedir que se cumplan aquellas que no forman parte de las inconformidades planteadas en la demanda de casación. Si el recurrente pretende lograr más de lo concedido por el tribunal, podrá pedir el cumplimiento de lo reconocido. En ambos casos, deberá suministrarse lo necesario para la expedición de las copias que se requieran para el cumplimiento, antes que se ejecutorie el auto que las ordena.</p> <p>Si la concesión del recurso a ambas partes imposibilita poner en práctica lo previsto en el inciso anterior, así lo decidirá el magistrado ponente mediante auto que no admite recursos.</p> <p>En los eventos en que sea remitido por parte de las Salas Laborales de los Tribunales Superiores lo previsto en el inciso 3 del artículo 236, se dispondrá su envío en el auto que resuelve la interposición del recurso de casación.</p> <p>Parágrafo: Vencidos el término de cinco días de que trata este artículo y para los efectos del inciso 3 del artículo 239 de este código, el Tribunal dentro de los cinco días deberá enviar el proceso a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Quien decidirá del conocimiento del asunto mediante providencia motivada, que no tendrá recurso.</p>

<p>ARTÍCULO 244°. REQUISITOS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN La demanda de casación deberá contener:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La designación de las partes, una síntesis de los hechos materia de litigio, las pretensiones y decisiones de instancia. 2. La indicación de la sentencia impugnada; 3. La declaración del alcance de la impugnación; 4. Las causales de casación, en caso de que la acusación se dirija por la causal primera la indicación de normas jurídicas de derecho sustancial que se estiman violadas. Será suficiente señalar cualquier norma jurídica de derecho sustancial que debiendo ser la base esencial del fallo impugnado se considere transgredida, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa. 5. Los cargos en que se fundamenta la acusación, de manera separada, con ex-presión de las razones en las que se fundamentan, en forma clara, precisa y sucinta, con sujeción a las siguientes reglas: <ol style="list-style-type: none"> a) Tratándose de violación directa de la ley sustancial, el cargo se circunscribirá a la cuestión jurídica, sin comprender ni extenderse a la materia probatoria. b) En caso de que la acusación se dirija por violación indirecta, no podrán plantearse aspectos fácticos que no fueron debatidos en la instancia, para tal efecto podrá argumentar la existencia de errores de derecho o errores manifiestos de hecho: Cuando se trate de la causal 5ª del Artículo atinente a los motivos de casación, se indicarán las normas probatorias que se consideran violadas, con una explicación sucinta de la forma en que se infringieron. Si se invoca un error de hecho manifiesto, deberán singularizarse con precisión y claridad las pruebas que se consideran omitidas o mal valoradas, además, el recurrente deberá demostrar el error y señalar su incidencia en la decisión. c) Cuando la transgresión de normas procesales conlleva a la infracción de normas sustanciales, el recurrente acusará la violación medio de dichos preceptos que podrá derivar en violaciones por la vía directa o indirecta de normas sustanciales. <p>ARTÍCULO 245°. PLANTEAMIENTO DE LA CASACIÓN. El recurrente deberá plantear sucintamente su demanda, sin extenderse en consideraciones jurídicas como en los alegatos de instancia.</p>	<p>ARTÍCULO 246°. JUSTIPRECIO DEL INTERÉS ECONÓMICO PARA RECURRIR Y CONCESIÓN DEL RECURSO. Cuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el tribunal decidirá de plano sobre la concesión.</p> <p>ARTÍCULO 247°. TRÁMITE DEL RECURSO. Remitido el expediente a la Corte, la Sala de Casación Laboral, verificados los requisitos establecidos en este Código, calificará la demanda y correrá el traslado al opositor por el término de quince (15) días.</p> <p>El auto que resuelva sobre la calificación de la demanda, será dictado por la sala y contra el solo procede el recurso de reposición.</p> <p>Si los opositores son dos o más, el traslado para la réplica será común. Vencido el término del traslado, el expediente pasará al magistrado ponente para que elabore el proyecto de sentencia.</p> <p>Si la demanda no reúne los requisitos, se declarará desierto el recurso.</p> <p>Lo anterior sin perjuicio de que La Sala pueda, declarar inadmisibles el recurso por cualquier causa de carácter legal.</p> <p>ARTÍCULO 248°. AUDIENCIA. Si durante la discusión del proyecto de sentencia la Sala estimare conveniente aclarar puntos de hecho, podrá citar a las partes para ser oídas en audiencia, quienes depondrán sobre lo que única y exclusivamente determinen los magistrados en su interrogatorio o disponer que aquellas rindan informes y alleguen la documentación que tengan en su poder y se estime necesaria para los referidos fines.</p> <p>ARTÍCULO 249°. DECISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN. Si la Sala hallare justificada alguna de las causales previstas en este Código, decidirá sobre lo principal del pleito o sobre los temas comprendidos en la casación.</p>
<p>Si un cargo contiene acusaciones que la Corte estima han debido formularse separadamente, deberá decidir sobre ellas como si se hubieran invocado en distintos cargos.</p> <p>Si se formulan acusaciones en distintos cargos y la Corte considera que han debido proponerse a través de uno solo, de oficio los integrará y resolverá sobre el conjunto, según corresponda.</p> <p>No son admisibles cargos que por su contenido sean entre sí incompatibles. Si se presentan y adolecen de tal defecto, la Corte tomará en consideración los que, atendidos los fines propios del recurso de casación por violación de la ley, a su juicio guarden adecuada relación con la sentencia impugnada, con los fundamentos que le sirven de base, con la índole de la controversia específica, con la posición procesal por el recurrente adoptada en instancia y, en general, con cualquiera otra circunstancia comprobada que para el propósito indicado resultante relevante.</p> <p>La Sala no casará la sentencia impugnada cuando se establezca que aun cuando los cargos presentados resultan fundados, en sede de instancia, se llegaría a la misma decisión resolutoria pero por razones distintas, las que deben explicarse.</p> <p>La Sala en la decisión de instancia podrá dictar un auto para mejor proveer.</p> <p>Allegadas al proceso, se surtirá por secretaría traslado a las partes, luego de lo cual, el expediente regresará al despacho para decidir lo pertinente.</p> <p>Si no prospera ninguna de las causales alegadas, se condenará en costas al recurrente, salvo que no se haya presentado oposición.</p> <p>La sentencia que defina el recurso extraordinario de casación será notificada por estados.</p> <p>Parágrafo. Para los efectos del inciso 3 del artículo 236 de este código, no se requerirá demanda de casación.</p> <p>ARTÍCULO 250°. ACUMULACIÓN DE FALLOS. A juicio de la Sala de Casación, podrán acumularse y ser decididos en una misma sentencia varios asuntos. De ello se dejará</p>	<p>constancia en la respectiva sentencia, cuyo texto será incorporado en cada uno de los procesos.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo VIII Anulación</p> <p>ARTÍCULO 251°. RECURSO DE ANULACIÓN. Contra los laudos arbitrales de que tratan los Artículos 303 y 308 de este código, procede el recurso extraordinario de Anulación que será conocido por la Sala Laboral del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial donde se constituyó.</p> <p>Este recurso deberá interponerse y sustentarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo, ante el Tribunal de arbitramento, y presentado en tiempo, se enviará de manera virtual a la Sala Laboral del Tribunal Superior respectivo, dentro de los dos (2) días siguientes.</p> <p>ARTÍCULO 252°. TRÁMITE. Recibido el expediente en el Tribunal y efectuado el reparto, el magistrado sustanciador verificará si el recurso cumple con los presupuestos para su trámite, esto es, si el laudo fue emanado de la totalidad de los árbitros, si el recurso fue interpuesto dentro del tiempo establecido para el efecto, así como si se encuentra sustentado.</p> <p>Admitido el recurso se correrá traslado del mismo a las partes para alegaciones por un término común de cinco (5) días.</p> <p>Una vez agotado este término por parte del Magistrado sustanciador se presentará proyecto de sentencia dentro de diez días y el Tribunal resolverá dentro de los diez días siguientes.</p> <p>Su decisión será en derecho, y tendrá la facultad de confirmar, revocar o modificar el contenido del laudo proferido. Contra esta decisión no procederá recurso alguno.</p> <p>Parágrafo. Las decisiones del Tribunal se expedirán acorde al principio de consonancia limitándose a los aspectos planteados en el recurso, así como los derechos o facultades reconocidos por la Constitución, o por las leyes o por normas convencionales a cualquiera de las partes.</p>

<p>ARTÍCULO 253º. RECURSO DE ANULACIÓN EN CONFLICTOS DE INTERESES. Contra los laudos arbitrales procede el recurso extraordinario de anulación que será conocido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.</p> <p>Este recurso deberá interponerse y sustentarse dentro de los diez (10) siguientes a la notificación del laudo, ante el Tribunal de arbitramento. Presentado en tiempo, el Tribunal concederá el recurso y lo enviará en su integridad y organizado de manera cronológica a través de medios electrónicos a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los dos (2) días siguientes a su notificación.</p> <p>ARTÍCULO 254º. TRÁMITE. Recibido el expediente en la Corte, la Sala de Casación Laboral a efectos de admitir el recurso.</p> <p>Verificará que el laudo cumple los presupuestos para su trámite, que fue suscrito por la totalidad de los árbitros fue interpuesto dentro del tiempo establecido para el efecto a través de abogado y debidamente sustentado. Se correrá traslado común del mismo a las partes para alegaciones por un término de cinco (5) días. Contra dicha providencia será susceptible el recurso de reposición.</p> <p>Una vez agotado este término por parte del Magistrado ponente se presentará proyecto de sentencia. Contra dicha decisión no procederá recurso alguno.</p> <p style="text-align: center;">LIBRO TERCERO LOS PROCESOS</p> <p style="text-align: center;">SECCIÓN PRIMERA PROCESOS ESPECIALES</p> <p style="text-align: center;">TÍTULO PRIMERO PROCESOS ESPECIALES</p> <p style="text-align: center;">Procedimiento ordinario I Primera instancia</p>	<p>ARTÍCULO 255º. TRASLADO DE LA DEMANDA. Admitida la demanda el juez deberá integrar la litis con quienes advierta necesario hacerlo y ordenará correr traslado de ella al demandado (s), integrados, al Agente del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, si fuere el caso, por un término común de diez (10) días.</p> <p>El traslado al demandado (s) se entenderá surtido con el envío del auto admisorio como mensaje de datos a la dirección electrónica o canal digital que suministre el interesado y la copia de la demanda y sus anexos.</p> <p>La notificación de los intervinientes se efectuará conforme a lo indicado en los Artículos 208 y siguientes.</p> <p>ARTÍCULO 256º. DEMANDA DE RECONVENCIÓN. El demandado, al contestar la demanda, podrá proponer la reconvencción, siempre que el juez sea competente para conocer de esta o sea admisible la prórroga de competencia. En caso de alterarse la competencia deberá remitir el proceso al juez competente, quien continuará el trámite a partir del estudio de admisibilidad de la demanda de reconvencción.</p> <p>ARTÍCULO 257º. FORMA Y CONTENIDO DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN. La demanda de reconvencción se formulará en escrito separado del de la contestación, deberá contener los mismos requisitos de la demanda principal y remitirse copia con todos sus anexos a las partes e intervinientes, a través del juzgado una vez esta fuere admitida.</p> <p>De ella se dará traslado común por el mismo término de la demanda inicial al reconvenido, al agente del Ministerio Público e integrados a la litis, privilegiando el uso de las tecnologías y de allí en adelante se sustanciará bajo un mismo trámite y se decidirá en una misma sentencia.</p> <p>ARTÍCULO 258º. AUDIENCIA INICIAL: DE CONCILIACIÓN, DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS, SANEAMIENTO, FIJACIÓN DEL LITIGIO Y DECRETO DE PRUEBAS. Contestada la demanda principal y la de reconvencción si la hubiere, o cuando no hayan sido contestadas en el término legal, el juez señalará fecha y hora para que las partes comparezcan personal</p>
<p>o virtualmente, con o sin apoderado, a audiencia pública, que será dirigida por el juez, previo el examen completo del expediente.</p> <p>Para efectos de esta audiencia, se observarán las siguientes reglas:</p> <p>A. Conciliación: Condición de incapacidad. Si alguno de los demandantes o de los demandados fuere incapaz, concurrirá su representante legal.</p> <p>Excusas para no comparecer. Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, la cual será fijar dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha inicial, sin que pueda haber otro aplazamiento, salvo solicitud de ambas partes por tener ánimo conciliatorio.</p> <p>Consecuencias de no comparecer sin justificación: Excepto los casos contemplados en los dos (2) incisos anteriores, si las partes o sus apoderados, con facultad para conciliar, no concurren a la audiencia de conciliación, el juez la declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales:</p> <p>a. Si se trata del demandante se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito. b. Si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión. Parágrafo. Las mismas consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvencción. c. Cuando los hechos no admitan prueba de confesión, la no comparecencia de las partes se apreciará como indicio grave en su contra. d. En el caso de inasistencia injustificada a esta audiencia de cualquiera de los apoderados y/o del curador ad litem (curador a efectos del juicio), dará lugar a la imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente.</p> <p>Procedimiento en caso de comparecencia de las partes. Instalada la audiencia, si concurren las partes, con o sin apoderados, el juez los invitará para que en su presencia y bajo su vigilancia concilien sus diferencias, si fueren susceptibles de solución por este medio, y si no lo hicieren, deberá proponer las fórmulas que estime justas sin que ello signifique prejuzgamiento y sin que las manifestaciones de las partes impliquen confesión.</p>	<p>En esta etapa de la audiencia solo se permitirá diálogo entre el juez y las partes, y entre estas y sus apoderados con el único fin de asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación.</p> <p>El juez y las partes estimarán fórmulas de justicia retributiva, compensatoria, restaurativa y terapéutica, con el fin de concertar medidas de reparación y reconstrucción positiva de las relaciones.</p> <p>El juez podrá realizar audiencias privadas con las partes para explorar fórmulas de arreglo. La etapa de diálogo no será grabada.</p> <p>Acuerdo entre las partes. Si se llegare a un acuerdo total se dejará constancia de sus términos en el acta correspondiente y se declarará terminado el proceso. El acuerdo tendrá fuerza de cosa juzgada. Si el acuerdo fuese parcial se procederá en la misma forma en lo pertinente, y se continuará el trámite en lo no conciliado.</p> <p>Cuando fracase el intento de conciliación. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo total, el juez declarará terminada la etapa de conciliación.</p> <p>B. Seguidamente procederá a resolver las excepciones previas, dictar las medidas de saneamiento, fijación del litigio, decretar pruebas solicitadas por las partes y las que el juez considere de oficio.</p> <p>C. Acto seguido analizará los hechos que constituyen confesión derivados de los actos procesales de parte y requerirá a las partes para que manifiesten sus objeciones al respecto. Posteriormente, mediante auto establecerá los hechos que se encuentran probados, aquellos respecto de los cuales advierte existió confesión como consecuencia de los actos procesales de las partes y fijará el litigio con los hechos que resulten controverbiales y no han sido aceptados por las partes. En la misma decisión desechará las pruebas pedidas que versen sobre los mismos hechos, devolverá documentos repetidos, así como las pretensiones y excepciones que queden excluidas como resultado de la conciliación parcial y la fijación de litigio.</p> <p>D. Finalmente decretará las pruebas que fueren conducentes y necesarias y depurará al expediente electrónico de las pruebas que no han sido decretadas tomando en cuenta la conciliación parcial, si la hubo, y la fijación del litigio. El juez señalará día y hora para</p>

<p>audiencia de trámite y juzgamiento, que habrá de celebrarse dentro de los tres (3) meses siguientes.</p> <p>Parágrafo: Si el juez lo considera pertinente, podrá practicar las pruebas a continuación de su decreto, siempre que se garantice el derecho de defensa de las partes, incluidos los interrogatorios a las partes. Para ello, previamente deberá advertirlo en el auto que señala fecha y hora para la audiencia inicial.</p> <p>ARTÍCULO 259°. AUDIENCIA DE TRÁMITE Y JUZGAMIENTO. En el día y hora señalados el juez practicará las pruebas, dirigirá las interpellaciones o interrogaciones de las partes y oírás las alegaciones de estas. Los testigos serán interrogados separadamente, de modo que no se enteren del dicho de los demás.</p> <p>Si la causa requiere de prueba pericial, se suspenderá la audiencia y se fijará fecha y hora para su continuación, a la cual deberá asistir el perito para la sustentación y contradicción del dictamen. La inspección judicial se podrá realizar con apoyo del perito, si es del caso.</p> <p>Cerrado el debate probatorio, se da la oportunidad a las partes para las alegaciones. El juez les limitará el tiempo en igualdad de condiciones.</p> <p>Cumplido lo anterior, el juez proferirá sentencia en forma oral, aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieren retirado.</p> <p>En caso de requerirlo, el juez podrá decretar un receso hasta de una (1) hora para proferir su decisión en forma oral, para tal efecto comunicará la parte resolutive de la sentencia, lo cual notificará en estrados.</p> <p>Si no fuere posible dictar la sentencia en forma oral, el juez deberá dejar constancia expresa de las razones concretas. En este evento, además de anunciar el sentido de su fallo, el juez debe dar una breve exposición de sus fundamentos, y emitir la decisión escrita dentro de los diez (10) días siguientes.</p> <p>El recurso de apelación contra la sentencia se interpondrá y sustentará en los términos previstos en este Código.</p>	<p>ARTÍCULO 260°. SENTENCIA ANTICIPADA. El juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial antes de la audiencia inicial, en los siguientes eventos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando se trate de asuntos de puro derecho que no requieran la práctica de pruebas diferentes a las allegadas con la demanda y su contestación. 2. Cuando en la demanda y su contestación únicamente se hayan solicitado pruebas documentales y sobre estas no se haya alegado tacha o desconocimiento. 3. Cuando el demandado se allane a las pretensiones de la demanda, en los términos del artículo 71 del este código. 4. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, conciliación, transacción, falta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. En caso de esta última, siempre que hubiere sido alegada. 5. Cuando cualquiera de las partes o sus apoderados lo soliciten, siempre que se verifique alguna de las causales establecidas en los numerales anteriores. <p>Parágrafo. El juez convocará a audiencia pública para tal efecto. Instalada, si concurren las partes, con o sin apoderados, los invitará para que en su presencia y bajo su vigilancia concilien sus diferencias, si fueren susceptibles de solución por este medio, de no lograrse, indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada y correrá traslado para alegar de conclusión. No obstante, una vez escuche los alegatos, podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada y se constituirá en audiencia inicial, evento en el cual se entenderá surtida la etapa de conciliación.</p> <p style="text-align: center;">II Segunda instancia</p> <p>ARTÍCULO 261°. TRÁMITE SEGUNDA INSTANCIA. El recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta se tramitarán así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Ejecutoriada el auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se proferirá sentencia escrita dentro de los diez (10) días siguientes. <p>Si se decretan pruebas en esta instancia, se fijará fecha para practicarlas y se recibirán en la misma los alegatos. Cumplido ello, dentro de los diez (10) días siguientes se dictará por escrito la sentencia respectiva.</p>
<p>Quando se trate de la apelación de un auto, se resolverá el recurso por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes.</p> <p>También procederá contra la sentencia dictada en el trámite del proceso monitorio laboral y de seguridad social.</p> <p>ARTÍCULO 262°. CASOS EN QUE EL SUPERIOR PUEDE ORDENAR Y PRACTICAR PRUEBAS. Las partes no podrán solicitar del superior la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en primera instancia.</p> <p>Quando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el superior, a petición de parte, ordenar su práctica y decretar de oficio las demás pruebas que considere necesarias para resolver la apelación o la consulta.</p> <p>Si en la audiencia no fuere posible practicar todas las pruebas, citará para una nueva con ese fin, que deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes.</p> <p>ARTÍCULO 263°. CONSIDERACIÓN DE PRUEBAS PEDIDAS EN TIEMPO. Las pruebas pedidas en tiempo, no allegadas oportunamente en primera instancia, deberán ser consideradas por el superior cuando lleguen a su estudio por apelación o consulta, previo traslado a las partes.</p> <p>ARTÍCULO 264°. Se tramitarán por el procedimiento especial previsto en este código los asuntos relativos a estabilidad laboral reforzada consagrada en las leyes sustantivas, sin que se entienda una enunciación restrictiva o taxativa, la siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los de fuero de maternidad, que incluye al cónyuge, pareja, compañero o compañera permanente, cuando no tengan un empleo formal. 2. Los de fuero por situación de discapacidad. 3. Los de fuero por pre - pensionado. 4. Acoso laboral 	<ol style="list-style-type: none"> 5. permiso de menores 6. Declaratoria de legalidad e ilegalidad del cese de actividades 7. cancelación de personería jurídica de sindicato. 8. Fuero Sindical 9. Fuero circunstancial 10. Protección de derechos sindicales. <p style="text-align: center;">Capítulo I Proceso ejecutivo del trabajo y de la seguridad social</p> <p>ARTÍCULO 265°. ACCIONES DE COBRO POR PARTE DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Prestan mérito ejecutivo ante la jurisdicción del trabajo, los actos proferidos por las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral encargadas del recaudo, las cuales declaren la obligación de pagar las cuotas o cotizaciones que se les adeuden, una vez agotado el procedimiento interno ante la respectiva entidad.</p> <p>ARTÍCULO 266°. JUEZ COMPETENTE EN LAS EJECUCIONES PROMOVIDAS POR LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. De las ejecuciones de que trata el Artículo anterior, conocerán los jueces del trabajo del domicilio del demandado. Lo anterior, teniendo en cuenta las reglas generales sobre competencia por razón de la cuantía.</p> <p style="text-align: center;">Ejecución de sentencias y demás títulos ejecutivos</p> <p>ARTÍCULO 267°. TÍTULO EJECUTIVO. Puede demandarse ejecutivamente el cumplimiento de las obligaciones expresas, claras y exigibles originadas en una relación de trabajo, o en una relación jurídica de la seguridad social, que consten en actos o documentos que provengan del deudor o de su causante, en actos administrativos, en actos o documentos emanados de entidades administradoras del sistema de Seguridad Social, en actas de conciliación y transacción o en una decisión judicial o arbitral en firme.</p>

<p>La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio con fines extraprocesales.</p> <p>La ejecución se llevará a efecto en los propios términos establecidos en el título que se ejecuta.</p> <p>De la ejecución de providencias emanadas de la jurisdicción laboral será competente el mismo juez que conoció del asunto en instancia. Igual ocurrirá en el caso de providencias que aprueben transacciones judiciales y acuerdos de conciliación logrados en el proceso ordinario o especial. En los demás casos, será competente el juez laboral, de acuerdo con las reglas generales de competencia previstas en este código.</p> <p>Parágrafo. Cuando se pretenda la ejecución de una obligación que no emane de providencia judicial a continuación del proceso declarativo, el juez asumirá su competencia con las características y requisitos señalados en este código para cualquier demanda, con control de admisión dentro del auto que ordena el mandamiento de pago.</p> <p>ARTÍCULO 268°. DILIGENCIAS PREVIAS. No se requerirá constituir en mora al deudor cuando lo pretendido sea la ejecución de providencias judiciales dictadas por la justicia laboral.</p> <p>Sin embargo, en tratándose de la ejecución de obligaciones que consten en actos o documentos provenientes de entidades administradoras del sistema de Seguridad Social, será necesario constituir en mora al deudor, con la notificación del respectivo acto o documento de liquidación de aportes adeudados.</p> <p>ARTÍCULO 269°. OBLIGACIONES DE DAR Y HACER. Si la obligación es de dar, el ejecutante podrá exigir la ejecución de los perjuicios moratorios desde que la obligación se hizo exigible hasta que la entrega se efectúe. De la misma manera se procederá si demanda una obligación de hacer y pide perjuicios por la demora en la ejecución del hecho. Si la tasa legal o convencional es variable, no será necesario indicar el porcentaje de la misma.</p> <p>Cuando el demandante pretenda que la ejecución prosiga por perjuicios compensatorios en caso de que el deudor no cumpla la obligación en la forma ordenada en el mandamiento ejecutivo, deberá solicitarlo subsidiariamente en la demanda.</p>	<p>ARTÍCULO 270°. OBLIGACIONES DE NO HACER. Si la obligación es de no hacer y se ha probado la contravención, el juez ordenará retrotraer lo hecho dentro de un plazo prudencial y librára ejecución por los perjuicios por lo hecho, si en la demanda se hubieren pedido.</p> <p>En caso de que el ejecutado deudor no retrotraiga lo hecho o no sea posible retrotraer lo hecho, deberá proponer la respectiva excepción o el juez podrá aprobar el pago por equivalencias, previo traslado al demandante quien deberá hacer una estimación razonada de la misma.</p> <p>ARTÍCULO 271°. MEDIDAS CAUTELARES, EMBARGO Y SECUESTRO. Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado o cualquier otra medida que resulte viable para llevar a debido efecto la ejecución.</p> <p>Previa denuncia de bienes, hecha bajo juramento, el juez decretará inmediatamente el embargo y secuestro de los bienes muebles o el mero embargo de inmuebles del deudor. El juez limitará al valor de los embargos y secuestros al momento de su decreto, de manera que garantice la efectividad del crédito cobrado, los intereses, la indexación de la deuda, los perjuicios y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda.</p> <p>En el decreto de embargo o secuestro, el juez señalará la suma que ordene pagar, citará el documento que sirva de título ejecutivo y nombrará secuestre, si fuere el caso. Si las medidas comprenden bienes sometidos a registro, se comunicará la providencia inmediatamente a la autoridad correspondiente para su debida inscripción.</p> <p>Dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, el juez, a petición de parte, podrá solicitar la información relevante para lograr la efectividad de la obligación que se ejecute, a entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado puedan tener constancia de los bienes o derechos patrimoniales de éste o que pudieran resultar deudoras del mismo.</p> <p>Parágrafo. Previa reglamentación del Consejo Superior de la Judicatura, los jueces del trabajo y de la seguridad social podrán ordenar, electrónicamente, la retención de sumas</p>
<p>de dinero de las cuentas bancarias del deudor; así como también podrá ordenar el levantamiento de la medida cautelar y la consignación de las sumas.</p> <p>ARTÍCULO 272°. DERECHO DE TERCEROS. Queda a salvo el derecho de terceras personas, si prestan caución de indemnizar a las partes los perjuicios que de su acción se les sigan, para pedir en cualquier tiempo, antes del remate, que se levante el secuestro de bienes, alegando que tenían la posesión de ellos al tiempo en que aquel se hizo.</p> <p>Junto con su petición, el tercero deberá presentar las pruebas en que la funde y el Juez la resolverá de plano.</p> <p>ARTÍCULO 273°. ORDEN DE PAGO. Mediante providencia que no admite el recurso de apelación, el juez ordenará el pago de cantidades líquidas de dinero con sus intereses en el término de cinco (5) días, contados a partir de la ejecutoria de la decisión, plazo en el cual el demandado deberá cumplir la obligación o, podrá formular las excepciones que considere pertinentes.</p> <p>Si la obligación versa sobre la ejecución de una obligación de hacer, el juez ordenará al deudor que se ejecute el hecho dentro del plazo prudencial que le señale y librára ejecución por los perjuicios moratorios cuando se hubieren pedido en la demanda. Ejecutado el hecho se citará a las partes para su reconocimiento.</p> <p>Si el demandante lo acepta, no concurre a la diligencia, o no formula objeciones dentro de ella, se declarará cumplida la obligación.</p> <p>Las cuestiones relativas al incumplimiento de requisitos formales del título ejecutivo, las excepciones previas y el beneficio de excusión, solo podrán alegarse mediante la interposición del recurso de reposición. De prosperar el recurso, sin que implique la terminación de la ejecución, se le concederá al ejecutante el término de cinco (5) días para que subsane o aporte los documentos omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago y se le condene en costas y perjuicios.</p>	<p>ARTÍCULO 274°. PLAZOS. El plazo para solicitar la ejecución será igual al fijado en las leyes sustantivas para el ejercicio de la acción tendiente al reconocimiento del derecho cuya ejecución se pretenda. Dicho plazo será de prescripción a todos los efectos.</p> <p>ARTÍCULO 275°. EXCEPCIONES. Para el trámite de excepciones y recursos se aplicarán las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, el ejecutado podrá proponer excepciones, expresando los hechos en que se funden. Vencido este término se señalará fecha de audiencia para resolverlas dentro de los cinco (5) días siguientes. Si el ejecutante tuviere que contradecir deberá presentar las razones y pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo. 2. Cuando el título ejecutivo consista en una sentencia, un auto o un laudo o en conciliación o transacción judicial, sólo podrán proponerse las excepciones de pago, o compensación, siempre que se sustente en hechos posteriores al título ejecutivo. Al escrito deberá acompañarse los documentos relacionados con aquellas y solicitarse las demás pruebas que se pretenda hacer valer; y el juez decidirá de plano. 3. Si el demandante solicitare la celebración de una audiencia para contraprobar, el juez, si lo considerare conveniente, podrá decretarla. 4. Frente a los demás títulos ejecutivos laborales y de seguridad social sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la constitución y exigibilidad del respectivo título. 5. El auto que resuelva las excepciones hace tránsito a cosa juzgada, salvo cuando se decida una excepción de carácter temporal que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento. 6. El auto que decida sobre las excepciones totalmente favorables al ejecutado pone fin al proceso. Si las excepciones no prosperan o prosperan parcialmente, en el auto se ordenará seguir adelante la ejecución en la forma que corresponda. <p>ARTÍCULO 276°. NOTIFICACIÓN. Las providencias que se dicten en el curso de este proceso se notificarán por estados, salvo la primera, que lo será personalmente al ejecutado cuando no se solicita la ejecución dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto de obediencia de lo resuelto por el superior, según sea el caso; y solo serán apelables en el efecto devolutivo.</p>

<p>Será admisible la notificación por vía electrónica, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 8.º de la Ley 2213 de 2022.</p> <p>ARTÍCULO 277º. CONTINUIDAD DEL PROCESO EJECUTIVO. Ejecutoriada el auto que ordene seguir adelante la ejecución por obligación de dar una especie mueble o bienes de género distintos de dinero que hubieren sido secuestrados, el juez ordenará al secuestre que los entregue al demandante.</p> <p>Para la ejecución del hecho por un tercero, o la destrucción de lo hecho con intervención de aquel una vez ejecutoriada el auto que ordene llevar adelante la ejecución, se dará cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos precedentes sobre obligación de hacer o no hacer, sin que ello impida que el proceso continúe para el pago de los perjuicios moratorios y las costas.</p> <p>Si existieren liquidaciones en firme del crédito y de las costas, y el ejecutado presenta la liquidación adicional a que hubiere lugar, acompañada del título de consignación de dichos valores a órdenes del juzgado, el juez declarará terminado el proceso una vez sea aprobada aquella, y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.</p> <p>ARTÍCULO 278º. LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y COSTAS. Se seguirán las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resueltas las excepciones, cuando sean totalmente favorables al ejecutado se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquel haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso. 2. En caso contrario, se decidirá sobre la liquidación de la condena que fue presentada en la solicitud de ejecución, con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, previo traslado a la otra parte y no requerirá auto ni constancia en el expediente. Estos traslados se incluirán en una lista que se mantendrá fijada en el estado electrónico por un (1) día y correrá desde el siguiente, donde deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso no impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación. De la misma manera, se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación en los casos previstos en la ley, para lo cual se tomará como base la liquidación que esté en firme. 4. Si lo embargado fuere dinero, el juez ordenará su entrega al acreedor hasta la concurrencia del valor liquidado. 5. Cuando se trate de ejecuciones por sumas de dinero, y no existan liquidaciones del crédito y de las costas, podrá el ejecutado presentarlas con el objeto de pagar su importe, acompañadas del título de su consignación a órdenes del juzgado, con especificación de la tasa de interés o de cambio, según el caso. 6. Cuando haya lugar a aumentar el valor de las liquidaciones, si dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto que las apruebe no se hubiere presentado el título de consignación adicional a órdenes del juzgado; el juez dispondrá por auto que no tiene recursos, continuar la ejecución por el saldo y entregar al ejecutante las sumas depositadas como abono a su crédito y las costas. Si la consignación se hace oportunamente el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente. 7. Aprobada la liquidación de crédito, y a petición del ejecutante, el juez conminará al ejecutado para que en un término de cinco (5) días, enliste los bienes con que dispone para afrontar el pago de las sumas adeudadas. El juez tendrá las facultades oficiosas para averiguar la existencia de bienes del ejecutado. <p>ARTÍCULO 279º. AVALÚO Y PAGO CON PRODUCTOS. El avalúo de los bienes se sujetará a las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cualquiera de las partes podrá presentar el avalúo o experticia especializada dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria del auto que ordena seguir adelante la ejecución, o después de consumado el secuestro, según el caso. 2. Cuando se trate de bienes muebles de naturaleza semejante podrán evaluarse por grupos, de manera que se facilite el remate. 3. De los avalúos presentados oportunamente se correrá traslado por diez (10) días sin necesidad de auto que lo ordene, para que los interesados presenten sus observaciones. Quienes no lo hubieren aportado, podrán allegar un avalúo diferente, caso en el cual el juez resolverá, previo traslado de éste por tres (3) días.
<ol style="list-style-type: none"> 4. Si el ejecutado no presta colaboración para el avalúo de los bienes o impide su inspección por el perito, se le impondrá multa de cinco (5) a diez (10) smmlv, sin perjuicio de que el juez adopte las medidas necesarias para superar los obstáculos que se presenten. 5. Tratándose de bienes inmuebles el valor será el del avalúo catastral del predio incrementado en un cincuenta por ciento (50%), salvo que quien lo aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real. En este evento, con el avalúo catastral deberá presentarse un dictamen obtenido en la forma indicada en el numeral 1º. 6. Cualquiera de las partes podrá solicitar su división en lotes con el fin de obtener mayores ventajas en la licitación siempre que la división jurídica sea factible. Para ello deberá presentar dictamen que acredite que el inmueble admite división sin afectar su valor y destinación, con sus respectivos avalúos. 7. Tratándose de vehículos automotores, el valor será el fijado oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento, sin perjuicio del derecho otorgado en el numeral 1º. 8. Si no se allega oportunamente el avalúo, el juez designará el perito avaluador, salvo que se trate de inmuebles o de vehículos automotores, en cuyo caso aplicará las reglas previstas para éstos. En estos eventos, tampoco habrá lugar a objeciones. <p>ARTÍCULO 280º. REMATE. Son susceptibles de remate los bienes que se hayan embargado, secuestrado y avaluado, aun cuando no esté en firme la liquidación del crédito. Previa orden de remate, el juez realizará el control de legalidad para sanear las irregularidades que puedan acarrear nulidad. En lo que respecta al remate, se deberán observar las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si lo embargado es el interés social en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita simple o en otra sociedad de personas, el juez, antes de fijar fecha para el remate, comunicará al representante de ella el avalúo de dicho interés a fin de que manifieste dentro de los diez (10) días siguientes si los socios desean adquirirlo por dicho precio. En caso de que dentro de este término no se haga la anterior manifestación, se fijará fecha para el remate; si los socios desearan hacer uso de tal derecho, el representante consignará a orden del juzgado el precio al hacer la manifestación, indicando el nombre de los socios adquirentes. Dentro del mes siguiente a la fecha del registro del remate los demás socios podrán decretar la disolución, con sujeción a los requisitos señalados en la ley o en los estatutos, si no desean continuar la sociedad con el rematante. 2. No se fijará fecha para el remate de los bienes comprendidos en ellos, sino una vez sean resueltas las peticiones sobre levantamiento de embargos o secuestros, o recursos 	<p>contra autos que hayan decidido sobre desembargos o declarado que un bien es inembargable o decretado la reducción del embargo. Tampoco se señalará dicha fecha si no se hubiere citado a los terceros acreedores hipotecarios o prendarios.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. El auto que señale fecha para el remate fijará la base de la licitación, que será el setenta por ciento (70%) del avalúo de los bienes, con indicación de su clase, especie y cantidad, si son muebles; si son inmuebles, la matrícula de su registro, si existiere, y la dirección o el lugar de ubicación. También señalará el porcentaje que deba consignarse para hacer postura correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del avalúo de los respectivos bienes. De la misma forma ordenará la publicación del remate. 4. Ejecutoriada la providencia que señale fecha para el remate, no procederán recusaciones al juez o al secretario; éste devolverá el escrito sin necesidad de auto que lo ordene. 5. El remate se anunciará al público mediante la inclusión en un listado que se publicará por una sola vez en la cartelera electrónica de remates del juzgado y en un periódico de amplia circulación en la localidad ya fuera en medio físico o virtual, o en su defecto, en otro medio masivo de comunicación que señale el juez. Cuando los bienes estén situados fuera del territorio del circuito a que corresponda el juzgado en donde se adelanta el proceso, la publicación además de efectuarse en la cartelera electrónica del juzgado, deberá hacerse en un medio de comunicación que circule en el lugar donde estén ubicados. El listado se publicará en la cartelera electrónica de remates del juzgado con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate y en el periódico, lo será el día domingo con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate, y en él se deberá indicar la fecha y hora en que se abrirá la licitación, los bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad, si son muebles; si son inmuebles, la matrícula de su registro, si existiere, y la dirección o el lugar de ubicación; el avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes y la base de la licitación; el número de radicación del expediente y el juzgado que hará el remate; el nombre, la dirección y el número de teléfono del secuestre que mostrará los bienes objeto del remate; el porcentaje que deba consignarse para hacer postura correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del avalúo del respectivo bien. 6. Deberá allegarse un certificado de tradición y libertad del inmueble, expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista para la diligencia de remate. 7. Todo el que pretenda hacer postura en la subasta deberá consignar previamente, en dinero, a órdenes del juzgado, el porcentaje fijado dentro de los cinco (5) días anteriores al remate. <p>No será necesaria la presencia en la subasta, de quien hubiere hecho oferta dentro del plazo señalado anteriormente.</p>

<p>Las ofertas serán reservadas y permanecerán bajo custodia del juez.</p> <p>Quien sea único ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho podrá rematar por cuenta de su crédito los bienes materia de la subasta sin necesidad de consignar porcentaje, siempre que aquel equivalga por lo menos al cuarenta por ciento (40%) del avalúo, en caso contrario consignará la diferencia.</p> <p>8. El apoderado que licite o solicite adjudicación en nombre de su representado, requerirá facultad expresa. Nadie podrá licitar por un tercero si no presenta poder debidamente otorgado.</p> <p>ARTÍCULO 281°. CARTELERA ELECTRÓNICA DE REMATE. La Secretaría del Juzgado publicará el listado de remates junto con la identificación del proceso, el tipo, clase y especificaciones de bienes a subastar, en la plataforma virtual que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para tal fin.</p> <p>ARTÍCULO 282°. DILIGENCIA DE REMATE. Se adelantará presencialmente, o a través de los medios tecnológicos que disponga el Consejo Superior de la Judicatura para tal fin.</p> <p>Llegado el día y la hora para el remate, el secretario o el encargado de realizarlo, anunciará el número de correos electrónicos recibidos con anterioridad y a continuación, exhortará a los presentes para que presenten sus ofertas en sobre cerrado dentro de la hora (en caso de que la diligencia sea presencial) o vía correo electrónico al buzón del Juzgado (en caso de que la diligencia sea virtual). El sobre o el correo electrónico deberá contener, además de la oferta suscrita por el interesado, el depósito consignado. La oferta es irrevocable. La diligencia se desarrollará en los siguientes términos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si antes de iniciada la diligencia de remate, se presentare escrito proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente. 2. El juez o el encargado de realizar la subasta abrirá los sobres/correos electrónicos y admitirá las ofertas. A continuación, adjudicará al mejor postor los bienes materia del remate; y en caso de empate, el juez invitará a los postores para que incrementen su oferta, y adjudicará al mejor postor; en caso contrario, el bien será adjudicado al postor empatado que primero haya ofertado. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Efectuado el remate, se extenderá un acta en la que se hará constar la fecha y hora en que tuvo lugar la diligencia; la designación de las partes del proceso; la indicación de las dos mejores ofertas que se hayan hecho y el nombre de los postores; la designación del rematante, la determinación de los bienes rematados, y la procedencia del dominio del ejecutado si se tratare de bienes sujetos a registro y el precio del remate. 4. Si la licitación quedare desierta por falta de postores, de ello se dejará constancia en el acta. 5. Los interesados podrán alegar las irregularidades que puedan afectar la validez del remate hasta antes de la adjudicación de los bienes. 6. Se ordenará la devolución de las sumas depositadas a quienes las consignaron, excepto la que corresponda al rematante, que se reservará como garantía de sus obligaciones para los fines del Artículo siguiente. Igualmente, se ordenará en forma inmediata la devolución cuando por cualquier causa no se lleve a cabo el remate. 7. Cuando el inmueble objeto de la diligencia se hubiere dividido en lotes, si para el pago al acreedor es suficiente el precio obtenido por el remate de uno o algunos de ellos, la subasta se limitará a estos en el orden en que se hayan formulado las ofertas. Si al tiempo del remate el bien rematado tiene el carácter de litigioso, el rematante se tendrá como cesionario del derecho litigioso. 8. Las irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerarán saneadas si no son alegadas antes de la adjudicación. Las solicitudes de nulidad que se formulen después de esta, no serán oídas. <p>Parágrafo 1. En caso de presentarse posturas electrónicas, el sistema utilizado para realizarlas deberá garantizar los principios de transparencia, integridad y autenticidad; y serán responsabilidad del juez o del encargado de realizar la subasta; previa reglamentación del Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Parágrafo 2. Para el remate podrá comisionarse al juez del lugar donde estén situados los bienes, si lo solicita cualquiera de las partes. El comisionado está facultado para recibir los títulos de consignación, para hacer postura y recibir el saldo del precio del remate, los cuales deberán hacerse a la orden del comitente y enviarse a este junto con el despacho comisorio; salvo cuando estos se encuentren desmaterializados, en estos casos, la verificación se hará a través de la consulta del sistema de información del banco respectivo.</p> <p>Si el rematante no consigna oportunamente el saldo, así lo hará constar el comisionado a continuación del acta de la diligencia, para que el comitente resuelva lo que fuera pertinente.</p>
<p>ARTÍCULO 283°. CONSIGNACIÓN DE SALDOS. El rematante deberá consignar el saldo del precio dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia a órdenes del juzgado de conocimiento, descontada la suma que depositó para hacer postura, y presentar el recibo de pago del impuesto de remate, si existiere el impuesto.</p> <p>Vencido el término sin que se hubiere hecho la consignación y el pago del impuesto, el juez improbará el remate y decretará la pérdida de la mitad de la suma depositada para hacer postura, a título de multa, con destino al Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Cuando se trate de rematante por cuenta de su crédito y este fuere inferior al precio del remate, deberá consignar el saldo del precio a órdenes del juzgado de conocimiento. En este caso solamente podrá hacer postura quien sea único ejecutante o acreedor de mejor derecho. Si no presenta oportunamente los comprobantes de consignación del saldo del precio del remate y del impuesto de remate, se cancelará dicho crédito en el equivalente al veinte por ciento (20%) del avalúo de los bienes por los cuales hizo postura; si fuere el caso, por auto que no tendrá recurso, se decretará la extinción del crédito del rematante.</p> <p>Cuando el rematante fuere acreedor de mejor derecho el remate solo se aprobará si consigna además el valor de las costas causadas en interés general de los acreedores, a menos que exista saldo del precio suficiente para el pago de ellos.</p> <p>ARTÍCULO 284°. APROBACIÓN DEL REMATE. Cumplido lo anterior, el juez aprobará el remate dentro de los cinco (5) días siguientes, mediante auto en el que dispondrá:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La cancelación de los gravámenes prendarios o hipotecarios, y de la afectación a vivienda familiar y el patrimonio de familia, si fuere el caso, que afecten al bien objeto del remate 2. La cancelación del embargo y el levantamiento del secuestro; la expedición de copia del acta de remate y del auto aprobatorio, las cuales deberán entregarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de este último. <p>Si se trata de bienes sujetos a registro, dicha copia se inscribirá y protocolizará en la notaría correspondiente al lugar del proceso; copia de la escritura se agregará luego al expediente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Se ordenará la entrega por el secuestro al rematante de los bienes rematados. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. La entrega al rematante de los títulos del bien rematado que el ejecutado tenga en su poder; la expedición o inscripción de nuevos títulos al rematante de las acciones o efecto público nominativos que hayan sido rematados, y la declaración de que quedan cancelados los extendidos anteriormente al ejecutado. 5. La entrega del producto del remate al acreedor hasta concurrencia de su crédito y las costas y del remanente al ejecutado, si no estuviere embargado. Sin embargo, del producto del remate el juez deberá reservar la suma necesaria para el pago de impuestos, servicios públicos, cuotas de administración y gastos de parqueo o depósito que se causen hasta la entrega del bien rematado. <p>Si dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega del bien al rematante, este no demuestra el monto de las deudas por tales conceptos, el juez ordenará entregar a las partes el dinero reservado. El incumplimiento de lo dispuesto en este Artículo constituye falta disciplinaria gravísima.</p> <p>Siempre que se impruebe o se declare sin valor el remate se procederá a repetirlo y será postura admisible la misma que rigió para el anterior. Cuando no hubiere remate por falta de postores, el juez señalará fecha y hora para una nueva licitación. Sin embargo, fracasada la segunda licitación cualquiera de los acreedores podrá aportar un nuevo avalúo, el cual será sometido a contradicción en la forma prevista en este código. La misma posibilidad tendrá el deudor cuando haya transcurrido más de un (1) año desde la fecha en que el anterior avalúo quedó en firme. Para las nuevas subastas, deberán cumplirse los mismos requisitos que para la primera.</p> <p>ARTÍCULO 285°. CRÉDITOS LABORALES EN PROCESOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL. Cuando el crédito de naturaleza laboral sea reconocido judicialmente al interior del proceso concursal, el promotor o liquidador procurarán la obtención de los recursos necesarios para la cancelación de éstos, pudiendo solicitar autorización al juez del concurso para la venta anticipada de activos, si fuere necesario, siempre que la disposición de dichos recursos no afecte la viabilidad de la continuación del giro del deudor.</p> <p>La solicitud de pago anticipado podrá ser denegada, total o parcialmente, solamente en los casos en que los créditos laborales no surjan de la documentación del empleador o cuando existan dudas razonables sobre el origen o legitimidad de los mismos.</p>

En caso contrario, el juez del concurso dispondrá, en caso de ser necesario, un prorrateo de los mismos, dentro de la primera clase de créditos.

Capítulo II
Proceso monitorio del trabajo y la seguridad social

ARTÍCULO 286°. PROCESO MONITORIO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL. Quien pretenda el pago de una obligación en dinero, determinada y exigible, originada en una relación de trabajo cualquiera sea su naturaleza o en la seguridad social, cuya cuantía no exceda los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, podrá promover el proceso monitorio, con sujeción a las disposiciones contenidas en el presente capítulo.

ARTÍCULO 287°. CONTENIDO DE LA DEMANDA. El proceso monitorio laboral y de la seguridad social se promoverá por medio de la respectiva demanda, que contendrá:

1. La designación del juez a quien se dirige.
 2. El nombre de quien tenga la capacidad para ser parte, su naturaleza y el de su representante o vocero, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas.
 3. El domicilio y la dirección física y electrónica de las partes.
 4. El nombre, domicilio y dirección física y electrónica del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.
 5. La pretensión de pago expresada con precisión y claridad.
 6. Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados; con la información relevante y detallada sobre el origen de la deuda, su monto exacto y sus componentes.
 7. La manifestación clara y precisa de que el pago de la(s) suma(s) adeudada(s) no depende(n) del cumplimiento de una contraprestación a cargo del acreedor.
 8. Las pruebas que se pretenda hacer valer, incluidas las solicitadas para el evento de que el demandado se oponga.
- El demandante deberá aportar con la demanda los documentos de la obligación adeudada que se encuentren en su poder. Cuando no los tenga, deberá señalar dónde están o hará la manifestación jurada que se entiende prestada con la presentación de la demanda, de que no existen soportes documentales.
9. Los anexos pertinentes, de conformidad con lo previsto en este código.

2. La misma sentencia se dictará cuando el deudor se oponga parcialmente, pero el demandante solicite que se prosiga la ejecución por la parte no objetada.

Si dentro del plazo de los cinco (5) días de que trata el artículo 285 el demandado contesta mediante la proposición de excepciones de mérito, explicando las razones por las que considera no deber en todo o en parte la obligación endilgada, deberá aportar las pruebas en que se sustenta su oposición. Vencido este término, se señalará fecha de audiencia para resolver el asunto de fondo, dentro de los cinco (5) días siguientes. Si el acreedor demandante tuviere que contradecir deberá presentar las razones y pruebas en el acto y el juez practicará dichos medios probatorios y resolverá allí mismo.

En esta audiencia se practicará interrogatorio de parte al deudor demandado, en el evento que éste se solicite.

Parágrafo. Sólo se proseguirá con la ejecución de conformidad con lo previsto en el Artículo 273 del presente código, en el evento en que se advierta la confesión del deudor demandado.

ARTÍCULO 291°. MEDIDAS CAUTELARES. Una vez se profiera sentencia a favor del acreedor, procederán las medidas cautelares contempladas en el Artículo 316 del presente código.

Será viable el remate de los bienes objeto de las correspondientes medidas cautelares, en la forma indicada en el Artículo 271 y siguientes, del presente código.

Capítulo III
Fuero sindical

ARTÍCULO 292°. DEMANDA DEL EMPLEADOR La demanda del empleador tendiente a obtener permiso para despedir a un trabajador amparado por fuero sindical, para modificar sus condiciones de trabajo, o para trasladarlo a otro establecimiento de la misma empresa o a un municipio distinto, deberá expresar la justa causa invocada.

Con la certificación de inscripción en el registro sindical o la comunicación al empleador de la inscripción se presume la existencia del fuero sindical.

ARTÍCULO 288°. REQUERIMIENTO DE PAGO. Si la demanda cumple los requisitos del Artículo anterior, el juez requerirá al deudor para que en el plazo de cinco (5) días cancele la obligación o exponga en la contestación de la demanda las razones concretas que le sirven de sustento para negar total o parcialmente la deuda reclamada.

El auto que contiene el requerimiento de pago no admite recurso alguno, se notificará personalmente al deudor; y contendrá la advertencia de que, si no procede al pago de la obligación adeudada o no justifica su renuencia, se dictará sentencia en la que se condenará al pago de la suma reclamada, junto con los intereses causados y de los que se causen hasta la cancelación total de la deuda.

Si el deudor satisface la obligación en su totalidad, se declarará terminado el proceso por pago.

ARTÍCULO 289°. CONTESTACIÓN. La contestación del requerimiento deberá incluir:

1. El nombre del deudor demandado, su domicilio y dirección física y electrónica; los de su representante o su apoderado en caso de no comparecer por sí mismo.
2. Un pronunciamiento expreso sobre las razones concretas que le sirven de sustento para negar total o parcialmente la deuda reclamada.
3. La petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba en que sustenta su oposición.

Parágrafo. No procederá la intervención de terceros, la formulación de excepciones previas, demanda de reconversión, el emplazamiento del demandado, el nombramiento de curador ad litem (curador a efectos del juicio), ni el grado jurisdiccional de consulta.

ARTÍCULO 290°. TRÁMITE POSTERIOR AL REQUERIMIENTO. Atendiendo el actuar de la parte convocada, se procederá de la siguiente manera.

1. Si el deudor notificado no comparece, se dictará la sentencia de que trata el artículo 288 y se proseguirá la ejecución de conformidad con lo previsto en el artículo 277 del presente código.

ARTÍCULO 293°. DEMANDA DEL TRABAJADOR. El trabajador que hubiere sido despedido o desmejorado en sus condiciones de trabajo o trasladado sin justa causa previamente calificada por el juez laboral, podrá demandar el amparo del fuero sindical.

Con la certificación de inscripción en el registro sindical o la comunicación al empleador de la elección, se presume la existencia del fuero del demandante.

Esta acción también será procedente cuando se trate de demandas en las que se solicite el reintegro por el fuero-circunstancial de que trata el Artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO 294°. TRASLADO Y AUDIENCIAS. Admitida la demanda, el juez, en providencia que se notificará personalmente, ordenará que se dé traslado de ella a las partes por un término común de cinco (5) días para que la contesten por escrito. La demanda podrá ser reformada por una sola vez desde su presentación y hasta dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del traslado de la demanda inicial, de acuerdo con las reglas establecidas sobre la materia en este Código, igual término tendrá la parte demandada para contestarla. El traslado se surtirá entregando copia del libelo a los demandados que deberá remitirse a través de medios electrónicos o, excepcionalmente de forma impresa. El auto admisorio de la demanda también deberá notificarse personalmente a la organización sindical de la cual haga parte el aforado.

Vencido el término para contestar la demanda y su reforma, el juez señalará fecha y hora para que las partes comparezcan personalmente a audiencia pública, la cual deberá celebrarse a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes.

Constituidos en audiencia, el juez convocará a conciliación, se decidirán las excepciones previas y se adelantará el saneamiento del proceso y la fijación del litigio.

A continuación, se decretarán y practicarán las pruebas y se pronunciará el correspondiente fallo. Si no fuere posible dictarlo inmediatamente, se citará para una nueva audiencia que tendrá lugar dentro de los dos (2) días siguientes.

Parágrafo. No tendrá ningún efecto la conciliación que se realice sin la anuencia del sindicato.

<p>ARTÍCULO 295°. INASISTENCIA DE LAS PARTES. Si notificadas las partes de la providencia que señala la fecha de audiencia, no concurrieren, el juez decidirá teniendo en cuenta los elementos del proceso de que disponga, o los que de oficio juzgue conveniente decretar y practicar.</p> <p>ARTÍCULO 296°. CONTENIDO DE LA SENTENCIA Cuando se trate de la acción del empleador, el juez concederá el permiso para despedir, modificar las condiciones laborales o trasladar al trabajador, si encuentra probada la existencia de una justa causa, de lo contrario lo negará.</p> <p>En caso de la acción del trabajador, si el juez comprobare que fue despedido sin sujeción a las normas que regulan el fuero respectivo, se ordenará su reintegro y se condenará al empleador a pagarle, sin solución de continuidad, los salarios, prestaciones y demás emolumentos laborales dejados de percibir por causa del despido. En los demás casos, se ordenará a restituir al trabajador al lugar donde antes prestaba sus servicios o a sus anteriores condiciones de trabajo, y se condenará al empleador a pagarle las correspondientes indemnizaciones.</p> <p>ARTÍCULO 297°. APELACIÓN. La sentencia será apelable en el efecto suspensivo. El Tribunal decidirá de plano dentro de los cinco (5) días siguientes al recibido del expediente.</p> <p>ARTÍCULO 298°. PRESCRIPCIÓN. Las acciones que emanan de este proceso especial prescriben en seis (6) meses. Para el trabajador este término se contará desde la fecha de despido, traslado o desmejora. Para el empleador desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa causa o desde que se haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario correspondiente, según el caso. Durante el trámite de la reclamación previa de los empleados públicos y trabajadores oficiales, se suspende el término prescriptivo. Culminado este trámite, o presentada la reclamación escrita en el caso de los trabajadores particulares, comenzará a contarse nuevamente el término, de seis (6) meses.</p>	<p>ARTÍCULO 299°. PARTE SINDICAL. La organización Sindical de la cual emane el fuero que sirva de fundamento a la acción, por conducto de su representante legal podrá intervenir en los procesos de fuero así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instaurando la acción por delegación del trabajador. 2. De toda demanda, instaurada por el empleador o por el trabajador aforado, deberá serle notificado el auto admisorio personalmente para que coadyuve al aforado si lo considera. 3. Podrá efectuar los actos procesales permitidos para el trabajador aforado. <p>ARTÍCULO 300°. EXTENSIÓN DE PROCEDIMIENTO A LOS FUEROS. El procedimiento establecido en los artículos 292 a 299, anteriores, se aplicarán a los asuntos relativos a los fueros maternidad que incluye al cónyuge, pareja, compañero o compañera permanente, cuando no tengan un empleo formal. Los de fuero por situación de discapacidad. Los de fuero por pre – pensionado, Acoso laboral y fuero circunstancial. Las acciones que emanan de estos procesos prescribirán en seis (6) meses. Para efectos de contabilizar el término prescriptivo y su interrupción de la prescripción se estará a lo regulado en este Código.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo IV Permiso a menores</p> <p>ARTÍCULO 301°. EJERCICIO DE ACCIONES. Para el ejercicio de las acciones que emanan del contrato de trabajo cuando faltaren los representantes legales del niño, niña o adolescente, a éste le bastará presentarse ante el juez respectivo y manifestar verbalmente su voluntad de demandar, caso en el cual el funcionario, informado de los hechos, confirmará el nombramiento de curador que hiciere el niño, niña o adolescente, si el nombrado fuere idóneo o en su defecto, le asignará un curador para la litis, de todo lo cual, dejará constancia en acta.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo V Proceso de calificación de ilegalidad de suspensión huelga o paro colectivo de trabajo</p>
<p>ARTÍCULO 302°. CALIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O PARO COLECTIVO DEL TRABAJO. Mediante procedimiento especial y preferente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial conocerá, en primera instancia, de la calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo, a solicitud de parte interesada.</p> <p>Es competente para conocer del trámite en primera instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial en cuya circunscripción territorial se haya producido la suspensión o paro colectivo del trabajo. Si la suspensión o paro colectivo del trabajo se presenta en distintas circunscripciones territoriales, será competente para conocer del proceso, a prevención, la Sala Laboral de Tribunal que primero avoque conocimiento. En segunda instancia, es competente para conocer la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.</p> <p>La demanda tendiente a obtener la calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo deberá contener:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Designación del Tribunal ante el cual se dirige. 2. Nombre de las partes, sus representantes y su dirección electrónica o abonado telefónico para efectos de notificaciones; también, el de el apoderado judicial. 3. Lo que se pretende, expuesto con precisión y claridad con la expresión de los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a la causal alegada. 4. Las pruebas que sirvan de soporte a la causal alegada; entre ellas, el acta de constatación del cese o suspensión de actividades levantada por el Inspector del Trabajo. <p>Recibida del reparto, el Tribunal decidirá sobre la admisión de la demanda el día siguiente. El auto que la admita se notificará a las partes a las direcciones electrónicas indicadas en la demanda o mediante mensaje de datos. En dicha providencia se citará a las partes para audiencia pública que deberá celebrarse el tercer (3er) día hábil siguiente a la notificación y en ella se contestará la demanda.</p> <p>Acto seguido, se adelantará la audiencia pública para el saneamiento del proceso, la decisión de excepciones previas, la fijación del litigio, el decreto y la práctica de las pruebas, y se dará traslado a las partes, para que presenten sus alegatos de conclusión. Si la Sala estima necesaria la práctica de otras pruebas, las ordenará y practicará sin demora y anunciará el sentido del fallo, el cual se proferirá por escrito dentro de los tres días siguientes a la audiencia. Contra la sentencia procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo, que se interpondrá y sustentará dentro de los tres días siguientes a su</p>	<p>notificación por estado. Interpuesto el recurso la Sala lo concederá o denegará inmediatamente.</p> <p>La decisión del recurso de apelación, del cual conocerá la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se hará a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que el proceso entre al despacho del magistrado ponente para resolver.</p> <p>El término de prescripción, que será de (2) meses, comenzará a transcurrir desde la ocurrencia de la causal o causales que soporten la pretensión de declaratoria de ilegalidad del cese o paro colectivo de actividades.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo V Arbitramento</p> <p>ARTÍCULO 303°. PROCEDENCIA. Los empleadores y los trabajadores podrán estipular que las controversias que surjan entre ellos por razón de sus relaciones de trabajo sean dirimidas por tribunal de arbitramento.</p> <p>ARTÍCULO 304°. CLÁUSULA COMPROMISORIA Y COMPROMISO. La cláusula compromisoria sólo tendrá validez cuando conste en acuerdo colectivo, y el compromiso cuando conste en cualquier otro documento otorgado por las partes con posterioridad al surgimiento de la controversia. En el evento en que el trabajador no tenga la capacidad de atender los gastos que genere el trámite arbitral, podrá invocar el amparo de pobreza.</p> <p>ARTÍCULO 305°. APLICACIÓN SUPLETORIA Las partes son autónomas en la designación de uno o varios árbitros para dirimir la controversia, conforme al compromiso o cláusula compromisoria.</p> <p>A falta de acuerdo se seguirán las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cada una de las partes nombrará un árbitro, y éstos designarán el tercero que con ellos integre el Tribunal, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación de una parte a la otra.

<p>2. Si los dos árbitros escogidos por las partes no se pusieren de acuerdo, dentro de los tres (3) días siguientes al nombramiento del tercer árbitro, la designación será efectuada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del lugar, y recaerá en un abogado de la lista de árbitros dispuesta para los tribunales de arbitramento que integrará la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Los árbitros estarán sometidos al régimen de impedimentos y recusaciones.</p> <p>3. Se procederá en la misma forma en que se hizo la designación, se hará el reemplazo en caso de falta o impedimento de alguno de los árbitros.</p> <p>4. Si la parte obligada a nombrar árbitro no lo hiciere, o se mostrare renuente, el Tribunal Superior de Distrito Judicial, previo requerimiento de tres (3) días, procederá a designarlo.</p> <p>El nombramiento es de forzosa aceptación, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, y si se considera que existe algún impedimento, inhabilidad o conflicto de intereses deberá ser comunicado al otro árbitro o árbitros, para que resuelvan dentro de los dos (2) días siguientes, de aceptarse el mismo se comunicará al respectivo nominador para que proceda a la nueva designación.</p> <p>ARTÍCULO 306°. TRÁMITE Y AUDIENCIA. En la primera providencia a dictar, el o los árbitros citarán a las partes para audiencia.</p> <p>Dentro de esta, se oirán a las partes, se adelantará la fijación del litigio, se practicarán las pruebas solicitadas y, finalmente, las partes expondrán las razones que aleguen para motivar su pretensión u oposición.</p> <p>En todo el procedimiento arbitral será necesaria la representación de las partes por abogado.</p> <p>ARTÍCULO 307°. TERMINO PARA FALLAR. El Tribunal proferirá el laudo dentro del término de cuarenta (40) días, contados desde la celebración de la audiencia de que trata el Artículo anterior. Las partes podrán ampliar este plazo, hasta otro tanto, por una sola vez.</p> <p>ARTÍCULO 308°. CONTENIDO DEL LAUDO. El laudo será en derecho, se expedirá por escrito debiendo ser firmado por todos los árbitros, se anunciarán los hechos que estime</p>	<p>probados, las razones de derecho y los razonamientos necesarios para fundamentar las conclusiones. Finalmente expondrán suficientemente la sustentación del fallo, ajustándose en lo posible a la forma y contenido de las sentencias que profieran los jueces del trabajo.</p> <p>ARTÍCULO 309°. NOTIFICACIÓN. El laudo arbitral se notificará personalmente a las partes, hará tránsito a cosa juzgada y será susceptible del recurso de anulación, el cual será interpuesto dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.</p> <p>ARTÍCULO 310°. MÉRITO DEL LAUDO. El laudo prestará mérito ejecutivo ante los jueces laborales en los mismos términos de una sentencia judicial.</p> <p>La decisión que tomen los árbitros será susceptible de aclaración, corrección o complementación en los mismos supuestos y procedimiento de la sentencia judicial.</p> <p>ARTÍCULO 311°. EXISTENCIA DE LITIGIO. En caso de que se constituya un Tribunal de Arbitramento por mutuo acuerdo entre las partes sobre un asunto que esté conociendo la Jurisdicción Laboral, se procederá por la autoridad judicial a remitir al Tribunal de Arbitramento copia íntegra de las actuaciones allí surtidas, y se dará por terminado el proceso judicial.</p> <p>ARTÍCULO 312°. HONORARIOS Y GASTOS. Salvo pacto en contrario, los honorarios y gastos del Tribunal se sufragarán por partes iguales, esto sin perjuicio que en el laudo se estipulen por los árbitros una distribución diferente.</p> <p>Los árbitros designados para integrar los Tribunales de Arbitramento, recibirán como honorarios el equivalente a dieciséis (16) salarios mínimos mensuales o la tarifa fijada el Ministerio de TRABAJO vigentes a la fecha de ejecutoria del laudo, la que fuere mayor.</p> <p>ARTÍCULO 313°. PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN CONVENCIONES COLECTIVAS. Cuando en acuerdo colectivo, se establezcan un procedimiento para la constitución de tribunales</p>
<p>de arbitramento, temporales o de carácter permanente, aquel prevalecerá y, a falta de disposición especial, se aplicará las normas del presente capítulo.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo VI Procesos especiales</p> <p>ARTÍCULO 314°. CANCELACIÓN DE PERSONERÍAS, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SINDICATOS. Las solicitudes de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical, se formularán ante el juez del trabajo o juez civil del circuito del domicilio del sindicato y se tramitarán conforme al procedimiento sumario siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) La solicitud que eleve el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá expresar los motivos invocados, una relación de los hechos y las pruebas que se pretendan hacer valer; b) Recibida la solicitud el juez, a más tardar el día siguiente, ordenará correr traslado de ella a la organización sindical, mediante providencia que se notificará personalmente; c) Si no se pudiere hacer la notificación personal por los canales digitales, dentro de los cinco (5) días siguientes, el juez enviará comunicación escrita al domicilio de la organización sindical, anexando constancia del envío al expediente; d) Si al cabo de cinco (5) días del envío de la anterior comunicación no se pudiere hacer la notificación personal, se dará aplicación a los artículos 209 a 213 de éste Código, para lo cual los respectivos Sindicatos deberán informar su correo electrónico ante el registro Sindical del Ministerio del Trabajo. e) El sindicato, a partir de la notificación, dispone de un término de cinco (5) días para contestar la demanda y presentar las pruebas que se consideren pertinentes; f) Vencido el término anterior el juez decidirá teniendo en cuenta los elementos de juicio de que disponga dentro de los cinco (5) días siguientes, y g) La decisión del juez será apelable, en el efecto suspensivo, para ante el respectivo Tribunal Superior del Distrito Judicial, el cual deberá decidir de plano dentro de los cinco (5) días siguientes al en que sea recibido el expediente. Contra la decisión del Tribunal no cabe ningún recurso. <p>ARTÍCULO 315°. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SINDICALES.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los trabajadores y las organizaciones de trabajadores podrán acudir ante el juez del trabajo del lugar en el que ocurrieron los hechos, a fin de obtener protección judicial 	<p>frente a conductas antisindicales; para lo cual se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 292 a 300 para los fueros especiales.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. En la demanda, quien alegue ser víctima de conductas antisindicales deberá indicar lo que pretende, los hechos que sirven de fundamento a sus pretensiones, la identificación del empleador y/o personas acusadas de tales conductas y la dirección electrónica o canal digital de su notificación o en su defecto el lugar de su domicilio, y las pruebas que pretenden hacer valer. <p style="text-align: center;">Capítulo VII Aspectos Varios Medidas Cautelares</p> <p>ARTÍCULO 316°. MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS DECLARATIVOS. En los procesos declarativos en procesos ordinarios y especiales de fuero, desde la presentación de la demanda, a petición del demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado. En el evento en que la sentencia de primera instancia sea favorable al demandante, a petición de éste, el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda, y de los que se denuncien como de propiedad del demandado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella. 2. El demandado podrá impedir la práctica de las medidas cautelares o solicitar que se levanten; si presta caución por el valor de las pretensiones incrementadas en un 30% para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante. También podrá solicitar que se sustituya por otras medidas que ofrezcan suficiente seguridad. 3. También podrá decretarse cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho, evitar un perjuicio irremediable o asegurar la efectividad de la pretensión, determinado su alcance y duración. <p>Parágrafo. En cualquier etapa del proceso y antes de que se profiera sentencia de primera instancia, las partes podrán solicitar la modificación, sustitución o terminación de la medida cautelar adoptada, petición que deberá resolverse previo traslado, por auto que se dictará</p>

<p>por fuera de audiencia y se notificará por estado. Contra dicha decisión procederá recurso de apelación en el efecto devolutivo.</p> <p>4. Para el decreto de las medidas cautelares señaladas en los numerales anteriores, el juez deberá analizar la apariencia de buen derecho, la necesidad y proporcionalidad de la medida.</p> <p>Parágrafo: Cuando se trate de inscripción de la demanda, podrá limitarla a los bienes que sean necesarios acorde con las pretensiones estimadas al momento de la presentación de la demanda e incrementadas en un 30%.</p> <p>ARTÍCULO 317°. SOLICITUD Y DECRETO Las medidas cautelares a que hace referencia el Artículo anterior, podrán ser solicitadas desde la presentación de la demanda, por escrito en el cual se indicaran las razones o motivos que sustentan la necesidad del decreto de la misma y aportando las pruebas respectivas.</p> <p>La medida cautelar será decretada mediante auto, dentro de los cinco (5) días siguientes a la radicación de la solicitud. Contra la providencia que resuelva sobre medidas cautelares procederá el recurso de apelación en el efecto devolutivo.</p> <p>Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica. Sin embargo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar uno superior al momento de decretar la medida.</p> <p>ARTÍCULO 318. PRESCRIPCIÓN. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres (3) años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. Salvo en los casos de prescripciones especiales establecidos en el Código.</p> <p style="text-align: center;">Interrupción de la prescripción</p>	<p>ARTÍCULO 319°. INTERRUPCIÓN JUDICIAL. En los procesos laborales, con la presentación de la demanda se interrumpe el término para la prescripción siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado.</p> <p>La notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al demandado, cuando la ley lo exija para tal fin, y la notificación de la cesión del crédito, si no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la mora solo se producirán a partir de la notificación.</p> <p>Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este Artículo se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan dichos efectos.</p> <p>Parágrafo. INEFICACIA DE LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN Y OPERANCIA DE LA CADUCIDAD. No se considerará interrumpida la prescripción:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando el demandante desista de la demanda. 2. Cuando el proceso termine por haber prosperado la excepción de inexistencia del demandante o del demandado; o de incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado; o no haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar; o de pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. 3. Cuando el proceso termine con sentencia que absuelva al demandado. 4. Cuando el proceso termine por haber prosperado la excepción de compromiso o cláusula compromisoria, salvo que se promueva el respectivo proceso arbitral dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la ejecutoria del auto que dé por terminado el proceso. 5. Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, siempre que la causa de la nulidad sea atribuible al demandante.
<p>En el auto que se declare la nulidad se indicará expresamente sus efectos sobre la interrupción o no de la prescripción y la inoperancia o no de la caducidad.</p> <p>ARTÍCULO 320°. INTERRUPCIÓN DEL ACREEDOR.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual. b. La reclamación previa contemplada en el Artículo 11° de este Código. <p>ARTÍCULO 321°. INTERRUPCIÓN DEL DEUDOR. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente.</p> <p>Parágrafo. La interrupción de la prescripción implica que deberá comenzar contabilizarse nuevamente el respectivo término.</p> <p>ARTÍCULO 322°. SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN La prescripción que extingue las obligaciones se suspende en favor de los incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría.</p> <p>No se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad subsista. Y, en los demás eventos previstos en este Código.</p> <p>ARTÍCULO 323°. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN La suspensión del término de prescripción representa que el mismo deja de transcurrir mientras dure la causa que le dio origen.</p> <p>ARTÍCULO 324°. RENUNCIA A LA PRESCRIPCIÓN La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida.</p>	<p>Se renuncia tácitamente, cuando el que puede alegarla no la propone como excepción o manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor.</p> <p>ARTÍCULO 325°. TRASLADOS. Cualquier traslado que deba surtirse en audiencia se cumplirá permitiéndole a la parte respectiva que haga uso de la palabra.</p> <p>Salvo norma en contrario, todo traslado que deba surtirse por fuera de audiencia, se surtirá en secretaría por el término de tres (3) días y no requerirá auto ni constancia en el expediente. Estos traslados se incluirán en una lista que se mantendrá a disposición de las partes en la secretaría del juzgado por un (1) día y correrán desde el siguiente.</p> <p>ARTÍCULO 326°. CÓMPUTO DE TÉRMINOS. El término que se conceda en audiencia a quienes estaban obligados a concurrir a ella correrá a partir de su otorgamiento. En caso contrario, correrá a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo concedió.</p> <p>El término que se conceda fuera de audiencia correrá a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo concedió.</p> <p>Si el término fuere común a varias partes comenzará a correr a partir del día siguiente al de la notificación a todas.</p> <p>Cuando se interpongan recursos contra la providencia que concede el término, o del auto a partir de cuya notificación debe correr un término por ministerio de la ley, este se interrumpirá y comenzará a correr a partir del día siguiente al de la notificación del auto que resuelva el recurso.</p> <p>Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, mientras esté corriendo un término, no podrá ingresar el expediente al despacho, salvo que se trate de peticiones relacionadas con el mismo término o que requieran trámite urgente, previa consulta verbal del secretario con el juez, de la cual dejará constancia. En estos casos, el término se suspenderá y se reanudará a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que se profiera. Mientras el expediente esté al despacho no correrán los términos, sin perjuicio de que se practiquen pruebas y diligencias decretadas por autos que no estén pendientes de la decisión del recurso de reposición. Los términos se reanudarán el día siguiente al de la</p>

notificación de la providencia que se profiera, o a partir del tercer día siguiente al de su fecha si fuera de cúmplase.

Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.

En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado.

Condena, liquidación y cobro

ARTÍCULO 327°. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
- También se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.

ARTÍCULO 328°. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obediencia a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:

1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.
2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso.
3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.
- Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará.
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo.
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará

inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de obediencia al superior, según el caso.

ARTÍCULO 329°. ANALOGÍA. A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas laborales y de la seguridad social y, en su defecto, las del régimen procesal común, con la necesaria adaptación a las particularidades del proceso del trabajo y la seguridad social.

ARTÍCULO 330°. VIGENCIA Y RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. El presente código entrará en vigencia seis (6) meses después de su publicación. Todos los procesos iniciados con anterioridad a la vigencia de este código se continuarán tramitando por las normas procesales anteriores.

Quienes sean nombrados como jueces y magistrados deberán ser, como mínimo, especialistas o expertos en derecho del trabajo o en seguridad social.

ARTÍCULO 331°. DEROGATORIA. Deróguense todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente el Decreto Ley 2158 de 1948 sobre los procedimientos en los juicios del trabajo, adoptado como legislación permanente mediante la Ley 141 de 1961, así como el numeral 2 del artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 52 de la Ley 50 de 1990, el artículo 62 del Decreto ley 528 de 1964 en lo relativo a la materia laboral, el artículo 23 de la Ley 16 de 1968, modificado por el artículo 7° de la Ley 16 de 1969, la Ley 712 de 2001, la Ley 1149 de 2007, los artículos 3° y 4° de la Ley 1210 de 2008, los artículos 46 y 49 de la Ley 1395 de 2010 y el artículo 622 del Código General del Proceso.

EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS FUE APROBADO EL PROYECTO DE LEY N° 51 DE 2023 SENADO "POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL", COMO CONSTA EN LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2024, ACTA N° 39.

PONENTES COORDINADORES:



PALOMA VALENCIA LASERNA
 Senadora de la República


ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO
 Senador de la República


GERMÁN BLANCO ALVAREZ
 Senador de la República

Presidente,

S. GERMÁN BLANCO ALVAREZ

Secretaria General,

YURY LINETH SIERRA TORRES

La Presidencia designa y notifica como ponente para segundo debate a los honorable Senadores Paloma Valencia Laserna, Alejandro Carlos Chacón Camargo, German Blanco Álvarez (Coordinadores), Julio Elías Chagüi Flórez, Humberto de la Calle Lombana, David Luna Sánchez, Julián Gallo Cubillos, Clara López Obregón, con término de diez (10) días para rendir el correspondiente informe para la plenaria de Senado.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna:

No Presidente, primero, agradecerle a la Comisión, creo que este código avanzó a esta sociedad por la confianza que se les da a los Congresistas, que la Corte haya sido autora del proyecto, por el trabajo que se ha venido haciendo con los equipos de los Congresistas y los equipos de la Corte, esperamos que este sea un muy buen aporte a solucionar los problemas laborales de los colombianos, que permita mayor agilidad y mayor eficacia de los procesos laborales.

Por mi parte solo la gratitud a todos nuestros compañeros, a usted Presidente y al Senador Chacón que hemos sido los coordinadores ponentes del proyecto.

LA Presidencia ofrece el uso de la palabra al doctor Gerson Chaverra Castro – Presidente de la Corte Suprema de Justicia:

Gracias Presidente, en nombre de la Corte Suprema de Justicia damos las gracias a la Comisión Primera del Senado por este gran aporte a la justicia laboral colombiana, de verdad que es la primera vez que participo en un debate de esta naturaleza y en la casa de la democracia, me he sentido muy contento, muy bien representado por parte de ustedes y de verdad que esta iniciativa presentada por la Corte Suprema de Justicia lo que busca es que tengamos

un proceso laboral que permita alcanzar los fines de una recta, pronta y cumplida justicia.

Estamos supremamente agradecidos, muy complacidos por este aporte a la justicia laboral y de verdad que seguimos aquí prestos y muy pendientes a estas deliberaciones que ustedes a través de este maravilloso trabajo han enriquecido y han hecho de esta propuesta un proyecto más robusto, más consistente, que nos permita alcanzar los fines que quiere la Corte Suprema de Justicia en materia del derecho procesal laboral. De corazón, de corazón muchas gracias, una jornada impecable y grande.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la doctora Marjorie Zúñiga Romero – Presidenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

Gracias Presidente, además de sumarme a los agradecimientos, un compromiso a los Senadores ponentes para que tengan la seguridad que durante estos 10 días vamos a estar trabajando firmemente y comprometidos para sacar este proyecto adelante, muchas gracias.

Siendo la 1:39 minutos p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca, para el día miércoles 17 de abril de 2024 a partir de las 9:00 a. m., en el Salón de la Comisión Primera de Senado - Guillermo Valencia del Capitolio Nacional, para llevar a cabo debate de control político al Presidente de Colpensiones.

PRESIDENTE,

H.S. GERMAN ALCIDES BLANCO ALVAREZ

VICEPRESIDENTE,

H.S. ALEJANDRO ALBERTO VEGA PEREZ

SECRETARIA GENERAL,

YURY LINETH SIERRA TORRES